Friedrich A. Hayek

Camino de servidumbre

TAX

Free



Ciencia política

Alianza Editorial

Ciencias sociales

Friedrich A. Hayek

Camino de servidumbre



El libro de bolsillo
Ciencia política
Alianza Editorial

TÍTULO ORIGINAL: *The Road to Serfdom*
(Primera edición, 1944; reimpresión [dos veces], 1976)
TRADUCTOR: José Vergara

Primera edición en «El libro de bolsillo»: 1978
Tercera reimpresión: 1995
Primera edición en «Área de conocimiento: Ciencias sociales»: 2000
Quinta reimpresión: 2007

Diseño de cubierta: Alianza Editorial
Cubierta: Ángel Uriarte



Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15;
28027 Madrid; teléfono 91 393 88 88
www.alianzaeditorial.es
ISBN: 978-84-206-3606-1
Depósito legal: M. 47.812-2007
Fotocomposición e impresión: EFCA, S. A.
Parque Industrial «Las Monjas»
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Printed in Spain

Nota del traductor

Escasos son los libros a los que el destino reserva la acogida que éste, The Road to Serfdom, *del profesor Hayek, ha logrado en breve tiempo. Impreso, o en impresión, en diez idiomas (inglés, español, alemán, chino, francés, hebreo, holandés, italiano, portugués y sueco), ha sido objeto ya de innumerables comentarios y estudios. En muchos trabajos solventes sobre el futuro de la economía y la sociedad se advierte ya visiblemente la impronta de este libro extraordinario.*

Y es que se trata, en verdad, de uno de los libros más importantes de nuestro tiempo, a pesar de las disculpas que adelanta el propio autor en su prefacio.

Muchas circunstancias tienen que confluir en un escritor para alcanzar semejante resonancia, pero, sin duda, todas las reunía para el caso el profesor de la London School of Economics y director de la revista Economica. *Nacido en Viena hace cuarenta y siete años, allí se formó y fue funcionario público, director del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor universitario. En un intervalo, estudió también en los Estados Unidos; es profesor en Londres desde 1931. Autoridad destacadísima, por todo el mundo científico reconocida, en campos diversos de la teoría económica, ha entrado también a fondo en los problemas del socialismo (fruto de ello*

es la edición, con aportaciones personales, de otro libro notable: Collectivist Economic Planning, *1935). Todo esto era menester, en efecto, para llegar a escribir el libro que aquí presentamos a los lectores de habla española; había que conocer a fondo, que haberlos vivido, el mundo germánico y el anglosajón; se necesitaba plena familiaridad con la doctrina socialista sin cubrirse con el velo del creyente; precisábase profundo conocimiento del «historicismo» sin estar expuesto al peligro de caer en ello. Pero, sobre todo, aunque éste sea «un libro político», sólo podía escribirlo un economista, un verdadero economista.*

Camino de servidumbre *se propone, fundamentalmente, demostrar la esencial identidad de socialismo y totalitarismo, especies ambas de un mismo género: el colectivismo, y la incompatibilidad irremediable entre colectivismo y libertad humana. No bastaría ello para explicar la difusión, aunque sobraría para justificar la importancia de este libro. Pero es que, además, ofrece una impresionante descripción del camino por donde el colectivismo avanza ahora, después de la derrota del totalitarismo germánico, a saber: el de la «planificación» económica. Ésta, la planificación, ha nacido y se ha desarrollado en gran parte como desgraciada e irresponsable extensión de las técnicas de la ingeniería a la organización de la sociedad y lleva a un completo envilecimiento de la vida social y a la esclavitud del hombre. Por lo demás, este proceso no es inevitable, porque en la Historia no hay evolución que lo sea y porque, en efecto, ninguno de los argumentos que se han dado en justificación de esta supuesta fatalidad histórica del colectivismo –argumentos económicos, fundamentalmente– descansa en hechos concretos, como Hayek demuestra, y sólo en hechos puede y debe apoyarse, para estas cuestiones, el pensamiento honrado.*

Y entonces, si esta vía de evolución por la que, tan adentrados ya, marchamos no es inevitable ¿cuál pudimos seguir y cuál nos queda abierta? La del liberalismo político, nos dice Hayek, la de la libre competencia económica. Forma política

y estructura económica sobre las cuales, y sólo sobre ellas, puede alcanzarse la libertad que, cuando se ve en peligro, no ya se la ama, sino que uno se siente inclinado a adorarla, como confesaba el maestro de antaño.

Aunque la identidad de hecho entre comunismo y nazismo sea ahora, en 1946, evidente, no lo era tanto, para todos, hace unos años, y menos aún en el campo ideológico. Si no ha sido Hayek el primero en acusarla –su argumentación descansa, como verá el lector, en múltiples y sorprendentes testimonios–, algo de la claridad actual se debe a la fuerza que estos testimonios adquieren una vez reciben su lugar oportuno en el lógico conjunto levantado por él. Pero hay otro punto en el cual es aún mayor el mérito del profesor de Londres, un punto en el que no se ha alcanzado todavía la misma urgente evidencia. Trátase de la necesidad de distinguir con todo rigor entre libre competencia económica y régimen de laissez-faire. *«La alternativa de la economía dirigida no es el* laissez-faire, *sino una estructura racional para el funcionamiento de la libre competencia.» Cierto que ni Adam Smith ni las grandes figuras de la época clásica de la ciencia económica defendieron nunca la inhibición completa del Estado, pero hay que reconocer que el* laissez-faire *fue la bandera económica del liberalismo político durante un período dilatado –Hayek da razones para justificar a aquellos hombres–, período demasiado cercano al nuestro para que esté por completo justificada la actitud de Hayek exigiendo de todos que no confundan ambas cosas. No hace, en realidad, tantos años que la confusión dominaba incluso a muchos economistas, y pocos son, entre los contemporáneos, los que, como Hayek, pueden enorgullecerse de haber visto siempre claro en esta cuestión decisiva.*

La libre iniciativa individual, el sistema de la libre competencia, se tenía –y aún muchos lo tienen– por equivalente al régimen de laissez-faire, *y como la realidad social hace ya imposible éste, habría que renunciar a la libre competencia, con todo y ser ésta la forma económica ideal, puesto que su-*

pone el óptimo empleo de los recursos. Por ende, la intervención, la «planificación» centralizada sería el único camino abierto ante nosotros.

No ha entrado en el propósito de Hayek desarrollar en este libro las líneas de lo que podría ser una política económica liberal, entiéndase dirigida a mantener la libre competencia, pero intervencionista, que no de laissez-faire, *aunque en modo alguno de dirección centralizada. Empero, son ya bastantes los economistas que hoy trabajan en este difícil problema, y por eso es de mucha importancia el servicio que este libro puede prestar entre los no especialistas, abriendo esperanzas, frenando falsas ilusiones y preparando el terreno para la recepción de los resultados futuros de la investigación.*

Ni la «planificación» económica, ni el colectivismo son, pues, inevitables. Pero ¿no habremos avanzado ya tanto por esa vía que sea imposible retroceder? Porque «si a la larga somos los hacedores de nuestro propio destino, a corto plazo somos cautivos de las ideas que hemos creado». El lector quizá se plantee al acabar este libro una interrogante, que el liberal formulará muy brevemente: «¿Es pesimista Hayek?» Fuera impertinente planteársela al propio autor, pero no hay pregunta indiscreta si se dirige a un libro. Y Camino de servidumbre, *a mi parecer, contesta. El temor es quizá la nota esencial de este libro. Las inquietudes parecen dominar a las ilusiones; cierto, sin embargo, que en ninguna parte está escrito el «lasciate ogni speranza».*

Si en cualesquiera circunstancias la incorporación de esta obra a la bibliografía de un país sería un hecho importante, lo es más para nosotros porque contribuye con trascendentales elementos económicos al análisis de un proceso histórico que, en su generalidad social, conocemos los españoles mejor y antes que los demás gracias a la obra de Ortega y Gasset. Los mismos valores últimos de los que deriva Hayek todo lo que aquí nos dice, han servido a Ortega para, firme sobre ellos, descubrirnos la realidad social contemporánea. «Más allá de las justas críticas con que se combaten las manifestaciones del

liberalismo, queda la irrevocable verdad de éste, una verdad que no es teórica, científica, intelectual, sino de un orden radicalmente distinto y más decisivo que todo esto, a saber: una verdad de destino.» Y «eso que ha intentado Europa en el último siglo con el nombre de liberalismo es, en última instancia, algo ineludible, inexorable, que el hombre occidental de hoy es, quiera o no» (La rebelión de las masas). *Pero si entonces se fracasó en el intento, Hayek asegura que «tenemos que intentarlo de nuevo», que «el principio rector que afirma no existir otra política realmente progresista que la fundada en la libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero como lo fue en el siglo* XIX*».*

Cumple su faena el intelectual esclareciendo los hechos, advirtiendo los riesgos, pero no es su misión conjurar éstos; ni basta que él ilumine la vía, para que otros se salven de la catástrofe. Antes de llegarse al punto en que se hicieron fatales la decadencia y el fin del orbe romano no faltaron los hombres que, como a la luz del relámpago, vieron las ruinas en el término de la ruta y amonestaron a todos del peligro.

Hayek sale al paso de los que tratan de situar en una especie de perversidad alemana el origen y, por tanto, el área de difusión del totalitarismo, aunque señala los defectos políticos alemanes, para demostrar que aquél, el colectivismo, puede extenderse a todas partes. Escrito este libro en Londres, aún en plena guerra, por un hombre nacido extranjero, y acogida la obra con todo respeto en Inglaterra, ello honra, por la entereza y el afán de verdad que demuestra, al profesor Hayek y al pueblo británico.

[Madrid, 1946]

Al cabo de treinta años

El profesor Hayek escribió un nuevo prefacio en 1976 –que en el lugar correspondiente encontrará el lector español– para la

reimpresión inglesa de Camino de servidumbre. *Así amparado, el traductor español se toma la libertad de ampliar la Nota introductoria que abría la primera edición de la traducción al castellano*[1].

Camino de servidumbre *es un libro mucho más oportuno hoy en España que cuando se tradujo en 1946. Hubiera sido entonces ilusorio pensar que un libro podía ejercer algún efecto sobre la* inteligentsia *del régimen español; porque aquel régimen no podía considerarse afectado por la denuncia de la ruta hacia el colectivismo, puesto que ni pretendía orientarse hacia ningún colectivismo, ni socialista ni totalitario, ni hacia un Estado planificado ni, por supuesto, hacia un Estado liberal. Era, simplemente, «diferente»*[2]. *Hoy, en cambio, es urgente saber hacia dónde conduce la vía que se intenta seguir, y quizá exista la voluntad de escuchar. Lo que da más actualidad a este libro es que el ambiente ideológico español presenta hoy notables analogías con el que Hayek describe como característico de Inglaterra al empezar la Segunda Guerra Mundial, uno de cuyos rasgos era la avanzada penetración de la ideología colectivista a la vez que se respetaba como ideal último la libertad personal. Lo mismo que hoy en España, se tendía entonces allí a considerar como indesligables los valores de la democracia, el socialismo y la libertad.*

Sobre dos importantes cuestiones de las tratadas por el profesor Hayek en este libro quisiera el traductor llamar la atención del lector español: la estrecha vinculación que existe

1. Se ha permitido también algunas correcciones de forma en la nota de 1946, pero sin alterar su contenido.
2. Aunque la verdad es que el libro de Hayek no dejaba sin dura mención crítica a esas configuraciones políticas que no pueden satisfacer ni a planificadores ni a liberales: «especie de organización sindicalista o "corporativa" de la industria, en la cual se ha suprimido más o menos la competencia, pero la planificación se ha dejado en manos de los monopolios independientes que son las diversas industrias» (pág. 69).

entre libertad intelectual y desarrollo científico y tecnológico de un país (tema al que Hayek dedica muy sustanciosas páginas en el capítulo 11) y la radical diferencia que hay entre el régimen de libre competencia y el sistema de laissez faire.

Hace exactamente veinte años, el 4 de octubre de 1957, anunciaba el gobierno de Moscú la entrada en órbita del primer «Sputnik». Días después, una personalidad española en el campo de la investigación tecnológica lanzaba, privadamente, aquel histórico hecho, como refutación indiscutible, contra quienes afirmaban que sin libertad individual no puede haber ciencia original ni tecnología avanzada. En aquellas circunstancias no era cosa de aceptar la discusión. Mejor dejarle al tiempo la respuesta: que, efectivamente, la ha dado, y bien cumplida.

Por aquella época empezaba a declinar en Rusia la gloria de Lyssenko. El 7 de agosto de 1948, la Academia de Ciencias Agrícolas de la URSS había anunciado el nacimiento de una ciencia nueva: una biología contraria a la genética, «enemiga de ésta e irreconciliable con ella». Era el triunfo absoluto de su promotor, el agrónomo Trofim D. Lyssenko, que cuatro años más tarde entraba en desgracia y, tras varias alternativas, se veía forzado a pedir el retiro en 1965, por causa de los repetidos fracasos de la agricultura rusa, al caer Jrushov del poder. La gran figura rusa de la genética, N. I. Vavilov, había sido detenido en 1940 –otros genetistas lo habían sido antes– y moría poco después en la deportación. Lyssenko atacaba el carácter «idealista», «burgués» de la genética, por pretender ésta la «fatalidad» de los fenómenos hereditarios. Los comunistas franceses, en la importante polémica que provocaron alrededor del «caso Lyssenko», ampliaron el ataque y decidieron la existencia de dos ciencias: «una ciencia burguesa y una ciencia proletaria fundamentalmente contradictorias» [3]. *A partir de aquella sesión de la Academia, en agosto de 1948,*

3. Dominique Lecourt, *Lyssenko. Histoire réelle d'une «science prolétarienne»*. Avant-propos de Louis Althusser. París, 1976.

quedaba prohibida en Rusia toda enseñanza y toda investigación sobre genética, prohibición que duró más de quince años. Hoy el gobierno ruso sigue importando enormes cantidades de cereales de los países que desarrollaron la genética clásica. Jacques Monod, en su prefacio a la traducción francesa del libro de J. Medvedev sobre Lyssenko, sintetiza en una breve frase[4] *el fondo de la cuestión: «El argumento esencial (el único, en definitiva), incansablemente repetido por Lyssenko y sus partidarios contra la genética clásica, era su incompatibilidad con el materialismo dialéctico». Monod, con característica superficialidad, señala al régimen ruso como culpable. La protección oficial a Lyssenko se debería a «la mortal decadencia en que ha caído en la URSS el pensamiento socialista. No se ve modo posible de escapar a esta conclusión, por dolorosa que sea para todo el que, durante mucho tiempo, ha puesto toda su esperanza en el advenimiento del socialismo en Rusia como primera etapa de su triunfo en el mundo»*[5]. *Louis Althusser*[6] *denuncia, más aún que la «larga, escandalosa y dramática... aventura lyssenkista», el silencio absoluto de los soviéticos y de todos los comunistas de fuera de Rusia. «L'histoire Lyssenko est terminée. L'histoire des causes du lyssenkisme continue. Histoire terminée. Histoire interminable?» Porque los partidos comunistas, dice Althusser, «a quienes Marx ha dotado, por primera vez en todos los tiempos, de medios científicos para comprender la historia..., parecen* impotentes para justificar con criterios marxistas su propia historia; *sobre todo los errores». También para Althusser la culpa es, pues, de los comunistas y no de Marx.*

Se dirá que todo esto es agua pasada, pero hay que tener cuidado. No se debe olvidar que si el avance de la ciencia requiere libertad intelectual frente a cualquier ideología, tam-

4. Cf. D. Lecourt, *op. cit.*, pág. 133.
5. *Ibid.*, pág. 28.
6. En el prólogo al libro de D. Lecourt, *op. cit.*, págs. 9 y 10.

bién exige libertad personal frente al poder burocrático. Y que el uso de la ideología como coerción sigue siendo una de las mejores armas para perpetuar el imperio de una burocracia. (Lo cual no significa, necesariamente, una interpretación materialista de la historia.)

El profesor Hayek insiste repetidamente en qué libertad económica, o economía de mercado libre, no quiere decir laissez faire *o inhibición del Estado. El sistema económico español no es, evidentemente, un régimen de* laissez faire, *pero tampoco es un sistema de mercado libre. Es un régimen de intervencionismo generalizado, pero en la dirección errónea, esto es, en la que acaba por hacer imposible la libertad de mercado, la libertad de empresa y la libertad del individuo. El número de precios intervenidos de una forma u otra –aunque siempre de modo arbitrario cuando es por decisión del Estado, o con miras al abuso particular cuando se trata de los numerosos mercados privados oligopolistas– es incontable. El único precio importante relativamente libre es el del cambio exterior, y fue así establecido en su día por imposición de organismos internacionales y la forzosa necesidad del gobierno español de aceptar sus condiciones. Las cortapisas administrativas de todo orden contra la libre decisión económica de los individuos se acerca a las situaciones anteriores a Adam Smith contra las que levantó su inmortal* Riqueza de las Naciones. *La libertad para elegir personalmente el puesto de trabajo y* –lo que no es menos importante– *para cambiar de oficio o profesión está prácticamente cortada por la existencia de innumerables grupos exentos de competencia (en los dos sentidos españoles de este término). La burocracia es comparable en ineficacia con la de los países socialistas. En estas condiciones, hablar de la española como de una economía de libre empresa y mercado es un puro absurdo.*

Es frecuente, y muchas veces está justificado, culpar a los economistas de proponer medidas de imposible aplicación. Es indudable que desmontar en España el intervencionismo económico actual y erigir un sistema de regulaciones que proteja

el funcionamiento de un régimen de libre competencia exigiría un plazo muy largo. Pero difícilmente se prepararía el camino para conseguirlo alguna vez si tanto los partidarios como los enemigos del sistema capitalista creen sinceramente que éste es el que hoy rige en España.

J. V. D.
Madrid, octubre de 1977.

Camino de servidumbre

A los socialistas de todos los partidos

Es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez.

DAVID HUME

Habría amado la libertad, creo yo, en cualquier época, pero en los tiempos en que vivimos me siento inclinado a adorarla.

A. DE TOCQUEVILLE

Prefacio

Cuando un hombre dedicado por profesión al estudio de los problemas sociales escribe un libro político, su primer deber es decirlo abiertamente. Éste es un libro político. No quiero, aunque quizá habría sido posible, velarlo presentándole, con denominación más elegante y ambiciosa, como un ensayo de filosofía social. Pero, bajo cualquier nombre, lo esencial es que todo lo que he de decir se deriva de ciertos valores últimos. Confío en haber logrado descargarme también en este libro de un segundo y no menos importante deber: el de dejar bien en claro cuáles son estos valores últimos sobre los que descansa por entero la argumentación.

Quiero, sin embargo, añadir aquí una cosa. Aunque éste es un libro político, estoy seguro, como el que más pueda estarlo, que no ha sido mi interés personal lo que determinó las creencias expuestas. No veo motivo alguno para que la clase de sociedad que tengo por deseable me ofreciese mayores ventajas a mí que a la mayoría del pueblo británico. Por el contrario, mis colegas socialistas siempre me han afirmado que, como economista, alcanzaría una posición mucho más importante en una sociedad del tipo que rechazo; siempre, por supuesto, que llegase yo a aceptar sus ideas. No es menos

cierto que mi oposición a las mismas no se debe a que difieran de las ideas en que me formé, pues en mi juventud compartí aquéllas precisamente, y ellas me llevaron a hacer del estudio de la economía mi profesión. Para los que, a la moda de hoy día, buscan un motivo interesado en toda declaración de opiniones políticas, permítaseme agregar que tenía sobrados motivos para *no* escribir o publicar este libro. Con toda seguridad, ha de molestar a muchas personas con las que deseo vivir en amistosas relaciones; me ha obligado a interrumpir trabajos para los que me creo mejor calificado y a los que concedo mayor importancia a la larga, y, sobre todo, es indudable que dañará la futura acogida de los resultados de otros trabajos más estrictamente académicos, hacia los que me llevan mis inclinaciones.

Si, a pesar de todo, he llegado a considerar la redacción de este libro como un deber ineludible, ha sido, más que nada, por causa de un rasgo peculiar y grave de las actuales discusiones sobre los problemas de la política económica futura, que el público no conoce lo bastante. Es el hecho, que la mayoría de los economistas llevan varios años absorbidos por la máquina bélica y reducidos al silencio por sus puestos oficiales, por lo cual la opinión pública está siendo dirigida en estos problemas, en un grado alarmante, por los aficionados y los arbitristas, los que se mueven por un fin interesado y los que pretenden colocar su panacea favorita. En estas circunstancias, quien todavía dispone de tiempo para la tarea de escribir, apenas puede tener derecho a reservar para sí los temores que las tendencias actuales tienen que despertar en el pensamiento de muchos que no pueden expresarse públicamente. En diferente situación, empero, hubiera yo dejado con gusto la discusión de las cuestiones de política general a quienes están, a la vez, mejor calificados y más autorizados para la tarea.

La argumentación central de este libro se bosquejó primero en un artículo titulado «Freedom and the Economic

System», que apareció en el número de abril de 1938 de la *Contemporary Review* y se reimprimió, en forma ampliada, como uno de los *Public Policy Pamphlets* (University of Chicago Press, 1939) dirigidos por el profesor H. D. Gideonse. He de agradecer a los directores y editores de ambas publicaciones la autorización para reproducir ciertos pasajes de aquéllos.

London School of Economics,
Cambridge, diciembre de 1943.

Prefacio a la edición de 1976

Este libro, escrito en mis horas libres entre 1940 y 1943, cuando mi mente estaba aún interesada sobre todo en problemas de teoría económica pura, se convirtió para mí, sin que ello fuera sorpresa, en punto de partida de más de treinta años de trabajo en un nuevo campo. Este primer esfuerzo hacia otro rumbo nació de mi disgusto ante la completa confusión en los círculos «progresistas» ingleses sobre el carácter del movimiento nazi, lo que me llevó primero a enviar un memorándum al entonces director de la London School of Economics, sir William Beveridge, y después un artículo a la *Contemporary Review* en 1938, que a petición del profesor Harry G. Gideonse, de la Universidad de Chicago, amplié para darle entrada en sus *Public Policy Pamphlets.* Finalmente, y no sin dudarlo antes, cuando comprendí que todos mis colegas británicos más competentes que yo en esta materia estaban ocupados en problemas de mayor urgencia relacionados con la marcha de la guerra, amplié mi trabajo hasta convertirlo en este libro en respuesta a las circunstancias de aquel tiempo. A pesar de la favorable y totalmente inesperada acogida –el éxito de la edición americana, en la que inicialmente no se pensó, fue incluso mayor que el de la britá-

nica–, no me sentí del todo feliz, durante mucho tiempo. Aunque en los comienzos del libro había declarado con toda franqueza que se trataba de una obra política, la mayor parte de mis colegas en las ciencias sociales me hicieron sentir que había yo malgastado mis conocimientos, y yo mismo estaba a disgusto por pensar que al desviarme de la teoría económica había traspasado el ámbito de mi competencia. No hablaré aquí de la furia que el libro causó en ciertos círculos, o de la curiosa diferencia de recepción en Gran Bretaña y los Estados Unidos (acerca de lo cual dije algo hace veinte años en el prólogo a la primera edición americana en rústica). Sólo para indicar el carácter de una reacción muy general, mencionaré el caso de un filósofo muy conocido, cuyo nombre dejaré en el anónimo, quien escribió a otro en reproche por haber elogiado este escandaloso libro, ¡que él, «naturalmente, no había leído»!

Pero a pesar de un gran esfuerzo para reintegrarme a la ciencia económica propiamente dicha, no pude liberarme por completo del sentimiento de haberme embarcado, aunque tan sin pensarlo, en unos problemas más provocativos e importantes que los de la teoría económica, y de la necesidad de aclarar y elaborar mejor mucho de lo que había yo dicho en mi primer ensayo. Cuando lo escribí estaba muy lejos de haberme liberado suficientemente de todos los prejuicios y supersticiones que dominaban la opinión general, e incluso menos aún había aprendido a evitar todas las confusiones entonces predominantes sobre términos y conceptos, de cuya importancia me he dado después muy buena cuenta. Y la discusión que el libro intenta de las consecuencias de las políticas socialistas no puede, naturalmente, ser completa sin una exposición adecuada de lo que exige un ordenamiento basado en el mercado libre y lo que puede lograrse con él cuando funciona adecuadamente. A este último problema sobre todo dediqué el trabajo que he realizado posteriormente en este campo. El primer resultado de mis esfuer-

zos para explicar la naturaleza de un ordenamiento libre fue una obra sustancial titulada *The Constitution of Liberty* (1960) en la que intenté esencialmente una nueva y más coherente exposición de las doctrinas del liberalismo clásico del siglo XIX. Al advertir que esta reexposición dejaba sin contestar ciertas cuestiones importantes, me sentí obligado a un nuevo esfuerzo para aportar mis propias respuestas, en una obra en tres volúmenes bajo el título de *Law, Legislation and Liberty*, el primero de los cuales apareció en 1973, el segundo en 1976 y el tercero está a punto de llegar a término.

En los veinte últimos años, entregado a estas tareas, creo haber aprendido mucho sobre los problemas discutidos en el presente libro, que me parece no volví a leer durante este período. Habiéndolo hecho ahora con el fin de redactar este prefacio, no me creo ya en la necesidad de pedir disculpas: me siento por primera vez orgulloso de él hasta cierto punto, y no menos de la inspiración que me hizo dedicarlo «a los socialistas de todos los partidos». Porque si, indudablemente, en el intervalo he aprendido mucho que no sabía cuando lo escribí, me he visto ahora sorprendido a menudo de lo mucho que acerté a ver al comenzar mi trabajo y que ha sido confirmado por la investigación ulterior; y aunque mis esfuerzos posteriores serán más útiles para los especialistas, o así lo espero, me siento ahora dispuesto sin indecisión a recomendar este libro inicial al lector que desee una introducción sencilla y no técnica sobre lo que, a mi juicio, es todavía una de las cuestiones más amenazadoras que tenemos que resolver.

El lector se preguntará probablemente si esto significa que sigo dispuesto a defender las principales conclusiones de este libro; y mi respuesta a ello es en general afirmativa. La reserva más importante que tengo que presentar se debe a la circunstancia de haber cambiado durante este intervalo de tiempo la terminología, por cuya razón puede ser mal interpretado lo que en este libro afirmo. Cuando lo escribí, so-

cialismo significaba sin ninguna duda la nacionalización de los medios de producción y la planificación económica centralizada que aquélla hacía posible y necesaria. En este sentido, Suecia, por ejemplo, está hoy mucho menos organizada en forma socialista que la Gran Bretaña o Austria, aunque se suele considerar a Suecia mucho más socialista. Esto se debe a que socialismo ha llegado a significar fundamentalmente una profunda redistribución de las rentas a través de los impuestos y de las instituciones del Estado benéfico. En éste, los efectos que analizo se han producido con más lentitud y más indirecta e imperfectamente. Creo que el resultado final tiende a ser casi exactamente el mismo, pero el proceso a través del cual se llega a ese resultado no es igual al que se describe en este libro.

Se ha alegado frecuentemente que afirmo que todo movimiento en la dirección del socialismo ha de conducir por fuerza al totalitarismo. Aunque este peligro existe, no es esto lo que el libro dice. Lo que hace es llamar la atención hacia los principios de nuestra política, pues si no los corregimos se seguirán de ellos consecuencias muy desagradables que la mayoría de los que abogan por esa política no desean.

Lo que ahora me parece equivocado en este libro es sobre todo el no haber destacado bastante la significación de la experiencia comunista en Rusia –falta que es quizá perdonable al recordar que cuando lo escribí Rusia era nuestra aliada en la guerra– y que, por no haberme liberado aún por completo de todas las supersticiones intervencionistas entonces corrientes, hice varias concesiones que ahora no creo estaban justificadas. Evidentemente, no me daba entonces plena cuenta de hasta qué punto se habían degradado ya las cosas en algunos aspectos. Todavía planteaba, por ejemplo, como una cuestión retórica mi pregunta (página 114), al considerar si Hitler había obtenido sus ilimitados poderes en una forma estrictamente constitucional: «¿quién concluiría de ello que todavía subsiste en Alemania un Estado de Dere-

cho?», para acabar por descubrir más tarde que los profesores Hans Kelsen y Harold J. Laski –y probablemente otros muchos juristas y especialistas en ciencia política, entre los socialistas que seguían a estos influyentes autores– habían mantenido precisamente esta opinión. En general, el estudio más a fondo de las tendencias contemporáneas del pensamiento y las instituciones ha aumentado, si es posible, mi alarma y temor. Pues tanto la influencia de las ideas socialistas como la inocente confianza en las buenas intenciones de quienes ostentan un poder totalitario han aumentado notablemente desde que escribí este libro.

Durante mucho tiempo me ha disgustado el hecho de ser más conocido por este trabajo, que yo consideraba un escrito de circunstancias, que por mi obra estrictamente científica. Después de examinar de nuevo lo que entonces escribí, a la luz de unos treinta años de estudios sobre los problemas planteados entonces, ya no estoy bajo la misma sensación. Aunque el libro puede contener mucho que, cuando lo escribí, no estaba yo en condiciones de demostrar convincentemente, fue un esfuerzo auténtico por encontrar la verdad, y a mi entender ha aportado intuiciones que ayudarán, incluso a quienes no están de acuerdo conmigo, a evitar graves peligros.

F. A. HAYEK

Introducción

> Pocos descubrimientos son tan exasperantes como los que revelan la genealogía de las ideas.
>
> LORD ACTON

Los acontecimientos contemporáneos difieren de la Historia en que no conocemos los resultados que producirán. Mirando hacia atrás, podemos apreciar la significación de los sucesos pasados y trazar las consecuencias que quedaron de su tránsito. Pero mientras la Historia fluye, no es Historia para nosotros. Nos lleva hacia un país desconocido, y rara vez podemos lograr un destello de lo que tenemos delante. Diferente sería si se nos permitiera pasar por segunda vez a través de los mismos acontecimientos con todo el saber de lo que vimos antes. ¡Cuán distintas se mostrarían las cosas ante nosotros, cuán importantes y, a menudo, alarmantes nos parecerían ciertos cambios que ahora apenas advertimos! Probablemente es una suerte que el hombre no pueda alcanzar jamás esta experiencia y no conozca ninguna ley que tenga que obedecer la Historia.

Sin embargo, aunque la Historia jamás se repite por completo, y precisamente porque no hay evolución inevitable, podemos hasta cierto punto aprender del pasado para evitar la repetición del mismo proceso. No se necesita ser un profeta para percatarse de los peligros inminentes. Una accidental combinación de atención y experiencia revelará a

menudo a un hombre los acontecimientos bajo aspectos que pocos alcanzan a ver.

Las siguientes páginas son el producto de una experiencia que se aproxima todo lo posible a vivir sucesivamente durante largos períodos en países diferentes. Aunque las influencias a las que está sujeta la marcha del pensamiento son, en gran parte, similares en la mayoría de los países civilizados, no operan necesariamente a la vez o a la misma velocidad. Así, trasladándose a otro país, cabe observar dos veces la evolución intelectual en fases similares. Los sentidos se vuelven entonces peculiarmente agudos. Cuando por segunda vez se oye expresar opiniones o propugnar medidas que uno ya encontró hace veinte o veinticinco años, éstas asumen un nuevo significado, como signos de un rumbo definido. Sugieren, si no la necesidad, por lo menos la probabilidad de que los acontecimientos sigan un curso semejante.

Es necesario declarar ahora la desagradable verdad de que estamos en cierto peligro de repetir la suerte de Alemania. El peligro no es inmediato, cierto, y las condiciones de Inglaterra están aún tan lejos de las observadas en los últimos años en Alemania, que se hace difícil creer que nos movemos en la misma dirección. Sin embargo, aunque el camino sea largo, es de tal suerte que resulta cada vez más difícil retroceder. Si a la larga somos los hacedores de nuestro propio destino, a corto plazo somos cautivos de las ideas que hemos engendrado. Sólo si reconocemos a tiempo el peligro podemos tener la esperanza de conjurarlo.

No es la Alemania de Hitler, la Alemania de la guerra presente, aquella con la que Inglaterra ofrece ahora semejanza. Pero los que estudian la evolución de las ideas difícilmente pueden dejar de ver que hay más que una semejanza superficial entre la marcha del pensamiento en Alemania durante la guerra anterior y tras ella y el curso actual de las ideas en Inglaterra. Existe ahora aquí, evidentemente, el mismo empeño en que la organización del país realizada para los fines de

la defensa se mantenga para fines de creación. Es el mismo desprecio hacia el liberalismo del siglo XIX, el mismo «realismo» espurio y hasta cinismo, la misma aceptación fatalista de los «rumbos inevitables». Y, por lo menos, nueve de cada diez de las lecciones que nuestros más vociferantes reformadores tanto ansían que saquemos de esta guerra, son precisamente las lecciones que los alemanes extrajeron de la guerra anterior y tanto han contribuido a producir el sistema nazi. A lo largo de este libro tendremos la oportunidad de mostrar que hay otros muchos puntos en los cuales, con un intervalo de quince a veinticinco años, parecemos seguir el ejemplo de Alemania. Aunque a nadie le agrada que le recuerden las cosas, no hace tantos años que los «progresistas» sostenían, generalmente, la política socialista de aquel país como un ejemplo para imitar, de la misma manera que en años más recientes ha sido Suecia el país modelo hacia el que volvían las miradas los avanzados. Aquellos cuya memoria alcanza más lejos saben cuán profundamente han influido, al menos sobre la generación que precedió a la guerra anterior, el pensamiento alemán y la praxis alemana en los ideales y la política británicos.

El autor ha consumido cerca de la mitad de su vida adulta en su Austria nativa, en estrecho contacto con la vida intelectual alemana, y la otra mitad en los Estados Unidos e Inglaterra. En la docena de años a lo largo de los cuales este país se ha convertido en su hogar, ha llegado a convencerse de que algunas, por lo menos, de las fuerzas que han destruido la libertad en Alemania están operando también aquí, y que el carácter y la fuente de este peligro son aún menos comprendidos aquí, si ello es posible, que lo fueron en Alemania. La gran tragedia está en no ver todavía que en Alemania eran en su mayoría bienintencionados, hombres que fueron admirados y tenidos aquí como modelos, los que prepararon la vía a las fuerzas, si no las crearon efectivamente, que ahora pretenden todo lo que ellos detestan. Y sin em-

bargo, nuestras probabilidades de evitar un destino semejante dependen de nuestra capacidad para hacer frente al peligro y para disponernos a revisar incluso nuestras esperanzas y ambiciones más queridas si resultasen ser la fuente del riesgo. Pocos signos hay, sin embargo, para suponernos el valor intelectual necesario a fin de admitir por propio impulso que nos podemos haber equivocado. Pocos son los dispuestos a reconocer que el nacimiento del fascismo y el nazismo no fue una reacción contra las tendencias socialistas del período precedente, sino el producto inevitable de aquellas corrientes. Es un hecho que la mayoría de las gentes no querían ver, cuando ya se percibía desde lejos la semejanza de muchos rasgos repulsivos de los regímenes interiores en la Rusia comunista y en la Alemania nacionalsocialista. Como resultante de ello, muchos que se consideran infinitamente por encima de las aberraciones del nazismo y que odian sinceramente todas sus manifestaciones se afanan a la vez por ideales cuyo triunfo conduciría directamente a la tiranía aborrecida.

Todos los paralelos entre las evoluciones de países diferentes son, por supuesto, engañosos; pero no baso principalmente mi argumentación en estos paralelos. Ni voy a alegar que estas evoluciones son inevitables. Si lo fueran no tendría sentido escribir sobre ello. Cabe evitarlas si las gentes comprenden a tiempo a dónde le pueden conducir sus esfuerzos. Pero hasta hace poco apenas podían ponerse esperanzas en el éxito de cualquier intento para hacerles visible el peligro. Parece, sin embargo, como si el tiempo hubiera madurado para una discusión plena de toda la cuestión. No sólo se reconoce ahora en general el problema, sino que hay, además, razones especiales que nos obligan en esta coyuntura a enfrentarnos directamente con la cuestión.

Se dirá quizá que no es ésta la oportunidad para plantear una cuestión sobre la cual chocan violentamente las opiniones. Pero el socialismo del que hablamos no es cosa de parti-

do, y las cuestiones que aquí discutiremos tienen poco que ver con las que se disputan entre partidos políticos. No afecta a nuestro problema que algunos grupos puedan desear menos socialismo que otros, que unos deseen el socialismo en interés principalmente de un grupo y otros en el de otro. Lo importante es que si consideramos las gentes cuyas opiniones influyen sobre la evolución de los acontecimientos, todas son ahora, en cierta medida, socialistas en Inglaterra. Si ya no está de moda subrayar que «todos somos socialistas ahora», es simplemente por ser un hecho demasiado obvio. Apenas nadie duda que tenemos que continuar moviéndonos hacia el socialismo, y la mayor parte de las gentes trata tan sólo de desviar este movimiento en interés de un grupo o clase particular.

Nos movemos en esta dirección porque casi todos lo desean. No existen hechos objetivos que lo hagan inevitable. Algo diremos luego acerca de la supuesta inevitabilidad de la «planificación». Pero lo principal es saber a dónde nos conducirá ese movimiento. Pues si las personas cuyas convicciones le dan ahora tan irresistible ímpetu comenzaran a ver lo que sólo unos pocos adivinan, ¿no es posible que retrocediesen horrorizadas y abandonasen el deseo que durante medio siglo ha movido a tantas gentes de buena voluntad? A dónde nos conducirá esta común creencia de nuestra generación, es un problema, no para un partido, sino para todos y cada uno de nosotros, un problema de la más trascendental significación. ¿Cabe imaginar mayor tragedia que esa de nuestro esfuerzo por forjarnos el futuro según nuestra voluntad, de acuerdo con altos ideales, y en realidad provocar con ello involuntariamente todo lo opuesto a lo que nuestro afán pretende?

Hay un motivo todavía más acuciante para empeñarnos ahora en comprender las fuerzas que han creado el nacionalsocialismo: que ello nos permitirá comprender a nuestro enemigo y lo que nos estamos jugando. No puede negarse

que sabemos poco acerca de los ideales positivos por los cuales luchamos. Sabemos que luchamos por la libertad para forjar nuestra vida de acuerdo con nuestras propias ideas. Es mucho, pero no bastante. No es suficiente para darnos las firmes creencias necesarias a fin de rechazar a un enemigo que usa la propaganda como una de sus armas principales, no sólo en sus formas más ruidosas, sino también en las más sutiles. Todavía es más insuficiente cuando tenemos que contrarrestar esta propaganda entre las gentes de los países bajo su dominio y en otras partes, donde el efecto de esta propaganda no desaparecerá con la derrota de las potencias del Eje. No es suficiente si deseamos mostrar a los demás que aquello por lo que luchamos es digno de su apoyo, y no es suficiente para orientarnos en la construcción de una nueva Europa a salvo de los peligros bajo los que sucumbió la vieja.

Es un hecho lamentable que los ingleses, en sus tratos con los dictadores antes de la guerra, no menos que en sus ensayos de propaganda y en la discusión de sus fines de guerra propios, hayan mostrado una inseguridad interior y una incertidumbre de propósitos que sólo pueden explicarse por una confusión sobre sus propios ideales y sobre la naturaleza de las diferencias que los separan del enemigo. Nos hemos extraviado, tanto por negarnos a creer que el enemigo era sincero en la profesión de alguna de las creencias que compartimos como por creer en la sinceridad de otras de sus pretensiones. ¿No se han engañado tanto los partidos de izquierdas como los de derechas al creer que el nacionalsocialismo estaba al servicio de los capitalistas y se oponía a todas las formas del socialismo? ¿Cuántos aspectos del sistema de Hitler no se nos ha recomendado imitar, desde los lugares más insospechados, ignorando que eran parte integrante de aquel sistema e incompatibles con la sociedad libre que tratamos de conservar? El número de los peligrosos errores cometidos, antes y después de estallar la guerra, por no comprender a nuestro antagonista es espantoso. Parece como si

no deseáramos comprender la evolución que ha producido el totalitarismo, porque tal entendimiento pudiese destruir algunas de nuestras más caras ilusiones, a las que estamos decididamente aferrados.

Nunca tendremos éxito en nuestros tratos con los alemanes mientras no comprendamos el carácter y el desarrollo de las ideas que ahora les gobiernan. La teoría que de nuevo se extiende, según la cual los alemanes, como tales, son intrínsecamente perversos, es difícil de defender y no muy creída por quienes la defienden. Deshonra a la larga serie de ingleses que durante los cien últimos años han recogido de buen grado lo que había de mejor, y no sólo lo que había de mejor, en el pensamiento alemán. Olvida que cuando, hace ochenta años, John Stuart Mill escribía su gran ensayo *On Liberty,* obtenía su inspiración, más que de ningún otro hombre, de dos alemanes, Goethe y Wilhem von Humboldt[1], y olvida que dos de los más influyentes antecesores intelectuales del nacionalsocialismo, Thomas Carlyle y Houston Stewart Chamberlain, eran un escocés y un inglés. En sus formas más crudas, esta opinión deshonra a quienes, al mantenerla, adoptan los peores atributos de las teorías raciales alemanas. El problema no está en por qué los alemanes como tales, son perversos, lo que congénitamente no es probable que sea más cierto de ellos que de otros pueblos, sino en determinar las circunstancias que durante los últimos setenta años hicieron posible el crecimiento progresivo y la victoria final de un conjunto particular de ideas, y las causas de que, a la postre, esta victoria haya encumbrado a los elementos más perversos. Odiar simplemente todo lo alemán, en lugar de las ideas particulares que ahora dominan a los alemanes, es, además, muy peligroso, porque ciega contra una amenaza

1. Como algunas personas pueden considerar exagerada esta manifestación, será útil citar el testimonio de lord Morley, quien en sus *Recollections* da como un «hecho sabido» que el principal argumento del ensayo *On Liberty* «no era original, sino que procedía de Alemania».

real a los que caen en ello. Es de temer que, con frecuencia, esta actitud sea tan sólo una especie de evasión, nacida de la repugnancia a reconocer tendencias que no están confinadas en Alemania y de la resistencia a examinar de nuevo, y si es necesario a desechar, creencias que hemos tomado de los alemanes y que nos tienen todavía tan seducidos como a los alemanes les tuvieron. Ello es doblemente peligroso, porque la opinión de ser tan sólo la peculiar maldad de los alemanes lo que ha producido el sistema nazi puede muy bien convertirse en la excusa para imponernos las instituciones que verdaderamente han producido aquella maldad.

La interpretación del rumbo de los acontecimientos en Alemania e Italia que se brinda en este libro es muy diferente de la que han dado la mayor parte de los observadores extranjeros y la mayoría de los exiliados de aquellos países. Pero si esta interpretación es correcta, explicará también por qué a las personas, como la mayoría de los exiliados y los corresponsales en el extranjero de los periódicos ingleses y americanos, que sostienen las opiniones socialistas que ahora predominan, les es casi imposible ver aquellos acontecimientos en su perspectiva propia[2]. La superficial y errónea opinión que sólo ve en el nacionalsocialismo una reacción fomentada por todos aquellos que sentían sus privilegios o intereses

2. Hasta qué punto las opiniones corrientes en todos los sectores, incluso los más conservadores, de un país entero pueden estar teñidas por el izquierdismo predominante entre los corresponsales de su prensa en el extranjero, lo ilustran bien las opiniones sostenidas, casi unánimemente, en los Estados Unidos acerca de las relaciones entre Gran Bretaña y la India. El inglés que desee ver los acontecimientos del continente europeo en su verdadera perspectiva debe meditar seriamente sobre la posibilidad de que sus opiniones hayan sido pervertidas precisamente de la misma manera y por las mismas razones. Esto no significa en modo alguno negar la sinceridad de las opiniones de los corresponsales norteamericanos e ingleses en el extranjero. Pero a nadie que conozca la índole de los círculos indígenas con los que es probable que establezcan estrecho contacto los corresponsales extranjeros le será difícil comprender las fuentes de esta parcialidad.

amenazados por el avance del socialismo, era naturalmente sostenida por quienes, aunque participaron activamente algún tiempo en el movimiento de ideas que ha conducido al nacionalsocialismo, se detuvieron en algún punto de esta evolución y, al enfrentarse así con los nazis, se vieron forzados a abandonar su país. Pero el hecho de haber sido numéricamente la única oposición importante a los nazis no significa sino que, en el sentido más amplio, todos los alemanes se habían hecho socialistas, y el liberalismo, en el viejo sentido, había sido expulsado por el socialismo. Como esperamos demostrar, el conflicto existente en Alemania entre la «derecha» nacionalsocialista y las «izquierdas» es el tipo de conflicto que surge siempre entre facciones socialistas rivales. Si esta interpretación es correcta, significa, pues, que muchos de estos refugiados socialistas, al aferrarse a sus ideas, ayudan ahora, aunque con la mejor voluntad del mundo, a llevar a su país de adopción por el camino que ha seguido Alemania.

Sé que muchos de mis amigos ingleses se han estremecido a veces ante las opiniones semifascistas que ocasionalmente oyen expresar a refugiados alemanes cuyas auténticas convicciones socialistas no podrían ponerse en duda. Pero mientras estos observadores ingleses lo achacaban al hecho de ser alemanes, la verdadera explicación está en que eran socialistas con una experiencia que les había situado varias etapas por delante de la alcanzada por los socialistas británicos. Por descontado que los socialistas alemanes hallaron mucho apoyo en su país en ciertas características de la tradición prusiana; y este parentesco entre prusianismo y socialismo, del que se vanagloriaban en Alemania ambas partes, da una confirmación adicional a nuestra principal argumentación [3]. Pero sería un error creer que fue lo alemán es-

3. Que existió un cierto parentesco entre el socialismo y la estructura del Estado prusiano, conscientemente ayudado desde arriba como en ningún otro país, es innegable, y ya lo reconocieron libremente los primeros socialistas franceses. Mucho antes de inspirarse el socialismo del

pecífico, más que el elemento socialista, lo que produjo el totalitarismo. Fue el predominio de las ideas socialistas, y no el prusianismo, lo que Alemania tuvo en común con Italia y Rusia; y fue de las masas y no de las clases impregnadas de la tradición prusiana y favorecidas por ella de donde surgió el nacionalsocialismo.

siglo XIX en el ideal de dirigir el Estado entero conforme a los mismos principios que una fábrica cualquiera, el poeta prusiano Novalis había ya deplorado que «ningún Estado ha sido administrado jamás de manera tan semejante a una fábrica como Prusia desde la muerte de Federico Guillermo». (Cf. Novalis [Friedrich von Handenberg], *Glauben und Liebe, oder der König und die Königin*, 1798.)

1. El camino abandonado

> Un programa cuya tesis fundamental no estriba en que el sistema de la libre empresa, orientada hacia el beneficio, haya fracasado en esta generación, sino en que no ha sido todavía intentado.
>
> F. D. ROOSEVELT

Cuando el curso de la civilización toma un giro insospechado, cuando, en lugar del progreso continuo que esperábamos, nos vemos amenazados por males que asociábamos con las pasadas edades de barbarie, culpamos, naturalmente, a cualquiera menos a nosotros mismos. ¿No hemos trabajado todos de acuerdo con nuestras mejores luces y no han trabajado incesantemente muchas de nuestras finas inteligencias para hacer de éste un mundo mejor? ¿No se han dirigido todos nuestros esfuerzos y esperanzas hacia una mayor libertad, justicia y prosperidad? Si el resultado es tan diferente de nuestros propósitos, si en lugar de disfrutar libertad y prosperidad nos enfrentamos con esclavitud y miseria, ¿no es evidente que unas fuerzas siniestras deben haber frustrado nuestras intenciones, que somos las víctimas de alguna potencia maligna, la cual ha de ser vencida antes de reanudar el camino hacia cosas mejores? Por mucho que podamos disentir cuando señalamos el culpable, séalo el inicuo capitalismo o el espíritu malvado de un particular país, la estupidez de nuestros antepasados o un sistema social no derrumbado por completo, aunque venimos luchando contra él durante medio siglo, todos estamos, o por lo menos lo estábamos

hasta hace poco, ciertos de una cosa: que las ideas directoras que durante la última generación han ganado a la mayor parte de las gentes de buena voluntad y han determinado los mayores cambios en nuestra vida social no pueden ser falsas. Estamos dispuestos a aceptar cualquier explicación de la presente crisis de nuestra civilización, excepto una: que el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio error y que el intento de alcanzar algunos de nuestros más caros ideales haya, al parecer, producido resultados que difieren por completo de los esperados.

Mientras todas nuestras energías se dirigen a conducir esta guerra a un final victorioso, resulta a veces difícil recordar que ya antes de la guerra se minaban aquí y se destruían allá los valores por los cuales ahora luchamos. Aunque de momento los diferentes ideales estén representados por naciones hostiles que luchan por su existencia, es preciso no olvidar que este conflicto ha surgido de una pugna de ideas dentro de lo que, no hace aún mucho, era una civilización europea común; y que las tendencias culminantes en la creación de los sistemas totalitarios no estaban confinadas en los países que a ellos sucumbieron. Aunque la primera tarea debe ser ahora la de ganar la guerra, ganarla nos reportará tan sólo otra oportunidad para hacer frente a los problemas fundamentales y para encontrar una vía que nos aleje del destino que acabó con civilizaciones afines.

Es algo difícil imaginarse ahora a Alemania e Italia, o a Rusia, no como mundos diferentes, sino como productos de una evolución intelectual en la que hemos participado; es más sencillo y confortante pensar, por lo menos en lo que se refiere a nuestros enemigos, que son enteramente diferentes de nosotros y que les ha sucedido lo que aquí no puede acontecer. Y, sin embargo, la historia de estos países en los años que precedieron al orto del sistema totalitario muestra pocos rasgos que no nos sean familiares. La pugna externa es el resultado de una transformación del pensamiento europeo,

en la que otros avanzaron tanto que la llevaron a un conflicto irreconciliable con nuestros ideales, pero la transformación no ha dejado de afectarnos.

Que un cambio de ideas y la fuerza de la voluntad humana han hecho del mundo lo que ahora es, aunque los hombres no previesen los resultados, y que ningún cambio espontáneo en los hechos nos obligaba a amoldar así nuestro pensamiento, es quizá particularmente difícil de ver para un inglés, y ello porque el inglés, afortunadamente para él, marchó en esta evolución a la zaga de la mayor parte de los pueblos europeos. Todavía consideramos los ideales que nos guían y nos han guiado durante la pasada generación, como ideales que sólo en el futuro han de alcanzarse, y no vemos hasta qué punto han transformado ya en los últimos veinticinco años no sólo el mundo, sino también Inglaterra. Todavía creemos que hasta hace muy poco estábamos gobernados por lo que se llamaba vagamente las ideas del siglo XIX o el principio del *laissez-faire*. En comparación con algunos otros países, y desde el punto de vista de los impacientes por apresurar el cambio, puede haber alguna justificación para esta creencia. Pero aunque hasta 1931 Inglaterra sólo había seguido lentamente el sendero por el que otros conducían, también nosotros habíamos avanzado tanto, que únicamente quienes alcanzan con su memoria los años anteriores a la primera guerra saben lo que era un mundo liberal[1].

1. Ya en aquel año, en el Dictamen de la Comisión Macmillan pudo hablarse de «el cambio de perspectiva del Gobierno de este país en los últimos tiempos, su creciente preocupación, con independencia de partido político, acerca de la dirección de la vida del pueblo», y añadía que «el Parlamento se encuentra comprometido crecientemente en una legislación que tiene como finalidad consciente la regulación de los negocios diarios de la comunidad e interviene ahora en cuestiones que antes se habrían considerado completamente fuera de su alcance». Y esto pudo decirse antes de que aquel mismo año el país, finalmente, se zambullese de cabeza y, en el breve e inglorioso espacio que va de 1931 a 1938, transformase su sistema económico hasta dejarlo desconocido.

El punto decisivo, que las gentes apenas han reconocido todavía, no es ya la magnitud de los cambios ocurridos durante la última generación, sino el hecho de significar una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y nuestro orden social. Al menos durante los veinticinco años anteriores a la transformación del espectro del totalitarismo en una amenaza real, hemos estado alejándonos progresivamente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civilización europea. Que este movimiento, en el que entramos con tan grandes esperanzas y ambiciones, nos haya abocado al horror totalitario ha sido un choque tan profundo para nuestra generación, que todavía rehúsa relacionar los dos hechos. Sin embargo, esta evolución no hace más que confirmar los avisos de los padres de la filosofía liberal que todavía profesamos. Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política. Aunque algunos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como De Tocqueville y lord Acton, nos advirtieron que socialismo significa esclavitud, hemos marchado constantemente en la dirección del socialismo. Y ahora, cuando vemos surgir ante nuestros ojos una nueva forma de esclavitud, hemos olvidado tan completamente la advertencia, que rara vez se nos ocurre relacionar las dos cosas[2].

Cuán fuerte es la ruptura, no sólo con el pasado reciente, sino con todo el desarrollo de la civilización occidental, que significa el rumbo moderno hacia el socialismo, se ve con

2. Incluso advertencias mucho más recientes, que han demostrado ser terriblemente ciertas, se olvidaron casi por entero. No hace treinta años que Mr. Hilaire Belloch, en un libro que explica más de lo que ha sucedido desde entonces en Alemania que la mayoría de las obras escritas después del acontecimiento, expuso que «el efecto de la doctrina socialista sobre la sociedad capitalista consiste en producir una tercera cosa diferente de cualquiera de sus dos progenitores: el Estado de siervos» (*The Servile State*, 1913, 3.ª ed., 1927, pág., XIV).

claridad si la consideramos no sólo sobre el fondo del siglo XIX, sino en una perspectiva histórica más amplia. Estamos abandonando rápidamente, no sólo las ideas de Cobden y Bright, de Adam Smith y Hume e incluso de Locke y Milton, sino una de las características de la civilización occidental tal como se ha desarrollado a partir de sus fundamentos establecidos por el cristianismo y por Grecia y Roma. No sólo el liberalismo de los siglos XIX y XVIII, sino el fundamental individualismo que heredamos de Erasmo y Montaigne, de Cicerón y Tácito, Pericles y Tucídides, se han abandonado progresivamente.

El dirigente nazi que describió la revolución nacionalsocialista como un Contrarrenacimiento estaba más en lo cierto de lo que probablemente suponía. Ha sido el paso decisivo en la ruina de aquella civilización que el hombre moderno vino construyendo desde la época del Renacimiento, y que era, sobre todo, una civilización individualista. Individualismo es hoy una palabra mal vista, y ha llegado a asociarse con egotismo y egoísmo. Pero el individualismo del que hablamos, contrariamente al socialismo y las demás formas de colectivismo, no está en conexión necesaria con ellos. Sólo gradualmente podremos, a lo largo de este libro, aclarar el contraste entre los dos principios opuestos. Ahora bien, los rasgos esenciales de aquel individualismo que, con elementos aportados por el cristianismo y la filosofía de la Antigüedad clásica, se logró plenamente por vez primera durante el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido después en lo que conocemos como civilización occidental europea, son: el respeto por el hombre individual *qua* hombre, es decir, el reconocimiento de sus propias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera, por mucho que se estreche ésta, y la creencia en que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones individuales. «Independencia» y «libertad» son palabras tan gastadas por el uso y el abuso, que se duda en emplearlas para

expresar los ideales que representaron durante este período. Tolerancia es quizá la sola palabra que todavía conserva plenamente el significado del principio que durante todo este período floreció, y que sólo en los tiempos recientes ha decaído de nuevo hasta desaparecer por completo con el nacimiento del Estado totalitario.

La transformación gradual de un sistema organizado rígidamente en jerarquías en otro donde los hombres pudieron, al menos, intentar la forja de su propia vida, donde el hombre ganó la oportunidad de conocer y elegir entre diferentes formas de vida, está asociada estrechamente con el desarrollo del comercio. Desde las ciudades comerciales del norte de Italia, la nueva concepción de la vida se extendió con el comercio hacia el Occidente y el Norte, a través de Francia y el suroeste de Alemania, hasta los Países Bajos y las Islas Británicas, enraizando firmemente allí donde un poder político despótico no la sofocó. En los Países Bajos y en Gran Bretaña disfrutó por largo tiempo su más completo desarrollo y por primera vez logró una oportunidad para crecer libremente y servir de fundamento a la vida política y social de estos países. Y desde aquí, después, en los siglos XVII y XVIII, comenzó de nuevo a extenderse, en una forma más plena, hacia Occidente y Oriente, al Nuevo Mundo y al centro del continente europeo, donde unas guerras devastadoras y la opresión política habían ahogado los primeros albores de una expansión semejante[3].

Durante todo este moderno período de la historia europea, el desarrollo general de la sociedad se dirige a libertar al individuo de los lazos que le forzaban a seguir las vías de la costumbre o del precepto en la prosecución de sus actividades ordinarias. El reconocimiento consciente de que los es-

3. El más fatal de estos acontecimientos, preñado de consecuencias todavía no extinguidas, fue la sumisión y destrucción parcial de la burguesía alemana por los príncipes territoriales en los siglos XV y XVI.

fuerzos espontáneos y no sometidos a control de los individuos fueran capaces de producir un orden complejo de actividades económicas sólo pudo surgir cuando aquel desarrollo hubo logrado cierto progreso. La posterior elaboración de unos argumentos consecuentes en favor de la libertad económica ha sido el resultado de un libre desarrollo de la actividad económica que fue el subproducto espontáneo e imprevisto de la libertad política.

Quizá el mayor resultado del desencadenamiento de las energías individuales fue el maravilloso desarrollo de la ciencia, que siguió los pasos de la libertad individual desde Italia a Inglaterra y más allá. Que la facultad inventiva del hombre no fue menor en los períodos anteriores lo demuestra la multitud de ingeniosos juguetes automáticos y otros artificios mecánicos construidos cuando la técnica industrial estaba aún estacionada, y el desarrollo de algunas industrias que, como la minería o la relojería, no estaban sujetas a intervenciones restrictivas. Pero los escasos intentos para un uso industrial más extenso de las invenciones mecánicas, algunas extraordinariamente avanzadas, fueron pronto cortados, y el deseo de conocimiento quedaba ahogado cuando las opiniones dominantes obligaban a todos: se permitió que las creencias de la gran mayoría sobre lo justo y lo conveniente cerrasen el camino al innovador individual. Sólo cuando la libertad industrial abrió la vía al libre uso del nuevo conocimiento, sólo cuando todo pudo ser intentado –si se encontraba alguien capaz de sostenerlo a su propio riesgo– y, debe añadirse, no a través de las autoridades oficialmente encargadas del cultivo del saber, la ciencia hizo los progresos que en los últimos ciento cincuenta años han cambiado la faz del mundo.

Como ocurre tantas veces, sus enemigos han percibido más claramente que la mayor parte de sus amigos la naturaleza de nuestra civilización. «La perenne enfermedad occidental, la rebelión del individuo contra la especie», como un

totalitario del siglo XIX, Auguste Comte, caracterizó aquélla, fue precisamente la fuerza que construyó nuestra civilización. Lo que el siglo XIX añadió al individualismo del período precedente fue tan sólo la extensión de la conciencia de libertad a todas las clases, el desarrollo sistemático y continuo de lo que había crecido en brotes y al azar y su difusión desde Inglaterra y Holanda a la mayor parte del continente europeo.

El resultado de este desenvolvimiento sobrepasó todas las previsiones. Allí donde se derrumbaron las barreras puestas al libre ejercicio del ingenio humano, el hombre se hizo rápidamente capaz de satisfacer nuevos órdenes de deseos. Y cuando el nivel de vida ascendente condujo al descubrimiento de trazos muy sombríos en la sociedad, trazos que los hombres no estaban ya dispuestos a tolerar más, no hubo probablemente clase que no lograra un beneficio sustancial del general progreso. No podemos hacer justicia a este asombroso desarrollo si lo medimos por nuestros niveles presentes, que son el resultado de este desarrollo y hacen patentes ahora muchos defectos. A fin de apreciar lo que significó para quienes en él tomaron parte, tenemos que medirlo por las esperanzas y deseos que los hombres alimentaron en su comienzo. Y no hay duda que el resultado sobrepasó los más impetuosos sueños del hombre; al comienzo del siglo XX el trabajador había alcanzado en el mundo occidental un grado de desahogo material, seguridad e independencia personal, que difícilmente se hubieran tenido por posibles cien años antes.

Lo que en el futuro se considerará probablemente como el efecto más significativo y trascendental de este triunfo es el nuevo sentimiento de poder sobre el propio destino, la creencia en las ilimitadas posibilidades de mejorar la propia suerte, que los triunfos alcanzados crearon entre los hombres. Con el triunfo creció la ambición; y el hombre tiene todo el derecho a ser ambicioso. Lo que fue una promesa es-

timulante ya no pareció suficiente; el ritmo del progreso se consideró demasiado lento; y los principios que habían hecho posible este progreso en el pasado comenzaron a considerarse más como obstáculos, que urgía suprimir para un progreso más rápido, que como condiciones para conservar y desarrollar lo ya conseguido.

No hay nada en los principios básicos del liberalismo que hagan de éste un credo estacionario; no hay reglas absolutas establecidas de una vez para siempre. El principio fundamental, según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debemos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción, permite una infinita variedad de aplicaciones. En particular, hay una diferencia completa entre crear deliberadamente un sistema dentro del cual la competencia opere de la manera más beneficiosa posible y aceptar pasivamente las instituciones tal como son. Probablemente, nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio del *laissez-faire*. Y, sin embargo, en cierto sentido era necesario e inevitable. Contra los innumerables intereses que podían mostrar los inmediatos y evidentes beneficios que a algunos les producirían unas medidas particulares, mientras el daño que éstas causaban era mucho más indirecto y difícil de ver, nada, fuera de alguna rígida regla, habría sido eficaz. Y como se estableció indudablemente una fuerte presunción en favor de la libertad industrial, la tentación de presentar ésta como una regla sin excepciones fue siempre demasiado fuerte para resistir a ella.

Pero con esta actitud de muchos divulgadores de la doctrina liberal era casi inevitable que, una vez rota por varios puntos su posición, pronto se derrumbase toda ella. La posición se debilitó, además, por el forzosamente lento progreso de una política que pretendía la mejora gradual en la es-

tructura institucional de una sociedad libre. Este progreso dependía del avance de nuestro conocimiento de las fuerzas sociales y las condiciones más favorables para que éstas operasen en la forma deseable. Como la tarea consistía en ayudar y, donde fuere necesario, complementar su operación, el primer requisito era comprenderlas. La actitud del liberal hacia la sociedad es como la del jardinero que cultiva una planta, el cual, para crear las condiciones más favorables a su desarrollo, tiene que conocer cuanto le sea posible acerca de su estructura y funciones.

Ninguna persona sensata debiera haber dudado que las toscas reglas en las que se expresaron los principios de la economía política del siglo XIX eran sólo un comienzo, que teníamos mucho que aprender aún y que todavía quedaban inmensas posibilidades de avance sobre las líneas en que nos movíamos. Pero este avance sólo podía lograrse en la medida en que ganásemos el dominio intelectual de las fuerzas que habíamos de utilizar. Existían muchas evidentes tareas, tales como el manejo del sistema monetario, la evitación o el control del monopolio y aun otras muchísimas más, no tan evidentes pero difícilmente menos importantes, que emprender en otros campos, las cuales proporcionaban, sin duda, a los gobiernos enormes poderes para el bien y para el mal; y era muy razonable esperar que con un mejor conocimiento de los problemas hubiéramos sido capaces algún día de usar con buen éxito estos poderes.

Pero como el progreso hacia lo que se llama comúnmente la acción «positiva» era por fuerza lento, y como, para la mejoría inmediata, el liberalismo tenía que confiar grandemente en el gradual incremento de la riqueza que la libertad procuraba, hubo de luchar constantemente contra los proyectos que amenazaban este progreso. Llegó a ser considerado como un credo «negativo», porque apenas podía ofrecer a cada individuo más que una participación en el progreso común; un progreso que cada vez se tuvo más por otorgado

y que dejó de reconocerse como el resultado de la política de libertad. Pudiera incluso decirse que el éxito real del liberalismo fue la causa de su decadencia. Por razón del éxito ya logrado, el hombre se hizo cada vez más reacio a tolerar los males subsistentes, que ahora se le aparecían, a la vez, como insoportables e innecesarios.

A causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de la política liberal, la justa irritación contra los que usaban la fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales y la ambición sin límites aparentemente justificada por las mejoras materiales logradas hasta entonces, sucedió que, al caer el siglo, la creencia en los principios básicos del liberalismo se debilitó más y más. Lo logrado vino a considerarse como una posición segura e imperecedera, adquirida de una vez para siempre. La atención de la gente se fijó sobre las nuevas demandas, la rápida satisfacción de las cuales parecía dificultada por la adhesión a los viejos principios. Se aceptó cada vez más que no podía esperarse un nuevo avance sobre las viejas líneas dentro de la estructura general que hizo posible el anterior progreso, sino mediante una nueva y completa modelación de la sociedad. No era ya cuestión de ampliar o mejorar el mecanismo existente, sino de raerlo por completo. Y como la esperanza de la nueva generación vino a centrarse sobre algo completamente nuevo, declinó rápidamente el interés por el funcionamiento de la sociedad existente y la comprensión de su mecanismo; y al declinar el conocimiento sobre el modo de operar el sistema libre, decreció también nuestro saber acerca de qué es lo que de su existencia depende.

No es aquí el lugar de discutir cómo fue alimentado este cambio de perspectiva por la incuestionada transposición, a los problemas de la sociedad, de los hábitos mentales engendrados en la reflexión sobre los problemas tecnológicos, los hábitos mentales del hombre de ciencia y del ingeniero; de

discutir cómo éstos tendieron, a la vez, a desacreditar los resultados del anterior estudio de la sociedad que no se adaptaban a sus prejuicios y a imponer ideales de organización a una esfera para la que no eran apropiados[4]. Lo que aquí nos preocupa es mostrar cuán completamente, aunque de manera gradual y por pasos casi imperceptibles, ha cambiado nuestra actitud hacia la sociedad. Lo que en cada etapa de este proceso de cambio pareció tan sólo una diferencia de grado ha originado ya en su efecto acumulativo una diferencia fundamental entre la vieja actitud liberal frente a la sociedad y el enfoque presente en los problemas sociales. El cambio supone una completa inversión del rumbo que hemos bosquejado, un completo abandono de la tradición individualista que creó la civilización occidental.

De acuerdo con las opiniones ahora dominantes, la cuestión no consiste ya en averiguar cuál puede ser el mejor uso de las fuerzas espontáneas que se encuentran en una sociedad libre. Hemos acometido, efectivamente, la eliminación de las fuerzas que producen resultados imprevistos y la sustitución del mecanismo impersonal y anónimo del mercado por una dirección colectiva y «consciente» de todas las fuerzas sociales hacia metas deliberadamente elegidos. Nada ilustra mejor esta diferencia que la posición extrema adoptada en un libro muy elogiado, cuyo programa de la llamada «planificación para la libertad» hemos de comentar más de una vez.

> Jamás hemos tenido que levantar y dirigir el sistema entero de la naturaleza [escribe el Dr. Karl Mannheim] como nos vemos forzados a hacerlo hoy con la sociedad... La Humanidad tiende cada vez más a regular su vida social entera, aunque jamás ha intentado crear una segunda naturaleza[5].

4. El autor ha intentado trazar los comienzos de esta evolución en dos series de artículos: «Scientism and the Study of Society» y «The Counter-Revolution of Science», que han aparecido en *Economica*, 1941-1944.
5. *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1940, pág. 175.

Es significativo que este cambio en el rumbo de las ideas ha coincidido con una inversión del sentido que siguieron éstas al atravesar el espacio. Durante más de doscientos años las ideas inglesas se extendieron hacia el Este. La supremacía de la libertad, que fue lograda en Inglaterra, parecía destinada a extenderse al mundo entero. Pero hacia 1870 el reinado de estas ideas había alcanzado, probablemente, su máxima expansión hacia el Este. Desde entonces comenzó su retirada, y un conjunto de ideas diferentes, en realidad no nuevas, sino muy viejas, comenzó a avanzar desde el Este. Inglaterra perdió la dirección intelectual en las esferas política y social y se convirtió en importadora de ideas. Durante los sesenta años siguientes fue Alemania el centro de donde partieron hacia Oriente y Occidente las ideas destinadas a gobernar el mundo en el siglo XX. Fuese Hegel o Marx, List o Schmoller, Sombart o Mannheim, fuese el socialismo en su forma más radical o simplemente la «organización» o la «planificación» de un tipo menos extremo, las ideas alemanas entraron fácilmente por doquier y las instituciones alemanas se imitaron. Aunque las más de las nuevas ideas, y particularmente el socialismo, no nacieron en Alemania, fue en Alemania donde se perfeccionaron y donde alcanzaron durante el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX su pleno desarrollo. Se olvida ahora a menudo que fue muy considerable durante este período la primacía de Alemania en el desenvolvimiento de la teoría y la práctica del socialismo; que una generación antes de llegar a ser el socialismo una cuestión importante en Inglaterra contaba Alemania con un dilatado partido socialista en su Parlamento, y que, hasta no hace mucho, el desarrollo doctrinal del socialismo se realizaba casi enteramente en Alemania y Austria, de manera que incluso las discusiones de hoy en Rusia parten, en gran medida, de donde los alemanes las dejaron. La mayoría de los socialistas ingleses ignoran todavía que la mayor parte de los problemas que comienzan a descubrir fueron minuciosa-

mente discutidos por los socialistas alemanes hace mucho tiempo.

La influencia intelectual que los pensadores alemanes fueron capaces de ejercer sobre el mundo entero durante este período descansó no sólo en el gran progreso material de Alemania, sino más aún en la extraordinaria reputación que los pensadores y hombres de ciencia alemanes habían ganado durante los cien años anteriores, cuando Alemania llegó, una vez más, a ser un miembro cabal e incluso rector de la civilización europea común. Pero pronto sirvió esto para ayudar a la expansión, desde Alemania, de las ideas dirigidas contra los fundamentos de esta civilización. Los propios alemanes –o al menos aquellos que extendieron estas ideas– tuvieron plena conciencia del conflicto. Lo que había sido común herencia de la civilización europea se convirtió para ellos, mucho antes de los nazis, en civilización «occidental»; pero «occidental» no se usaba ya en el viejo sentido de Occidente, sino que empezó a significar a occidente del Rhin. «Occidente», en este sentido, era liberalismo y democracia, capitalismo e individualismo, librecambio y cualquier forma de internacionalismo o amor a la paz.

Mas, a pesar de este mal disfrazado desprecio de un cierto número, cada vez mayor, de alemanes hacia aquellos «frívolos» ideales occidentales, o quizá a causa de ello, los pueblos de Occidente continuaron importando ideas alemanas y hasta se vieron llevados a creer que sus propias convicciones anteriores eran simples racionalizaciones de sus intereses egoístas; que el librecambio era una doctrina inventada para extender los intereses británicos y que los ideales políticos que Inglaterra dio al mundo habían pasado de moda irremediablemente y eran cosa de vergüenza.

2. La gran utopía

> Lo que ha hecho siempre del Estado un infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso.
>
> F. HÖLDERLIN

Que el socialismo haya desplazado al liberalismo, como doctrina sostenida por la gran mayoría de los «progresistas», no significa simplemente que las gentes hayan olvidado las advertencias de los grandes pensadores liberales del pasado acerca de las consecuencias del colectivismo. Ha sucedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo que aquellos hombres predecían. Lo extraordinario es que el mismo socialismo que no sólo se consideró primeramente como el ataque más grave contra la libertad, sino que comenzó por ser abiertamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó la aceptación general bajo la bandera de la libertad. Rara vez se recuerda ahora que el socialismo fue, en sus comienzos, francamente autoritario. Los escritores franceses que construyeron los fundamentos del socialismo moderno sabían, sin lugar a dudas, que sus ideas sólo podían llevarse a la práctica mediante un fuerte Gobierno dictatorial. Para ellos el socialismo significaba un intento de «terminar la revolución» con una reorganización deliberada de la sociedad sobre líneas jerárquicas y la imposición de un «poder espiritual» coercitivo. En lo que a la libertad se refería, los fundadores del socialismo no

ocultaban sus intenciones. Consideraban la libertad de pensamiento como el mal radical de la sociedad del siglo XIX, y el primero de los planificadores modernos, Saint-Simon, incluso anunció que quienes no obedeciesen a sus proyectadas juntas de planificación serían «tratados como un rebaño».

Sólo bajo la influencia de las fuertes corrientes democráticas que precedieron a la revolución de 1848 inició el socialismo su alianza con las fuerzas de la libertad. Pero el nuevo «socialismo democrático» tuvo que vivir mucho tiempo bajo las sospechas levantadas por sus antecesores. Nadie vio más claramente que De Tocqueville que la democracia, como institución esencialmente individualista que es, estaba en conflicto irreconciliable con el socialismo.

> La democracia extiende la esfera de la libertad individual [decía en 1848]; el socialismo la restringe. La democracia atribuye todo valor posible al individuo; el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo sólo tienen en común una palabra: igualdad. Pero adviértase la diferencia: mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre[1].

Para aquietar todas las sospechas y uncir a su carro al más fuerte de todos los impulsos políticos, el anhelo de libertad, el socialismo comenzó a hacer un uso creciente de la promesa de una «nueva libertad». El advenimiento del socialismo iba a ser el salto desde el reino de la indigencia al reino de la libertad. Iba a traer la «libertad económica», sin la cual la ya ganada libertad política «no tenía valor». Sólo el socialismo era capaz de realizar la consumación de la vieja lucha por la libertad, en la cual el logro de la libertad política fue sólo el primer paso.

1. «Discours prononcé à l'assemblée constituante le 12 septembre 1848 sur la question du droit au travail.» (*Œuvres complètes d'Alexis de Tocqueville,* volumen IX, 1866, pág. 546.)

El sutil cambio de significado a que fue sometida la palabra libertad para que esta argumentación se recibiese con aplauso es importante. Para los grandes apóstoles de la libertad política la palabra había significado libertad frente a la coerción, libertad frente al poder arbitrario de otros hombres, supresión de los lazos que impiden al individuo toda elección y le obligan a obedecer las órdenes de un superior a quien está sujeto. La nueva libertad prometida era, en cambio, libertad frente a la indigencia, supresión del apremio de las circunstancias, que, inevitablemente, nos limitan a todos el campo de elección, aunque a algunos mucho más que a otros. Antes de que el hombre pudiera ser verdaderamente libre había que destruir «el despotismo de la indigencia física», había que abolir las «trabas del sistema económico».

En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder[2] o la riqueza. Y, sin embargo, aunque las promesas de esta nueva libertad se combinaron a menudo con irresponsables promesas de un gran incremento de la riqueza material en una sociedad socialista, no era de una victoria tan absoluta sobre la mezquindad de la naturaleza de donde se esperaba la libertad económica. A lo que se reducía realmente la promesa era a la desaparición de las grandes disparidades existentes en la capacidad de elección de las di-

2. La característica confusión de la libertad con el poder, con la que nos enfrentaremos una y otra vez en esta discusión, es un tema demasiado importante para poder examinarlo aquí por entero. Tan vieja como el propio socialismo, está tan estrechamente aliada con él que hace casi setenta años un universitario francés, discutiendo sus orígenes saint-simonianos, se vio llevado a decir que esta teoría de la libertad «est à elle seule tout le socialisme» (P. Janet: *Saint-Simon et le Saint-Simonisme*, 1878, pág. 26, nota). El defensor más explícito de esta confusión es, cosa significativa, el influyente filósofo del izquierdismo americano, John Dewey, para quien la «libertad es el poder efectivo para hacer cosas determinadas» de manera que «la demanda de libertad es la demanda de poder» («Liberty and Social Control», *The Social Frontier*, noviembre 1935, pág. 41).

ferentes personas. La aspiración a la nueva libertad era, pues, tan sólo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza. Pero el nuevo nombre dio a los socialistas otra palabra en común con los liberales, y aquéllos la explotaron a fondo. Y aunque la palabra fue usada en diferente sentido por los dos grupos, pocas gentes lo advirtieron, y todavía menos se preguntaron a sí mismas si las dos clases de libertad prometidas podían en realidad combinarse.

No puede dudarse que la promesa de una mayor libertad se ha convertido en una de las armas más eficaces de la propaganda socialista, y que la creencia en que el socialismo traería la libertad es auténtica y sincera. Pero esto no haría más que agrandar la tragedia si se probase que lo que se nos prometió como el Camino de la Libertad sería de hecho la Vía de la Esclavitud. Indiscutiblemente, la promesa de una mayor libertad es responsable de haber atraído más y más liberales al camino socialista, de cegarlos para el conflicto de principios que existe entre el socialismo y el liberalismo, y de permitir que los socialistas usurpen a menudo el nombre propio del viejo partido de la libertad. El socialismo fue abrazado por la mayor parte de los intelectuales como el heredero presunto de la tradición liberal. No es, pues, de extrañar que para ellos resultase inconcebible la idea de un socialismo conducente a lo opuesto de la libertad.

En los últimos años, sin embargo, los viejos temores acerca de las imprevistas consecuencias del socialismo se han declarado enérgicamente, una vez más, desde los lugares más insospechados. Observador tras observador, a pesar de las opuestas intenciones con que se acercaban a su tema, se han visto impresionados por la extraordinaria semejanza, en muchos aspectos, entre las condiciones del «fascismo» y el «comunismo». Mientras los «progresistas», en Inglaterra y en los demás países, se forjaban todavía la ilusión de que co-

munismo y fascismo representaban los polos opuestos, eran más y más las personas que comenzaban a preguntarse si estas nuevas tiranías no proceden de las mismas tendencias. Incluso comunistas han tenido que vacilar un poco ante testimonios tales como el de Mr. Max Eastman, viejo amigo de Lenin, quien se vio obligado a admitir que, «en vez de ser mejor, el estalinismo es peor que el fascismo, más cruel, bárbaro, injusto, inmoral y antidemocrático, incapaz de redención por una esperanza o un escrúpulo», y que es «mejor describirlo como superfascista»; y cuando vemos que el mismo autor reconoce que «el estalinismo *es* socialismo, en el sentido de ser el acompañamiento político inevitable, aunque imprevisto, de la nacionalización y la colectivización que ha adoptado como parte de su plan para erigir una sociedad sin clases» [3], su conclusión alcanza claramente un mayor significado.

El caso de Mr. Eastman es quizá el más notable; pero, sin embargo, no es en modo alguno el primero o el único observador simpatizante del experimento ruso que llega a conclusiones semejantes. Unos años antes, Mr. W. H. Chamberlin, que durante doce años como corresponsal norteamericano en Rusia ha visto frustrados todos sus ideales, resume las conclusiones de sus estudios sobre aquel país y sobre Alemania e Italia afirmando que «el socialismo ha demostrado ser ciertamente, por lo menos en sus comienzos, el camino NO de la libertad, sino de la dictadura y las contradictaduras, de la guerra civil de la más feroz especie. El socialismo logrado y mantenido por medios democráticos parece definitivamente pertenecer al mundo de las utopías» [4]. De modo análogo, un escritor inglés, Mr. F. A. Voigt, tras muchos años de íntima observación de los acontecimientos en Europa como corresponsal extranjero, concluye que «el

3. Max Eastman, *Stalin's Russia and the Crisis of Socialism*, 1940, pág. 82.
4. W. H. Chamberlin, *A False Utopia*, 1937, págs. 202-203.

marxismo ha llevado al fascismo y al nacionalsocialismo, porque, en todo lo esencial, es fascismo y nacionalsocialismo»[5]. Y el Dr. Walter Lippmann ha llegado al convencimiento de que

la generación a que pertenecemos está aprendiendo por experiencia lo que sucede cuando los hombres retroceden de la libertad a una organización coercitiva de sus asuntos. Aunque se prometan a sí mismos una vida más abundante, en la práctica tienen que renunciar a ello; a medida que aumenta la dirección organizada, la variedad de los fines tiene que dar paso a la uniformidad. Es la némesis de la sociedad planificada y del principio autoritario en los negocios humanos[6].

Muchas afirmaciones semejantes de personas en situación de juzgar podrían seleccionarse de las publicaciones de los últimos años, particularmente de aquellos hombres que, como ciudadanos de los países ahora totalitarios, han vivido la transformación y se han visto forzados por su experiencia a revisar muchas de sus creencias más queridas. Citaremos como un ejemplo más a un escritor alemán, que llega a la misma conclusión, quizá con más exactitud que los anteriormente citados.

El completo colapso de la creencia en que son asequibles la libertad y la igualdad a través del marxismo [escribe Mr. Peter Drucker[7]], ha forzado a Rusia a recorrer el mismo camino hacia una sociedad no económica, puramente negativa, totalitaria, de esclavitud y desigualdad, que Alemania ha seguido. No es que comunismo y fascismo sean lo mismo en esencia. El fascismo es el estadio que se alcanza después que el comunismo ha demostrado ser una ilusión, y ha demostrado no ser más que una ilusión, tanto en la Rusia estalinista como en la Alemania anterior a Hitler.

5. F. A. Voigt, *Unto Cæsar*, 1939, pág. 95.
6. *Atlantic Monthly*, noviembre 1936, pág. 552.
7. *The End of Economic Man*, 1939, pág. 230.

No menos significativa es la historia intelectual de muchos de los dirigentes nazis y fascistas. Todo el que ha observado el desarrollo de estos movimientos en Italia[8] o Alemania se ha extrañado ante el número de dirigentes, de Mussolini para abajo (y sin excluir a Laval y a Quisling), que empezaron como socialistas y acabaron como fascistas o nazis. Y lo que es cierto de los dirigentes es todavía más verdad de las filas del movimiento. La relativa facilidad con que un joven comunista puede convertirse en un nazi, o viceversa, se conocía muy bien en Alemania, y mejor que nadie lo sabían los propagandistas de ambos partidos. Muchos profesores de universidad británicos han visto en la década de 1930 retornar del continente a estudiantes ingleses y americanos que no sabían si eran comunistas o nazis, pero estaban seguros de odiar la civilización liberal occidental.

Es verdad, naturalmente, que en Alemania antes de 1933, y en Italia antes de 1922, los comunistas y los nazis o fascistas chocaban más frecuentemente entre sí que con otros partidos. Competían los dos por el favor del mismo tipo de mentalidad y reservaban el uno para el otro el odio del herético. Pero su actuación demostró cuán estrechamente se emparentaban. Para ambos, el enemigo real, el hombre con quien nada tenían en común y a quien no había esperanza de convencer, era el liberal del viejo tipo. Mientras para el nazi el comunista, y para el comunista el nazi, y para ambos el socialista, eran reclutas en potencia, hechos de la buena madera aunque obedeciesen a falsos profetas, ambos sabían que no cabría compromiso entre ellos y quienes realmente creen en la libertad individual.

Para que no puedan dudarlo las gentes engañadas por la propaganda oficial de ambos lados, permítaseme citar una

8. Una instructiva exposición de la historia intelectual de muchos dirigentes fascistas se encontrará en R. Michels (él mismo, un fascista ex marxista), *Sozialismus und Faszismus*, Múnich, 1925, vol. II, págs. 264-266 y 311-312.

opinión más, de una autoridad que no debe ser sospechosa. En un artículo bajo el significativo título de «El redescubrimiento del liberalismo», el profesor Eduard Heimann, uno de los dirigentes del socialismo religioso germano, escribe:

El hitlerismo se proclama a sí mismo como, a la vez, la verdadera democracia y el verdadero socialismo, y la terrible verdad es que hay un grano de certeza en estas pretensiones; un grano infinitesimal, ciertamente, pero suficiente de todos modos para dar base a tan fantásticas tergiversaciones. El hitlerismo llega hasta a reclamar el papel de protector de la Cristiandad, y la verdad terrible es que incluso este gran contrasentido puede hacer alguna impresión. Pero un hecho surge con perfecta claridad de toda esta niebla: Hitler jamás ha pretendido representar al verdadero liberalismo. El liberalismo tiene, pues, el mérito de ser la doctrina más odiada por Hitler[9].

Debe añadirse que si este odio tuvo pocas ocasiones de manifestarse en la práctica, la causa fue que cuando Hitler llegó al poder, el liberalismo había muerto virtualmente en Alemania. Y fue el socialismo quien lo mató.

Si para muchos que han observado de cerca el tránsito del socialismo al fascismo la conexión entre ambos sistemas se ha hecho cada vez más evidente, la mayoría del pueblo británico cree todavía que el socialismo y la libertad pueden combinarse. No puede dudarse que la mayoría de los socialistas creen aquí todavía profundamente en el ideal liberal de libertad, y retrocederían si llegaran a convencerse de que la realización de su programa significaría la destrucción de

9. *Social Research* (Nueva York), vol. VIII, n.º 4, noviembre 1941. Conviene notar a este respecto que, cualesquiera que fuesen sus motivos, Hitler consideró conveniente declarar en uno de sus discursos públicos, en febrero de 1941 sin ir más lejos, que "fundamentalmente nacionalsocialismo y marxismo son la misma cosa". (Cf. *The Bulletin of International News* publicado por el Royal Institute of International Affairs, vol. XVIII, número 5, pág. 269.)

la libertad. Tan escasamente se ha visto el problema, tan fácilmente conviven todavía los ideales más irreconciliables, que aún podemos oír discutidas en serio tales contradicciones en los términos como «socialismo individualista». Si ésta es la mentalidad que nos arrastra hacia un nuevo mundo, nada puede ser más urgente que un serio examen del significado real de la evolución acontecido en otro lugar. Aunque nuestras conclusiones no harán más que confirmar los temores que otros han expresado ya, las razones por las que esta evolución no puede considerarse accidental no aparecerán sin un examen algo profundo de los principales aspectos de esta transformación de la vida social. En tanto la conexión no se haya revelado en todos sus aspectos, pocos serán los que crean que el socialismo democrático, la gran utopía de las últimas generaciones, no es sólo inasequible, sino que el empeño de alcanzarlo produce algo tan sumamente distinto que pocos de sus partidarios estarían dispuestos a aceptar las consecuencias.

3. Individualismo y colectivismo

Los socialistas creen en dos cosas que son absolutamente diferentes y hasta quizá contradictorias: libertad y organización.

ELIE HALÉVY

Para poder progresar en nuestro principal problema es menester remontar antes un obstáculo. Una confusión ha de aclararse, muy responsable del camino por el que somos arrastrados hacia cosas que nadie desea.

Esta confusión concierne nada menos que al propio concepto de socialismo. Puede éste tan sólo significar, y a menudo se usa para describir, los ideales de justicia social, mayor igualdad y seguridad, que son los fines últimos del socialismo. Pero significa también el método particular por el que la mayoría de los socialistas espera alcanzar estos fines, y que muchas personas idóneas consideran como el único método por el que pueden plena y prontamente lograrse. En este sentido, socialismo significa abolición de la empresa privada y de la propiedad privada de los medios de producción y creación de un sistema de «economía planificada», en el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es reemplazado por un organismo central de planificación.

Hay muchas gentes que se llaman a sí mismas socialistas aunque sólo se preocupan de lo primero, que creen fervientemente en estos fines últimos del socialismo, pero que ni comprenden cómo pueden alcanzarse ni les preocupa, y

sólo están ciertos de que tienen que alcanzarse cualquiera que sea el precio. Mas para casi todos los que consideran el socialismo no sólo una esperanza, sino un objeto de la práctica política, los métodos característicos del socialismo moderno son tan esenciales como los fines mismos. Muchas personas, por otra parte, que valoran los fines últimos del socialismo no menos que los socialistas, se niegan a apoyar al socialismo a causa de los peligros que ven para otros valores en los métodos propugnados por los socialistas. La discusión sobre el socialismo se ha convertido así principalmente en una discusión sobre los medios y no sobre los fines; aunque vaya envuelta también la cuestión de saber si los diferentes fines del socialismo pueden alcanzarse simultáneamente.

Esto bastaría para crear confusión. Mas la confusión ha aumentado todavía por la práctica común de negar que quienes rechazan los medios aprecien los fines. Pero no es esto todo. Se complica más la situación por el hecho de valer los mismos medios, la «planificación económica», que es el principal instrumento de la reforma socialista, para otras muchas finalidades. Tenemos que centralizar la dirección de la actividad económica si deseamos conformar la distribución de la renta a las ideas actuales sobre la justicia social. Propugnan la «planificación», por consiguiente, todos aquellos que demandan que la «producción para el uso» sustituya a la producción para el beneficio. Pero esta planificación no es menos indispensable si la distribución de la renta ha de regularse de una manera que tengamos por opuesta a la justa. Si deseamos que la mayor parte de las cosas buenas de este mundo vaya a manos de alguna élite racial, el hombre nórdico o los miembros de un partido o una aristocracia, los métodos que habríamos de emplear son los mismos que asegurarían una distribución igualitaria.

Puede, quizá, parecer abusivo usar la palabra socialismo para describir sus métodos y no sus fines, utilizar para un

método particular un término que para muchas gentes representa un ideal último. Es preferible, probablemente, denominar colectivismo a los métodos que pueden usarse para una gran variedad de fines, y considerar al socialismo como una especie de este género. Con todo, aunque para la mayor parte de los socialistas sólo una especie del colectivismo representará el verdadero socialismo, debe tenerse siempre presente que éste es una especie de aquél, y que, por consiguiente, todo lo que es cierto del colectivismo como tal, debe aplicarse también al socialismo. Casi todas las cuestiones que se discuten entre socialistas y liberales atañen a los métodos comunes a todas las formas del colectivismo y no a los fines particulares a los que desean aplicarlos los socialistas; y todos los resultados que nos ocuparán en este libro proceden de los métodos del colectivismo con independencia de los fines a los que se aplican. Tampoco debe olvidarse que el socialismo no es sólo la especie más importante, con mucho, del colectivismo o la «planificación», sino lo que ha convencido a las gentes de mentalidad liberal para someterse otra vez a aquella reglamentación de la vida económica que habían derribado porque, en palabras de Adam Smith, ponía a los gobiernos en tal posición que, «para sostenerse, se veían obligados a ser opresores y tiránicos»[1].

Las dificultades ocasionadas por las ambigüedades de los términos políticos corrientes no se eliminan, sin embargo, si utilizamos el término colectivismo de modo que incluya todos los tipos de «economía planificada», cualquiera que sea la finalidad de la planificación. El significado de este término gana cierta precisión si hacemos constar que para nosotros designa aquella clase de planificación que es necesaria para realizar cualquier ideal distributivo determinado. Pero como

1. Citado por Dugald Stewart en *Memoir of Adam Smith,* según unas notas escritas por Smith en 1755.

la idea de la planificación económica centralizada debe en buena parte su atractivo a la gran vaguedad de su significado, es esencial que nos pongamos de acuerdo respecto a su sentido preciso antes de discutir sus consecuencias.

La «planificación» debe en gran parte su popularidad al hecho de desear todo el mundo, por supuesto, que tratemos nuestros problemas comunes tan racionalmente como sea posible y que al hacerlo así obremos con toda la previsión que se nos alcance. En este sentido, todo el que no sea un fatalista completo es un partidario de la planificación; todo acto político es (o debe ser) un acto de planeamiento, y, en consecuencia, sólo puede haber diferencias entre buena y mala, entre prudente y previsora, y loca y miope planificación. El economista, cuya entera tarea consiste en estudiar cómo proyectan efectivamente sus asuntos los hombres y cómo podrían hacerlo, es la última persona que puede oponerse a la planificación en este sentido general. Pero no es éste el sentido en que nuestros entusiastas de una sociedad planificada emplean ahora el término, ni tampoco es éste el único sentido en que es preciso planificar si deseamos distribuir la renta o la riqueza con arreglo a algún criterio particular. De acuerdo con los modernos planificadores, y para sus fines, no basta llamar así a la más permanente y racional estructura, dentro de la cual las diferentes personas conducirían las diversas actividades de acuerdo con sus planes individuales. Este plan liberal no es, según ellos, un plan; y verdaderamente no es un plan designado para satisfacer puntos de vista particulares acerca de qué es lo que debe tener cada uno. Lo que nuestros planificadores demandan es la dirección centralizada de toda la actividad económica según un plan único que determine la «dirección explícita» de los recursos de la sociedad para servir a particulares fines por una vía determinada.

La disputa entre los planificadores modernos y sus oponentes *no* es, por consiguiente, una disputa acerca de si debemos guiarnos por la inteligencia para escoger entre las di-

versas organizaciones posibles de la sociedad; no es una disputa sobre si debemos actuar con previsión y raciocinio al planear nuestros negocios comunes. Es una disputa acerca de cuál sea la mejor manera de hacerlo. La cuestión está en si es mejor para este propósito que el portador del poder coercitivo se limite en general a crear las condiciones bajo las cuales el conocimiento y la iniciativa de los individuos encuentren el mejor campo para que *ellos* puedan componer de la manera más afortunada sus planes, o si una utilización racional de nuestros recursos requiere la dirección y organización *centralizada* de todas nuestras actividades, de acuerdo con algún «modelo» construido expresamente. Los socialistas de todos los partidos se han apropiado el término *planificación* para la de este último tipo, y hoy se acepta, generalmente, en este sentido. Pero aunque con esto se intenta sugerir que es el solo camino racional para tratar nuestros asuntos, lo cierto es que no se prueba. Es el punto en que planificadores y liberales mantienen su desacuerdo.

Es importante no confundir la oposición contra la planificación de esta clase con una dogmática actitud de *laissez faire*. La argumentación liberal defiende el mejor uso posible de las fuerzas de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos humanos, pero no es una argumentación en favor de dejar las cosas tal como están. Se basa en la convicción de que allí donde pueda crearse una competencia efectiva, ésta es la mejor guía para conducir los esfuerzos individuales. No niega, antes bien, afirma que, si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere una estructura legal cuidadosamente pensada, y que ni las reglas jurídicas del pasado ni las actuales están libres de graves defectos. Tampoco niega que donde es imposible crear las condiciones necesarias para hacer eficaz la competencia tenemos que acudir a otros métodos en la guía de la actividad económica. El liberalismo económico se opone, pues, a que la competencia

sea suplantada por métodos inferiores para coordinar los esfuerzos individuales. Y considera superior la competencia no sólo porque en la mayor parte de las circunstancias es el método más eficiente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los principales argumentos en favor de la competencia estriba en que ésta evita la necesidad de un «control social explícito» y da a los individuos una oportunidad para decidir si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo.

El uso eficaz de la competencia como principio de organización social excluye ciertos tipos de interferencia coercitiva en la vida económica, pero admite otros que a veces pueden ayudar muy considerablemente a su operación e incluso requiere ciertas formas de intervención oficial. Pero hay buenas razones para que las exigencias negativas, los puntos donde la coerción no debe usarse, hayan sido particularmente señalados. Es necesario, en primer lugar, que las partes presentes en el mercado tengan libertad para vender y comprar a cualquier precio al cual puedan contratar con alguien, y que todos sean libres para producir, vender y comprar cualquier cosa que se pueda producir o vender. Y es esencial que el acceso a las diferentes actividades esté abierto a todos en los mismos términos y que la ley no tolere ningún intento de individuos o de grupos para restringir este acceso mediante poderes abiertos o disfrazados. Cualquier intento de intervenir los precios o las cantidades de unas mercancías en particular priva a la competencia de su facultad para realizar una efectiva coordinación de los esfuerzos individuales, porque las variaciones de los precios dejan de registrar todas las alteraciones importantes de las circunstancias y no suministran ya una guía eficaz para la acción del individuo.

Esto no es necesariamente cierto, sin embargo, de las medidas simplemente restrictivas de los métodos de producción admitidos, en tanto que estas restricciones afecten igualmente a todos los productores potenciales y no se utilicen como una forma indirecta de intervenir los precios y las cantidades. Aunque todas estas intervenciones sobre los métodos o la producción imponen sobrecostes, es decir, obligan a emplear más recursos para obtener una determinada producción, pueden merecer la pena. Prohibir el uso de ciertas sustancias venenosas o exigir especiales precauciones para su uso, limitar las horas de trabajo o imponer ciertas disposiciones sanitarias es plenamente compatible con el mantenimiento de la competencia. La única cuestión está en saber si en cada ocasión particular las ventajas logradas son mayores que los costes sociales que imponen. Tampoco son incompatibles el mantenimiento de la competencia y un extenso sistema de servicios sociales, en tanto que la organización de estos servicios no se dirija a hacer inefectiva en campos extensos la competencia.

Es lamentable, aunque no difícil de explicar, que se haya prestado en el pasado mucha menos atención a las exigencias positivas para una actuación eficaz del sistema de la competencia que a estos puntos negativos. El funcionamiento de la competencia no sólo exige una adecuada organización de ciertas instituciones como el dinero, los mercados y los canales de información –algunas de las cuales nunca pueden ser provistas adecuadamente por la empresa privada–, sino que depende, sobre todo, de la existencia de un sistema legal apropiado, de un sistema legal dirigido, a la vez, a preservar la competencia y a lograr que ésta opere de la manera más beneficiosa posible. No es en modo alguno suficiente que la ley reconozca el principio de la propiedad privada y de la libertad de contrato; mucho depende de la definición precisa del derecho de propiedad, según se aplique a diferentes cosas. Se ha desatendido, por desgracia, el

estudio sistemático de las formas de las instituciones legales que permitirían actuar eficientemente al sistema de la competencia; y pueden aportarse fuertes argumentos para demostrar que las serias deficiencias en este campo, especialmente con respecto a las leyes sobre sociedades anónimas y patentes, no sólo han restado eficacia a la competencia, sino que incluso han llevado a su destrucción en muchas esferas.

Hay, por último, ámbitos donde, evidentemente, las disposiciones legales no pueden crear la principal condición en que descansa la utilidad del sistema de la competencia y de la propiedad privada: que consiste en que el propietario se beneficie de todos los servicios útiles rendidos por su propiedad y sufra todos los perjuicios que de su uso resulten a otros. Allí donde, por ejemplo, es imposible hacer que el disfrute de ciertos servicios dependa del pago de un precio, la competencia no producirá estos servicios; y el sistema de los precios resulta igualmente ineficaz cuando el daño causado a otros por ciertos usos de la propiedad no puede efectivamente cargarse al poseedor de ésta. En todos estos casos hay una diferencia entre las partidas que entran en el cálculo privado y las que afectan al bienestar social; y siempre que esta diferencia se hace considerable hay que encontrar un método, que no es el de la competencia, para ofrecer los servicios en cuestión. Así, ni la provisión de señales indicadoras en las carreteras, ni, en la mayor parte de las circunstancias, la de las propias carreteras, puede ser pagada por cada usuario individual. Ni tampoco ciertos efectos perjudiciales de la desforestación, o de algunos métodos de cultivo, o del humo y los ruidos de las fábricas pueden confinarse al poseedor de los bienes en cuestión o a quienes estén dispuestos a someterse al daño a cambio de una compensación concertada. En estos casos es preciso encontrar algo que sustituya a la regulación por el mecanismo de los precios. Pero el hecho de tener que recurrir a la regulación directa por la autoridad cuando no pueden crearse las condiciones para la opera-

ción adecuada de la competencia no prueba que deba suprimirse la competencia allí donde puede funcionar.

Crear las condiciones en que la competencia actuará con toda la eficacia posible, complementarla allí donde no pueda ser eficaz, suministrar los servicios que, según las palabras de Adam Smith, «aunque puedan ser ventajosos en el más alto grado para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podría compensar el gasto a un individuo o un pequeño número de ellos», son tareas que ofrecen un amplio e indiscutible ámbito para la actividad del Estado. En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Sólo el requisito más esencial para su buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso (incluida en éste la explotación de la ignorancia), proporciona un gran objetivo –nunca, sin embargo, plenamente realizado– para la actividad legisladora.

La tarea de crear una estructura adecuada para una operación beneficiosa de la competencia no había avanzado todavía mucho cuando los Estados la abandonaron a fin de suplantar la competencia por un principio diferente e irreconciliable. No se trataba ya de hacer operante a la competencia y complementarla, sino de desplazarla por entero. Es importante dejar bien sentado esto: el moderno movimiento en favor de la planificación es un movimiento contra la competencia como tal, una nueva bandera bajo la cual se han alistado todos los viejos enemigos de la competencia. Y aunque toda clase de intereses está intentando ahora restablecer bajo esta bandera los privilegios que la era liberal barrió, la propaganda socialista en pro de la planificación es la que ha dado nuevo crédito, entre las gentes de mentalidad liberal, a la posición contraria a la competencia y ha debili-

tado eficazmente la sana sospecha que todo intento de desmontar la competencia solía levantar[2]. Lo que en realidad une a los socialistas de la izquierda y la derecha es esta común hostilidad a la competencia y su común deseo de reemplazarla por una economía dirigida. Aunque los términos capitalismo y socialismo todavía se usan generalmente para describir las formas pasada y futura de la sociedad, encubren más que ilustran la naturaleza de la transición que estamos viviendo.

Mas aunque todos los cambios que observamos llevan hacia una vasta dirección central de la actividad económica, el combate universal contra la competencia promete producir en primer lugar algo incluso peor en muchos aspectos, una situación que no puede satisfacer ni a los planificadores ni a los liberales: una especie de organización sindicalista o «corporativa» de la industria, en la cual se ha suprimido más o menos la competencia, pero la planificación se ha dejado en manos de los monopolios independientes que son las diversas industrias. Éste es el primero, e inevitable, resultado de una situación en que las gentes se ven unidas por su hostili-

2. Es cierto que, recientemente, algunos socialistas universitarios, bajo el acicate de la crítica, y animados por el mismo temor a la extinción de la libertad en una sociedad de planificación centralizada, han imaginado una nueva clase de «socialismo competitivo», que esperan evitaría las dificultades y peligros de la planificación central y combinaría la abolición de la propiedad privada con el pleno mantenimiento de la libertad individual. Aunque en las revistas científicas han aparecido algunas discusiones sobre esta nueva clase de socialismo, tiene pocas probabilidades de atraer a los políticos prácticos. Pero si alguna vez lo lograse, no habría dificultad para demostrar (como el autor lo ha intentado en otro lugar: véase *Economica*, 1940) que tales planes descansan en una ilusión y sufren una contradicción interna. Es imposible intervenir todos los recursos productivos sin decidir asimismo por quién y para quién serán utilizados. Aunque bajo este supuesto socialismo competitivo, la planificación por la autoridad central tomaría formas algo más indirectas, sus efectos no serían fundamentalmente diferentes y el elemento competitivo apenas pasaría de una ficción.

dad contra la competencia, pero en la que apenas si concuerdan en algo más. Al destruir la competencia en una industria tras otra, esta política pone al consumidor a merced de la acción monopolista conjunta de los capitalistas y los trabajadores de las industrias mejor organizadas. Y, sin embargo, aunque esta situación existe ya desde hace algún tiempo en extensos sectores, y aunque mucha de la turbia agitación (y casi toda la movida por intereses) en favor de la planificación tiene esta misma finalidad, no es una situación que pueda probablemente persistir o justificarse racionalmente. Esta planificación independiente a cargo de los monopolios industriales produciría, de hecho, efectos opuestos a los que proclaman los argumentos en favor de la planificación. Una vez alcanzada tal etapa, la única alternativa para volver a la competencia es el control oficial de los monopolios, una intervención que, si ha de ser efectiva, tiene que hacerse progresivamente más completa y minuciosa. A esta etapa nos aproximamos rápidamente. Cuando, poco antes de la guerra, un semanario observó que, «según muchos signos, los dirigentes británicos se acostumbran cada vez más a pensar en un desarrollo nacional a través de monopolios controlados»[3], enunciaba probablemente un acertado juicio sobre la situación de entonces. Después, la guerra ha acelerado mucho este proceso, y sus graves defectos y peligros se harán cada vez más evidentes con el transcurso del tiempo.

La idea de una centralización completa de la dirección de la actividad económica espanta todavía a mucha gente, no sólo por la tremenda dificultad de la tarea, sino aún más por el horror que inspira el pensamiento de que todo sea dirigido desde un centro único. Si a pesar de ello nos movemos rápidamente hacia tal estado, es principalmente porque la mayoría aún cree posible encontrar una «vía intermedia» entre la competencia «atomística» y la dirección centralizada. Nada,

3. *The Spectator*, 3 de marzo de 1939, pág. 337.

por lo demás, parece a primera vista más plausible, o tiene más probabilidades de atraer a la gente razonable, que la idea de que nuestro objetivo no debe ser ni la descentralización extrema de la libre competencia ni la centralización completa de un plan único, sino alguna prudente mezcla de los dos métodos. Pero el simple sentido común se revela como un engañoso guía en este campo. Aunque la competencia puede soportar cierta mezcla de intervención, no puede combinarse con la planificación en cualquier grado que deseemos si ha de seguir operando como una guía eficaz de la actividad productiva. Tampoco es la «planificación» una medicina que, tomada en dosis pequeñas, pueda producir los efectos que cabe esperar de su aplicación plena. Competencia y dirección centralizada resultan instrumentos pobres e ineficientes si son incompletos; son principios alternativos para la resolución del mismo problema, y una mezcla de los dos significa que ninguno operará verdaderamente, y el resultado será peor que si se hubiese confiado sólo en uno de ambos sistemas. O, para expresarlo de otro modo, la planificación y la competencia sólo pueden combinarse para planificar la competencia, pero no para planificar contra la competencia.

Es de la mayor importancia para la comprensión de este libro que el lector no olvide que toda nuestra crítica ataca solamente a la planificación contra la competencia; a la planificación encaminada a sustituir a la competencia. Ello es de la mayor importancia, dado que no podemos, dentro del alcance de este libro, entrar a discutir la indispensable planificación que la competencia requiere para hacerse todo lo efectiva y beneficiosa que puede llegar a ser. Pero como, en el uso corriente, «planificación» se ha convertido casi en sinónimo de aquella primera clase de planificación, será a veces inevitable, en gracia a la brevedad, referirse a ella simplemente como planificación, aunque esto signifique entregar a nuestros contrincantes una muy buena palabra merecedora de mejor suerte.

4. La «inevitabilidad» de la planificación

Fuimos los primeros en afirmar que conforme la civilización asume formas más complejas, más tiene que restringirse la libertad del individuo.

B. MUSSOLINI

Es un hecho revelador lo escasos que son los planificadores que se contentan con decir que la planificación centralizada es deseable. La mayor parte afirma que ya no podemos elegir y que las circunstancias nos llevan, fuera de nuestra voluntad, a sustituir la competencia por la planificación. Se cultiva deliberadamente el mito de que nos vemos embarcados en la nueva dirección, no por nuestra propia voluntad, sino porque los cambios tecnológicos, a los que no podemos dar vuelta ni querríamos evitar, han eliminado espontáneamente la competencia. Rara vez se desarrolla con alguna amplitud este argumento; es una de esas afirmaciones que un escritor toma de otro hasta que, por simple iteración, llega a aceptarse como un hecho establecido. Y, sin embargo, está desprovisto de fundamento. La tendencia hacia el monopolio y la planificación no es el resultado de unos «hechos objetivos» fuera de nuestro dominio, sino el producto de opiniones alimentadas y propagadas durante medio siglo hasta que han terminado por dominar toda nuestra política.

De los diversos argumentos empleados para demostrar la inevitabilidad de la planificación, el que con más frecuencia se oye es que los cambios tecnológicos han hecho imposible

la competencia en un número constantemente creciente de sectores, y que la única elección que nos queda es: o que los monopolios privados dominen la producción, o que la dirija el Estado. Esta creencia deriva principalmente de la doctrina marxista sobre la «concentración de la industria», aunque, como tantas ideas marxistas, se la encuentra ahora en muchos círculos que la han recibido de tercera o cuarta mano y no saben de dónde procede.

El hecho histórico del progresivo crecimiento del monopolio durante los últimos cincuenta años y la creciente restricción del campo en que juega la competencia no puede, evidentemente, discutirse; pero, a menudo, se exagera mucho la extensión de este fenómeno[1]. Lo importante es saber si este proceso es una consecuencia necesaria del progreso de la tecnología, o si se trata simplemente del resultado de la política seguida en casi todos los países. Veremos ahora que la historia efectiva de esta evolución sugiere con fuerza lo último. Pero antes debemos considerar hasta qué punto el desarrollo tecnológico moderno es de tal naturaleza que haga inevitable en muchos campos el crecimiento de los monopolios.

La causa tecnológica alegada para el crecimiento del monopolio es la superioridad de la gran empresa sobre la pequeña debido a la mayor eficiencia de los métodos modernos de producción en masa. Los métodos modernos, se asegura, han creado, en la mayoría de las industrias, condiciones por las cuales la producción de la gran empresa puede aumentarse con costes unitarios decrecientes; y el resultado es que las grandes empresas están superando y expulsando de todas partes a las pequeñas; este proceso seguirá hasta que en cada industria sólo quede una, o, a lo más, unas cuantas empresas gigantes. Este argumento destaca un efecto que a veces acompaña al progreso tecnológico, pero menosprecia otros que ac-

1. Para una discusión más completa de estos problemas véase el ensayo del profesor L. Robbins sobre «La inevitabilidad del monopolio», en *The Economic Basis of Class Conflict*, 1939, págs. 45-80.

túan en la dirección opuesta, y recibe poco apoyo de un estudio serio de los hechos. No podemos investigar aquí con detalle esta cuestión, y tenemos que contentarnos con aceptar los mejores testimonios disponibles. El más amplio estudio de estos hechos emprendido recientemente es el del *Temporary National Economic Committee* americano sobre la «Concentración del poder económico». El dictamen final de esta Comisión (que no puede, ciertamente, ser acusada de desmedidas preferencias liberales) concluye que la opinión según la cual la mayor eficiencia de la producción en gran escala es causa de la desaparición de la competencia, «encuentra insuficiente apoyo en todos los testimonios disponibles en la actualidad»[2], y la detallada monografía que sobre este problema preparó la Comisión resume la respuesta de esta manera:

La superior eficiencia de las grandes instalaciones no ha sido demostrada; en muchos campos, no han podido ponerse de manifiesto las ventajas que se supone han destruido la competencia. Ni tampoco exigen, inevitablemente, el monopolio las economías de escala donde éstas existen... La dimensión o las dimensiones de eficiencia óptima pueden alcanzarse mucho antes de quedar sometida a tal control la mayor parte de una oferta. La conclusión de que la ventaja de la producción en gran escala tiene, inevitablemente, que conducir a la abolición de la competencia, no puede aceptarse. Téngase, además, presente que el monopolio es, con frecuencia, el producto de factores que no son el menor coste de una mayor dimensión. Se llega a él mediante confabulaciones, y lo fomenta la política oficial. Si esas colusiones se invalidan y esta política se invierte, las condiciones de la competencia pueden ser restauradas[3].

2. *Final Report and Recommendations of the Temporary National Economic Committee*, 77th Congress, 1st Session, Senate Document n.º 35, 1941, pág. 89.
3. C. Wilcox, *Competition and Monopoly in American Industry*, Temporary National Economic Committee, Monograph n.º 21, 1940, pág. 314.

Una investigación de las condiciones en Gran Bretaña conduciría a resultados muy semejantes. Todo el que ha observado cómo los aspirantes a monopolistas solicitan regularmente, y obtienen muchas veces, la asistencia de los poderes del Estado para hacer efectivo su dominio, apenas dudará que no hay nada de inevitable en este proceso.

Confirma enérgicamente esta conclusión el orden histórico en que se ha manifestado en diferentes países el ocaso de la competencia y el crecimiento del monopolio. Si hubieran sido el resultado del desarrollo tecnológico o un necesario producto de la evolución del «capitalismo», podríamos esperar que apareciesen, primero, en los países de sistema económico más avanzado. De hecho, aparecieron en primer lugar durante el último tercio del siglo XIX en los que eran entonces países industriales comparativamente jóvenes: Estados Unidos y Alemania. En esta última, especialmente, que llegó a considerarse como el país modelo de la evolución necesaria del capitalismo, el crecimiento de los cárteles y sindicatos ha sido sistemáticamente muy alimentado desde 1878 por una deliberada política. No sólo el instrumento de la protección, sino incitaciones directas y, al final, la coacción, emplearon los gobiernos para favorecer la creación de monopolios, con miras a la regulación de los precios y las ventas. Fue allí donde, con la ayuda del Estado, el primer gran experimento de «planificación científica» y «organización explícita de la industria» condujo a la creación de monopolios gigantescos que se tuvieron por desarrollos inevitables cincuenta años antes de hacerse lo mismo en Gran Bretaña. Se debe, en gran parte, a la influencia de los teóricos alemanes del socialismo, especialmente Sombart, generalizando la experiencia de su país, la extensión con que se aceptó el inevitable desembocar del sistema de competencia en el «capitalismo monopolista». Que en los Estados Unidos una política altamente proteccionista haya permitido un proceso en cierto modo semejante, pareció confirmar esta

generalización. Como quiera que sea, la evolución de Alemania, más que la de Estados Unidos, llegó a ser considerada como representativa de una tendencia universal; y se convirtió en un lugar común hablar de una «Alemania donde todas las fuerzas políticas y sociales de la civilización moderna habían alcanzado su forma más avanzada»[4], por citar un reciente ensayo político muy leído.

Qué poco había de inevitable en todo esto, y hasta qué punto es el resultado de una política preconcebida, se pone de manifiesto cuando consideramos la situación británica hasta 1931 y la evolución a partir de aquel año, cuando Gran Bretaña se embarcó también en una política de proteccionismo general. Si se exceptúan unas cuantas industrias, que habían logrado antes la protección, hace no más que una docena de años la industria británica era, en su conjunto, tan competitiva, quizá, como en cualquier otro tiempo de su historia. Y aunque en la década de 1920 sufrió agudamente las consecuencias de las incompatibles medidas tomadas respecto a los salarios y el dinero, los años hasta 1929 no resultan desfavorables, comparados con los de la década de 1930, si se atiende a la ocupación y a la actividad general. Sólo a partir de la transición al proteccionismo y el cambio general en la política económica británica que le acompañó, ha avanzado con una velocidad sorprendente el crecimiento de los monopolios, que ha transformado la industria británica en una medida que, sin embargo, el público apenas ha advertido. Argumentar que este proceso tiene algo que ver con el progreso tecnológico durante este período, que las necesidades tecnológicas que operaron en Alemania en las décadas de 1880 y 1890 se hicieron sentir en Inglaterra en la de 1930, no es mucho menos absurdo que el pretender, como está implícito en la frase de Mussolini (citada a la cabeza de este capítulo), ¡que Italia tuvo que abolir la libertad individual antes que

4. R. Niebuhr, *Moral Man and Inmoral Society*, 1932.

ningún otro pueblo europeo porque su civilización había largamente sobrepasado a la de los demás países!

En lo que a Inglaterra se refiere, la tesis según la cual el cambio en la opinión y la política no hace sino seguir a un cambio inexorable en los hechos, puede lograr cierta apariencia de verdad precisamente por haber seguido a distancia Inglaterra la evolución intelectual de los demás. Pudo así argüirse que la organización monopolística de la industria creció, a pesar del hecho de mostrarse todavía la opinión pública en favor de la competencia, pero que los acontecimientos exteriores frustraron esta inclinación. La verdadera relación entre teoría y práctica se aclara, sin embargo, en cuanto contemplamos el prototipo de esta evolución: Alemania. No puede dudarse que *allí* la supresión de la competencia fue cuestión de una política preconcebida, que se emprendió en servicio del ideal que ahora llamamos planificación. En el progresivo avance hacia una sociedad completamente planificada, los alemanes, y todos los pueblos que están imitando su ejemplo, no hacen más que seguir la ruta que unos pensadores del siglo XIX, en su mayoría alemanes, prepararon con tal fin.

La historia intelectual de los últimos sesenta u ochenta años es ciertamente ilustración perfecta de una verdad: que en la evolución social nada es inevitable, a no ser que resulte así por así creerlo.

Cuando se afirma que el progreso tecnológico moderno hace inevitable la planificación puede esto interpretarse de otra manera diferente. Puede significar que la complejidad de nuestra moderna civilización industrial crea nuevos problemas que no podemos intentar resolver con eficacia si no es mediante la planificación centralizada. En cierto modo esto es verdad, pero no en el amplio sentido que se pretende. Es, por ejemplo, un lugar común que muchos de los problemas creados por la ciudad moderna, como muchos otros

problemas ocasionados por la apretada contigüidad en el espacio, no pueden resolverse adecuadamente por la competencia. Pero no son estos problemas, ni tampoco los de los «servicios públicos» y otros semejantes, los que ocupan la mente de quienes invocan la complejidad de la civilización moderna como un argumento en pro de la planificación centralizada. Lo que, generalmente, sugieren es que la creciente dificultad para obtener una imagen coherente del proceso económico completo hace indispensable que un organismo central coordine las cosas si la vida social no ha de disolverse en el caos.

Este argumento supone desconocer completamente cómo opera la competencia. Lejos de ser propia para condiciones relativamente sencillas tan sólo, es la gran complejidad de la división del trabajo en las condiciones modernas lo que hace de la competencia el único método que permite efectuar adecuadamente aquella coordinación. No habría dificultad para establecer una intervención o planificación eficiente si las condiciones fueran tan sencillas que una sola persona u oficina pudiera atender eficazmente a todos los hechos importantes. Sólo cuando los factores que han de tenerse en cuenta llegan a ser tan numerosos que es imposible lograr una vista sinóptica de ellos, se hace imperativa la descentralización. Pero cuando la descentralización es necesaria, surge el problema de la coordinación; una coordinación que deje en libertad a cada organismo por separado para ajustar sus actividades a los hechos que él sólo puede conocer, y, sin embargo, realice un mutuo ajuste de los respectivos planes. Como la descentralización se ha hecho necesaria porque nadie puede contrapesar conscientemente todas las consideraciones que entran en las decisiones de tantos individuos, la coordinación no puede, evidentemente, efectuarse a través de una «intervención explícita», sino tan sólo con medidas que procuren a cada agente la información necesaria para que pueda ajustar con eficacia sus decisiones a las de los demás.

Y como jamás pueden conocerse plenamente todos los detalles de los cambios que afectan de modo constante a las condiciones de la demanda y la oferta de las diferentes mercancías, ni hay centro alguno que pueda recogerlos y difundirlos con rapidez bastante, lo que se precisa es algún instrumento registrador que automáticamente recoja todos los efectos relevantes de las acciones individuales, y cuyas indicaciones sean la resultante de todas estas decisiones individuales y, a la vez, su guía.

Esto es precisamente lo que el sistema de precios realiza en el régimen de competencia y lo que ningún otro sistema puede, ni siquiera como promesa, realizar. Permite a los empresarios, por la vigilancia del movimiento de un número relativamente pequeño de precios, como un mecánico vigila las manillas de unas cuantas esferas, ajustar sus actividades a las de sus compañeros. Lo importante aquí es que el sistema de precios sólo llenará su función si prevalece la competencia, es decir, si el productor individual tiene que adaptarse él mismo a los cambios de los precios y no puede dominarlos. Cuanto más complicado es el conjunto, más dependientes nos hacemos de esta división del conocimiento entre individuos, cuyos esfuerzos separados se coordinan por este mecanismo impersonal de transmisión de las informaciones importantes que conocemos por el nombre de sistema de precios.

No hay exageración en decir que si hubiéramos tenido que confiar en una planificación centralizada directa para el desarrollo de nuestro sistema industrial, jamás habría éste alcanzado el grado de diferenciación, complejidad y flexibilidad que logró. Comparado con esta solución del problema económico mediante la descentralización y la coordinación automática, el método más convincente de dirección centralizada es increíblemente tosco, primitivo y corto en su alcance. La extensión lograda por la división del trabajo, a la que se debe la civilización moderna, resultó del hecho de no ha-

ber sido necesario crearla conscientemente, sino que el hombre vino a dar con un método por el cual la división del trabajo pudo extenderse mucho más allá de los límites a los que la hubiera reducido la planificación. Por ende, todo posterior crecimiento de su complejidad, lejos de exigir una dirección centralizada, hace más importante que nunca el uso de una técnica que no dependa de un control explícito.

Existe, sin embargo, otra teoría que relaciona el crecimiento de los monopolios con el progreso tecnológico, y que emplea argumentos opuestos en su mayoría a los que acabamos de considerar; aunque a menudo no se formula con claridad, ha ejercido también considerable influencia. Afirma, no que la técnica moderna destruya la competencia, sino que, por el contrario, sería imposible utilizar muchas de las nuevas posibilidades tecnológicas, a menos de asegurarlas la protección contra la competencia, es decir, de conferirlas un monopolio. Este tipo de argumentación no es necesariamente falaz, como quizá sospechará el lector crítico; la respuesta obvia, a saber, que si una nueva técnica es realmente mejor para la satisfacción de nuestras necesidades debe ser capaz de mantenerse contra toda competencia, no abarca todos los casos a que se refiere esta argumentación. Sin duda, en muchas ocasiones se usa tan sólo como una forma especial de defensa de las partes interesadas. Pero más a menudo se basa, probablemente, sobre una confusión entre las excelencias técnicas desde un estrecho punto de vista de ingeniería y la conveniencia desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.

Queda, sin embargo, un grupo de casos en que el argumento tiene alguna fuerza. Es, al menos, concebible, por ejemplo, que la industria automovilística británica podría ofrecer un automóvil más barato y mejor que los usados en los Estados Unidos si a todos en Inglaterra se les obligara a utilizar el mismo tipo de automóvil; o que el uso de la elec-

tricidad para todos los fines pudiera resultar más barato que el carbón o el gas si a todos se les obligara a emplear solamente electricidad. En casos como éstos es, por lo menos, posible que pudiéramos estar todos mejor y prefiriésemos la nueva situación si cupiera elegir; pero nadie individualmente tiene la elección a su alcance, porque la alternativa es que tendríamos que usar todos el mismo automóvil barato (o usar todos solamente electricidad) o podríamos escoger entre las diversas cosas, pero pagando precios mucho más altos por cualquiera de ellas. No sé si esto es cierto en alguno de los casos citados; pero hay que admitir como posible que la estandarización obligatoria o la prohibición de sobrepasar un cierto número de variedades pudiese, en algunos campos, aumentar la abundancia más que lo suficiente para compensar las restricciones en la elección del consumidor. Cabe incluso concebir que un día pueda lograrse un nuevo invento, cuya adopción apareciese indiscutiblemente beneficiosa, pero que sólo podría utilizarse si se hiciese que muchos o todos estuvieran dispuestos a aprovecharlo a la vez.

Sea mayor o menor la importancia de estos casos, lo cierto es que no puede pretenderse de ellos legítimamente que el progreso técnico haga inevitable la dirección centralizada. Únicamente obligarían a elegir entre obtener mediante la coacción una ventaja particular o no obtenerla; o, en la mayoría de los casos, obtenerla un poco más tarde, cuando un posterior avance técnico haya vencido las dificultades particulares. Cierto es que en estas situaciones tendríamos que sacrificar una posible ganancia inmediata, como precio de nuestra libertad; pero evitaríamos, por otra parte, la necesidad de subordinar el desarrollo futuro a los conocimientos que ahora poseen unas determinadas personas. Con el sacrificio de estas posibles ventajas presentes preservamos un importante estímulo para el progreso futuro. Aunque a corto plazo pueda, a veces, ser alto el precio que pagamos por la variedad y la libertad de elección, a la larga incluso el pro-

greso material dependerá de esta misma variedad, porque nunca podemos prever de cuál, entre las múltiples formas en que un bien o un servicio puede suministrarse, surgirá después una mejor. No puede, por lo demás, afirmarse que toda renuncia a un incremento de nuestro bienestar material presente, soportada para salvaguardar la libertad, vaya a ser siempre premiada. Pero el argumento en favor de la libertad es precisamente que tenemos que dejar espacio para el libre e imprevisible crecimiento. Se aplica no menos cuando, sobre la base de nuestro conocimiento presente, la coacción parece traer sólo ventajas, y aunque en un caso particular pueda, efectivamente, no provocar daño.

En la mayor parte de las discusiones actuales sobre los efectos del progreso tecnológico se nos presenta este progreso como si fuera algo exterior a nosotros, que pudiera obligarnos a usar los nuevos conocimientos con arreglo a un criterio determinado. Cuando lo cierto es que si bien las invenciones nos han dado un poder tremendo, sería absurdo que se nos sugiriese la necesidad de usar este poder para destruir nuestra más preciosa herencia: la libertad. Lo cual significa que si deseamos conservarla debemos defenderla más celosamente que nunca, y tenemos que prepararnos para hacer sacrificios por ella. Si bien no hay nada en el desarrollo tecnológico moderno que nos fuerce a una planificación económica global, hay, sin embargo, mucho en él que hace infinitamente más peligroso el poder que alcanzaría una autoridad planificadora.

Si escasamente puede ya dudarse que el movimiento hacia la planificación es el resultado de una acción deliberada, y que no hay exigencias externas que a él nos fuercen, merece la pena averiguar por qué tan gran proporción de técnicos milita en las primeras filas de los planificadores. La explicación de este fenómeno está muy relacionada con un hecho importante que los críticos de la planificación deberían tener

siempre en la mente: apenas cabe dudar que casi todos los ideales técnicos de nuestros expertos se podrían realizar dentro de un tiempo relativamente breve, si lograrlo fuera el único fin de la Humanidad. Hay un infinito número de cosas buenas que todos estamos de acuerdo en considerar altamente deseables y a la vez posibles, pero de las cuales sólo al logro de unas cuantas podemos aspirar dentro de nuestra vida, o sólo hemos de aspirar a lograrlas muy imperfectamente. Es la frustración de sus ambiciones en su propio campo lo que hace al especialista revolverse contra el orden existente. A cualquiera le duele ver cosas sin hacer que todos consideramos deseables y posibles. Que todas estas cosas no puedan hacerse al mismo tiempo, que una cualquiera de ellas no pueda lograrse sin el sacrificio de otras, sólo se comprenderá si se tienen en cuenta factores que caen fuera de todo especialista y únicamente pueden apreciarse con un penoso esfuerzo intelectual; penoso, porque nos obliga a considerar sobre un fondo más amplio los objetos a los que se dirigen la mayor parte de nuestros esfuerzos y a contrapesarlos con otros que quedan fuera de nuestro interés inmediato y que, por esta razón, nos importan menos.

Cada uno de los múltiples fines que, considerados aisladamente, sería posible alcanzar en una sociedad planificada, crea entusiastas de la planificación, que confían en su capacidad para infundir a los directores de aquella sociedad su propio juicio de valor sobre un objetivo particular; y las esperanzas de algunos de ellos se cumplirían, indudablemente, pues una sociedad planificada perseguirá algunos objetivos más que la del presente. Locura sería negar que los ejemplos conocidos de sociedades planificadas o semiplanificadas suministran ilustraciones sobre este punto: que hay cosas que las gentes de estos países deben por entero a la planificación. Las magníficas autopistas de Alemania e Italia son un ejemplo a menudo citado, aunque no representan una clase de planificación que no sea igualmente posible en una sociedad liberal.

Pero no sería menor locura citar estos ejemplos de excelencia técnica en campos particulares como prueba de la superioridad general de la planificación. Sería más correcto decir que tan extremas excelencias técnicas, desproporcionadas con las condiciones generales, son prueba de una mala dirección de los recursos. A todo el que ha corrido por las famosas autopistas alemanas y ha observado que su tráfico es menor que el de muchas carreteras secundarias de Inglaterra le quedarán pocas dudas acerca de la escasa justificación de aquéllas, en lo que a finalidades pacíficas se refiere. Otra cuestión es si se trata de un caso en que los planificadores se decidieron en favor de los «cañones» y en contra de la «mantequilla»[5]. Mas, para nuestros criterios, esto no es motivo de entusiasmo.

La ilusión del especialista, de lograr en una sociedad planificada mayor atención para los objetivos que le son más queridos, es un fenómeno más general de lo que la palabra especialista sugiere en un principio. En nuestras predilecciones e intereses, todos somos especialistas en cierta medida. Y todos pensamos que nuestra personal ordenación de valores no es sólo nuestra, pues en una libre discusión entre gentes razonables convenceríamos a los demás de que estamos en lo justo. El amante del paisaje, que desea, ante todo, conservar su tradicional aspecto y que se borren del hermoso rostro natural las manchas producidas por la industria, lo mismo que el entusiasta de la higiene, que pretende derribar todos los viejos caseríos pintorescos, pero malsanos, o el aficionado al automóvil, que aspira a ver cortado el país por grandiosas carreteras, y el fanático de la eficiencia, que ambiciona el máximo de especialización y mecanización, no menos que el idealista que, para el desarrollo de la personalidad, quiere conservar el mayor número posible de artesanos independientes, todos saben que sólo por medio de la

5. Al corregir este texto me llega la noticia de haberse suspendido las obras de conservación de las autopistas alemanas.

planificación podría lograrse plenamente su objetivo; y todos desean, por este motivo, la planificación. Pero, sin duda, adoptar la planificación social por la que claman no haría más que revelar el latente conflicto entre sus objetivos.

El movimiento en favor de la planificación debe, en gran parte, su fuerza presente al hecho de no ser aquélla, todavía, en lo fundamental, más que una aspiración, por lo cual une a casi todos los idealistas de un solo objetivo, a todos los hombres y mujeres que han entregado su vida a una sola preocupación. Las esperanzas que en la planificación ponen, no son, sin embargo, el resultado de una visión amplia de la sociedad, sino más bien de una visión muy limitada, y a menudo el resultado de una gran exageración de la importancia de los fines que ellos colocan en primer lugar. Esto no significa rebajar el gran valor pragmático de este tipo de hombres en una sociedad libre, como la nuestra, que hace de ellos objeto de una justa admiración. Mas, por eso, los hombres más ansiosos de planificar la sociedad serían los más peligrosos si se les permitiese actuar, y los más intolerantes para los planes de los demás. Del virtuoso defensor de un solo ideal al fanático, con frecuencia no hay más que un paso. Aunque es el resentimiento del especialista frustrado lo que da a las demandas de planificación su más fuerte ímpetu, difícilmente habría un mundo más insoportable –y más irracional– que aquel en el que se permitiera a los más eminentes especialistas de cada campo proceder sin trabas a la realización de sus ideales. Además, la «coordinación» no puede ser, como algunos planificadores parecen imaginarse, una nueva especialidad. El economista es el último en pretender que posee los conocimientos que el coordinador necesitaría. Postula un método que procure aquella coordinación sin necesidad de un dictador omnisciente. Pero esto significa precisamente la conservación de algún freno impersonal, y a menudo ininteligible, de los esfuerzos individuales, del género de los que desesperan a todos los especialistas.

5. Planificación y democracia

> El gobernante que intentase dirigir a los particulares en cuanto a la forma de emplear sus capitales, no sólo echaría sobre sí el cuidado más innecesario, sino que se arrogaría una autoridad que no fuera prudente confiar ni siquiera a Consejo o Senado alguno; autoridad que en ningún lugar sería tan peligrosa como en las manos de un hombre con la locura y presunción bastantes para imaginarse capaz de ejercerla.
>
> ADAM SMITH

Los rasgos comunes a todos los sistemas colectivistas pueden describirse, con una frase siempre grata a los socialistas de todas las escuelas, como la organización deliberada de los esfuerzos de la sociedad en pro de un objetivo social determinado. Que nuestra presente sociedad carece de esta dirección «consciente» hacia una sola finalidad, que sus actividades se ven guiadas por los caprichos y aficiones de individuos irresponsables, ha sido siempre una de las principales lamentaciones de sus críticos socialistas.

En muchos aspectos esto plantea muy claramente la cuestión fundamental y nos dirige, a la vez, al punto en que surge el conflicto entre libertad individual y colectivismo. Las diversas clases de colectivismo —comunismo, fascismo, etc.— difieren entre sí por la naturaleza del objetivo hacia el cual desean dirigir los esfuerzos de la sociedad. Pero todas ellas difieren del liberalismo y el individualismo en que aspiran a organizar la sociedad entera y todos sus recursos para esta finalidad unitaria, y porque se niegan a reconocer las esferas

autónomas dentro de las cuales son supremos los fines del individuo. En resumen, son totalitarias en el verdadero sentido de esta nueva palabra que hemos adoptado para describir las inesperadas, pero, sin embargo, inseparables manifestaciones de lo que en teoría llamamos colectivismo.

El «objetivo social» o el «designio común», para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de un modo vago, como el «bien común», o el «bienestar general», o el «interés general». No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una sola escala de menos y más. El bienestar de un pueblo, como la felicidad de un hombre, depende de una multitud de cosas que pueden lograrse por una infinita variedad de combinaciones. No puede expresarse adecuadamente en una finalidad singular, sino tan sólo en una jerarquía de fines, en una amplia escala de valores en la que cada necesidad de cada persona tiene su sitio. Dirigir todas nuestras actividades de acuerdo con un solo plan supone que a cada una de nuestras necesidades se le dé su lugar en una ordenación de valores que ha de ser lo bastante completa para permitir la decisión entre todas las diferentes vías que el planificador tiene para elegir. Supone, en resumen, la existencia de un completo código ético en el que todos los diferentes valores humanos han recibido el sitio debido.

La concepción de un código ético completo no es familiar, y exige un cierto esfuerzo imaginativo para ver lo que envuelve. No tenemos el hábito de pensar en códigos morales como algo más o menos completo. El hecho de elegir nosotros constantemente entre diferentes valores sin un código social que nos prescriba cómo debemos elegir, no nos sorprende y no nos sugiere que nuestro código moral sea incompleto. En nuestra sociedad no hay ni ocasión ni razón

para que la gente desarrolle opiniones comunes sobre lo que en cada situación deba hacerse. Pero donde todos los medios que han de usarse son propiedad de la sociedad, y han de usarse en nombre de la sociedad, de acuerdo con un plan unitario, una visión «social» acerca de lo que debe hacerse tiene que guiar todas las decisiones. En un mundo semejante, pronto encontraríamos que nuestro código moral está lleno de huecos.

No nos ocuparemos aquí de averiguar si convendría disponer de un código ético tan completo. Sólo indicaremos que, hasta el presente, al desarrollo de la civilización ha acompañado una constante reducción de la esfera en que las acciones individuales están sujetas a reglas fijas. Las reglas que componen nuestro código moral común han disminuido progresivamente y han tomado un carácter cada vez más general. Desde el hombre primitivo, que estaba atado a un complicado ritual en casi todas sus actividades diarias, que se veía limitado por innumerables tabúes y que apenas podía concebir un hacer algo de manera diferente que sus compañeros, la moral ha tendido, cada vez más, a constituir solamente los límites que circunscriben la esfera dentro de la cual el individuo puede comportarse a su gusto. La adopción de un código ético común suficientemente extenso para determinar un plan económico unitario significaría una inversión completa de esa tendencia.

Lo esencial para nosotros es que no existe un código ético tan completo. El intento de dirigir toda la actividad económica de acuerdo con un solo plan alzaría innumerables cuestiones, cuya respuesta sólo podría provenir de una regla moral, pero la ética existente no tiene respuesta para ellas, y cuando la tiene, no hay acuerdo respecto a lo que se deba hacer. La gente, o no tiene opiniones definidas, o tiene opiniones opuestas sobre estas cuestiones, porque en la sociedad libre en que hemos vivido no ha existido ocasión

para pensar sobre ellas y todavía menos para formar una opinión común.

No es sólo que carezcamos de una escala de valores que lo abarque todo; es que sería imposible para una mente abarcar la infinita variedad de las diversas necesidades de las diferentes personas que compiten por los recursos disponibles y asignar un peso definido a cada una. Para nuestro problema es de menor importancia si los fines que son la aspiración de una persona abarcan sólo sus propias necesidades individuales o incluyen las necesidades de sus allegados más cercanos o incluso las de los más distantes; es decir, si es egoísta o altruista, en el sentido ordinario de estas palabras. El hecho trascendental es que al hombre le es imposible abarcar un campo ilimitado, sentir la urgencia de un número ilimitado de necesidades. Se centre su atención sobre sus propias necesidades físicas o tome con cálido interés el bienestar de cualquier ser humano que conozca, los fines de que puede ocuparse serán tan sólo y siempre una fracción infinitésima de las necesidades de todos los hombres.

Sobre este hecho fundamental descansa la filosofía entera del individualismo. Éste no supone, como se afirma con frecuencia, que el hombre es interesado o egoísta o que deba serlo. Se limita a partir del hecho indiscutible de que la limitación de nuestras facultades imaginativas sólo permite incluir en nuestra escala de valores un sector de las necesidades de la sociedad entera, y que, hablando estrictamente, como sólo en las mentes individuales pueden existir escalas de valores, no hay sino escalas parciales, escalas que son inevitablemente diferentes y a menudo contradictorias entre sí. De esto, el individualista concluye que debe dejarse a cada individuo, dentro de límites definidos, seguir sus propios valores y preferencias antes que los de otro cualquiera, que el sistema de fines del individuo debe ser supremo dentro de estas esferas y no estar sujeto al dictado de los demás. El reconocimiento del indivi-

duo como juez supremo de sus fines, la creencia en que, en lo posible, sus propios fines deben gobernar sus acciones, es lo que constituye la esencia de la posición individualista.

Esta posición no excluye, por lo demás, el reconocimiento de unos fines sociales, o, mejor, de una coincidencia de fines individuales que aconseja a los hombres concertarse para su consecución. Pero limita esta acción común a los casos en que coinciden las opiniones individuales. Lo que se llaman «fines sociales» son para ella simplemente fines idénticos de muchos individuos o fines a cuyo logro los individuos están dispuestos a contribuir, en pago de la asistencia que reciben para la satisfacción de sus propios deseos. La acción común se limita así a los campos en que las gentes concuerdan sobre fines comunes. Con mucha frecuencia, estos fines comunes no serán fines últimos de los individuos, sino medios que las diferentes personas pueden usar con diversos propósitos. De hecho, las gentes están más dispuestas a convenir en una acción común cuando el fin común no es un fin último para ellas, sino un medio capaz de servir a una gran variedad de propósitos.

Cuando los individuos se combinan en un esfuerzo conjunto para realizar fines que les son comunes, las organizaciones, como el Estado, que forman con ese propósito reciben sistemas de fines propios y medios propios. Pero la organización así formada no deja de ser una «persona» entre otras; en el caso del Estado, mucho más poderosa que cualquier otra, cierto es, pero también con su esfera separada y limitada, sólo dentro de la cual son supremos sus fines. Los límites de esta esfera están determinados por la extensión en que los individuos se conciertan sobre fines particulares; y la probabilidad del acuerdo sobre una particular vía de acción decrece necesariamente a medida que se extiende el alcance de esta acción. Hay ciertas funciones del Estado en cuyo ejercicio se logrará prácticamente la unanimidad entre sus ciudadanos; habrá otras sobre las cuales recaerá el

acuerdo de una mayoría importante, y así, sucesivamente, hasta llegar a campos donde, aunque cada individuo desearía que el Estado actuase de alguna manera, habría casi tantas opiniones como personas acerca de lo que el Estado debiera hacer.

Sólo podemos contar con un acuerdo voluntario para guiar la acción del Estado cuando ésta se limita a las esferas en que el acuerdo existe. Pero no sólo cuando el Estado emprende una acción directa en campos donde no existe tal acuerdo es cuando se ve obligado a suprimir la libertad individual. Por desgracia, no podemos extender indefinidamente la esfera de la acción común y mantener, sin embargo, la libertad de cada individuo en su propia esfera. Cuando el sector comunal, en el que el Estado domina todos los medios, llega a sobrepasar una cierta proporción de la totalidad, los efectos de sus acciones dominan el sistema entero. Si el Estado domina directamente el uso de una gran parte de los recursos disponibles, los efectos de sus decisiones sobre el resto del sistema económico se hacen tan grandes, que indirectamente lo domina casi todo. Donde, como aconteció, por ejemplo, en Alemania ya desde 1928, las autoridades centrales y locales dominan directamente el uso de más de la mitad de la renta nacional (según una estimación oficial alemana de entonces, el 53 por 100), dominan indirectamente casi la vida económica entera de la nación. Apenas hay entonces un fin individual que para su logro no dependa de la acción del Estado, y la «escala social de valores» que guía la acción del Estado tiene que abarcar prácticamente todos los fines individuales.

No es difícil ver cuáles serán las consecuencias si la democracia se lanza a una carrera de planificación que en su ejecución requiera más conformidad que la que de hecho existe. La gente puede ponerse de acuerdo para adoptar un sistema de economía dirigida porque esté convencida de que

producirá una gran prosperidad. En las discusiones que a esta decisión llevasen, el objetivo de la planificación se habría descrito con una expresión tal como el «bienestar común», que no hace sino ocultar la falta de un acuerdo real sobre los fines de la planificación. El acuerdo sólo existirá de hecho sobre el mecanismo utilizable. Pero es un mecanismo que sólo puede utilizarse para un fin común; y la cuestión del fin preciso hacia el que ha de dirigirse toda la actividad surgirá tan pronto como el poder ejecutivo tenga que traducir la demanda de un plan único en la materialización de un plan particular. Resultará entonces que el acuerdo sobre la deseabilidad de la planificación no encuentra apoyo en un acuerdo sobre los fines a los que ha de servir el plan. El efecto del acuerdo general respecto a la adopción de una planificación centralizada, sin un acuerdo sobre sus fines, sería como si un grupo de personas se comprometiesen a pasar un día juntas, sin lograr acuerdo sobre el lugar preferido, con el resultado de que todas se verían forzadas a una excursión que la mayor parte de ellas no desearían en modo alguno. Uno de los rasgos que más contribuyen a determinar el carácter de un sistema planificado es que la planificación crea un estado de cosas en el que nos es necesario el acuerdo sobre un número de cuestiones mucho mayor de lo que es costumbre, y que en un sistema planificado no podemos limitar la acción colectiva a las tareas en que cabe llegar a un acuerdo, sino que nos vemos forzados a llegar a un acuerdo sobre todo, si es que ha de ser posible una acción cualquiera.

Puede suceder que el pueblo haya expresado unánimemente el deseo de que el Parlamento prepare un plan económico completo, sin que para ello ni el pueblo ni sus representantes necesiten estar de acuerdo sobre plan alguno en particular. La incapacidad de las asambleas democráticas para llevar a término lo que parece ser un claro mandato del pueblo causará, inevitablemente, insatisfacción en cuanto a las instituciones democráticas mismas. Los parlamentos co-

mienzan a ser mirados como ineficaces tertulias, incapaces de realizar las tareas para las que fueron convocados. Crece el convencimiento de que, si ha de lograrse una planificación eficaz, la dirección tiene que quedar «fuera de la política» y colocarse en manos de expertos, funcionarios permanentes u organismos autónomos.

Los socialistas conocen muy bien la dificultad. Pronto hará medio siglo que los Webb comenzaron a lamentarse de «la creciente incapacidad de la Cámara de los Comunes para cumplir su cometido»[1]. Más recientemente, el profesor Laski ha perfeccionado el argumento:

Es del dominio común que la actual máquina parlamentaria resulta por completo inadecuada para aprobar rápidamente una gran masa de complicada legislación. El Gobierno nacional, por lo demás, lo ha admitido en realidad al dar vida a sus medidas económicas y aduaneras, no por un minucioso debate en los Comunes, sino gracias a un extenso sistema de legislación delegada. Un gobierno laborista, creo yo, operaría sobre la base de este amplio precedente. Reduciría los Comunes a las dos funciones que puede en realidad llenar: el examen de las reclamaciones y la discusión de los principios generales de sus medidas. Sus leyes tendrían el carácter de fórmulas generales confiriendo amplios poderes a los departamentos ministeriales competentes, y estos poderes serían ejercidos por decretos, a los cuales podrían oponerse los Comunes con un voto de censura. La necesidad y el valor de la legislación delegada han sido reafirmados con gran fuerza en fecha reciente por la comisión Donoughmore, y su ampliación es inevitable si no ha de hundirse el proceso de socialización bajo los métodos de obstrucción normales sancionados por el actual procedimiento parlamentario.

Y para que quede bien claro que un gobierno socialista no debe dejarse estorbar mucho por el procedimiento democrático, el profesor Laski, al final del mismo artículo, plantea la cuestión de «si, en un período de tránsito hacia el socialis-

1. S. y B. Webb, *Industrial Democracy*, 1897, pág. 800, nota.

mo, un gobierno laborista puede arriesgarse a que el resultado de las primeras elecciones generales arruine sus medidas»; y, significativamente, la deja sin respuesta[2].

Es importante ver con claridad las causas de esta admitida ineficacia de los parlamentos cuando se enfrentan con una administración detallada de los asuntos económicos de la nación. La falta no está en las personas de los representantes ni en las instituciones parlamentarias en cuanto tales, sino en las contradicciones inherentes a la tarea que se les encomienda. No se les pide que actúen en lo que puedan estar de acuerdo, sino que lleguen a un acuerdo en todo, a un acuerdo sobre la completa dirección de los recursos nacionales. Para una tarea semejante, empero, el sistema de la decisión por mayoría es inapropiado. Las mayorías se lograrán cuando se trate de una elección entre pocas alternativas; pero es una superstición el creer que tiene que existir una opinión mayoritaria sobre todas las cosas. No hay razón para que deba existir una mayoría dentro de cada una de las diferentes vías posibles de acción positiva si su número forma legión. Cada miembro de la asamblea legislativa puede pre-

2. H. J. Laski, «Labour and the Constitution», *The New Statesman and Nation*, núm. 81 (New Series), 10 septiembre 1932, página 277. En un libro *(Democracy in Crisis,* 1933, en particular la pág. 87) donde el profesor Laski ha elaborado después estas ideas, expresa aún más claramente su determinación de no consentir a la democracia parlamentaria que forme un obstáculo para la realización del socialismo. ¡Un gobierno socialista no sólo «tomaría amplios poderes y legislaría bajo ellos por órdenes y decretos» y «suspendería las fórmulas clásicas de la oposición normal», pues, aún más, la «continuación del régimen parlamentario dependería de que [el gobierno laborista] recibiese del Partido Conservador garantías de no destrozar por derogación su labor transformadora en el caso de una derrota ante las urnas»!

Como el profesor Laski invoca la autoridad de la comisión Donoughmore, puede ser interesante recordar que el profesor Laski fue miembro de aquella comisión y probablemente uno de los autores de su dictamen.

ferir, para la dirección de la actividad económica, algún particular plan antes que la falta de plan, mas, para la mayoría, puede no resultar ningún plan preferible a la falta de todo plan.

Tampoco puede lograrse un plan coherente rompiéndolo en partes y votando sobre las cuestiones particulares. Una asamblea democrática votando y enmendando un plan económico global, artículo por artículo, tal como se delibera sobre un proyecto de ley ordinario, carece de sentido. Un plan económico, si ha de merecer tal nombre, tiene que responder a una concepción unitaria. Incluso si el Parlamento pudiera avanzando paso a paso, aprobar un proyecto, éste, al final, no satisfaría a nadie. Un todo complejo, cuyas partes todas deben ajustarse cuidadosísimamente entre sí, no puede lograrse a través de un compromiso entre opiniones contrapuestas. Redactar un plan económico de esta manera es todavía más imposible que, por ejemplo, planificar con éxito por el procedimiento democrático una campaña militar. Como en estrategia, sería inevitable delegar la tarea en los técnicos.

La diferencia es, sin embargo, que, mientras al general encargado de la campaña se le encomienda un solo objetivo, al cual, en tanto dura la misma, han de ser consagrados exclusivamente todos los medios a su disposición, al planificador económico no se le puede señalar también un objetivo único, y no puede existir una limitación semejante en cuanto a los medios que se le entregan. El general no tiene que contrapesar diferentes finalidades independientes; para él sólo hay un objetivo supremo. Pero los fines de un plan económico, o de cualquiera de sus partes, no pueden definirse separados del plan particular. Pertenece a la esencia del problema que la confección de un plan económico envuelve la elección entre fines en conflicto o competitivos: las diferentes necesidades de las diferentes personas. Pero cuáles fines, de los que están en conflicto, deberán sacrificarse, si desea-

mos obtener otros, o, en resumen, cuáles son las alternativas entre las que hemos de elegir, sólo pueden saberlo quienes conozcan todos los hechos; y sólo ellos, los técnicos, están en situación de decidir a cuáles de los diferentes fines ha de darse preferencia. Es inevitable que ellos impongan su escala de preferencias a la comunidad para la que planifican.

Esto no se ha visto siempre con claridad, y la delegación se justifica usualmente por el carácter técnico de la tarea. Pero ello no significa que sólo se deleguen los detalles técnicos, ni tampoco que la incapacidad de los parlamentos para comprender los detalles técnicos sea la raíz de la dificultad[3]. Las

3. Es instructiva a este propósito una breve referencia al documento del gobierno en el que se han discutido estos problemas no hace muchos años. Hace ya trece, es decir, antes de que Inglaterra abandonase por fin el liberalismo económico, el proceso de la delegación de facultades legislativas había llegado a un punto en que se sintió la necesidad de nombrar una comisión a fin de investigar acerca de «las garantías deseables o necesarias para asegurar la soberanía de la Ley». En su dictamen, el «Donoughmore Committee» *(Report of the* [Lord Chancellor's] *Committee on Ministers' Powers,* Cmd. 4060, 1932) demostró que ya en aquella fecha el Parlamento había recurrido a «la práctica de una delegación general indiscriminada», pero lo consideraba (¡era antes de haber resbalado verdaderamente hacia el abismo totalitario!) como un desarrollo inevitable y relativamente inocuo. Y es probablemente cierto que esta delegación, como tal, no tuviese que representar un peligro para la libertad. Pero lo interesante es el motivo de haberse hecho necesaria en tal escala la delegación. En primer lugar, entre las causas enumeradas señala el dictamen que «el Parlamento aprueba ahora tantas leyes cada año» y que «tantos detalles son tan técnicos, que resultan inapropiados para la discusión parlamentaria». Pero si esto fuera todo, no habría razón para que los detalles no se elaborasen *antes,* mejor que después de aprobar la ley el Parlamento. Lo que en múltiples casos es probablemente una razón mucho más importante para explicar por qué, «si el Parlamento no estuviese dispuesto a delegar su facultad legislativa, sería incapaz de aprobar la clase y la cantidad de legislación que la opinión pública exige», se revela inocentemente en una breve frase: «Muchas de las leyes afectan tan íntimamente a la vida de las gentes que es esencial la elasticidad». ¿Qué significa esto sino el otorgamiento de un poder arbitrario, de un poder no limitado por princi-

alteraciones en la estructura del Código Civil no son menos técnicas ni menos difíciles de apreciar en todas sus complejidades, y sin embargo, nadie ha sugerido seriamente que esta legislación se delegase en un cuerpo de peritos. El hecho es que en estos campos la legislación no va más allá de ciertas reglas generales sobre las que puede alcanzarse un acuerdo verdaderamente mayoritario, mientras que en la dirección de la actividad económica los intereses que han de conciliarse son tan divergentes que no es posible conseguir un verdadero acuerdo en una asamblea democrática.

Hay que reconocer, sin embargo, que la delegación de la facultad legislativa no es en sí lo cuestionable. Oponerse a la delegación en sí es oponerse a un síntoma y no a una causa, y como aquélla puede ser el resultado necesario de otras causas, sería debilitar la argumentación. En tanto la facultad que se delega sea simplemente la de establecer reglas generales, puede haber muy buenas razones para que dicten estas reglas las autoridades locales mejor que las centrales. Lo discutible es que deba recurrirse tan a menudo a la delegación porque las cuestiones no puedan reglamentarse por preceptos generales, sino únicamente por la decisión discrecional en cada caso particular. Entonces la delegación significa que se ha concedido poder a alguna autoridad para dar fuerza de ley a lo que, a todos los efectos, son decisiones arbitrarias (descritas comúnmente con la expresión «juzgar el caso según sus circunstancias particulares»).

La delegación de las diversas tareas técnicas a organismos separados, cuando se convierte en un hecho normal, es tan sólo el primer paso en el proceso por el cual una democracia que se embarca en la planificación cede progresivamente sus facultades. El expediente de la delegación no puede, en realidad, eliminar las causas de la impotencia de la demo-

pios fijos y que, según la opinión del Parlamento, no puede limitarse por reglas definidas e inequívocas?

cracia, que tanto impacienta a los abogados de la planificación general. La delegación de facultades particulares en organismos autónomos crea un nuevo obstáculo para la consecución de un plan unitario coordinado. Aun si, por este expediente, una democracia lograse planificar todos los sectores de la actividad económica, todavía se vería frente al problema de integrar estos planes separados en un todo unitario. Muchos planes separados no forman un todo planificado –como, de hecho, los planificadores tienen que ser los primeros en admitir–, y el resultado aún sería peor que la falta de un plan. Pero los cuerpos legislativos democráticos dudarán mucho antes de ceder la facultad de decisión sobre los puntos de interés vital, y en tanto no la cedan harán imposible a cualquiera la consecución de un plan general. Sin embargo, el acuerdo sobre la necesidad de la planificación, junto con la incapacidad de las asambleas democráticas para producir un plan, provocará demandas cada vez más fuertes a fin de que se otorguen al gobierno o a algún individuo en particular poderes para actuar bajo su propia responsabilidad. Cada vez se extiende más la creencia en que, para que las cosas marchen, las autoridades responsables han de verse libres de las trabas del procedimiento democrático.

El clamor, no infrecuente en Inglaterra, en pro de un dictador económico es una etapa característica del movimiento hacia la planificación. Han transcurrido ya varios años desde que uno de los más agudos investigadores extranjeros sobre Inglaterra, el difunto Elie Halévy, sugería: «Si se hiciera una composición fotográfica que incluyese a lord Eustace Percy, sir Oswald Mosley y sir Stafford Cripps, creo que se hallaría en ellos un rasgo común, que se les encontraría a todos de acuerdo en decir: "Vivimos en un caos económico y no podemos salir de él sin alguna forma de dirección dictatorial"»[4]. El nú-

4. «Socialism and the Problems of Democratic Parliamentarism», *International Affairs,* vol. XIII, pág. 501.

mero de hombres públicos influyentes cuya inclusión no alteraría esencialmente los rasgos de esta «composición fotográfica» ha crecido de modo considerable desde entonces.

En Alemania, aun antes de que Hitler lograra el poder, el movimiento había llegado mucho más lejos. Es importante recordar que algún tiempo antes de 1933 Alemania había alcanzado un punto en que hubo de tener en efecto un gobierno dictatorial. Nadie pudo entonces dudar que, por lo pronto, la democracia se había hundido, y que demócratas sinceros, como Brüning, no eran más capaces de gobernar democráticamente que Schleicher o Von Papen. Hitler no tuvo que destruir la democracia; tuvo simplemente que aprovecharse de su decadencia, y en el crítico momento obtuvo el apoyo de muchos que, aunque detestaban a Hitler, le creyeron el único hombre lo bastante fuerte para hacer marchar las cosas.

El argumento de los planificadores para que nos avengamos con esta evolución consiste en afirmar que mientras la democracia retenga el control último, lo esencial de ella queda indemne. Así, Karl Mannheim escribe:

> Lo único *[sic]* en que una sociedad planificada difiere de la del siglo XIX es que cada vez se sujetan a la intervención estatal más y más esferas de la vida social, y finalmente todas y cada una de ellas. Pero si la soberanía parlamentaria puede mantener unos cuantos controles, también puede mantener muchos...; en un Estado democrático la soberanía puede reforzarse ilimitadamente por medio de los plenos poderes sin renunciar a la fiscalización democrática[5].

Esta creencia olvida una distinción vital. Al Parlamento le es posible, sin duda, fiscalizar la ejecución de aquellas tareas en las que pueda dar direcciones definidas, en las que

5. K. Mannheim, *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1940, pág. 340.

primero ha llegado a un acuerdo sobre el objetivo y sólo delega la ejecución del detalle. La situación es enteramente diferente cuando el motivo de la delegación consiste en no existir un acuerdo real sobre los fines, cuando el organismo encargado de la planificación tiene que elegir entre fines cuya conflictividad ni siquiera ha advertido el Parlamento, y lo más que cabe es presentar a éste un plan que tiene que aceptar o rechazar por entero. Puede haber, y probablemente habrá, crítica; pero resultará completamente ineficaz, porque no se logrará nunca una mayoría respecto a cualquier otro plan alternativo, y las partes del proyecto impugnadas se presentarán casi siempre como elementos esenciales del conjunto. La discusión parlamentaria puede mantenerse como una válvula de seguridad útil y, aún más, como un eficaz medio de difusión de las respuestas oficiales a las reclamaciones. Puede también evitar algunos abusos flagrantes e instar útilmente para el remedio de algunos errores particulares. Pero no puede dirigir. A lo más, se reduciría a elegir las personas que habrían de disponer de un poder prácticamente absoluto. El sistema entero tendería hacia la dictadura plebiscitaria, donde el jefe del gobierno es confirmado de vez en cuando en su posición por el voto popular, pero dispone de todos los poderes para asegurarse que el voto irá en la dirección que desea.

El precio de la democracia es que las posibilidades de un control explícito se hallan restringidas a los campos en que existe verdadero acuerdo y que en algunos campos las cosas tienen que abandonarse a su suerte. Pero en una sociedad cuyo funcionamiento está sujeto a la planificación central, este control no puede quedar a merced de la existencia de una mayoría dispuesta a dar su conformidad. Con frecuencia será necesario que la voluntad de una pequeña minoría se imponga a todos, porque esta minoría será el mayor grupo capaz de llegar a un acuerdo dentro de ella sobre la cuestión disputada. El gobierno democrático ha actuado con

éxito donde y en tanto las funciones del gobierno se restringieron, por una opinión extensamente aceptada, a unos campos donde el acuerdo mayoritario podía lograrse por la libre discusión; y el gran mérito del credo liberal está en que redujo el ámbito de las cuestiones sobre las cuales era necesario el acuerdo a aquellas en que era probable que existiese dentro de una sociedad de hombres libres. Se dice ahora con frecuencia que la democracia no tolerará el «capitalismo». Por ello se hace todavía más importante comprender que sólo dentro de este sistema es posible la democracia, si por «capitalismo» se entiende un sistema de competencia basado sobre la libre disposición de la propiedad privada. Cuando llegue a ser dominada por un credo colectivista, la democracia se destruirá a sí misma inevitablemente.

No tenemos, empero, intención de hacer de la democracia un fetiche. Puede ser muy cierto que nuestra generación habla y piensa demasiado de democracia y demasiado poco de los valores a los que ésta sirve. No puede decirse de la democracia lo que con verdad decía lord Acton de la libertad: que ésta «no es un medio para un fin político más alto. Es, en sí, el fin político más alto. No se necesita por razones de buena administración pública, sino para asegurar la consecución de los más altos objetivos de la sociedad civil y de la vida privada».

La democracia es esencialmente un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Como tal, no es en modo alguno infalible o cierta. Tampoco debemos olvidar que a menudo ha existido una libertad cultural y espiritual mucho mayor bajo un régimen autocrático que bajo algunas democracias; y se entiende sin dificultad que bajo el gobierno de una mayoría muy homogénea y doctrinaria el sistema democrático puede ser tan opresivo como la peor dictadura. Nuestra afirmación no es, pues, que la dictadura tenga que extirpar inevitablemente la

libertad, sino que la planificación conduce a la dictadura, porque la dictadura es el más eficaz instrumento de coerción y de inculcación de ideales, y, como tal, indispensable para hacer posible una planificación central en gran escala. El conflicto entre planificación y democracia surge sencillamente por el hecho de ser ésta un obstáculo para la supresión de la libertad, que la dirección de la actividad económica exige. Pero cuando la democracia deja de ser una garantía de la libertad individual, puede muy bien persistir en alguna forma bajo un régimen totalitario. Una verdadera «dictadura del proletariado», aunque fuese democrática en su forma, si acometiese la dirección centralizada del sistema económico destruiría, probablemente, la libertad personal más a fondo que lo haya hecho jamás ninguna autocracia.

No carece de peligros la moda de concentrarse en torno a la democracia como principal valor amenazado. Es ampliamente responsable de la equívoca e infundada «esencia en que mientras la fuente última del poder sea la voluntad de la mayoría, el poder no puede ser arbitrario. La falsa seguridad que mucha gente saca de esta creencia es una causa importante de la general ignorancia de los peligros que tenemos ante nosotros. No hay justificación para creer que en tanto el poder se confiera por un procedimiento democrático no puede ser arbitrario. La antítesis sugerida por esta afirmación es asimismo falsa, pues no es la fuente, sino la limitación del poder, lo que impide a éste ser arbitrario. El control democrático *puede* evitar que el poder se torne arbitrario; pero no lo logra por su mera existencia. Si la democracia se propone una meta que exige el uso de un poder incapaz de ser guiado por reglas fijas, tiene que convertirse en un poder arbitrario.

6. La planificación y el Estado de Derecho

> Estudios recientes de sociología del Derecho confirman una vez más que el principio fundamental de la ley formal, según el cual todo caso debe juzgarse de acuerdo con preceptos racionales generales, sujetos al menor número posible de excepciones y basados sobre supuestos lógicos, sólo prevalece en la fase competitiva y liberal del capitalismo.
>
> K. MANNHEIM

Nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia, en aquél, de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento [1]. Aunque este

1. De acuerdo con la clásica exposición de A. V. Dicey, en *The Law of the Constitution* (8.ª ed., pág. 198), *rule of law* «significa, en primer lugar, la absoluta supremacía o predominio del derecho común, como oposición al ejercicio del poder arbitrario, y excluye la existencia de arbitrariedades, prerrogativas y hasta de una amplia autoridad discrecional por parte del Estado». En gran parte como resultado de la obra de Dicey, esta expresión ha adquirido, sin embargo, en Inglaterra, un significado técnico más estrecho, que aquí no nos concierne. El más amplio y antiguo significado de este concepto de la supremacía o imperio

ideal nunca puede alcanzarse plenamente, porque los legisladores, como aquellos a quienes se confía la administración de la ley, son hombres falibles, queda suficientemente clara la cuestión esencial: que debe reducirse todo lo posible la discreción concedida a los órganos ejecutivos dotados de un poder coercitivo. Aun cuando toda ley restringe hasta cierto punto la libertad individual alterando los medios que la gente puede utilizar en la consecución de sus fines, bajo la supremacía de la ley le está prohibido al Estado paralizar por una acción *ad hoc* los esfuerzos individuales. Dentro de las reglas del juego conocidas, el individuo es libre para procurarse sus fines y deseos personales, seguro de que los poderes del Estado no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos.

La distinción que antes establecimos entre la creación de una estructura legal permanente, dentro de la cual la actividad productiva es guiada por las decisiones individuales, y la dirección de la actividad económica por una autoridad central, es realmente un caso particular de la distinción más general entre el Estado de Derecho y el gobierno arbitrario. Bajo el primero, el Estado se limita a fijar normas determinantes de las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse los recursos disponibles, dejando a los individuos la decisión sobre los fines para los que serán usados. Bajo el segundo, el Estado dirige hacia fines determinados el empleo de los medios de producción. Las normas del primer tipo pueden establecerse de antemano, con el carácter de *normas formales* que no se dirigen a los deseos y necesidades de ningún individuo en particular. Pretenden ser tan sólo instrumentos para la consecución de los diversos fines individuales de

de la ley, que en Inglaterra alcanzó el carácter de una tradición, más tenida por demostrada que discutida, fue objeto de la más completa elaboración en Alemania, precisamente porque levantaba lo que allí eran nuevos problemas, en las discusiones de comienzos del siglo XIX acerca de la naturaleza del *Rechtsstaat*.

las gentes. Y se proyectan, o deben serlo, para tan largos períodos que sea imposible saber si favorecerán a alguien en particular más que a otros. Pueden casi describirse como un tipo de instrumento de la producción que permite a cualquiera prever la conducta de las gentes con quienes tiene que colaborar, más que como esfuerzos para la satisfacción de necesidades particulares.

La planificación económica de tipo colectivista envuelve necesariamente todo lo opuesto. La autoridad planificadora no puede confinarse a suministrar oportunidades a personas desconocidas para que éstas hagan de ellas el uso que les parezca. No puede sujetarse de antemano a normas generales y formales que impidan la arbitrariedad. Tiene que atender a las necesidades efectivas de la gente a medida que surgen, y para esto ha de elegir deliberadamente entre ellas. Tiene que decidir constantemente sobre cuestiones que no pueden contestarse por principios formales tan sólo, y al tomar estas decisiones tiene que establecer diferencias de mérito entre las necesidades de los diversos individuos. Cuando el Estado tiene que decidir respecto a cuántos cerdos cebar o cuántos autobuses poner en circulación, qué minas de carbón explotar o a qué precio vender el calzado, estas resoluciones no pueden deducirse de principios formales o establecerse de antemano para largos períodos. Dependen inevitablemente de las circunstancias del momento, y al tomar estas decisiones será siempre necesario contrapesar entre sí los intereses de las diversas personas y grupos. Al final, las opiniones de alguien decidirán cuáles de estos intereses son más importantes, y estas opiniones pasan así a formar parte de la ley del país: una nueva distinción de jerarquías que el aparato coercitivo del Estado impone al pueblo.

La distinción que hemos empleado entre ley o justicia formal y normas sustantivas es muy importante y a la vez sumamente difícil de expresar con precisión en la práctica.

Y, sin embargo, el principio general que interviene es bastante simple. La diferencia entre los dos tipos de normas es la misma que existe entre promulgar un código de la circulación u obligar a la gente a circular por un sitio determinado; o mejor todavía, entre suministrar señales indicadoras o determinar la carretera que ha de tomar la gente.

Las normas formales indican de antemano a la gente cuál será la conducta del Estado en cierta clase de situaciones, definidas en términos generales, sin referencia al tiempo, al lugar o a alguien en particular. Atañen a situaciones típicas en que todos pueden hallarse, y en las cuales la existencia de estas normas será útil para una gran variedad de propósitos individuales. El conocimiento de que en tales situaciones el Estado actuará de una manera definida o exigirá que la gente se comporte de un cierto modo es aportado como un medio que la gente puede utilizar al hacer sus propios planes. Las normas formales son así simples instrumentos, en el sentido de proyectarse para que sean útiles a personas anónimas, a los fines para los que estas personas decidan usarlos y en circunstancias que no pueden preverse con detalle. De hecho, el que *no* conozcamos sus efectos concretos, que *no* conozcamos a qué fines particulares ayudarán estas normas o a qué individuos en particular asistirán, el que reciban simplemente la forma en que es más probable que beneficien a todas las personas afectadas por ellas, todo esto constituye la cualidad más importante de las normas formales, en el sentido que aquí hemos dado a esta expresión. No envuelven una elección entre fines particulares o individuos determinados, precisamente porque no podemos conocer de antemano por quién y de qué manera serán usadas.

En nuestro tiempo, con su pasión por la intervención expresa sobre todas las cosas, puede resultar paradójico reclamar consideración de virtud para un sistema al hecho de conocerse menos en él que bajo la mayor parte de los demás sistemas los efectos particulares de las medidas que el Esta-

do tome, y calificar como superior a un método de intervención social precisamente por nuestra ignorancia acerca de sus resultados concretos. Y sin embargo, esta consideración es, en realidad, la *razón de ser* del gran principio liberal del Estado de Derecho. Pero la aparente paradoja se deshace rápidamente cuando llevamos un poco más lejos la argumentación.

Este argumento es doble; por un lado es económico, y aquí sólo puede formularse brevemente. El Estado tiene que limitarse a establecer reglas aplicables a tipos generales de situaciones y tiene que conceder libertad a los individuos en todo lo que dependa de las circunstancias de tiempo y lugar, porque sólo los individuos afectados en cada caso pueden conocer plenamente estas circunstancias y adaptar sus acciones a ellas. Si los individuos han de ser capaces de usar su conocimiento eficazmente para elaborar sus planes, tienen que estar en situación de prever los actos del Estado que pueden afectar a estos planes. Mas para que sean previsibles los actos del Estado, tienen estos que estar determinados por normas fijas, con independencia de las circunstancias concretas que ni pueden preverse ni tenerse en cuenta por anticipado: por lo que los efectos particulares de aquellos actos serán imprevisibles. Si, de otra parte, el Estado pretendiese dirigir las acciones individuales para lograr fines particulares, su actuación tendría que decidirse sobre la base de todas las circunstancias del momento, y sería imprevisible. De aquí el hecho familiar de que, cuanto más «planifica» el Estado más difícil se le hace al individuo su planificación.

El segundo argumento, moral o político, es aún más directamente importante para la cuestión que se discute. Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Es-

tado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos. Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener respuesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestiones sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos tirando al aire una moneda. En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines. Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquélla deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforma en un instrumento del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual y se convierte en una institución «moral»; donde «moral» no se usa en contraposición a inmoral, sino para caracterizar a una institución que impone a sus miembros sus propias opiniones sobre todas las cuestiones morales, sean morales o grandemente inmorales estas opiniones. En este sentido, el nazi u otro Estado colectivista cualquiera es «moral», mientras que el Estado liberal no lo es.

Quizá pueda decirse que todo esto no plantea un problema serio, pues por la naturaleza de las cuestiones sobre las que el planificador económico ha de decidir, éste no necesita guiarse, ni debe hacerlo, por sus prejuicios individuales, sino que debe sujetarse a la general convicción acerca de lo que es justo y razonable. Esta objeción recibe usualmente apoyo de quienes tienen experiencia sobre la planificación en una industria particular y encuentran que no hay una dificultad insuperable para llegar a una decisión que aceptarían como justa todos los inmediatamente afectados. La razón por la que esta experiencia no demuestra nada es precisamente la selección de «intereses» afectados cuando la planificación se limita a una industria en particular. Los más de cerca interesados en una cuestión particular no son necesariamente los mejores jueces sobre los intereses de la sociedad en general. Para recoger sólo el caso más característico: cuando el capital y el trabajo, dentro de una industria, convienen sobre alguna política de restricción y explotan así a los consumidores, no surge usualmente ninguna dificultad para la división del botín en proporción a los antiguos ingresos o según otro principio semejante. Por lo general, la pérdida que se reparte entre miles o millones se desprecia simplemente o se considera de manera por completo inadecuada. Si deseamos poner a prueba la utilidad del principio de lo «justo» para decidir en la clase de cuestiones que surgen en la planificación económica, tenemos que aplicarlo a alguna cuestión donde las ganancias y las pérdidas sean igualmente claras. En estos casos se reconoce sin dificultad que ningún principio general, tal como el de «lo justo», puede proveer una respuesta. Cuando tenemos que elegir entre sueldos más altos para las enfermeras o los médicos o una mayor extensión de los servicios sanitarios, más leche para los niños o mayores jornales para los trabajadores agrícolas, o entre ocupación para los parados o mejores jornales para los ya ocupados, se necesita para procurar una respuesta nada menos que un sistema

completo de valores en que cada necesidad de cada persona o grupo ocupe un lugar definido.

De hecho, a medida que se extiende la planificación se hace normalmente necesario adaptar con referencia a lo que es «justo» o «razonable» un número creciente de disposiciones legales. Esto significa que se hace cada vez más necesario entregar la decisión del caso concreto a la discreción del juez o de la autoridad correspondiente. Se podría escribir una historia del ocaso de la supremacía de la ley, de la desaparición del *Rechtsstaat*, siguiendo la introducción progresiva de aquellas vagas fórmulas en la legislación y la jurisprudencia y la creciente arbitrariedad e incertidumbre de las leyes y la judicatura, con su consiguiente degradación, que en estas circunstancias no pueden menos de ser un instrumento de la política. Es importante señalar una vez más a tal respecto que el ocaso del Estado de Derecho había avanzado constantemente en Alemania durante algún tiempo antes de que Hitler llegara al poder, y que una política muy avanzada hacia la planificación totalitaria había ya realizado gran parte de la obra que Hitler completó.

No puede dudarse que la planificación envuelve necesariamente una discriminación deliberada entre las necesidades particulares de las diversas personas y permite a un hombre hacer lo que a otro se le prohíbe. Tiene que determinarse por una norma legal qué bienestar puede alcanzar cada uno y qué le será permitido a cada uno hacer y poseer. Significa de hecho un retorno a la supremacía del estatus, una inversión del «movimiento de las sociedades progresivas» que, según la famosa frase de sir Henry Maine, «hasta ahora ha sido un movimiento desde el estatus hacia el contrato». Sin duda, el Estado de Derecho debe considerarse probablemente, más que la primacía del contrato, como lo opuesto, en realidad, a la primacía del estatus. El Estado de Derecho, en el sentido de primacía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas

autoritariamente, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario.

Un resultado necesario, y sólo aparentemente paradójico, de lo dicho es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. Provocar el mismo resultado para personas diferentes significa, por fuerza, tratarlas diferentemente. Dar a los diferentes individuos las mismas oportunidades objetivas no significa darles la misma *chance* subjetiva. No puede negarse que el Estado de Derecho produce desigualdades económicas; todo lo que puede alegarse en su favor es que esta desigualdad no pretende afectar de una manera determinada a individuos en particular. Es muy significativo y característico que los socialistas (y los nazis) han protestado siempre contra la justicia «meramente» formal, que se han opuesto siempre a una ley que no encierra criterio respecto al grado de bienestar que debe alcanzar cada persona en particular[2] y que han demandado siempre una «socialización de la Ley», atacado la independencia de los jueces y, a la vez, apoyado todos los movimientos, como el de la *Freirechtsschule,* que minaron el Estado de Derecho.

Puede incluso decirse que para un eficaz Estado de Derecho es más importante que el contenido mismo de la norma el que ésta se aplique siempre, sin excepciones. A menudo

2. No es, pues, del todo falsa la oposición que el teórico del Derecho del Nacionalsocialismo, Carl Schmitt, establece entre el liberal *Rechtsstaat* (es decir, el Estado de Derecho, la supremacía de la Ley) y el ideal nacionalsocialista del *gerechte Staat* (el Estado justo); sólo que la clase de justicia que opone a la justicia formal implica necesariamente la discriminación entre personas.

no importa mucho el contenido de la norma, con tal que la misma norma se haga observar universalmente. Para volver a un ejemplo anterior: lo mismo da que todos tengamos que llevar la derecha o la izquierda en la carretera, en tanto que todos tengamos que hacer lo mismo. Lo importante es que la norma nos permita prever correctamente la conducta de los demás, y esto exige que se aplique a todos los casos, hasta si en una circunstancia particular sentimos que es injusta.

El conflicto entre la justicia formal y la igualdad formal ante la ley, por una parte, y los intentos de realizar diversos ideales de justicia sustantiva y de igualdad, por otra, explica también la extendida confusión acerca del concepto de «privilegio» y el consiguiente abuso de este concepto. Mencionaremos sólo el más importante ejemplo de tal abuso: la aplicación del término privilegio a la propiedad como tal. Sería en verdad privilegio si, por ejemplo, como fue a veces el caso en el pasado, la propiedad de la tierra se reservase para los miembros de la nobleza. Y es privilegio si, como ocurre ahora, el derecho a producir o vender alguna determinada cosa le está reservado a alguien en particular designado por la autoridad. Pero llamar privilegio a la propiedad privada como tal, que todos pueden adquirir bajo las mismas leyes, porque sólo algunos puedan lograr adquirirla, es privar de su significado a la palabra privilegio.

La imposibilidad de prever los efectos particulares, que es la característica distintiva de las leyes formales en un sistema liberal, es también importante porque ayuda a aclarar otra confusión acerca de la naturaleza de este sistema: la creencia en que su actitud característica consiste en la inhibición del Estado. La cuestión de si el Estado debe o no debe «actuar» o «interferir» plantea una alternativa completamente falsa, y la expresión *laissez-faire* describe de manera muy ambigua y equívoca los principios sobre los que se basa una política liberal. Por lo demás, no hay Estado que no tenga que actuar, y toda acción del Estado interfiere con una

cosa o con otra. Pero ésta no es la cuestión. Lo importante es si el individuo puede prever la acción del Estado y utilizar este conocimiento como un dato al establecer sus propios planes, lo que supone que el Estado no puede controlar el uso que se hace de sus instrumentos y que el individuo sabe con exactitud hasta dónde estará protegido contra la interferencia de los demás, o si el Estado está en situación de frustrar los esfuerzos individuales. El contraste oficial de pesas y medidas (o la prevención del fraude y el engaño por cualquier otra vía) supone, sin duda, una actuación, mientras que permanece inactivo el Estado que permite el uso de la violencia, por ejemplo, en las coacciones de los huelguistas. Y sin embargo, es en el primer caso cuando el Estado observa los principios liberales, y no en el segundo. Lo mismo ocurre con la mayoría de las normas generales y permanentes que el Estado puede establecer respecto a la producción, tales como las ordenanzas sobre construcción o sobre las industrias: pueden ser acertadas o desacertadas en cada caso particular, pero no se oponen a los principios liberales en tanto se proyecten como permanentes y no se utilicen en favor o perjuicio de personas determinadas. Cierto que en estos ejemplos, aparte de los efectos a la larga, que no pueden predecirse, habrá también efectos a corto plazo sobre determinadas personas, que pueden claramente conocerse. Pero en esta clase de leyes los efectos a corto plazo no son (o por lo menos no deben ser), en general, la consideración orientadora. Cuando estos efectos inmediatos y previsibles ganan importancia en comparación con los efectos a largo plazo, nos aproximamos a la frontera donde la distinción, clara en principio, se hace borrosa en la práctica.

El Estado de Derecho sólo se desenvolvió conscientemente durante la era liberal, y es uno de sus mayores frutos, no sólo como salvaguardia, sino como encarnación legal de la libertad. Como Immanuel Kant lo dijo (y Voltaire lo había expre-

sado antes que él en términos casi idénticos), «el hombre es libre si sólo tiene que obedecer a las leyes y no a las personas». Pero como un vago ideal, ha existido por lo menos desde el tiempo de los romanos, y durante los siglos más próximos a nosotros jamás ha sido tan seriamente amenazado como lo es hoy. La idea de que no existe límite para el poder del legislador es, en parte, un resultado de la soberanía popular y el gobierno democrático. Se ha reforzado con la creencia en que el Estado de Derecho quedará salvaguardado si todos los actos del Estado están debidamente autorizados por la legislación. Pero esto es confundir completamente lo que el Estado de Derecho significa. Éste tiene poco que ver con la cuestión de si los actos del Estado son legales en sentido jurídico. Pueden serlo y, sin embargo, no sujetarse al Estado de Derecho. La circunstancia de tener alguien plena autoridad legal para actuar de la manera que actúa no da respuesta a la cuestión de si la ley le ha otorgado poder para actuar arbitrariamente o si la ley le prescribe inequívocamente lo que tiene que hacer. Puede ser muy cierto que Hitler obtuviera de una manera estrictamente constitucional sus ilimitados poderes y que todo lo que hace es, por consiguiente, legal en el sentido jurídico. Pero ¿quién concluiría de ello que todavía subsiste en Alemania un Estado de Derecho?

Decir que en una sociedad planificada no puede mantenerse el Estado de Derecho no equivale, pues, a decir que los actos del Estado sean ilegales o que aquélla sea necesariamente una sociedad sin ley. Significa tan sólo que el uso de los poderes coercitivos del Estado no estará ya limitado y determinado por normas preestablecidas. La ley puede y, para permitir una dirección central de la actividad económica, tiene que legalizar lo que de hecho sigue siendo una acción arbitraria. Si la ley dice que una cierta comisión u organismo puede hacer lo que guste, todo lo que aquella comisión u organismo haga es legal; pero no hay duda que sus actos no es-

tán sujetos a la supremacía de la ley. Dando al Estado poderes ilimitados, la norma más arbitraria puede legalizarse, y de esta manera una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable[3].

Si, por consiguiente, las leyes han de permitir a las autoridades dirigir la vida económica, deben otorgarles poderes para tomar e imponer decisiones en circunstancias que no pueden preverse y sobre principios que no pueden enunciarse en forma genérica. La consecuencia es que cuando la planificación se extiende, la delegación de poderes legislativos en diversas comisiones y organismos se hace mayor cada vez. Cuando, antes de la Primera Guerra Mundial, en una causa sobre la que el difunto lord Hewart llamó recientemente la atención, el juez Darling dijo «que hasta el año pasado no ha decretado el Parlamento que el Ministerio de Agricultura, al actuar como lo hace, no será más impugnable que el Parlamento mismo», referíase todavía a un caso raro. Después se ha convertido en el hecho diario. Constantemente se confieren los más amplios poderes a nuevos organismos que, sin estar sujetos a normas fijas, gozan de la más ilimitada discreción para regular esta o aquella actividad de las gentes.

3. El conflicto *no* está, pues, como a menudo se creyó equivocadamente en las discusiones del siglo XIX, entre libertad y ley. Como John Locke evidenció ya, no puede haber libertad sin ley. El conflicto está entre las diferentes clases de ley, tan diferentes que difícilmente pueden designarse por el mismo nombre. Una de ellas es la que entra en el Estado de Derecho principios generales sentados de antemano, «reglas del juego» que permiten al individuo prever cómo se utilizará el aparato coercitivo del Estado o lo que les está prohibido u obligado hacer, en determinadas circunstancias, a él y a sus conciudadanos. La otra especie de ley da de hecho poder a la autoridad para hacer lo que considere conveniente. Así, evidentemente, el Estado de Derecho no puede mantenerse en una democracia que decide resolver cualquier conflicto de intereses, no de acuerdo con las normas previamente establecidas, sino según «las circunstancias del caso».

El Estado de Derecho implica, pues, un límite al alcance de la legislación. Restringe ésta a aquella especie de normas generales que se conoce por ley formal, y excluye la legislación dirigida directamente a personas en particular o a facultar a alguien en el uso del poder coercitivo del Estado con miras a esa discriminación. Significa, no que todo sea regulado por ley, sino, contrariamente, que el poder coercitivo del Estado sólo puede usarse en casos definidos de antemano por la ley, y de tal manera que pueda preverse cómo será usado. Un particular precepto puede, pues, infringir la supremacía de la ley. Todo el que esté dispuesto a negarlo tendría que afirmar que si el Estado de Derecho prevalece hoy o no en Alemania, Italia o Rusia, depende de que los dictadores hayan obtenido o no su poder absoluto por medios constitucionales[4].

4. Otro ejemplo de infracción legislativa del Estado de Derecho es el *bill of attainder*, familiar en la historia inglesa. La forma que la supremacía de la ley adopta en el Derecho penal se expresa usualmente por el dicho latino *nulla poena sine lege*, no hay castigo sin una ley que expresamente lo prescriba. La esencia de esta regla consiste en que la ley ha de tener existencia como norma general antes de que surja el caso individual al que se aplique. Nadie aseguraría que cuando, en una famosa causa durante el reinado de Enrique VIII, el Parlamento resolvió con respecto al cocinero del obispo de Rochester, «que el llamado Richard Rose será quemado vivo, sin atender al privilegio de su condición eclesiástica», promulgó tal disposición bajo la supremacía de la ley. Pero si ésta ha llegado a ser una parte esencial del procedimiento penal en todos los países liberales, no puede mantenerse en los regímenes totalitarios. En éstos, como lo ha expresado muy bien E. B. Ashton, la máxima liberal se ha sustituido por el principio *nullum crimen sine poena*, ningún «crimen» quedará sin castigo, lo disponga o no la ley explícitamente. «Los derechos del Estado no terminan con el castigo de quienes quebrantan la ley. La comunidad tiene derecho a todo lo que considere necesario para la protección de sus intereses, y la observancia de la ley, tal como existe, es sólo una de las más elementales exigencias» (E. B. Ashton, *The Fascist, His State and Mind*, 1937, pág. 119). Lo que haya de entenderse como infracción de los «intereses de la comunidad» son, por supuesto, las autoridades quienes lo determinan.

Importa relativamente poco que, como en algunos países, las principales aplicaciones del Estado de Derecho se establezcan por una Carta de derechos o por un Código constitucional, o que el principio sea simplemente una firme tradición. Pero será fácil ver que, cualquiera que sea la forma adoptada, la admisión de estas limitaciones de los poderes legislativos implica el reconocimiento del derecho inalienable del individuo, de los derechos inviolables del hombre.

Es lamentable, pero característico de la confusión en que muchos de nuestros intelectuales han caído por la contradicción interior entre sus ideales, ver que un destacado defensor de la planificación central más amplia, Mr. H. G. Wells, haya escrito también una ardiente defensa de los derechos del hombre. Los derechos individuales que Mr. Wells espera salvar se verán obstruidos inevitablemente por la planificación que desea. Hasta cierto punto, parece advertir el dilema, y por eso los preceptos de su «Declaración de los Derechos del Hombre» resultan tan envueltos en distingos que pierden toda significación. Mientras, por ejemplo, su Declaración proclama que todo hombre «tendrá derecho a comprar y vender sin ninguna restricción discriminatoria todo aquello que pueda legalmente ser comprado y vendido», lo cual es excelente, inmediatamente invalida por completo el precepto al añadir que se aplica sólo a la compra y la venta «de aquellas cantidades y con aquellas limitaciones que sean compatibles con el bienestar común». Pero como, por supuesto, toda restricción alguna vez impuesta a la compra o la venta de cualquier cosa se estableció por considerarla necesaria para «el bien común», no hay en realidad restricción alguna que esta cláusula efectivamente impida, ni derecho individual que quede salvaguardado por ella. Si se toma otra cláusula fundamental, la Declaración sienta que toda persona «puede dedicarse a cualquier ocupación legal» y que «está autorizada para conseguir una ocupación pagada y para elegirla libremente siempre que tenga abierta una di-

versidad de ocupaciones». Pero no se indica quién decidirá si un particular empleo está «abierto» a una persona determinada, y el precepto agregado, según el cual «puede procurarse ocupación por sí misma, y su pretensión tiene que ser públicamente considerada, aceptada o negada», muestra que Mr. Wells piensa en una autoridad que a aquel hombre «autoriza» para una particular posición; lo cual ciertamente significa lo opuesto a la libre elección de un empleo. En cuanto a cómo se puede asegurar en un mundo planificado la «libertad de trasladarse de lugar y de emigrar», cuando no sólo los medios de comunicación y las divisas están intervenidos, sino planificada también la localización de las industrias; o cómo puede salvaguardarse la libertad de prensa cuando la oferta de papel y todos los canales de la distribución están intervenidos por la autoridad planificadora, son cuestiones para las que Mr. Wells tiene tan escasa respuesta como otro planificador cualquiera.

A este respecto muestran mucha mayor coherencia los más numerosos reformadores que, ya desde el comienzo del movimiento socialista, atacaron la idea «metafísica» de los derechos individuales e insistieron en que, en un mundo ordenado racionalmente, no habría derechos individuales, sino tan sólo deberes individuales. Ésta, en realidad, es la actitud hoy más corriente entre nuestros titulados progresistas, y pocas cosas exponen más a uno al reproche de ser un reaccionario que la protesta contra una medida por considerarla como una violación de los derechos del individuo. Incluso un periódico liberal como *The Economist* nos echaba en cara hace pocos años el ejemplo de Francia, nada menos, que habría aprendido la lección en virtud de la cual

> el gobierno democrático, no menos que la dictadura, debe tener siempre *[sic]* poderes plenarios *in posse*, sin sacrificar su carácter democrático y representativo. No existe un área de derechos individuales restrictiva que nunca puede ser tocada por el Estado por

medios administrativos, cualesquiera que sean las circunstancias. No existe límite al poder de regulación que puede y debe emplear un gobierno libremente elegido por el pueblo, y al cual pueda criticar plena y abiertamente una oposición.

Esto puede ser inevitable en tiempo de guerra, cuando, además, hasta la crítica libre y abierta tiene necesariamente que restringirse. Pero el «siempre» del párrafo citado no sugiere que *The Economist* lo considere como una lamentable necesidad de los tiempos de guerra. Y, sin embargo, como institución permanente, aquella idea es, en verdad, incompatible con el mantenimiento del Estado de Derecho, y lleva directamente al Estado totalitario. Pero es la idea que tienen que compartir todos los que desean que el Estado dirija la vida económica.

La experiencia de los diversos países de Europa central ha demostrado ampliamente hasta qué punto incluso el reconocimiento formal de los derechos individuales o de la igualdad de derechos de las minorías pierde toda significación en un Estado que se embarca en un control completo de la vida económica. Se ha demostrado allí que es posible seguir una política de cruel discriminación contra las minorías nacionales mediante el uso de conocidos instrumentos de la política económica, sin infringir siquiera la letra del estatuto de protección de los derechos de la minoría. Facilitó grandemente esta opresión por medio de la política económica el hecho de que ciertas industrias y actividades estaban en gran medida en manos de una minoría nacional, de manera que muchas disposiciones orientadas aparentemente contra una industria o clase se dirigían en realidad contra una minoría nacional. Pero las casi ilimitadas posibilidades para una política de discriminación y opresión proporcionadas por principios tan inocuos aparentemente como el «control oficial del desarrollo de las industrias» son bien patentes para todo el que desee ver cuáles son en la práctica las consecuencias políticas de la planificación.

7. La intervención económica y el totalitarismo

El control de la producción de riqueza es el control de la vida humana misma.

HILAIRE BELLOC

La mayoría de los planificadores que han considerado en serio los aspectos prácticos de su tarea apenas dudan que una economía dirigida tiene que marchar por líneas más o menos dictatoriales. Una consecuencia de las ideas que fundamentan la planificación central, demasiado evidente para no contar con el asentimiento general, es que el complejo sistema de actividades entrecruzadas, si va a ser dirigido en verdad conscientemente, tiene que serlo por un solo estado mayor de técnicos, y que la responsabilidad y el poder últimos tienen que estar en manos de un general en jefe, cuyas acciones no puedan estorbarse por procedimientos democráticos. El consuelo que nos ofrecen nuestros planificadores es que esta dirección autoritaria se aplicará «sólo» a las cuestiones económicas. Uno de los más destacados planificadores americanos, Mr. Stuart Chase, nos asegura, por ejemplo, que en una sociedad planificada la «democracia política puede mantenerse si afecta a todo menos a las cuestiones económicas». A la vez que se nos ofrecen estas seguridades, se nos sugiere corrientemente que cediendo la libertad en los aspectos que son, o deben ser, menos importantes de nuestras vidas, obtendremos mayor libertad para la prose-

cución de los valores supremos. Por esta razón, las gentes que aborrecen la idea de una dictadura política claman a menudo por un dictador en el campo económico.

Los argumentos usados apelan a nuestros mejores instintos y a menudo atraen a las mentes más finas. Si la planificación nos liberase realmente de los cuidados menos importantes y con ello facilitara nuestra vida material y elevara la espiritual, ¿quién querría empequeñecer este ideal? Si nuestras actividades económicas realmente concernieran sólo a los aspectos inferiores o incluso más sórdidos de la vida, sin duda tendríamos que empeñarnos a toda costa en la busca de un medio que nos relevara de la excesiva atención a los fines materiales y, entregados éstos al cuidado de alguna pieza de la máquina utilitaria, dejase libres nuestras mentes para las cosas más elevadas de la vida.

Por desgracia, la seguridad con que la gente cree que el poder ejercido sobre la vida económica es tan sólo un poder sobre materias de secundaria importancia, a lo cual se debe la ligereza con que se recibe la amenaza contra la libertad de nuestros actos económicos, carece completamente de fundamento. Es en gran parte una consecuencia de la errónea convicción de la existencia de fines estrictamente económicos separados de los restantes fines de la vida. Pero, aparte del caso patológico del avaro, no hay tal cosa. Los fines últimos de las actividades de los seres razonables nunca son económicos. Estrictamente hablando, no hay «móvil económico», sino tan sólo factores económicos que condicionan nuestros afanes por otros fines. Lo que en el lenguaje ordinario se llama equívocamente el «móvil económico», sólo significa el deseo de una oportunidad general, el deseo de adquirir poder para el logro de fines no especificados[1]. Si nos afanamos por el dinero, es porque nos ofrece las más amplias posibilidades de elección en el goce de los frutos de

1. Cf. L. Robbins, *The Economic Causes of War, 1939*. Apéndice.

nuestros esfuerzos. Como en la sociedad moderna sentimos a través de la limitación de nuestros ingresos en dinero las restricciones que nuestra relativa pobreza nos impone todavía, muchos han llegado a odiar al dinero, símbolo de estas restricciones. Pero esto es confundir la causa con el medio a través del cual se hace sentir una fuerza. Sería mucho más acertado decir que el dinero es uno de los mayores instrumentos de libertad que jamás haya inventado el hombre. Es el dinero lo que en la sociedad existente abre un asombroso campo de elección al pobre, un campo mayor que el que no hace muchas generaciones le estaba abierto al rico. Comprenderíamos mejor la significación de este servicio del dinero si considerásemos lo que realmente supondría que, como muchos socialistas característicamente proponen, el «móvil pecuniario» fuera largamente desplazado por «incentivos no económicos». Si todas las remuneraciones, en lugar de ser ofrecidas en dinero, se ofrecieran bajo la forma de privilegios o distinciones públicas, situaciones de poder sobre otros hombres, o mejor alojamiento o mejor alimentación, oportunidades para viajar o para educarse, ello no significaría sino que al perceptor no le estaba ya permitido elegir, y que quien fijase la remuneración determinaba no sólo su cuantía, sino también la forma particular en que había de disfrutarse.

Una vez que comprendemos que no hay móviles económicos separados y que una ganancia o una pérdida económica es simplemente una ganancia o una pérdida que no nos impide decidir cuáles de nuestras necesidades o deseos han de ser afectados, es más fácil ver el importante núcleo de verdad que encierra la creencia general en que las cuestiones económicas sólo afectan a los fines menos importantes de la vida, y comprender el desdén en que a menudo se tienen las consideraciones «simplemente» económicas. En cierto sentido, esto se justifica por entero en una economía de merca-

do; pero sólo en esa economía libre. En tanto podamos disponer libremente de nuestros ingresos y de todo lo que poseemos, la pérdida económica sólo nos podrá privar de los que consideremos como menos importantes entre los deseos que podíamos satisfacer. Una pérdida «simplemente» económica es de tal suerte que podemos hacer recaer sus efectos sobre nuestras necesidades menos importantes; pero cuando decimos que el valor de algo que hemos perdido es mucho mayor que su valor económico, o que no puede estimarse en términos económicos, significa que tenemos que soportar la pérdida allí donde ha recaído. Y lo mismo sucede con una ganancia económica. Los cambios económicos, en otras palabras, sólo afectan generalmente al borde, al «margen» de nuestras necesidades. Hay muchas cosas más importantes que ninguna de las que probablemente serán afectadas por las pérdidas o las ganancias económicas, cosas que para nosotros están muy por encima de los placeres e incluso por encima de muchas de las necesidades de la vida afectadas por las alzas y bajas económicas. Comparado con ellas, el «inmundo lucro», la cuestión de si estamos económicamente algo mejor o peor, parece de poca importancia. Esto hace creer a muchas gentes que una cosa que, como la planificación económica, afecta tan sólo a nuestros intereses económicos, no puede interferir seriamente con los valores más fundamentales de la vida.

Esto, sin embargo, es una conclusión errónea. Los valores económicos son menos importantes para nosotros que muchas otras cosas, precisamente porque en las cuestiones económicas tenemos libertad para decidir qué es para nosotros lo más y qué lo menos importante. O, como también podemos decir, porque en la sociedad actual somos *nosotros* quienes tenemos que resolver los problemas económicos de nuestras propias vidas. Estar sometidos a control en nuestra actividad económica significa estar siempre controlados si no declaramos nuestro objetivo particular. Pero como, al

declararlo, éste tiene que someterse también a aprobación, en realidad estamos intervenidos en todo.

La cuestión que plantea la planificación económica no consiste, pues, solamente en si podremos satisfacer en la forma preferida por nosotros lo que consideramos nuestras más o menos importantes necesidades. Está en si seremos nosotros quienes decidamos acerca de lo que es más y lo que es menos importante para nosotros mismos o si ello será decidido por el planificador. La planificación económica no afectaría sólo a aquellas de nuestras necesidades marginales que tenemos en la mente cuando hablamos con desprecio de lo simplemente económico. Significaría de hecho que, como individuos, no nos estaría ya permitido decidir qué es lo que consideramos como marginal.

La autoridad directora de toda la actividad económica intervendría no sólo la parte de nuestras vidas que afecta a las cosas inferiores: intervendría en la asignación de los medios limitados con que contamos para todas nuestras finalidades. Y quien controla toda la vida económica, controla los medios para todos nuestros fines y, por consiguiente, decide cuáles de éstos han de ser satisfechos y cuáles no. Ésta es realmente la cuestión crucial. El control económico no es sólo intervención de un sector de la vida humana que puede separarse del resto; es el control de los medios que sirven a todos nuestros fines, y quien tenga la intervención total de los medios determinará también a qué fines se destinarán, qué valores serán calificados como más altos y cuáles como más bajos: en resumen, qué deberán amar y procurarse los hombres. La planificación central significa que el problema económico ha de ser resuelto por la comunidad y no por el individuo; pero esto implica que tiene que ser también la comunidad, o, mejor dicho, sus representantes, quienes decidan acerca de la importancia relativa de las diferentes necesidades.

La supuesta liberación económica que los planificadores nos prometen significa precisamente que seremos relevados

de la necesidad de resolver nuestros propios problemas económicos, y que las penosas elecciones que éstos a menudo exigen serán hechas para nosotros. Como, bajo las condiciones modernas, para casi todas las cosas dependemos de los medios que nuestros semejantes nos suministran, la planificación económica exigiría la dirección de casi todo en nuestra vida. Difícilmente se encontrará un aspecto de ella, desde nuestras necesidades primarias hasta nuestras relaciones con la familia y los amigos, desde la naturaleza de nuestro trabajo hasta el empleo de nuestro ocio, en el que el planificador no ejercería su «intervención expresa»[2].

El poder del planificador sobre nuestras vidas privadas no sería menos completo si decidiera no ejercerlo por un control directo de nuestro consumo. Aunque una sociedad planificada tendría probablemente que emplear con cierta extensión el racionamiento y otros expedientes análogos, el poder del planificador sobre nuestras vidas privadas no depende de esto, y difícilmente sería menos efectivo si el consumidor fuera nominalmente libre para gastar sus ingresos

2. En ninguna parte se ilustra mejor que en el ámbito del cambio exterior la extensión de la intervención sobre la vida entera que confiere el control económico. A primera vista, nada parece afectar menos a la vida privada que la intervención oficial de las operaciones sobre el cambio exterior, y la mayoría de la gente consideraría su introducción con completa indiferencia. Y, sin embargo, la experiencia de la mayoría de los países continentales ha hecho que la gente reflexiva considere este paso como un avance decisivo en el camino del totalitarismo y de la supresión de la libertad individual. Es, en efecto, la entrega completa del individuo a la tiranía del Estado; la supresión final de todos los medios de escape, no sólo para el rico, sino para todos. Cuando el individuo ya no tiene libertad para viajar, ya no tiene libertad para comprar libros o periódicos extranjeros; cuando todos los medios de contacto exterior pueden limitarse a los que aprueba la opinión oficial o son considerados por ella como necesarios, el dominio efectivo de la opinión es mucho mayor que el que jamás ejerció ninguno de los gobiernos absolutistas de los siglos XVII y XVIII.

conforme a sus gustos. La fuente de su poder sobre todo el consumo, que en una sociedad planificada poseería la autoridad, radicaría en su control sobre la producción.

Nuestra libertad de elección en una sociedad en régimen de competencia se funda en que, si una persona rehúsa la satisfacción de nuestros deseos, podemos volvernos a otra. Pero si nos enfrentamos con un monopolista, estamos a merced suya. Y una autoridad que dirigiese todo el sistema económico sería el más poderoso monopolista concebible. Si bien no tendríamos probablemente que temer de esta autoridad que explotase su poder como un monopolista privado lo haría, si bien su propósito no sería presumiblemente la consecución de la máxima ganancia financiera, gozaría, sin embargo, de completo poder para decidir sobre lo que se nos diera y en qué condiciones. No sólo decidiría las mercancías y servicios disponibles y sus cantidades; podría dirigir su distribución por distritos y grupos, y podría, si lo quisiera, discriminar entre personas hasta el grado en que lo pretendiese. Si recordamos por qué defiende mucha gente la planificación, ¿podría quedar mucha duda de que este poder sería utilizado para los fines que la autoridad aprobase y para impedir la consecución de los fines que desaprobase?

El poder conferido por el control de la producción y los precios es casi ilimitado. En una sociedad en régimen de competencia, los precios que tenemos que pagar por una cosa –es decir, la relación en que podemos cambiar una cosa por otra– dependen de las cantidades de aquellas otras cosas de las cuales privamos a los demás miembros de la sociedad por tomar nosotros una. Este precio no está determinado por la voluntad consciente de nadie. Y si un camino para la consecución de nuestros fines nos resulta demasiado caro, tenemos libertad para intentar otros caminos. Los obstáculos en nuestra vía no son obra de alguien que desaprueba nuestros fines, sino la consecuencia de desearse en otra parte los mismos medios. En una economía dirigida, donde la

autoridad vigila los fines pretendidos, es seguro que ésta usaría sus poderes para fomentar algunos fines y para evitar la realización de otros. No nuestra propia opinión acerca de lo que nos debe agradar o desagradar, sino la de alguna otra persona, determinaría lo que hiciésemos. Y como la autoridad tendría poder para frustrar todos los esfuerzos encaminados a eludir su guía, casi con tanta eficacia intervendría en lo que consumimos como si directamente nos ordenase la forma de gastar nuestros ingresos.

La voluntad oficial conformaría y «guiaría» nuestras vidas diarias, no sólo en nuestra capacidad de consumidores y aun ni siquiera principalmente en cuanto tales. Lo haría mucho más en cuanto a nuestra situación como productores. Estos dos aspectos de nuestra vida no pueden separarse; y como para la mayoría de nosotros el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo es una gran parte de nuestra vida entera, y nuestro empleo también determina comúnmente el lugar donde vivimos y la gente entre quien vivimos, cierta libertad en la elección de nuestro trabajo es, probablemente, de mucha mayor importancia para nuestra felicidad que la libertad para gastar durante las horas de ocio nuestros ingresos.

Es cierto, sin duda, que hasta en el mejor de los mundos estaría muy limitada esta libertad. Pocas gentes han dispuesto jamás de abundantes opciones en cuanto a ocupación. Pero lo que importa es contar con alguna opción; es que no estemos absolutamente atados a un determinado empleo elegido para nosotros o que elegimos en el pasado, y que si una situación se nos hace verdaderamente intolerable, o ponemos nuestro amor en otra, haya casi siempre un camino para el capacitado, que al precio de algún sacrificio le permita lograr su objetivo. Nada hace una situación tan insoportable como el saber que ningún esfuerzo nuestro puede cambiarla; y aunque jamás tuviéramos la fuerza de ánimo para hacer el sacrificio necesario, bastaría saber que podría-

mos escapar si pusiéramos en ello el esfuerzo suficiente, para hacer soportables situaciones que de otro modo son intolerables.

No es esto decir que a tal respecto todo marche a la perfección en nuestro mundo actual, o que marchó así en el pasado más liberal, y que no pueda hacerse mucho para mejorar las oportunidades de elección abiertas a la gente. Aquí y en todas partes, el Estado puede hacer mucho para ayudar a la difusión de los conocimientos y la información y para favorecer la movilidad. Pero lo importante es que la especie de acción oficial que en verdad aumentaría las oportunidades es precisamente casi la opuesta a la «planificación» que ahora más se defiende y practica. La mayoría de los planificadores, es cierto, prometen que en el nuevo mundo planificado la libre elección de empleo será escrupulosamente mantenida y hasta aumentada. Pero en esto prometen mucho más que lo que pueden cumplir. Si quieren planificar tienen que controlar el ingreso en las diferentes actividades y ocupaciones, o las condiciones de remuneración, o ambas cosas. En casi todos los ejemplos de planificación conocidos, el establecimiento de estas intervenciones y restricciones se contó entre las primeras medidas tomadas. Y si este control se practicara universalmente y lo ejerciera una sola autoridad planificadora, no se necesita mucha imaginación para ver en qué vendría a parar la «libre elección de empleo» prometida. La «libertad de elección» sería puramente ficticia, una simple promesa de no practicar discriminación, cuando la naturaleza del caso exige la práctica de la discriminación y cuando todo lo que uno podría esperar sería que la selección se basase sobre lo que la autoridad considerara fundamentos objetivos.

Poca diferencia habría en que la autoridad planificadora se limitase a fijar las condiciones de empleo e intentase regular el número ajustando aquellas condiciones. Determinando la remuneración, no habría de hecho en muchos empleos

menos gentes impedidas de entrar que si específicamente se las excluyera. Una muchacha tosca, que desea vehementemente hacerse dependienta de comercio; un muchacho débil, que ha puesto su corazón en un empleo para el cual su debilidad es un obstáculo, y, en general, los al parecer menos capaces o menos adecuados no son necesariamente excluidos en una sociedad en régimen de competencia. Si ellos desean suficientemente el puesto, pueden con frecuencia obtenerlo mediante un sacrificio económico y triunfar más tarde gracias a cualidades que al principio no eran patentes. Pero cuando la autoridad fija la remuneración para toda una categoría y la selección de los candidatos se realiza con arreglo a pruebas objetivas, la fuerza del deseo de una ocupación cuenta muy poco. La persona cuyas cualificaciones no son del tipo estándar o cuyo temperamento no es de la clase común, no será ya capaz de lograr condiciones especiales de un patrono cuyas preferencias se ajusten a las especiales necesidades de aquél. La persona que a un trabajo rutinario prefiere una jornada irregular o una existencia bohemia, con menores y quizá inciertos ingresos, no tendrá ya elección. Las condiciones serán, sin excepción, lo que en cierta medida son inevitablemente en una organización numerosa, o aún peores, porque no permitirán ninguna posibilidad de escape. No seremos ya libres para conducirnos racional y eficientemente tan sólo donde y cuando nos parezca oportuno, tendremos que ajustarnos todos a las normas que la autoridad planificadora deberá fijar para simplificar su tarea. Para poder desempeñar esta inmensa tarea tendrá que reducir la diversidad de las capacidades e inclinaciones humanas a unas cuantas categorías de unidades fácilmente intercambiables y deliberadamente despreciará las diferencias personales menores. Aunque el fin declarado de la planificación fuese que el hombre deje de ser un simple medio, de hecho –como sería imposible tener en cuenta en el plan todas las preferencias y aversiones individuales– el individuo llegaría

a ser más que nunca un simple medio, utilizado por la autoridad en servicio de abstracciones tales como el «bienestar social» o el «bien común».

Un hecho cuya importancia difícilmente puede exagerarse es que en una sociedad en régimen de competencia la mayoría de las cosas pueden obtenerse por un precio; aunque a menudo sea un precio cruelmente alto el que deba pagarse. La alternativa no es, sin embargo, la libertad completa de elección, sino órdenes y prohibiciones que deben obedecerse y, en último extremo, el favor de los poderosos.

Significativo de la confusión predominante en estas cuestiones es que se haya convertido en un motivo de reproche la posibilidad de lograrse por un precio casi todo, en una sociedad competitiva. Cuando las gentes que protestan contra el hecho de estar los más altos valores de la vida ligados al «bolsillo», lo cual nos impide sacrificar nuestras necesidades inferiores para preservar los valores más altos, reclaman que se nos dé hecha la elección, plantean una exigencia bastante peculiar que escasamente testimonia un gran respeto por la dignidad del individuo. A menudo, la vida y la salud, la belleza y la virtud, el honor y la tranquilidad de espíritu sólo pueden preservarse mediante un considerable coste material, y alguien tiene que decidir la opción. Ello es tan innegable como el que no todos estamos siempre preparados para hacer el sacrificio material necesario a fin de proteger contra todo daño aquellos valores más altos. Para tomar un solo ejemplo: podríamos reducir a cero las muertes por accidentes de automóvil si estuviésemos dispuestos –de no haber otra manera– a soportar el coste de suprimir los automóviles. Y lo mismo es cierto para otros miles de casos en que constantemente arriesgamos vida y salud y todos los puros valores del espíritu, nuestros y de nuestros semejantes, para conseguir lo que a la vez designamos despectivamente como nuestro confort material. Pero no puede ser de

otra manera, puesto que todos nuestros fines contienden entre sí por la posesión de los mismos medios; y sólo nos afanaríamos por estos valores absolutos si nada pudiera comprometerlos.

No es para sorprender que la gente desee verse relevada de la penosa elección que la dura realidad impone a menudo. Pero pocos desean verse descargados de la misma, si es de manera que otros decidan por ellos. Lo que la gente desea es que no haga falta elección alguna, y está demasiado inclinada a creer que la elección no es realmente necesaria, que únicamente le está impuesta por el particular sistema económico bajo el cual vivimos. Lo que en realidad la irrita es que exista un problema económico.

El anhelo de la gente de creer que realmente no hay ya un problema económico lo ve confirmado en las irresponsables manifestaciones acerca de la «plétora potencial»; la cual, si fuera cierta, significaría evidentemente la inexistencia de un problema económico que hace la elección inevitable. Pero aunque este cepo ha servido bajo diversos nombres a la propaganda socialista desde que el socialismo existe, sigue siendo una falsedad palpable como lo fue cuando se utilizó por vez primera hace más de cien años. En todo este tiempo, ninguno de los muchos que lo han empleado supo ofrecer un plan realizable para lograr el incremento de la producción necesario a fin de abolir, siquiera en la Europa occidental, lo que consideramos como pobreza, para no hablar del mundo entero. El lector puede tener por seguro que todo el que habla de la «plétora potencial» es deshonesto o no sabe lo que dice[3].

3. Para justificar estas fuertes palabras pueden citarse las conclusiones siguientes, a las que ha llegado Mr. Colin Clark, uno de los más conocidos entre los jóvenes especialistas en estadística económica y hombre de opiniones indudablemente progresistas y de actitud estrictamente científica, en su *Conditions of Economic Progress* (1940, págs. 3-4): Las «frecuentes afirmaciones acerca de la "pobreza en el seno de la abundancia" y de cómo los problemas de la producción estarían ya resueltos

Y, sin embargo, es esta falsa esperanza, tanto como cualquier otra cosa, lo que nos lleva por el camino de la planificación.

Mientras las corrientes populares todavía sacan partido de esta falsa creencia, la pretensión de que una economía planificada permitiría un producto sustancialmente mayor que el sistema de la competencia va siendo progresivamente abandonada por la mayoría de los que estudian este problema. Incluso muchos economistas de tendencia socialista que han estudiado seriamente los problemas de la planificación central se contentan ahora con esperar que una sociedad planificada sea tan eficiente como un sistema de competencia; ya no defienden la planificación por su superior productividad, sino porque permitiría asegurar una distribución más justa y equitativa de la riqueza. Éste es, por lo demás, el único argumento en favor de la planificación en que puede insistirse seriamente. Es indiscutible que si deseamos asegurar una distribución de la riqueza que se ajuste a algún patrón previamente establecido, si deseamos decidir expresamente qué ha de poseer cada cual, tenemos que planificar el sistema económico entero. Pero queda por averiguar si el precio que habríamos de pagar por la realización del ideal de justicia de alguien no traería más opresión y des-

si entendiésemos los de la distribución han dado lugar al más falso entre los modernos clichés... Sólo en los Estados Unidos es una cuestión de considerable importancia la escasa utilización de la capacidad productiva, aunque en ciertos años haya alcanzado también alguna importancia en la Gran Bretaña, Alemania y Francia; mas para la mayor parte del mundo aquélla está completamente dominada por el hecho, más importante, de que sea tan poco lo que puede producirse con un pleno empleo de los recursos productivos. La era de la plétora tardará aún mucho en llegar... Si el paro evitable se eliminara a lo largo del ciclo económico, ello significaría una mejoría notable en el nivel de vida de la población de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista del mundo entero, *sólo significaría una pequeña asistencia para la resolución* del problema, mucho mayor, de elevar la renta real de la masa de la población del mundo hasta algo que se acerque a un nivel civilizado».

contento que el que jamás causó el tan calumniado libre juego de las fuerzas económicas.

Sufriríamos una seria desilusión si para estos temores buscásemos consuelo en considerar que la adopción de un plan central no significaría más que un retorno, tras una breve etapa de economía libre, a las ataduras y regulaciones que han gobernado la actividad económica a través de la mayoría de las edades, y que, por consiguiente, las violaciones de la libertad personal no tendrían por qué ser mayores que lo fueron antes de la edad del *laissez faire*. Es una peligrosa ilusión. Incluso durante los períodos de la historia europea en que la reglamentación de la vida económica llegó más lejos, apenas si pasó de la creación de un sistema general y semipermanente de reglas dentro del cual el individuo conservó una amplia esfera de libertad. El mecanismo de control entonces disponible sólo habría servido para imponer directivas muy generales. Y aun allí donde la intervención fue más completa, sólo alcanzó a aquellas actividades de la persona por las que ésta participaba en la división social del trabajo. En la esfera, mucho más amplia entonces, en que vivía de sus propios productos, era libre para actuar conforme a su elección.

La situación es ahora diferente por completo. Durante la era liberal, la progresiva división del trabajo ha creado una situación en la que casi todas nuestras actividades son parte de un proceso social. Se trata de una evolución sin posible retorno, porque sólo gracias a ella puede una población tan acrecentada mantenerse en unos niveles como los actuales. Por consiguiente, la sustitución de la competencia por la planificación centralizada requeriría la dirección central de una parte de nuestras vidas mucho mayor de lo que jamás se intentó antes. No podría detenerse en lo que consideramos como nuestras actividades económicas, porque ahora casi toda nuestra vida depende de las actividades económicas de

otras personas[4]. La pasión por la «satisfacción colectiva de nuestras necesidades», con la que nuestros socialistas tan bien han preparado el camino al totalitarismo, y que desea vernos satisfacer nuestros placeres, lo mismo que nuestras necesidades, en el tiempo preceptuado y en la forma prescrita, tiene, por supuesto, la intención de ser, en parte, un medio de educación política. Pero es también un resultado de las exigencias de la planificación, que consiste esencialmente en privarnos de toda elección, para darnos lo que mejor se ajuste al plan y lo determinado en aquel momento por el plan.

Se dice a menudo que la libertad política carece de significado sin libertad económica. Esto es muy verdad, pero en un sentido casi opuesto al que dan a la frase nuestros planificadores. La libertad económica que es el requisito previo de cualquier otra libertad no puede ser la libertad frente a toda preocupación económica, como nos prometen los socialistas, que sólo podría obtenerse relevando al individuo de la necesidad y, a la vez, de la facultad de elegir; tiene que ser la libertad de nuestra actividad económica, que, con el derecho a elegir, acarrea inevitablemente el riesgo y la responsabilidad de este derecho.

4. No es casualidad que en los países totalitarios, tanto en Rusia como en Alemania o Italia, se haya convertido en un problema de planificación el modo de organizar el ocio de las gentes. Los alemanes han llegado incluso a inventar para este problema el nombre horrible y en sí contradictorio de *Freizeitgestaltung* (literalmente: 'la configuración del tiempo libre'), como si aún pudiera llamarse «tiempo libre» al que ha de gastarse en una forma dispuesta autoritariamente.

8. ¿Quién, a quién?

> La más sublime oportunidad que alguna vez tuvo el mundo se malogró porque la pasión por la igualdad hizo vana la esperanza de libertad.
>
> LORD ACTON

Es significativo que una de las objeciones más comunes contra el sistema de la competencia consiste en decir que es «ciega». No es inoportuno recordar que para los antiguos la ceguera era un atributo de su diosa de la justicia. Aunque la competencia y la justicia tengan poco más en común, es un mérito, tanto de la competencia como de la justicia, que no hacen acepción de personas. El hecho de ser imposible pronosticar quién alcanzará la fortuna o a quién azotará la desgracia, el que los premios y castigos no se repartan conforme a las opiniones de alguien acerca de los méritos o deméritos de las diferentes personas, sino que dependan de la capacidad y la suerte de éstas, tiene tanta importancia como que, al establecer las leyes, no seamos capaces de predecir qué personas en particular ganarán y quiénes perderán con su aplicación. Y no pierde rigor este hecho porque en la competencia la ocasión y la suerte sean a menudo tan importantes como la destreza y la sagacidad en la determinación del destino de las personas.

Los términos de la elección que nos está abierta no son un sistema en el que todos tendrán lo que merezcan, de acuerdo con algún patrón absoluto y universal de justicia, y otro

en el que las participaciones individuales están determinadas parcialmente por accidente o buena o mala suerte, sino un sistema en el que es la voluntad de unas cuantas personas la que decide lo que cada uno recibirá, y otro en el que ello depende, por lo menos en parte, de la capacidad y actividad de los interesados y, en parte, de circunstancias imprevisibles. No pierde esto importancia porque en un sistema de libertad de empresa las oportunidades no sean iguales, dado que este sistema descansa necesariamente sobre la propiedad privada y (aunque, quizá, no con la misma necesidad) la herencia, con las diferencias que éstas crean en cuanto a oportunidades. Hay, pues, un fuerte motivo para reducir esta desigualdad de oportunidades hasta donde las diferencias congénitas lo permitan y en la medida en que sea posible hacerlo sin destruir el carácter impersonal del proceso por el cual cada uno corre su suerte, y los criterios de unas personas sobre lo justo y deseable no predominan sobre los de otras.

El hecho de ser mucho más restringidas, en una sociedad en régimen de competencia, las oportunidades abiertas al pobre que las ofrecidas al rico, no impide que en esta sociedad el pobre tenga mucha más libertad que la persona dotada de un confort material mucho mayor en una sociedad diferente. Aunque, bajo la competencia, la probabilidad de que un hombre que empieza pobre alcance una gran riqueza es mucho menor que la que tiene el hombre que ha heredado propiedad, no sólo aquél tiene alguna probabilidad, sino que el sistema de competencia es el único donde aquél sólo depende de sí mismo y no de los favores del poderoso, y donde nadie puede impedir que un hombre intente alcanzar dicho resultado. Sólo porque hemos olvidado lo que significa la falta de libertad, despreciamos a menudo el hecho patente de que, en cualquier sentido real, un mal pagado trabajador no calificado tiene mucha más libertad en Inglaterra para disponer de su vida que muchos pequeños empre-

sarios en Alemania o un mucho mejor pagado ingeniero o gerente en Rusia. En cuanto a cambiar de quehacer o de lugar de residencia, a profesar ciertas opiniones o gastar su ocio de una particular manera, aunque a veces pueda ser alto el precio que ha de pagar por seguir las propias inclinaciones y a muchos parezca demasiado elevado, no hay impedimentos absolutos, no hay peligros para la seguridad corporal y la libertad que le aten por la fuerza bruta a la tarea y al lugar asignados por un superior.

Es cierto que el ideal de justicia de la mayor parte de los socialistas se satisfaría con abolir tan sólo las rentas privadas procedentes de la propiedad, aunque las diferencias entre las rentas ganadas por las diferentes personas siguieran como ahora[1]. Lo que estas personas olvidan es que, al transferir al Estado toda la propiedad de los medios de producción, le colocan en una posición en que sus actos determinan, de hecho, todas las demás rentas. El poder dado así al Estado y la demanda de que el Estado lo utilice para «planificar» no significa sino que éste lo use con pleno conocimiento de todos estos efectos.

1. Es probable que sobrestimemos habitualmente la parte que en la desigualdad de las rentas se debe principalmente a los ingresos derivados de la propiedad, y, por consiguiente, la proporción en que se reducirían las mayores desigualdades si las rentas de propiedad se aboliesen. La escasa información que poseemos acerca de la distribución de las rentas en la Rusia soviética no indica que las desigualdades sean sustancialmente menores que en una sociedad capitalista. Max Eastman *(The End of Socialism in Russia,* 1937, págs. 30-34) da alguna información procedente de fuentes oficiales rusas que sugiere que la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos pagados en Rusia es del mismo orden de magnitud (del orden de 50 a 1) que en los Estados Unidos; y Leon Trotsky, según un artículo citado por James Burnham *(The Managerial Revolution,* 1941, pág. 43), estimó, no más allá de 1939, que «el 11 o 12 por 100 superior de la población soviética recibe ahora aproximadamente el 50 por 100 de la renta nacional. Esta diferencia es más aguda que en los Estados Unidos, donde el 10 por 100 más alto de la población recibe aproximadamente el 35 por 100 de la renta nacional».

Creer que el poder así conferido al Estado supone simplemente transferírselo de alguien, es un error. Se trata de un poder de nueva creación, que nadie poseería en una sociedad en régimen de competencia. En tanto que la propiedad esté dividida entre muchos poseedores, ninguno de ellos, actuando independientemente, tiene poder exclusivo para determinar la renta y la posición de alguien en particular; nadie está ligado a él si no es porque él puede ofrecer mejores condiciones que ninguna otra persona.

Nuestra generación ha olvidado que el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quienes no la tienen. No hay quien tenga poder completo sobre nosotros, y, como individuos, podemos decidir, en lo que hace a nosotros mismos, gracias tan sólo a que el dominio de los medios de producción está dividido entre muchas personas que actúan independientemente. Si todos los medios de producción estuvieran en una sola mano, fuese nominalmente la de la «sociedad» o fuese la de un dictador, quien ejerciese este dominio tendría un poder completo sobre nosotros. Nadie pondrá seriamente en duda que un miembro de una pequeña minoría racial o religiosa sería más libre sin propiedad, si sus compañeros de comunidad disponían de ella y estaban, por tanto, en condiciones de darle empleo, que lo sería si se hubiera abolido la propiedad privada y se le hiciese propietario de una participación nominal en la propiedad común. Y el poder que un multimillonario, que puede ser mi vecino y quizá mi patrono, tiene sobre mí, ¿no es mucho menor que el que poseería el más pequeño funcionario que manejase el poder coercitivo del Estado, y a cuya discreción estaría sometida mi manera de vivir o trabajar? ¿Y quién negará que un mundo donde los ricos son poderosos es, sin embargo, mejor que aquel donde solamente puede adquirir riquezas el que ya es poderoso?

Es patético, pero a la vez alentador, ver a un viejo comunista tan prominente como Mr. Max Eastman redescubrir esta verdad:

Me parece evidente ahora [escribe en un reciente artículo] –aunque he tardado, debo decirlo, en llegar a esta conclusión– que la institución de la propiedad privada es una de las principales cosas que han dado al hombre aquella limitada cantidad de libertad e igualdad que Marx esperaba hacer infinita aboliendo esta institución. Lo extraño es que Marx fue el primero en verlo. Él fue quien nos enseñó, mirando hacia atrás, que el desarrollo del capitalismo privado, con su mercado libre, ha sido una condición previa para el desarrollo de todas nuestras libertades democráticas. Jamás se le ocurrió, mirando hacia adelante, que si fue así, estas otras libertades pudieran desaparecer con la abolición de la libertad de mercado[2].

Se dice a veces, en respuesta a estos temores, que no habría motivo para que el planificador determinase las rentas de los individuos. Las dificultades políticas y sociales que lleva consigo decidir la participación de las diferentes personas en la renta nacional son tan evidentes, que incluso el planificador más inveterado dudaría mucho antes de cargar con esta tarea a cualquier autoridad. Probablemente, todo el que comprende lo que ello envuelve preferiría confinar la planificación a la producción, usarla sólo para asegurar una «organización racional de la industria», abandonando, en todo lo posible, la distribución de las rentas a las fuerzas impersonales. Aunque es imposible dirigir la industria sin ejercer alguna influencia sobre la distribución, y aunque ningún planificador desearía entregar enteramente la distribución a las fuerzas del mercado, todos ellos preferirían, probablemente, limitarse a vigilar para que esta distribución se conformase con ciertas reglas generales de equidad y justicia, para que se evitasen desigualdades extremas y para que la rela-

2. Max Eastman, *The Reader's Digest,* julio de 1941, pág. 39.

ción entre las remuneraciones de las principales clases de la población fuese justa, sin cargar con la responsabilidad de la posición de cada individuo en particular dentro de su clase o de las gradaciones o diferenciaciones entre pequeños grupos y entre individuos.

Ya hemos visto que la estrecha interdependencia de todos los fenómenos económicos hace difícil detener la planificación justamente en el punto deseado, y que, una vez obstruido allende cierto límite el libre juego del mercado, el planificador se verá obligado a extender sus intervenciones hasta que lo abarquen todo. Estas consideraciones económicas, que explican por qué es imposible parar el control deliberado allí justamente donde se desearía, se ven grandemente reforzadas por ciertas tendencias políticas y sociales cuya influencia se hace sentir crecientemente conforme se extiende la planificación.

A medida que se hace más cierto, y más se reconoce que la posición del individuo no está determinada por fuerzas impersonales, ni como resultado de los esfuerzos de muchos en competencia, sino por la deliberada decisión de la autoridad, la actitud de las gentes respecto a su posición en el orden social cambia necesariamente. Siempre existirán desigualdades que parecerán injustas a quienes las padecen, contrariedades que se tendrán por inmerecidas y golpes de la desgracia que quienes los sufren no han merecido. Pero cuando estas cosas ocurren en una sociedad deliberadamente dirigida, la reacción de las gentes será muy distinta que cuando no hay elección consciente por parte de nadie. La desigualdad se soporta, sin duda, mejor y afecta mucho menos a la dignidad de la persona si está determinada por fuerzas impersonales que cuando se debe al designio de alguien. En una sociedad en régimen de competencia no hay menosprecio para una persona, ni ofensa para su dignidad por ser despedida de una empresa particular que ya no necesita sus servicios o que no puede ofrecerle un mejor em-

pleo. Cierto es que en los períodos de prolongado paro en masa el efecto sobre muchas personas puede ser muy diferente, pero hay otros y mejores métodos que la dirección centralizada para prevenir esta calamidad. Mas el paro o la pérdida de renta a que siempre se verá sometido alguien en cualquier sociedad es, sin duda, menos degradante si resulta de la mala suerte y no ha sido impuesto deliberadamente por la autoridad. Por amargo que sea el trance, lo sería mucho más en una sociedad planificada. En ella alguien tendría que decidir no sólo si una persona es necesaria en una determinada ocupación, sino incluso si es útil para algo y hasta qué punto lo es. Su posición en la vida le sería asignada por alguien.

Si bien la gente estará dispuesta a sufrir lo que a cualquiera le pueda suceder, no estará tan fácilmente dispuesta a sufrir lo que sea el resultado de la decisión de una autoridad. Será desagradable sentirse un simple diente en una máquina impersonal; pero es infinitamente peor que no podamos abandonarla, que estemos atados a nuestro sitio y a los superiores que han sido escogidos para nosotros. El descontento de cada uno con su suerte crecerá, inevitablemente, al adquirir conciencia de ser el resultado de una deliberada decisión humana.

Una vez el Estado se ha embarcado en la planificación en obsequio a la justicia, no puede rehusar la responsabilidad por la suerte o la posición de cualquier persona. En una sociedad planificada todos sabríamos que estábamos mejor o peor que otros, no por circunstancias que nadie domina y que es imposible prever con exactitud, sino porque alguna autoridad lo quiso. Y todos nuestros esfuerzos dirigidos a mejorar nuestra posición tendrían como fin, no el de prever las circunstancias que no podemos dominar y prepararnos para ellas lo mejor que supiéramos, sino el de inclinar en nuestro favor a la autoridad que goza de todo el poder. La pesadilla de todos los pensadores políticos ingleses del si-

glo XIX: el Estado en que «ningún camino para la riqueza ni el honor existiría, salvo a través del Gobierno»[3], se convertiría en realidad hasta un grado que ellos jamás hubieran imaginado; pero que hoy es un hecho bastante familiar en algunos países que después entraron en el totalitarismo.

Tan pronto como el Estado toma sobre sí la tarea de planificar la vida económica entera, el problema de la situación que merece cada individuo y grupo se convierte, inevitablemente, en el problema político central. Como sólo el poder coercitivo del Estado decidirá lo que tendrá cada uno, el único poder que merece la pena será la participación en el ejercicio de este poder directivo. No habrá cuestiones económicas o sociales que no sean cuestiones políticas, en el sentido de depender exclusivamente su solución de quién sea quien disfruta el poder coercitivo, a quién pertenecen las opiniones que prevalecerán en cada ocasión. Creo que fue el propio Lenin quien introdujo en Rusia la famosa frase «¿Quién, a quién?», durante los primeros años del dominio soviético, frase en la que el pueblo resumió el problema universal de una sociedad socialista[4]. ¿Quién planifica a quién? ¿Quién dirige y domina a quién? ¿Quién asigna a los demás su puesto en la vida y quién tendrá lo que es suyo porque otros se lo han adjudicado? Éstas son, necesariamente, las cuestiones esenciales, que sólo podrá decidir el poder supremo.

Más recientemente, un escritor político americano ha ampliado la frase de Lenin afirmando que el problema de todo Estado es: «¿Quién gana?, ¿qué, cuándo y cómo lo gana?» En cierto sentido, esto no es falso. Que todo gobierno influye sobre la posición relativa de las diferentes perso-

3. Las palabras son del joven Disraeli.
4. Cf. M. Muggeridge, *Winter in Moscow*, 1934; A. Feiler: *The Experiment of Bolshevism*, 1930.

nas y que apenas hay un aspecto de nuestra vida que, bajo cualquier sistema, no sea afectado por la acción del Estado, es, sin duda, cierto. En cuanto el Estado hace algo, su acción provoca siempre algún efecto sobre «quién gana» y sobre «qué, cuándo y cómo lo gana».

Es preciso, sin embargo, sentar dos distinciones fundamentales: primero, pueden disponerse medidas particulares sin saberse cómo afectarán a personas en particular y sin proponerse particulares efectos. Ya hemos discutido este punto. Segundo, la amplitud de las actividades del Estado es lo que decide si todo lo que cualquier persona obtiene en cualquier momento depende del Estado, o si la influencia de éste se confina a que algunas personas obtengan algo, de alguna manera, en algún momento. En esto descansa toda la diferencia entre un sistema libre y uno totalitario.

Ilustra de manera característica el contraste entre un sistema liberal y uno totalmente planificado la común lamentación de nazis y socialistas por las «artificiales separaciones de la economía y la política» y su demanda igualmente común, del predominio de la política sobre la economía. Probablemente, estas frases no sólo expresan que ahora les está permitido a las fuerzas económicas trabajar para fines que no forman parte de la política del gobierno, sino también que el poder económico puede usarse con independencia de la dirección del gobierno y para fines que el gobierno puede no aprobar. Pero la alternativa no es simplemente que haya un solo poder, sino que este poder único, el grupo dirigente, domine todas las finalidades humanas y, en particular, que disponga de un completo poder sobre la posición de cada individuo en la sociedad.

Es evidente que un gobierno que emprenda la dirección de la actividad económica usará su poder para realizar el ideal de justicia distributiva de alguien. Pero, ¿cómo puede utilizar y cómo utilizará este poder? ¿Qué principios le guiarán o

deberán guiarle? ¿Hay una contestación definida para las innumerables cuestiones de méritos relativos que surgirán y que habrán de resolverse expresamente? ¿Hay una escala de valores que pudiese contar con la conformidad de las gentes razonables, que justificaría un nuevo orden jerárquico de la sociedad y presentaría probabilidades de satisfacer las demandas de justicia?

Sólo hay un principio general, una norma simple, que podría, ciertamente, proporcionar una respuesta definida para todas estas cuestiones: la igualdad, la completa y absoluta igualdad de todos los individuos en todos los puntos que dependan de la intervención humana. Si la mayoría la considerase deseable (aparte de la cuestión de si sería practicable, es decir, si proporcionaría incentivos adecuados), daría a la vaga idea de la justicia distributiva un claro significado y proporcionaría al planificador una guía concreta. Pero está completamente fuera de la realidad suponer que la gente, en general, considera deseable una igualdad mecánica de esta clase. Ningún movimiento socialista que ha propugnado una igualdad completa ganó jamás un apoyo sustancial. Lo que el socialismo prometió no fue una distribución absolutamente igualitaria, sino una más justa y más equitativa. No la igualdad en sentido absoluto, sino una «mayor igualdad», es el único objetivo que se ha propuesto seriamente.

Aunque estos dos ideales suenen como muy semejantes, son lo más distinto que cabe, en lo que concierne a nuestro problema. Así como la igualdad absoluta determinaría con claridad la tarea del planificador, el deseo de una mayor igualdad es simplemente negativo, no más que una expresión del disgusto hacia el presente estado de cosas. Y, en tanto no estemos dispuestos a admitir que es deseable todo movimiento que lleve hacia la igualdad completa, difícilmente dará respuesta aquel deseo a ninguna de las cuestiones que el planificador tiene que resolver.

No es esto un juego de palabras. Nos enfrentamos aquí con una cuestión crucial que puede quedar oculta por la semejanza de los términos usados. Mientras que el acuerdo sobre la igualdad completa respondería a todos los problemas de mérito que el planificador tiene que resolver, la fórmula de la aproximación a una mayor igualdad no contestaría prácticamente a ninguno. El contenido de ésta es apenas más concreto que el de las frases «bien común» o «bienestar social». No nos libera de la necesidad de decidir en cada caso particular entre los méritos de individuos o grupos particulares y no nos ayuda en esta decisión. Todo lo que, de hecho, nos dice es que tomemos del rico cuanto podamos. Pero cuando se llega a la distribución del botín, el problema es el mismo que si no se hubiera concebido jamás la fórmula de una «mayor igualdad».

A la mayoría de la gente le es difícil admitir que no poseemos patrones morales que nos permitan resolver estas cuestiones, si no perfectamente, al menos con una mayor satisfacción general que la que consiente el sistema de competencia. ¿No tenemos todos alguna idea de lo que es un «precio justo» o un «salario equitativo»? ¿No podemos confiar en el firme sentido de la equidad que posee el pueblo? Y aun si no nos ponemos ahora de acuerdo plenamente sobre lo que es justo y equitativo en un caso particular, ¿no se consolidarían pronto en patrones más definidos las ideas populares si se diera a la gente una oportunidad para ver realizados sus ideales?

Por desgracia, hay poco fundamento para estas esperanzas. Los patrones que tenemos surgieron del sistema de competencia que hemos conocido, y desaparecerían, necesariamente, tan pronto como se perdiese la competencia. Lo que entendemos por un precio justo o un salario equitativo es, o el precio o salario usuales, la remuneración que la experiencia pasada ha permitido a la gente esperar, o el precio o salario que existiría si no hubiera explotación monopolista.

La única excepción importante a esto fue la pretensión de los trabajadores al «producto íntegro de su trabajo», en la que tanto de la doctrina socialista tiene su antecedente. Pero pocos socialistas de hoy creen que en una sociedad socialista el producto de cada industria debería repartirse enteramente entre los trabajadores de la misma; porque esto significaría que los obreros de las industrias que usan una gran proporción de capital dispondrían de unos ingresos mucho mayores que los empleados en las industrias poco dotadas de capital, lo cual considerarían muy injusto la mayoría de los socialistas. Y ahora se reconoce con bastante generalidad que esta pretensión particular se basa en una interpretación equivocada de los hechos. Pero, una vez que se rechaza la pretensión del trabajador individual a la totalidad de «su» producto, y que ha de dividirse todo el rendimiento del capital entre todos los obreros, el problema de cómo dividirlo plantea la misma cuestión fundamental.

Podría concebirse como objetivamente determinable el «precio justo» de una mercancía particular o la remuneración «equitativa» por un servicio particular, si las cantidades necesarias se fijasen independientemente. Si éstas fuesen ajenas a los costes, el planificador podría tratar de averiguar qué precio o salario es necesario para obtener tal oferta. Pero el planificador tiene que decidir también cuánto ha de producirse de cada clase de bienes, y, al hacerlo, determina cuál será el precio justo o el salario equitativo que se pague. Si el planificador decide que se necesitan menos arquitectos o relojeros y que la necesidad puede llenarse con aquellos que están dispuestos a permanecer en la profesión a pesar de una remuneración más baja, el salario «equitativo» disminuiría. Al decidir sobre la importancia relativa de los diferentes fines, el planificador decide también acerca de la importancia relativa de los diferentes grupos y personas. Como no se le supone autorizado a considerar a la gente como un simple medio, tiene que tener en cuenta estos efectos y con-

trapesar expresamente la importancia de los diferentes fines con los efectos de su decisión. Lo cual significa que ejercerá forzosamente un control directo sobre la situación de las diferentes personas.

Esto se aplica a la posición relativa de los individuos, no menos que a las diferentes ocupaciones. Estamos, en general, demasiado dispuestos a suponer más o menos uniformes los ingresos dentro de una determinada industria o profesión. Pero las diferencias entre los ingresos, no sólo del más y el menos próspero médico o arquitecto, escritor o actor de cine, boxeador o jockey, sino también del más y el menos próspero fontanero u hortelano, tendero o sastre, son tan grandes como las que existen entre las clases propietarias y las no propietarias. Y, aunque, sin duda, se intentaría reducirlas a un cierto número de categorías por un proceso de normalización, la necesidad de discriminación entre individuos sería la misma, tanto si se ejerciese fijando los ingresos individualmente como distribuyéndolos en determinadas categorías.

No necesitamos decir más acerca de las probabilidades de que los hombres de una sociedad libre se sometiesen a tal control, o de que permaneciesen libres si se sometieran. Sobre toda esta cuestión, lo que John Stuart Mill escribió hace casi cien años sigue siendo igualmente cierto hoy:

> Una norma inmutable, como la de la igualdad, podría aceptarse lo mismo que se aceptaría la suerte o una necesidad externa; pero que un puñado de personas pesara a todos en la balanza y diese más a uno y menos a otro sin más que su gusto y juicio, sólo podría aceptarse de seres considerados sobrehumanos y apoyados por terrores sobrenaturales[5].

Estas dificultades no condujeron a conflictos abiertos en tanto el socialismo sólo fue la aspiración de un grupo limi-

5. J. S. Mill, *Principles of Political Economy*, libro II, capítulo I, § 4.

tado y perfectamente homogéneo. Salieron a la superficie cuando se intentó realmente una política socialista con el favor de muchos grupos diferentes que componían la mayoría de un pueblo. Pronto se plantea la candente cuestión de decidir cuál de los diferentes conjuntos de ideales será impuesto a todos, poniendo a su servicio los recursos enteros del país. La restricción de nuestra libertad respecto a las cosas materiales afecta tan directamente a nuestra libertad espiritual, porque el éxito de la planificación exige crear una opinión común sobre los valores esenciales.

Los socialistas, progenitores cultos de una bárbara casta, esperaban tradicionalmente resolver este problema por la educación. Pero, ¿qué significa la educación a este respecto? Bien hemos aprendido que la ilustración no puede crear nuevos valores éticos, que ninguna suma de conocimientos conducirá a la gente a compartir las mismas opiniones sobre las cuestiones morales que surgen de una ordenación expresa de todas las relaciones sociales. No es la convicción racional, sino la aceptación de un credo, lo que se requiere para justificar un particular plan. Y, como era lógico, los mismos socialistas fueron los primeros en reconocer por doquier que la tarea que se echaron sobre sí mismos exigía la general aceptación de una *Weltanschauung* común, de un conjunto definido de valores. En sus esfuerzos para producir un movimiento de masas, apoyado en una concepción uniforme del mundo, los socialistas fueron los primeros en crear la mayoría de los instrumentos de adoctrinación que con tanta eficacia han empleado nazis y fascistas.

En Alemania e Italia los nazis y los fascistas apenas tuvieron que inventar algo. Los usos de los nuevos movimientos políticos que impregnaron todos los aspectos de la vida habían sido ya introducidos en ambos países por los socialistas. La idea de un partido político que abrazase todas las actividades del individuo, desde la cuna a la tumba, que pretendía guiar sus opiniones sobre todas las cosas y que se

recreaba en hacer de todos los problemas cuestiones de la *Weltanschauung* del partido, fue aplicada primero por los socialistas. Un escritor socialista austriaco, hablando del movimiento socialista de su país, refiere con orgullo que fue su «rasgo característico la creación de organizaciones especiales para todos los campos de actividad de los trabajadores y empleados»[6]. Pero aunque los socialistas austriacos puedan haber llegado más lejos en este aspecto, la situación no fue muy diferente en otros lugares. No fueron los fascistas, sino los socialistas, quienes comenzaron a reunir a los niños desde su más tierna edad en organizaciones políticas, para asegurarse que crecieran como buenos proletarios. No fueron los fascistas, sino los socialistas, quienes primero pensaron en organizar deportes y juegos, fútbol y excursionismo, en clubs de partido donde los miembros no pudieran infectarse con otras opiniones. Fueron los socialistas quienes primero insistieron en que el miembro del partido debe distinguirse del resto por los modos de saludar y los tratamientos. Fueron ellos quienes, con su organización de «células» y las medidas para la supervisión permanente de la vida privada, crearon el prototipo del partido totalitario. *Balilla* y *Hitlerjugend*, *Dopolavoro* y *Kraft durch Freude*, uniformes políticos y formaciones militares del partido, son poco más que remedos de las viejas instituciones socialistas[7].

En tanto el movimiento socialista de un país está estrechamente ligado a los intereses de un grupo particular, generalmente el de los trabajadores industriales más cualificados, el problema de crear una opinión común acerca de la condición deseable para los diferentes miembros de la sociedad es relativamente simple. El movimiento se preocupa inmedia-

6. G. Wieser, *Ein Staat stirbt, Oesterreich, 1934-1938*, París, 1938, pág. 41.
7. Los clubs de lectura *(book clubs)* públicos en Inglaterra proporcionan un paralelo no despreciable.

tamente de la condición de un grupo particular, y su propósito consiste en elevar su estatus por encima del de otros grupos. El carácter del problema cambia, por consiguiente, cuando en el curso del progresivo avance hacia el socialismo se hace a todos cada vez más evidente que sus ingresos y su posición general son determinados por el aparato coercitivo del Estado y que puede mantener o mejorar su posición sólo en cuanto miembro de un grupo organizado capaz de influir o dominar en su propio interés la máquina del Estado. En la lucha real entre los varios grupos porfiantes que surge en esta etapa no es seguro en modo alguno que prevalezcan los intereses de los grupos más pobres y numerosos. Ni es necesariamente una ventaja para los viejos partidos socialistas, que declaradamente representaron a los intereses de un grupo particular, el haber sido los primeros en el campo y haber proyectado toda su ideología para atraer a los trabajadores manuales de la industria. Su real éxito, y su insistencia en la aceptación del credo completo, lleva por fuerza a crear un poderoso contramovimiento, no de los capitalistas, sino de las clases muy numerosas e igualmente no propietarias que ven amenazada su posición relativa por el avance de la élite de los trabajadores industriales.

La teoría y la táctica socialistas, incluso cuando no estaban dominadas por el dogma marxista, se han basado en todas partes sobre la idea de una división de la sociedad en dos clases, con intereses comunes, pero en conflicto mutuo: capitalistas y trabajadores industriales. El socialismo contaba con una rápida desaparición de la vieja clase media y despreció completamente el nacimiento de una nueva: el ejército innúmero de los oficinistas y las mecanógrafas, de los trabajadores administrativos y los maestros de escuela, los artesanos y los funcionarios modestos y las filas inferiores de las profesiones liberales. Durante algún tiempo estas clases proporcionaron con frecuencia muchos de los dirigentes del movimiento obrero; pero, a medida que se hizo más cla-

ro que la posición de aquellas clases empeoraba relativamente a la de los trabajadores industriales, los ideales que guiaron a estos últimos perdieron mucho de su atractivo para los primeros. Si bien todos eran socialistas, en el sentido de aborrecer el sistema capitalista y desear una distribución deliberada de la riqueza de acuerdo con sus ideas de justicia, estas ideas resultaron ser muy diferentes de las incorporadas a la práctica de los primitivos partidos socialistas.

Los medios que emplearon, con buen éxito, los viejos partidos socialistas para asegurarse el apoyo de un grupo de ocupaciones -la elevación de su posición económica relativa- no se podían utilizar para asegurarse el apoyo de todos. Es forzosa entonces la aparición de movimientos socialistas rivales que soliciten el favor de quienes ven empeorada su situación relativa. Hay una gran parte de verdad en la afirmación, a menudo oída, de ser el fascismo y el nacionalsocialismo una especie de socialismo de la clase media; sólo que en Italia y Alemania los que apoyaron estos nuevos movimientos apenas eran ya, económicamente, una clase media. Fueron, en gran medida, la revuelta de una nueva clase preterida, contra la aristocracia del trabajo creada por el movimiento obrero industrial. Puede casi asegurarse que ningún factor económico aislado ha favorecido más a estos movimientos que la envidia de los profesionales fracasados, el ingeniero o abogado u otros universitarios, y, en general, el «proletariado de cuello y corbata», hacia el maquinista y el tipógrafo y otros miembros de los más fuertes sindicatos obreros, cuyos ingresos montaban a varias veces los suyos. Tampoco cabe apenas dudar que, en cuanto a ingresos en dinero, el simple afiliado del movimiento nazi, en los primeros años de éste, era, por término medio, más pobre que el promedio de los miembros de un sindicato o del viejo Partido Socialista; circunstancia tanto más acerba cuanto que los primeros, a menudo, habían visto días mejores y aún vivían con frecuencia

en ambientes que correspondían a su pasado. La expresión «lucha de clases *à rebours*», frecuente en Italia en los tiempos del nacimiento del fascismo, apuntaba a un aspecto muy importante del movimiento. El conflicto entre el fascista o el nacionalsocialista y los primitivos partidos socialistas tiene que considerarse, en gran parte, como uno de aquellos que es forzoso surjan entre facciones socialistas rivales. No había diferencia entre ellos en cuanto a que la voluntad del Estado debía ser quien asignase a cada persona su propio lugar en la sociedad. Pero había, como las habrá siempre, las más profundas diferencias acerca de cuál fuere el lugar apropiado de las diferentes clases y grupos.

Los viejos dirigentes socialistas, que habían considerado siempre a sus partidos como la natural vanguardia del futuro movimiento general hacia el socialismo, no podían fácilmente comprender que con cada extensión del uso de los métodos socialistas se volviera contra ellos el resentimiento de extensas clases pobres. Pero, mientras los viejos partidos socialistas, o las organizaciones laborales dentro de ciertas industrias, no encontraban, generalmente, mayores dificultades para llegar a un acuerdo de acción conjunta con los patronos en sus respectivas industrias, clases muy amplias quedaban marginadas. Para ellas, y no sin alguna justificación, las secciones más prósperas del movimiento obrero parecían pertenecer a la clase explotadora más que a la explotada[8].

El resentimiento de la baja clase media, en la que el fascismo y el nacionalsocialismo reclutaron una tan gran propor-

8. Hace ahora doce años, uno de los intelectuales socialistas europeos más destacados, Hendrick de Man (que, consecuente consigo mismo, ha evolucionado y hecho las paces con los nazis), observaba que, «por primera vez desde los comienzos del socialismo, los resentimientos anticapitalistas se han vuelto contra el movimiento socialista» (*Sozialismus und National-Faszismus*, Potsdam, 1931, pág. 6).

ción de sus seguidores, se intensificó por el hecho de aspirar en muchos casos, por su educación y preparación, a posiciones directivas y considerarse ellos mismos con títulos para ser miembros de la clase dirigente. La generación más joven, con el desprecio por las actividades lucrativas fomentado por la enseñanza socialista, rechazaba las posiciones independientes que envolvían riesgo y se congregaba, en cantidades crecientes, en torno a las posiciones asalariadas que prometían seguridad. Pero, a la vez, demandaba puestos que procurasen los ingresos y el poder a que, en opinión suya, le daba derecho su preparación. Creían en una sociedad organizada, y esperaban en ésta un lugar muy diferente del que la sociedad regida por el trabajo parecía ofrecerles. Estaban prontos a apoderarse de los métodos del viejo socialismo, pero dispuestos a emplearlos en servicio de una clase diferente. El movimiento tenía atractivos para todos los que, conformes con la conveniencia de que el Estado dirigiese la actividad económica entera, discrepaban en cuanto a los fines a cuya consecución dirigía su fuerza política la aristocracia de los trabajadores industriales.

El nuevo movimiento socialista partía con algunas ventajas tácticas. El socialismo obrero se había desarrollado en un mundo democrático y liberal, adaptando a él sus tácticas y apoderándose de muchos ideales del liberalismo; sus protagonistas todavía creían que la implantación del socialismo resolvería por sí todos los problemas. El fascismo y el nacionalsocialismo, por otra parte, surgieron de la experiencia de una sociedad cada vez más regulada, consciente de que el socialismo democrático e internacional propugnaba ideales incompatibles. Sus tácticas se desarrollaron en un mundo ya dominado por la política socialista y los problemas que ésta crea. No se hacían ilusiones sobre la posibilidad de la solución democrática de unos problemas que exigen más acuerdo entre las gentes que lo que puede razonablemente esperarse. No se hacían ilusiones sobre la capacidad de la razón

para decidir acerca de todas las cuestiones de relativa importancia que sobre las necesidades de los diferentes hombres o grupos inevitablemente surgen de la planificación, o sobre la respuesta que podría dar la fórmula de la igualdad. Sabían que el grupo más fuerte que reuniese bastantes seguidores en favor de un nuevo orden jerárquico de la sociedad y que prometiese francamente privilegios a las clases a que apelaba, obtendría probablemente el apoyo de todos los defraudados porque, después de prometérseles la igualdad, descubrieron que no habían hecho sino favorecer los intereses de una clase particular. Sobre todo, lograron éxito porque ofrecían una teoría, o *Weltanschauung*, que parecía justificar los privilegios prometidos a sus seguidores.

9. Seguridad y libertad

> La sociedad entera se habrá convertido en una sola oficina y una sola fábrica, con igualdad en el trabajo y en la remuneración.
>
> V. I. LENIN, 1917

> En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio «el que no trabaje no comerá» ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá.
>
> L. TROTSKY, 1937

Igual que la espuria «libertad económica», y con más justicia, la seguridad económica se presenta a menudo como una indispensable condición de la libertad efectiva. Esto es, en un sentido, tan cierto como importante. La independencia de criterio o la energía de carácter rara vez se encuentra entre quienes no confían en abrirse camino por su propio esfuerzo. Sin embargo, la idea de la seguridad económica no es menos vaga y ambigua que la mayoría de las expresiones sobre estas materias; y por ello la aprobación general que se concede a la demanda de seguridad puede ser un peligro para la libertad. Evidentemente, cuando la seguridad se entiende en un sentido demasiado absoluto, la general porfía por ella, lejos de acrecentar las oportunidades de libertad, se convierte en su más grave amenaza.

Será bueno contraponer desde un principio las dos clases de seguridad: la limitada, que pueden alcanzar todos y que, por consiguiente, no es un privilegio, sino un legítimo objeto de deseo, y la seguridad absoluta, que en una sociedad libre no pueden lograr todos, y que no debe conceder-

se como un privilegio -excepto en unos cuantos casos especiales, como el de la judicatura, donde una independencia completa es de extraordinaria importancia-. Estas dos clases de seguridad son: la primera, la seguridad contra una privación material grave, la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos, y la segunda, la seguridad de un determinado nivel de vida o de la posición que una persona o grupo disfruta en comparación con otros. O, dicho brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la seguridad de aquel ingreso concreto que se supone merecido por una persona. Veremos ahora que esa distinción coincide ampliamente con la diferencia entre la seguridad que puede procurarse a todos, fuera y como suplemento del sistema de mercado, y la seguridad que sólo puede darse a algunos y sólo mediante el control o la abolición del mercado.

No hay motivo para que una sociedad que ha alcanzado un nivel general de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar a todos esa primera clase de seguridad sin poner en peligro la libertad general. Se plantean difíciles cuestiones acerca del nivel preciso que de esa manera debe asegurarse; hay, en particular, la importante cuestión de saber si aquellos que así dependerán de la comunidad deberán gozar indefinidamente de las mismas libertades que los demás[1]. Una consideración imprudente de estas cuestiones puede causar serios y hasta peligrosos problemas políticos; pero es indudable que un mínimo de alimento, albergue y vestido, suficiente para preservar la salud y la capacidad de trabajo, puede asegurarse a todos. Por lo demás, hace tiempo que una considerable parte de la población británica ha alcanzado ya esta clase de seguridad.

1. Si la simple ciudadanía de un país otorga el derecho a un nivel de vida más elevado que en cualquier otro, surgen también serios problemas en las relaciones internacionales, que no deben descartarse con demasiada ligereza.

No existe tampoco razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas. Cuando, como en el caso de la enfermedad y el accidente, ni el deseo de evitar estas calamidades, ni los esfuerzos para vencer sus consecuencias son, por regla general, debilitados por la provisión de una asistencia; cuando, en resumen, se trata de riesgos genuinamente asegurables, los argumentos para que el Estado ayude a organizar un amplio sistema de seguros sociales son muy fuertes. En estos programas hay muchos puntos de detalle sobre los que estarán en desacuerdo quienes desean preservar el sistema de la competencia y quienes desean sustituirlo por otro diferente; y es posible introducir bajo el nombre de seguros sociales medidas que tiendan a hacer más o menos ineficaz la competencia. Pero no hay incompatibilidad de principio entre una mayor seguridad, proporcionada de esta manera por el Estado, y el mantenimiento de la libertad individual. A la misma categoría pertenece también el incremento de seguridad a través de la asistencia concedida por el Estado a las víctimas de calamidades como los terremotos y las inundaciones. Siempre que una acción común pueda mitigar desastres contra los cuales el individuo ni puede intentar protegerse a sí mismo ni prepararse para sus consecuencias, esta acción común debe, sin duda, emprenderse.

Queda, por último, el problema, de la máxima importancia, de combatir las fluctuaciones generales de la actividad económica y las olas recurrentes de paro en masa que las acompañan. Éste es, evidentemente, uno de los más graves y acuciantes problemas de nuestro tiempo. Pero, aunque su solución exigirá mucha planificación en el buen sentido, no requiere –o al menos no es forzoso que requiera– aquella especial clase de planificación que, según sus defensores, se propone reemplazar al mercado. Muchos economistas espe-

ran que el remedio último se halle en el campo de la política monetaria, que no envolvería nada incompatible incluso con el liberalismo del siglo XIX. Otros, es cierto, creen que el verdadero éxito sólo puede lograrse con la realización de obras públicas en gran escala emprendidas con la más cuidadosa oportunidad. Esto llevaría a mucho más serias restricciones de la esfera de la competencia, y al hacer experiencias en esta dirección tendremos que vigilar cuidadosamente nuestros pasos si queremos evitar que toda la actividad económica se haga cada vez más dependiente de la orientación y el volumen del gasto público. Pero no es éste ni el único ni, en mi opinión, el más prometedor camino que permite afrontar el peligro más grave para la seguridad económica. En todo caso, los muy necesarios esfuerzos para asegurar protección contra estas fluctuaciones no conducen a aquella clase de planificación que constituye un riesgo tan grande para nuestra libertad.

La planificación con fines de seguridad que tan dañinos efectos ejerce sobre la libertad es la que se dirige a una seguridad de clase muy diferente. Es la planificación destinada a proteger a individuos o grupos contra unas disminuciones de sus ingresos que, aunque de ninguna manera las merezcan, ocurren diariamente en una sociedad en régimen de competencia, contra unas pérdidas que imponen severos sufrimientos sin justificación moral, pero que son inseparables del sistema de la competencia. Esta demanda de seguridad es, pues, otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los méritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos de un hombre. Esta clase de seguridad o justicia parece irreconciliable con la libertad de elegir el propio empleo.

En todo sistema que confíe la distribución entre las diferentes industrias y ocupaciones a la propia elección de los hombres, las remuneraciones tendrán necesariamente que corresponder a la utilidad que los resultados aporten a los

demás miembros de la sociedad, incluso si ellas no resultaran en proporción a los méritos subjetivos. Aunque los resultados logrados estarán a menudo en proporción con los esfuerzos e intenciones, no siempre será así, en cualquier forma de sociedad. En particular, no será cierto en los muchos casos en que la utilidad de alguna industria o especial cualificación se altera por circunstancias que no podían preverse. Todos conocemos la trágica situación de los hombres muy especializados, cuya destreza, de difícil aprendizaje, ha perdido repentinamente su valor por causa de algún invento que beneficia grandemente al resto de la sociedad. La historia de los últimos cien años está llena de hechos de esta clase, algunos de los cuales afectaron a la vez a cientos de miles de personas.

Ofende indudablemente a nuestro sentido de justicia el que alguien tenga que sufrir una gran disminución de sus ingresos y el amargo fracaso de todas sus esperanzas sin cometer por su parte ninguna falta y a pesar de un trabajo difícil y de excepcional destreza. Las demandas de ayuda del Estado de quienes así sufren, a fin de salvaguardar sus legítimas aspiraciones, reciben, sin duda, la simpatía y el apoyo popular. La aprobación general de estas demandas ha tenido por efecto que el Estado interviniera en todas partes, no sólo para proteger a las personas así amenazadas de duros sufrimientos y privaciones, sino para asegurarlas la percepción continuada de sus antiguos ingresos y guarecerlas de las vicisitudes del mercado[2].

No puede, sin embargo, darse a todos la certidumbre de unos determinados ingresos si ha de concederse alguna libertad a cada cual para que elija su ocupación. Y si se procura a algunos esta certidumbre, se convierte en un privilegio a

2. Sugerencias muy interesantes para mitigar estos sufrimientos, dentro de una sociedad liberal, ha presentado recientemente el profesor W. H. Hutt en un libro que merece un estudio cuidadoso (*Plan for Reconstruction*, 1943).

costa de los demás, cuya seguridad disminuye con eso necesariamente. Fácil es demostrar que la seguridad de unos ingresos invariables sólo puede procurarse a todos mediante la abolición completa de la libertad en la elección del empleo de cada uno. Y, sin embargo, aunque esta garantía general de las legítimas esperanzas se considera frecuentemente como el ideal pretendido, no es cosa que se haya intentado en serio. Lo que constantemente se hace es conceder esta clase de seguridad de manera fragmentaria, a este grupo o al otro, con el resultado de aumentar constantemente la inseguridad de quienes quedaron abandonados a su suerte. No es maravilla que, en consecuencia, el valor atribuido al privilegio de la seguridad aumente constantemente y que su demanda sea cada vez más apremiante, hasta llegarse a que ningún precio, ni siquiera el de la libertad, parezca demasiado alto.

Si quienes ven reducida la utilidad de sus esfuerzos por circunstancias que no pueden ni prever ni dominar fueran protegidos contra las pérdidas inmerecidas, y si a quienes ven aumentada su utilidad social se les prohibiera, a su vez, conseguir una ganancia inmerecida, la remuneración dejaría en seguida de mantener una relación con la utilidad efectiva. Dependería de las opiniones sostenidas por alguna autoridad acerca de lo que una persona debía haber hecho, de lo que debía haber previsto y de la bondad o maldad de sus intenciones. Decisiones tales no podrían menos de ser arbitrarias en gran medida. La aplicación de este principio llevaría necesariamente a que gentes que hiciesen el mismo trabajo recibiesen remuneraciones distintas. Las diferencias de remuneración no serían ya un impulso adecuado para que las gentes realizasen los cambios socialmente deseables, y ni siquiera sería posible a los individuos afectados juzgar si un cambio particular merece las perturbaciones que causa.

Pero si los cambios en la distribución de los empleos entre las personas, que son constantemente necesarios en toda

sociedad, no pueden ya provocarse mediante «premios» y «castigos» pecuniarios (que no están en necesaria conexión con los méritos subjetivos), tendrán que realizarse por órdenes directas. Cuando los ingresos de una persona están garantizados, no puede permitírsela, ni permanecer en su puesto sólo porque le guste, ni elegir otro trabajo que le agradaría hacer. Como no es ella quien logra la ganancia o sufre la pérdida dependiente de que cambie o no cambie de puesto, la elección tiene que hacerla para ella quien gobierne la distribución de la renta disponible.

El problema del incentivo adecuado, que aquí surge, se discute generalmente como si fuera sobre todo un problema de buena voluntad de la gente. Pero esto, aunque importante, no es todo el problema, y ni siquiera su más importante aspecto. No es sólo que si deseamos que las gentes pongan de su parte todo lo posible hemos de hacer que les merezca la pena a ellas. Lo más importante es que, si deseamos dejarles la elección a ellas, si han de poder juzgar sobre lo que deben hacer, es preciso darles algún metro fácilmente inteligible con el que midan la importancia social de las diferentes ocupaciones. Ni con la mejor voluntad del mundo sería posible a cualquiera elegir inteligentemente entre las diversas alternativas si las ventajas que se le ofrecieran no presentasen ninguna relación con su utilidad social. Para saber si, como resultado de una alteración de las circunstancias, un hombre debe dejar un oficio y un ambiente que se le han hecho gratos y cambiarlos por otros, es necesario que la variación del valor relativo de estas ocupaciones para la sociedad encuentre expresión en las remuneraciones que se le ofrecen.

El problema es, sin duda, todavía mucho más importante porque, tal como es el mundo, los hombres no están dispuestos de hecho a entregarse a algo durante largos períodos si no van en ello directamente envueltos sus propios intereses. Multitud de personas, al menos, necesitan alguna presión externa para entregar a algo todo su esfuerzo. El proble-

ma del incentivo es, en este sentido, muy real, tanto en la esfera del trabajo ordinario como en la de las actividades directivas. La aplicación de la técnica de la ingeniería a una nación entera –y esto es lo que la planificación significa– «plantea problemas de disciplina difíciles de resolver», como ha expresado acertadamente un ingeniero americano con gran experiencia en la planificación oficial, que ha visto con claridad el problema.

La ejecución de una tarea de ingeniería [explica] exige la existencia de un área externa relativamente amplia de actividad económica no planificada. Tiene que haber un lugar donde buscar los trabajadores, y cuando se despida a un obrero, éste tiene que desaparecer del trabajo y de la nómina. A falta de semejante depósito libre, sólo mediante el castigo corporal, como en el trabajo de los esclavos, puede mantenerse la disciplina[3].

En la esfera del trabajo directivo, el problema de las sanciones por negligencia surge en una forma diferente, pero no menos seria. Con acierto se ha dicho que mientras el último resorte de una economía en régimen de competencia es el alguacil, la sanción última en una economía planificada es el verdugo[4]. Los poderes otorgados al director de cada empresa tendrían que ser considerables en todo caso. Pero en un sistema planificado la posición y los ingresos del director no pueden solamente depender, como no dependen los del obrero, del éxito o el fracaso del trabajo que dirige. Como ni el riesgo ni la ganancia son suyos, no puede ser su juicio personal lo que decida, sino que tendrá que hacer lo que le corresponda de acuerdo con alguna norma establecida. Un error que él «debía» haber evitado no es ya cuenta suya, sino un crimen contra la comunidad, y como tal debe tratarse.

3. D. C. Coyle, «The Twilight of National Planning», *Harpers' Magazine*, octubre de 1935, pág. 558.
4. W. Roepke, *Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart*, Zúrich, 1942, pág. 172.

Mientras se mantenga dentro del firme sendero del deber objetivamente reconocible, puede estar más seguro de sus ingresos que el empresario capitalista; pero el peligro que corre en el caso de un fracaso real es peor que la bancarrota. Puede estar económicamente seguro en tanto satisfaga a sus superiores; pero compra esta seguridad al precio de la garantía de la libertad y la vida.

Trátase, evidentemente, de un conflicto esencial entre dos tipos de organización social irreconciliables, que, por las formas más características en que aparecen, se han designado a menudo como sociedades de tipo comercial y militar. Fueron quizá expresiones desafortunadas, porque dirigen la atención hacia lo accesorio y hacen difícil ver que nos enfrentamos aquí con una alternativa real y que no hay una tercera posibilidad. O la elección y el riesgo corresponden al individuo, o se le exonera de ambos. El ejército es, sin duda, en muchos aspectos, la representación más ajustada y la que nos es más familiar, del segundo tipo de organización, donde trabajo y trabajador son igualmente designados por la autoridad, y donde, si los medios disponibles son escasos, todo el mundo es puesto a media ración. Es éste el único sistema en el que se puede conceder al individuo plena seguridad económica y que, extendido a la sociedad entera, permite otorgarla a todos sus miembros. Esta seguridad es, por consiguiente, inseparable de la restricción de la libertad y propia del orden jerárquico de la vida militar; es la seguridad de los cuarteles.

Es posible, por lo demás, organizar sobre este principio ciertas secciones de una sociedad que se mantiene libre en lo restante, y no hay razón para que esta forma de vida, con sus necesarias restricciones de la libertad individual, no esté abierta a quien la prefiera. Además, algún servicio voluntario de trabajo, sobre líneas militares, podría ser la mejor forma en que el Estado proporcionase a todos la certidumbre de una oportunidad de trabajo y un ingreso mínimo. Los

proyectos de esta clase se demostraron en el pasado tan escasamente aceptables porque quienes estaban dispuestos a ceder su libertad a cambio de la seguridad exigían siempre, para entregar su plena libertad, que se quitase también ésta a todos los que no estaban dispuestos a ello. Es difícil encontrar justificación a una pretensión semejante.

El tipo de organización militar que conocemos nos da, sin embargo, una imagen muy inadecuada de lo que sería si se extendiese a toda la sociedad. Cuando sólo una parte de la sociedad está organizada sobre líneas militares, la falta de libertad de los miembros de la organización militar está mitigada por el hecho de seguir existiendo un ámbito libre al cual pueden pasar si las restricciones se hacen demasiado molestas. Para formarnos una imagen de lo que sería probablemente aquella sociedad si, de acuerdo con el ideal que ha seducido a tantos socialistas, se organizase como una gran fábrica única, tenemos que mirar hacia la antigua Esparta o la Alemania actual, que, después de avanzar en esta dirección durante dos o tres generaciones, está ahora tan cerca de alcanzar ese ideal.

En una sociedad acostumbrada a la libertad es improbable que haya mucha gente dispuesta a adquirir la seguridad a este precio. Pero la política que ahora se sigue por doquier, con la que se proporciona el privilegio de la seguridad, ora a este grupo, ora a aquel otro, está creando rápidamente unas condiciones en las que el afán de seguridad tiende a ser más fuerte que el amor a la libertad. La razón de ello es que con cada concesión de una completa seguridad a un grupo se acrecienta necesariamente la inseguridad del resto. Si se garantiza a alguien un trozo fijo en la distribución de una tarta de tamaño variable, la porción correspondiente a las restantes personas tiene que fluctuar proporcionalmente más que el tamaño de la tarta entera. Y el elemento esencial de seguridad que el sistema de competencia

ofrece, que es la gran variedad de oportunidades, se reduce más y más.

Dentro del sistema de mercado, sólo la clase de planificación que se conoce por el nombre de restriccionismo (¡que incluye, sin embargo, casi toda la planificación que de hecho se practica!) puede otorgar seguridad a unos grupos particulares. El «control», es decir, la limitación de la producción, de tal forma que los precios aseguren una remuneración «adecuada», es el único camino, en una economía de mercado, para garantizar a los productores unos ciertos ingresos. Pero esto significa necesariamente una reducción de oportunidades abiertas a los demás. Para proteger a un productor, sea trabajador o empresario, contra las ofertas a más bajo precio de otros de fuera, hay que impedir a otros que están peor el *participar en la prosperidad* relativamente mayor de las industrias favorecidas. Toda restricción de la libertad de entrada en una industria reduce la seguridad de todos los que quedan fuera de ella. Y a medida que aumenta el número de personas cuyos ingresos se aseguran de aquella manera, se restringe el campo de las oportunidades alternativas abiertas a todo el que sufre una pérdida de ingresos; con lo que disminuyen, en correspondencia, para todos los afectados desfavorablemente por una alteración de las circunstancias, las probabilidades de evitar una disminución fatal de sus ingresos. Y si, como es más cierto cada vez, en toda actividad cuyas circunstancias mejoran se permite a sus miembros excluir a otros para que aquéllos se aseguren toda la ganancia, en forma de jornales o beneficios más altos, los pertenecientes a las industrias cuya demanda ha caído no tienen lugar a donde ir, y cada alteración de aquellas circunstancias es la causa de un aumento del paro. Apenas puede dudarse que son principalmente una consecuencia de estas medidas para acrecentar la seguridad, en las últimas décadas, el gran aumento del paro y la inseguridad para grandes sectores de la población.

En Inglaterra estas restricciones, especialmente las que afectan a las zonas intermedias de la sociedad, no habían alcanzado dimensiones importantes hasta hace relativamente poco tiempo, y por eso apenas hemos advertido todas sus consecuencias. La extrema desesperanza de la situación de quienes, en una sociedad que ha crecido en rigidez, han quedado fuera de las filas de las ocupaciones protegidas, y la magnitud de la sima que les separa del poseedor afortunado de un empleo para quien la protección contra la competencia ha hecho innecesario moverse siquiera un poco a fin de hacer sitio a quienes no lo tienen, sólo pueden apreciarlas los que las han sufrido. No se trata de que los afortunados cediesen sus puestos, sino simplemente de que participasen en la común desgracia con alguna reducción de sus ingresos, o como bastaría frecuentemente, tan sólo con algún sacrificio de sus perspectivas de mejora. Pero lo impide la protección de su «nivel de vida», o de su «justo precio», o de su «renta profesional», a lo que se creen con derecho, y para la cual reciben la ayuda del Estado. Por consecuencia, en lugar de serlo los precios, los salarios y las rentas individuales, son ahora el empleo y la producción lo que está sujeto a fluctuaciones violentas. Jamás ha existido una peor y más cruel explotación de una clase por otra que la de los miembros más débiles o menos afortunados de un grupo de productores a manos de los bien situados; lo cual lo ha permitido la «regulación» de la competencia. Pocas consignas han causado tanto daño como la «estabilización» de precios (o salarios) en particular, que, asegurando los ingresos de algunas personas, hacen más y más precaria la posición de las restantes.

Así, cuanto más intentamos proporcionar seguridad plena, mediante intromisiones en el sistema del mercado, mayor se hace la inseguridad; y, lo que es peor, mayor se hace el contraste entre la seguridad de quienes la han obtenido como un privilegio y la creciente inseguridad de los postergados. Y cuanto más privilegio es la seguridad y mayor el

peligro para los excluidos de ella, más apreciada será. A medida que el número de los privilegiados aumenta y la diferencia entre su seguridad y la inseguridad de los demás se eleva, surge gradualmente un conjunto de valores sociales completamente nuevos. Ya no es la independencia, sino la seguridad, lo que da categoría y posición social. El derecho seguro a una pensión, más que la confianza en su capacidad, hace a un joven preferido para el matrimonio. La inseguridad lleva al temido estado del paria, en el que permanecen por toda su vida quienes en su juventud no fueron admitidos en el refugio de un empleo a sueldo.

El empeño general de lograr seguridad por medidas restrictivas, tolerado o favorecido por el Estado, ha producido con el transcurso del tiempo una progresiva transformación de la sociedad, una transformación en la que, como en tantas otras direcciones, Alemania ha guiado y los demás países han seguido. Se ha acelerado esta marcha por otro efecto de la enseñanza socialista: el deliberado menosprecio de todas las actividades que envuelven riesgo económico y el oprobio moral arrojado sobre las ganancias que hacen atractivo el riesgo, pero que sólo pocos pueden conseguir. No podemos censurar a nuestros jóvenes porque prefieran una posición asalariada segura mejor que el riesgo de la empresa, cuando desde su primera juventud han visto aquélla considerada como ocupación superior, más altruista y desinteresada. La generación más joven de hoy ha crecido en un mundo donde, en la escuela y en la prensa, se ha representado el espíritu de la empresa comercial como deshonroso y la consecución de un beneficio como inmoral, y donde dar ocupación a cien personas se considera una explotación, pero se tiene por honorable el mandar a otras tantas. Los viejos quizá consideren esto como una exageración de la situación actual, pero la diaria experiencia del profesor universitario apenas le permite dudar que, como resultado de

la propaganda anticapitalista, la alteración de los valores va muy por delante del cambio hasta ahora acontecido en las instituciones británicas. La cuestión es si, al cambiar nuestras instituciones para satisfacer las nuevas demandas, no destruiremos inconscientemente unos valores que todavía cotizamos muy alto.

El cambio de la estructura de la sociedad implicado en la victoria del ideal de seguridad sobre el de independencia no puede ilustrarse mejor que comparando los que, hace diez o veinte años, aún podían considerarse como modelos de la sociedad inglesa y la sociedad alemana. Por grande que pueda haber sido la influencia del Ejército en Alemania, es un grave error atribuir principalmente a esta influencia lo que el inglés consideraba el carácter «militar» de la sociedad alemana. La diferencia alcanzó mucha mayor profundidad que lo que podía explicarse por este motivo, y los atributos peculiares de la sociedad alemana se daban no menos en los círculos donde la influencia propiamente militar era insignificante, que en aquéllos donde era fuerte. Lo que daba a la sociedad alemana su carácter peculiar no era tanto el hecho de estar casi siempre organizada para la guerra una parte mayor del pueblo alemán que la de otros países, como el de emplearse el mismo tipo de organización para otros muchos fines. Lo que daba a su estructura social su peculiar carácter era que en Alemania se organizaba deliberadamente, desde arriba, una parte de la vida civil mayor que en ningún otro país; era que una proporción tan grande de su pueblo no se considerase a sí misma independiente, sino como funcionarios. Alemania ha sido desde hace mucho, y los mismos alemanes se envanecían de ello, un *Beamtenstaat*, en el cual, no sólo dentro de la administración pública propiamente dicha, sino en casi todas las esferas de la vida, alguna autoridad asignaba y garantizaba renta y posición.

Si es dudoso que el espíritu de libertad pueda en algún sitio extirparse por la fuerza, no es seguro que otro pueblo

pueda resistir con éxito al proceso por el cual fue lentamente sofocado en Alemania. Allí donde categoría social y distinción se logran casi exclusivamente convirtiéndose en un sirviente a sueldo del Estado, donde la ejecución de un deber asignado se considera más laudable que la elección por sí de su campo de utilidad, donde todas las actividades que no dan acceso a un lugar reconocido en la jerarquía oficial o derecho a un ingreso fijo se consideran inferiores e incluso algo deshonrosas, sería excesivo esperar que muchos prefieran largo tiempo la libertad a la seguridad. Y donde la alternativa frente a la seguridad en una posición dependiente es la más precaria posición, en la que a uno se le desprecia tanto si triunfa como si fracasa, pocos serán los que resistan a la tentación de salvarse al precio de la libertad. Cuando las cosas han llegado tan lejos, la libertad casi se convierte realmente en objeto de burla, puesto que sólo puede adquirirse por el sacrificio de la mayor parte de las cosas agradables de este mundo. En tal situación, poco puede sorprender que sean cada vez más las gentes que empiezan a sentir que sin seguridad económica la libertad «carece de valor» y están dispuestas al sacrificio de su libertad para ganar la seguridad. Pero es inquietante ver que el profesor Harold Laski emplea en Inglaterra el mismísimo argumento que ha influido más quizá que ningún otro para llevar al pueblo alemán al sacrificio de su libertad[5].

No cabe duda que uno de los principales fines de la política deberá ser la adecuada seguridad contra las grandes privaciones y la reducción de las causas evitables de la mala orientación de los esfuerzos y los consiguientes fracasos. Pero si esta acción ha de tener éxito y no se quiere que des-

5. H. J. Laski, *Liberty in the Modern State* (Pelican, 1937, página 51): «Los que conocen la vida normal del pobre, su obsesionante sensación de una inminente desgracia, su vacilante persecución de una belleza que perpetuamente le escapa, comprenderán bastante bien que sin seguridad económica la libertad carece de valor».

truya la libertad individual, la seguridad tiene que proporcionarse fuera del mercado y debe dejarse que la competencia funcione sin obstrucciones. Cierta seguridad es esencial si la libertad ha de preservarse, porque la mayoría de los hombres sólo estará dispuesta a soportar el riesgo que encierra inevitablemente la libertad si este riesgo no es demasiado grande. Pero, si bien no debemos perder jamás de vista esta verdad, nada es tan fatal como la moda de hoy, entre los dirigentes intelectuales, de exaltar la seguridad a expensas de la libertad. Es esencial que aprendamos de nuevo a enfrentarnos francamente con el hecho de que la libertad sólo puede conseguirse por un precio y que, como individuos, tenemos que estar dispuestos a hacer importantes sacrificios materiales para salvaguardar nuestra libertad. Si deseamos conservarla, tenemos que recobrar la convicción en que se basó la primacía dada a la libertad en los países anglosajones, y que Benjamin Franklin expresó en una frase aplicable a nosotros en nuestras vidas individuales no menos que como naciones: «Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad».

10. Por qué los peores se colocan a la cabeza

> Todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
>
> LORD ACTON

Tenemos que examinar ahora una creencia de la que obtienen consuelo muchos que consideran inevitable el advenimiento del totalitarismo y que debilita seriamente la resistencia de otros muchos que se opondrían a él con toda su fuerza si aprehendieran plenamente su naturaleza. Es el creer que los rasgos más repulsivos de los regímenes totalitarios se deben al accidente histórico de haberlos establecido grupos de guardias negras y criminales. Seguramente, se arguye, si la creación del régimen totalitario en Alemania elevó al poder a los Streichers y Killingers, los Leys y Heines, los Himmlers y Heydrichs, ello puede probar la depravación del carácter alemán, pero no que la subida de estas gentes sea la *necesaria consecuencia de un sistema totalitario*. ¿Es que el mismo tipo de sistema, si fuera necesario para lograr fines importantes, no podrían instaurarlo gentes decentes, para bien de la comunidad general?

No vamos a engañarnos a nosotros mismos creyendo que todas las personas honradas tienen que ser demócratas o es forzoso que aspiren a una participación en el gobierno. Muchos preferirían, sin duda, confiarla a alguien a quien tienen por más competente. Aunque pueda ser una imprudencia,

no hay nada malo ni deshonroso en aprobar una dictadura de los buenos. El totalitarismo, podemos ya oír, es un poderoso sistema lo mismo para el bien que para el mal, y el propósito que guíe su uso depende enteramente de los dictadores. Y quienes piensan que no es el sistema lo que debemos temer, sino el peligro de que caiga en manos de gente perversa, pueden incluso verse tentados a conjurar este peligro procurando que un hombre honrado se adelante a establecerlo.

Sin duda, un sistema «fascista» inglés diferiría muchísimo de los modelos italiano o alemán; sin duda, si la transición se efectuara sin violencia, podríamos esperar que surgiese un tipo mejor de dirigente. Y si yo tuviera que vivir bajo un sistema fascista, sin ninguna duda preferiría vivir bajo uno instaurado por ingleses que bajo el establecido por otros hombres cualesquiera. Sin embargo, todo esto no significa que, juzgado por nuestros criterios actuales, un sistema fascista británico resultase, en definitiva, ser muy diferente o mucho menos intolerable que sus prototipos. Hay fuertes razones para creer que los que nos parecen los rasgos peores de los sistemas totalitarios existentes no son subproductos accidentales, sino fenómenos que el totalitarismo tiene que producir por fuerza más temprano o más tarde. De la misma manera que el gobernante democrático que se dispone a planificar la vida económica tendrá pronto que enfrentarse con la alternativa de asumir poderes dictatoriales o abandonar sus planes, así el dictador totalitario pronto tendrá que elegir entre prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Ésta es la razón de que los faltos de escrúpulos y los aventureros tengan más probabilidades de éxito en una sociedad que tiende hacia el totalitarismo. Quien no vea esto no ha advertido aún toda la anchura de la sima que separa al totalitarismo de un régimen liberal, la tremenda diferencia entre la atmósfera moral que domina bajo el colectivismo y la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental.

Las «bases morales del colectivismo» se han discutido mucho en el pasado, naturalmente; pero lo que nos importa aquí no son sus bases, sino sus resultados morales. Las discusiones corrientes sobre los aspectos éticos del colectivismo, o bien se refieren a si el colectivismo es reclamado por las convicciones morales del presente, o bien analizan qué convicciones morales se requerirían para que el colectivismo produjese los resultados esperados. Nuestra cuestión, empero, estriba en saber qué criterios morales producirá una organización colectivista de la sociedad, o qué criterios imperarán probablemente en ella. La interacción de moral social e instituciones puede muy bien tener por efecto que la ética producida por el colectivismo sea por completo diferente de los ideales morales que condujeron a reclamar un sistema colectivista. Aunque estemos dispuestos a pensar que, cuando la aspiración a un sistema colectivista surge de elevados motivos morales, este sistema tiene que ser la cuna de las más altas virtudes, la verdad es que no hay razón para que un sistema realce necesariamente aquellas cualidades que sirven al propósito para el que fue creado. Los criterios morales dominantes dependerán, en parte, de las características que conducirán a los individuos al éxito en un sistema colectivista o totalitario, y en parte, de las exigencias de la máquina totalitaria.

Tenemos que retornar por un momento a la etapa que precede a la supresión de las instituciones democráticas y a la creación de un régimen totalitario. En este punto, la general demanda de acción resuelta y diligente por parte del Estado es el elemento dominante en la situación, y el disgusto por la lenta y embarazosa marcha del procedimiento democrático convierte la acción por la acción en objetivo. Entonces, el hombre o el partido que parece lo bastante fuerte y resuelto para «hacer marchar las cosas» es quien ejerce la mayor atracción. «Fuerte», en este sentido, no significa sólo una

mayoría numérica; es la ineficacia de las mayorías parlamentarias lo que tiene disgustada a la gente. Lo que ésta buscará es alguien con tan sólido apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que desee. Entonces surge el nuevo tipo de partido, organizado sobre líneas militares.

En los países de Europa central, los partidos socialistas habían familiarizado a las masas con las organizaciones políticas de carácter paramilitar encaminadas a absorber lo más posible de la vida privada de sus miembros. Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio, buscar la fuerza, no en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor, pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto.

Aunque los partidos socialistas tenían poder para lograrlo todo si hubieran querido hacer uso de la fuerza, se resistieron a hacerlo. Se habían impuesto a sí mismos, sin saberlo, una tarea que sólo el cruel, dispuesto a despreciar las barreras de la moral admitida, puede ejecutar.

Por lo demás, muchos reformadores sociales del pasado sabían por experiencia que el socialismo sólo puede llevarse a la práctica por métodos que desaprueban la mayor parte de los socialistas. Los viejos partidos socialistas se vieron detenidos por sus ideales democráticos; no poseían la falta de escrúpulos necesaria para llevar a cabo la tarea elegida. Es característico que, tanto en Alemania como en Italia, al éxito del fascismo precedió la negativa de los partidos socialistas a asumir las responsabilidades del gobierno. Les fue imposible poner entusiasmo en el empleo de los métodos para los que habían abierto el camino. Confiaban todavía en el milagro de una mayoría concorde sobre un plan particular para

la organización de la sociedad entera. Pero otros habían aprendido ya la lección, y sabían que en una sociedad planificada la cuestión no podía seguir consistiendo en determinar qué aprobaría una mayoría, sino en hallar el mayor grupo cuyos miembros concordasen suficientemente para permitir una dirección unificada de todos los asuntos; o, de no existir un grupo lo bastante amplio para imponer sus criterios, en cómo crearlo y quién lo lograría.

Hay tres razones principales para que semejante grupo, numeroso y fuerte, con opiniones bastante homogéneas, no lo formen, probablemente, los mejores, sino los peores elementos de cualquier sociedad. Con relación a nuestros criterios, los principios sobre los que podrá seleccionarse un grupo tal serán casi enteramente negativos.

En primer lugar, es probablemente cierto que, en general, cuanto más se eleva la educación y la inteligencia de los individuos, más se diferencian sus opiniones y sus gustos y menos probable es que lleguen a un acuerdo sobre una particular jerarquía de valores. Corolario de esto es que si deseamos un alto grado de uniformidad y semejanza de puntos de vista, tenemos que descender a las regiones de principios morales e intelectuales más bajos, donde prevalecen los más primitivos y «comunes» instintos y gustos. Esto no significa que la mayoría de la gente tenga un bajo nivel moral; significa simplemente que el grupo más amplio cuyos valores son muy semejantes es el que forman las gentes de nivel bajo. Es, como si dijéramos, el mínimo común denominador lo que reúne el mayor número de personas. Si se necesita un grupo numeroso lo bastante fuerte para imponer a todos los demás sus criterios sobre los valores de la vida, no lo formarán jamás los de gustos altamente diferenciados y desarrollados; sólo quienes constituyen la «masa», en el sentido peyorativo de este término, los menos originales e independientes, podrán arrojar el peso de su número en favor de sus ideales particulares.

Sin embargo, si un dictador potencial tiene que confiar enteramente sobre aquellos que, por sus instintos sencillos y primitivos, resultan ser muy semejantes, su número difícilmente podrá dar suficiente empuje a sus esfuerzos. Tendrá que aumentar el número, convirtiendo más gentes al mismo credo sencillo.

Entra aquí el segundo principio negativo de selección: será capaz de obtener el apoyo de todos los dóciles y crédulos, que no tienen firmes convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valores confeccionado si se machaca en sus orejas con suficiente fuerza y frecuencia. Serán los de ideas vagas e imperfectamente formadas, los fácilmente modelables, los de pasiones y emociones prontas a levantarse, quienes engrosarán las filas del partido totalitario.

Con el esfuerzo deliberado del demagogo hábil, entra el tercero y quizá más importante elemento negativo de selección para la forja de un cuerpo de seguidores estrechamente coherente y homogéneo. Parece casi una ley de la naturaleza humana que le es más fácil a la gente ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. La contraposición del «nosotros» y el «ellos», la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común. Por consecuencia, lo han empleado siempre aquellos que buscan no sólo el apoyo para una política, sino la ciega confianza de ingentes masas. Desde su punto de vista, tiene la gran ventaja de concederles mayor libertad de acción que casi ningún programa positivo. El enemigo, sea interior, como el «judío» o el «kulak», o exterior, parece ser una pieza indispensable en el arsenal de un dirigente totalitario.

Que el judío viniera a ser en Alemania el enemigo, hasta que las «plutocracias» ocuparon su sitio, fue, lo mismo que

la selección del kulak en Rusia, el resultado del resentimiento anticapitalista sobre el que se basa el movimiento entero. En Alemania y Austria llegó a considerarse al judío como representativo del capitalismo, porque un tradicional despego de amplios sectores de la población hacia las ocupaciones comerciales hizo más accesibles éstas a un grupo que había sido prácticamente excluido de las ocupaciones tenidas en más estima. Es la vieja historia de la raza extranjera, sólo admitida para los oficios menos respetados, y más odiada aún por el hecho de practicarlos. Que el antisemitismo y el anticapitalismo alemanes surgiesen de la misma raíz es un hecho de gran importancia para comprender lo que sucedió allí; pero rara vez lo han comprendido los observadores extranjeros.

Considerar la tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista como debida por entero a la necesidad de asegurarse un resuelto apoyo, sería despreciar otro y no menos importante factor. Incluso cabe dudar que se pueda concebir con realismo un programa colectivista como no sea al servicio de un grupo limitado, que el colectivismo pueda existir en otra forma que como alguna especie de particularismo, sea nacionalismo, racismo o clasismo. La creencia en la comunidad de fines e intereses entre camaradas parece presuponer un mayor grado de semejanza de ideas y creencias que el que existe entre los hombres en cuanto simples seres humanos. Aunque sea imposible conocer personalmente a todos los miembros de nuestro grupo, por lo menos han de ser del mismo tipo que los que nos rodean y han de hablar y pensar de la misma manera y sobre las mismas cosas, para que podamos identificarnos con ellos. El colectivismo a escala mundial parece ser inimaginable, si no es al servicio de una pequeña élite. Daría lugar, ciertamente, no sólo a problemas técnicos, sino, sobre todo, a problemas morales que ninguno de nuestros socialistas desea afrontar.

Si el proletariado inglés tiene derecho a una participación igualitaria sobre la renta obtenida actualmente de los recursos en capital de Inglaterra y sobre la intervención de su uso, porque es el resultado de una explotación, por el mismo principio todos los indios tendrían derecho no sólo a la renta, sino también al uso de una parte proporcional del capital británico. Pero, ¿cuáles son los socialistas que se proponen seriamente una división igualitaria entre la población del mundo entero de los recursos en capital existentes? Todos consideran el capital como perteneciente no a la humanidad, sino a la nación; y, aun dentro de la nación, pocos se arriesgarían a defender que debe privarse de «su» equipo de capital a las regiones ricas para ayudar a las regiones más pobres. Lo que los socialistas proclaman que se les debe a los camaradas en cualquier país no están dispuestos a concedérselo al extranjero. Desde un punto de vista colectivista, si se es consecuente, las pretensiones de las naciones «desheredadas» acerca de una nueva división del mundo, están enteramente justificadas; pero si se fuese también consecuente en su aplicación, las que la demandan con más estrépito perderían con ello casi tanto como las más ricas naciones. Por lo mismo, tienen buen cuidado en no basar sus pretensiones en principios igualitarios, sino en su pretendida superioridad para organizar a otros pueblos.

Una de las contradicciones inherentes a la filosofía colectivista está en que, como descansa en la moral social humanitaria que el individualismo ha desarrollado, sólo puede practicarse dentro de un grupo relativamente pequeño. Que el socialismo sea internacionalista en tanto permanece dentro de la teoría, y que tan pronto como se lleva a la práctica, sea en Rusia o en Alemania, se torne violentamente nacionalista, es una de las razones por las que el «socialismo liberal», que es como la mayoría del mundo occidental se imagina el socialismo, tiene que mantenerse en el plano de la teoría pura, mientras que la práctica del socialismo es totalitaria en

todas partes [1]. El colectivismo no tiene sitio para el amplio humanitarismo liberal, sino tan sólo para el estrecho particularismo de los totalitarios.

Si la «comunidad» o el Estado son antes que el individuo; si tienen fines propios, independientes y superiores a los individuales, sólo aquellos individuos que laboran para dichos fines pueden ser considerados como miembros de la comunidad. Consecuencia necesaria de este criterio es que a una persona sólo se la respeta en cuanto miembro del grupo; es decir, sólo si trabaja y en cuanto trabaja para los fines considerados comunes, y su plena dignidad le viene de su condición de miembro y no simplemente de ser hombre. En realidad, los conceptos mismos de humanidad y, por consiguiente, de internacionalismo, en cualquiera de sus formas, son por entero productos de la concepción individualista del hombre, y no hay lugar para ellos en un sistema ideológico colectivista [2].

Aparte del hecho fundamental de no poder extenderse la comunidad del colectivismo sino hasta donde llegue o pueda crearse la unidad de propósito de los individuos, varios factores contribuyen a reforzar la tendencia del colectivismo a hacerse particularista y cerrado. De éstos, uno de los más importantes radica en que, como la aspiración del individuo a identificarse con un grupo es muy frecuentemente el resultado de un sentimiento de inferioridad, su aspiración sólo podrá satisfacerse si la condición de miembro del grupo le confiere alguna superioridad sobre los extraños. A veces, al

1. Cfr. sobre esto una instructiva discusión en F. Borkenau, *Socialism, National or International?*, 1942.

2. Pertenece por entero al espíritu del colectivismo lo que Nietzsche hace decir a su Zaratustra:

«Mil objetivos han existido hasta aquí porque han existido mil individuos. Pero falta todavía la argolla para los mil cuellos: el objetivo único falta. La humanidad no tiene todavía un designio.

»Pero decidme, por favor, hermanos: si aún falta a la humanidad el designio, ¿no es la humanidad misma lo que falta?».

parecer, es un aliciente más para sumergir la personalidad en la del grupo el hecho de que los violentos instintos que el individuo sabe ha de refrenar dentro del grupo pueden recibir rienda suelta en la acción colectiva contra el extraño. Hay una profunda verdad en el título del libro de R. Niebuhr *Hombre moral y sociedad inmoral,* aunque apenas podamos seguir al autor en las conclusiones que extrae de su tesis. Existe, sin duda, como dice en algún lugar, «una creciente tendencia en el hombre moderno a imaginarse que su propia conducta se ajusta a una ética porque ha delegado sus vicios en grupos cada vez más amplios»[3]. Cuando actúan en nombre de un grupo, las gentes parecen liberadas de muchas de las restricciones morales que dominan su conducta como individuos dentro del grupo.

La clara actitud antagonista que la mayor parte de los planificadores adopta frente al internacionalismo se explica, además, por el hecho de que en el mundo actual todos los contactos exteriores de un grupo son obstáculos para que aquéllos planifiquen eficazmente la esfera en que pueden intentarlo. No es, pues, una casualidad que el recopilador de uno de los más amplios estudios colectivos sobre la planificación haya descubierto con tristeza que «la mayor parte de los "planificadores" son nacionalistas militantes»[4].

Las inclinaciones nacionalista e imperialista de los planificadores socialistas, mucho más frecuentes de lo que en general se reconoce, no están siempre tan patentes como, por ejemplo, en el caso de los Webbs y algunos otros de los primeros fabianos, cuyo entusiasmo por la planificación se combina característicamente con la veneración por todas las unidades políticas grandes y poderosas y el desdén hacia los Estados pequeños. El historiador Elie Halévy, hablando de

3. De un artículo del Dr. Niebuhr, citado por E. H. Carr, en *The Twenty Years' Crisis,* 1941, pág. 203.
4. Findlay MacKenzie (ed.), *Planned Society, Yesterday, Today, Tomorrow: A Symposium,* 1937, p. xx.

su primer encuentro con los Webbs, hace cuarenta años, refiere que

el socialismo de éstos era profundamente antiliberal. No odiaban a los tories, antes bien, eran extraordinariamente indulgentes para ellos; pero no concedían perdón al liberalismo gladstoniano. Era el tiempo de la guerra de los boers, y tanto los liberales avanzados como los hombres que comenzaban a formar el partido laborista habían apoyado generosamente a los boers contra el imperialismo británico en nombre de la libertad y la humanidad. Pero los dos Webbs y su amigo Bernard Shaw se mantuvieron aparte. Fueron ostentosamente imperialistas. La independencia de las pequeñas naciones podía significar algo para el individualista liberal; no significaba nada para colectivistas como ellos. Puedo todavía oír a Sidney Webb explicándome que el futuro pertenecía a las grandes naciones administradoras donde los funcionarios gobiernan y la policía conserva el orden.

Y el mismo Halévy cita a Bernard Shaw, quien argumentaba, por la misma época, que «el mundo es por necesidad de los Estados grandes y poderosos, y que los pequeños deben abrirles sus fronteras, o serán aniquilados»[5].

He citado por extenso estos pasajes, que no sorprenderían en una exposición de los antepasados alemanes del nacionalsocialismo, porque suministran un tan característico ejemplo de esa glorificación del poder que con facilidad conduce del socialismo al nacionalismo y que afecta profundamente a los criterios éticos de todos los colectivistas. Por lo que a los derechos de las pequeñas naciones se refiere, Marx y Engels apenas fueron mejores que la mayoría de los colectivistas consecuentes, y las opiniones que ocasionalmente expresaron sobre los checos o los polacos recuerdan las de los nacionalsocialistas actuales[6].

5. E. Halévy, *L'Ere des Tyrannies,* París, 1938, pág. 217, e *History of the English People,* Epílogo, vol. I, págs. 105-106.
6. Cf. K. Marx, *Revolución y Contrarrevolución,* y la carta de Engels a Marx el 23 de mayo de 1851.

Mientras a los grandes escritores políticos individualistas del siglo XIX, a lord Acton o a Jacob Burckhardt, y hasta a los socialistas contemporáneos nuestros que, como Bertrand Russell, han heredado la tradición liberal, el poder en sí les ha parecido siempre el archidiablo, para el colectivista puro es por sí mismo una meta. No es sólo, como Russell lo ha descrito con tanto acierto, que el deseo de organizar la vida social conforme a un plan unitario surja automáticamente y en gran parte de un afán de poder[7]. Es, más aún, el resultado de la necesidad en que se ven los colectivistas, para alcanzar su meta, de crear un poder -el poder de unos hombres sobre otros hombres- de magnitud jamás antes conocida, y la consecuencia de que su éxito depende de la medida en que logren este poder.

Ello es así aunque muchos socialistas liberales se guían en sus esfuerzos por la trágica ilusión de creer que para extinguir el poder basta con privar a los individuos particulares del que poseen en un sistema individualista, y transferirlo a la sociedad. Lo que escapa a todos los que así argumentan es que, al concentrar el poder de tal modo que pueda ponerse al servicio de un único plan, no se transfiere tan sólo, sino que se aumenta infinitamente; al reunir en las manos de un organismo único el poder que antes se repartía independientemente entre muchos, se crea un poder infinitamente mayor que el que antes existía, casi tan acrecido en alcance como diferente en naturaleza. Es enteramente falaz argüir, como se hace a veces, que el gran poder ejercido por una oficina de planificación central «no sería mayor que el poder colectivamente ejercido por los consejos de administración de las empresas privadas»[8]. En una sociedad en régimen de competencia no hay nadie que pueda usar ni siquiera una

7. Bertrand Russell, *The Scientific Outlook*, 1931, pág. 211.
8. B. E. Lippincott, en su «Introducción» a O. Lange y F. M. Taylor, *On the Economic Theory of Socialism*, Minneápolis, 1938, pág. 35.

pequeña fracción del poder que disfrutaría una oficina de planificación socialista, y si nadie puede conscientemente ejercer este poder, es un abuso del lenguaje asegurar que aquél equivale al de todos los capitalistas sumados[9]. Es un simple juego de palabras hablar del «poder colectivamente ejercido por los consejos de administración de las empresas privadas», en tanto éstas no se combinen en una acción concertada; lo que, por lo demás, significaría el final de la competencia y la creación de una economía planificada. Dividir o descentralizar el poder significa necesariamente reducir la cuantía absoluta del poder, y el sistema de la competencia es el único sistema dirigido a hacer mínimo, por descentralización, el poder que los hombres ejercen sobre los hombres.

Hemos visto ya por qué la separación de los fines económicos y los políticos es una garantía esencial de la libertad individual, y por qué es consecuentemente atacada por todos los colectivistas. A esto tenemos que añadir ahora que la «sustitución del poder económico por el político», tan a menudo demandada hoy, significa necesariamente la sustitución de un poder que es siempre limitado por otro del que no hay escape. Lo que se llama poder económico, aunque es cierto que puede ser un instrumento de coerción, jamás es, en las manos de los particulares, poder exclusivo o completo, poder sobre la vida entera de una persona. Pero centralizado como un instrumento de poder político, crea un grado de dependencia que apenas se distingue de la esclavitud.

De los dos rasgos centrales de todo sistema colectivista, la necesidad de un conjunto de fines comúnmente aceptados

9. No debemos dejarnos engañar nosotros mismos por el hecho de que la palabra poder, además del sentido que recibe con respecto a las personas, se usa también en un sentido impersonal (o más bien, antropomórfico) para cualquier causa determinante. Siempre habrá, por supuesto, algo que determina cualquier cosa que suceda, y en este sentido la cuantía del poder existente será siempre la misma. Pero esto no es verdad para el poder ejercido conscientemente por los seres humanos.

por el grupo y el supremo deseo de dar al grupo el poder máximo para alcanzar estos fines, surge un sistema de moral social definido, que en algunos puntos coincide, y en otros choca violentamente con el nuestro, pero que difiere de éste en un punto por el cual es dudoso que podamos llamarlo una moral social: es el de privar a la conciencia individual de toda libertad para aplicar sus propias normas y ni siquiera dar unas normas generales que se obliga o se permite al individuo observar en todas las circunstancias. Esto hace de la moral social colectivista algo tan diferente de lo que nosotros hemos conocido con este nombre, que nos resulta difícil descubrir algún principio en ella. Y, sin embargo, lo posee.

La diferencia de principio es casi la misma que ya consideramos en relación con el Estado de Derecho. Como la ley formal, las reglas de la ética individualista, por imprecisas que puedan ser en muchos aspectos, son generales y absolutas; prescriben o prohíben un tipo general de acción, sin considerar si en cada caso particular el fin último es bueno o malo. Defraudar o robar, torturar o traicionar una confidencia, se considera malo, sin atención a que en el caso particular se siga o no de ello un daño. Ni el hecho de que en un cierto caso nadie pueda resultar perjudicado por ello, ni cualquier alto propósito por el cual se hubiere cometido este acto, puede alterar el hecho de que es malo. Aunque a veces nos veamos forzados a elegir entre diferentes males, éstos siguen siendo males. El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. En la ética colectivista se convierte necesariamente en la norma suprema; no hay, literalmente, nada que el colectivista consecuente no tenga que estar dispuesto a hacer si sirve «al bien del conjunto», porque el «bien del conjunto» es el único criterio, para él, de lo que debe hacerse. La *raison d'état,* en la que ha encontrado su más explícita formulación la ética colectivista, no conoce otro límite que el fijado por la oportunidad; es decir, por la adecuación del

acto particular al fin perseguido. Y lo que la *raison d'état* afirma respecto a las relaciones entre los diferentes países se aplica igualmente a las relaciones entre los diferentes individuos dentro del Estado colectivista. No puede haber límite a lo que su ciudadano debe estar dispuesto a hacer, ni acto que su conciencia pueda impedirle cometer, si es necesario para un fin que la comunidad se ha propuesto o que sus superiores le ordenan cumplir.

La ausencia de unas normas formales absolutas en la ética colectivista no significa, por lo demás, que no existan en el individuo algunos hábitos provechosos que una comunidad colectivista fomentará, y otros que combatirá. Muy al contrario, pondrá mucho más interés en los hábitos de vida del individuo que una comunidad individualista. Ser miembro útil de una sociedad colectivista exige cualidades muy definidas, que han de reforzarse mediante una práctica constante. La razón por la que designamos estas cualidades como «hábitos provechosos», y difícilmente podemos considerarlas como virtudes morales, es que jamás se permitiría al individuo poner estas normas por encima de cualquier mandato definido o convertirlas en un obstáculo para el logro de cualquier particular objetivo de su comunidad. Sólo sirven, por así decirlo, para llenar cualquier vacío que puedan dejar las órdenes directas o la designación de objetivos particulares, pero jamás pueden justificar un conflicto con la voluntad de la autoridad.

Las diferencias entre las virtudes que continuarán estimándose bajo un sistema colectivista y las que desaparecerán se ponen bien de manifiesto por la comparación de las virtudes que incluso sus mayores enemigos admiten que los alemanes, o quizá mejor el «prusiano típico», poseen, y aquellas que, según la opinión común, les faltan y que el pueblo inglés, con alguna justificación, se ufana de poseer en grado sobresaliente. Pocas personas negarán que los ale-

manes, en general, son industriosos y disciplinados, directos y enérgicos hasta llegar a la rudeza, concienzudos y tenaces en cualquier tarea que emprendan, que poseen un fuerte sentido del orden y del deber, que muestran una estricta obediencia a la autoridad y que a menudo revelan una gran disposición para sacrificarse personalmente y un gran valor ante el peligro físico. Todo ello hace del alemán un instrumento eficiente para llevar a término una tarea asignada, y han sido cuidadosamente educados de acuerdo con ello en el viejo Estado prusiano y en el nuevo Reich dominado por Prusia. Lo que a menudo se piensa que falta al «alemán típico» son las virtudes individualistas de la tolerancia y el respeto para otros individuos y sus opiniones, de la independencia de juicio y la entereza de carácter y disposición para defender sus propias convicciones frente a un superior, que los mismos alemanes, en general conscientes de su carencia, llaman *Zivilcourage*, de la consideración hacia el débil y el enfermo y de aquel sano desprecio y desagrado del poder que sólo una vieja tradición de libertad personal puede crear. También parecen mal dotados de la mayoría de aquellas pequeñas pero, sin embargo, tan importantes cualidades que facilitan el trato entre hombres en una sociedad libre: cortesía y sentido del humor, modestia personal, respeto a la vida privada de los demás y confianza en las buenas intenciones de su vecino.

Después de lo que ya hemos dicho, no causará sorpresa que estas virtudes individualistas sean, a la vez, virtudes sociales eminentes, virtudes que suavizan los contactos sociales y que hacen menos necesaria y, a la par, más difícil la intervención desde arriba. Son virtudes que florecen donde ha prevalecido el tipo de sociedad individualista o comercial, y que faltan cuando predomina la sociedad militar o colectivista; una diferencia que es, o fue, tan perceptible entre las diversas regiones de Alemania, como lo es ahora entre los criterios que imperan en Alemania y los característicos del

Occidente. Hasta hace poco, por lo menos, en aquellas partes de Alemania que estuvieron más tiempo expuestas a las fuerzas civilizadoras del comercio, las viejas ciudades comerciales del sur y el oeste y las ciudades hanseáticas, los conceptos morales generales eran, probablemente, mucho más afines a los de los pueblos occidentales que a los que ahora han dominado Alemania entera.

Sería, sin embargo, muy injusto considerar desprovistas de fervor moral a las masas de un pueblo totalitario porque prestan apoyo ilimitado a un sistema que nos parece la negación de casi todos los valores morales. Para la gran mayoría de ellas, lo opuesto es, probablemente, cierto: la intensidad de las emociones morales dentro de un movimiento como el nacionalsocialismo o el comunismo sólo puede compararse, probablemente, con la de los grandes movimientos religiosos de la historia. Una vez se admita que el individuo es sólo un medio para servir a los fines de una entidad más alta, llamada sociedad o nación, síguense por necesidad la mayoría de aquellos rasgos de los regímenes totalitarios que nos espantan. Desde el punto de vista del colectivismo, la intolerancia y la brutal supresión del disentimiento, el completo desprecio de la vida y la felicidad del individuo son consecuencias esenciales e inevitables de aquella premisa básica; y el colectivista puede admitirlo y, a la vez, pretender que su sistema sea superior a uno en que los intereses «egoístas» del individuo pueden obstruir la plena realización de los fines que la comunidad persigue. Cuando los filósofos alemanes presentan una y otra vez como inmoral en sí el afán por la felicidad personal y únicamente como laudable el cumplimiento de un deber impuesto, son perfectamente sinceros, por difícil que pueda ser comprenderlo a quienes han crecido en una tradición diferente.

Donde hay un fin común que todo lo domina, no hay espacio para normas o preceptos morales generales. Dentro de una limitada extensión, lo hemos experimentado noso-

tros mismos durante la guerra. Mas ni la guerra ni los mayores peligros han traído, en Inglaterra, sino una muy moderada aproximación al totalitarismo, descartando muy pocos de los demás valores al concentrarse en el servicio de un propósito único. Pero donde unos cuantos fines específicos dominan la sociedad entera es inevitable que la crueldad pueda convertirse ocasionalmente en un deber, que los actos que sublevan todos nuestros sentimientos, tales como el fusilamiento de los rehenes o la matanza de los viejos o los enfermos, sean tenidos como meras cuestiones de utilidad, que el desarraigo y el traslado forzoso de cientos de miles de personas llegue a ser un instrumento político aprobado por casi todos, excepto las víctimas, o que sugestiones como la de un «reclutamiento de mujeres para fines de procreación» puedan ser consideradas seriamente. Ante los ojos del colectivista hay siempre un objetivo superior a cuya consecución sirven estos actos y que los justifican para aquél, porque la prosecución del fin común de la sociedad no puede someterse a limitaciones por respeto a ningún derecho o valor individual.

Pero mientras la masa de los ciudadanos del Estado totalitario muestra a menudo devoción altruista hacia un ideal, aunque sea uno que nos repugne, la cual les hace aprobar e incluso realizar tales actos, no puede decirse lo mismo en defensa de quienes dirigen su política. Para ser un elemento útil en la conducción de un Estado totalitario no basta que un hombre esté dispuesto a aceptar especiosas justificaciones para viles hazañas; tiene que estar activamente dispuesto a romper con toda norma moral que alguna vez haya conocido, si se considerase necesario para el logro del fin que se le ha encomendado. Como es únicamente el líder supremo quien determina los fines, sus instrumentos no pueden tener convicciones morales propias. Tienen, ante todo, que entregarse sin reservas a la persona del líder; pero, después de esto, la cosa más importante es que carezcan por comple-

to de principios y sean literalmente capaces de cualquier cosa. No deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder. Así, poco atractivo pueden ofrecer los puestos de poder a quienes mantienen creencias morales de la clase que en el pasado guió a los pueblos europeos, poco que les pueda compensar la aversión hacia muchas de las particulares tareas y escasas las oportunidades para satisfacer cualquier deseo más idealista o para una recompensa por los riesgos indudables y el sacrificio de la mayoría de los placeres de la vida privada y de la independencia personal, que llevan consigo los puestos de gran responsabilidad. Los únicos gustos que se satisfacen son el del poder como tal, el placer de ser obedecido y el de formar parte de una máquina eficaz e inmensamente poderosa a la cual todo tiene que dejar paso.

Por consiguiente, así como hay poco que pueda inducir a los hombres que son justos, según nuestros criterios, a pretender posiciones directivas en la máquina totalitaria, y mucho para apartarlos, habrá especiales oportunidades para los brutales y los faltos de escrúpulos. Habrá tareas que cumplir cuya maldad, vistas en sí, nadie pondrá en duda, pero que tienen que llevarse a cabo en servicio de algún fin superior y han de ejecutarse con la misma destreza y eficacia que cualquier otra. Y como habrá necesidad de actos intrínsecamente malos, que todos los influidos por la moral social tradicional se resistirán a tomar sobre sí, la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder. En una sociedad totalitaria, los puestos en que es necesario practicar la crueldad y la intimidación, el engaño premeditado y el espionaje, son numerosos. Ni la Gestapo, ni la administración de un campo de concentración, ni el Ministerio de Propaganda, ni las SA o las SS (o sus equivalentes italianos o rusos) son puestos apropiados para el ejercicio de los sentimientos humanitarios. Y, sin embar-

go, a través de puestos como éstos va el camino que conduce a las más altas posiciones en el Estado totalitario. Es singularmente cierta la conclusión a que llega, después de una breve enumeración análoga de los deberes de las autoridades de un Estado colectivista, un distinguido economista norteamericano:

> Tienen que hacer estas cosas, lo quieran o no, y la probabilidad de que quienes están en el mando sean individuos que aborrezcan la posesión y el ejercicio del poder es del mismo orden que la probabilidad de que una persona extraordinariamente bondadosa se hiciese cargo del látigo en una plantación de esclavos [10].

No podemos, sin embargo, agotar el tema aquí. El problema de la selección de los líderes está estrechamente unido al amplio problema de la selección con arreglo a las opiniones sostenidas, o, mejor dicho, con arreglo a la facilidad con que una persona se acomoda a un conjunto de doctrinas siempre cambiante. Y esto nos lleva a uno de los más característicos rasgos morales del totalitarismo, a su relación con todas las virtudes que entran bajo la denominación general de honestidad y a sus efectos sobre ellas. Pero es una cuestión tan importante que requiere capítulo aparte.

10. El profesor F. H. Knight en *The Journal of Political Economy*, diciembre de 1938, pág. 869.

11. El final de la verdad

> Es significativo que la nacionalización del pensamiento ha marchado por doquier *pari passu* con la nacionalización de la industria.
>
> E. H. CARR

El camino más eficaz para hacer que todos sirvan al sistema único de fines que se propone el plan social consiste en hacer que todos crean en esos fines. Para que un sistema totalitario funcione eficientemente no basta forzar a todos a que trabajen para los mismos fines. Es esencial que la gente acabe por considerarlos como sus fines propios. Aunque a la gente se le den elegidas sus creencias y se le impongan, éstas tienen que llegar a serlo, tienen que convertirse en un credo generalmente aceptado que lleve a los individuos, espontáneamente, en la medida de lo posible, por la vía que el planificador desea. Si el sentimiento de opresión en los países totalitarios es, en general, mucho menos agudo que lo que se imagina la mayoría de las personas en los países liberales, ello se debe a que los gobiernos totalitarios han conseguido en alto grado que la gente piense como ellos desean que lo haga.

Esto se logra, evidentemente, por las diversas formas de la propaganda. Su técnica es ahora tan familiar que apenas necesitamos decir algo sobre ella. El único punto que debe destacarse es que ni la propaganda en sí, ni las técnicas empleadas, son peculiares del totalitarismo, y que lo que tan

completamente cambia su naturaleza y efectos en un Estado totalitario es que toda la propaganda sirve al mismo fin, que todos los instrumentos de propaganda se coordinan para influir sobre los individuos en la misma dirección y producir el característico *Gleichschaltung* de todas las mentes. En definitiva, el efecto de la propaganda en los países totalitarios no difiere sólo en magnitud, sino en naturaleza, del resultado de la propaganda realizada para fines diversos por organismos independientes y en competencia. Si todas las fuentes de información ordinaria están efectivamente bajo un mando único, la cuestión no es ya la de persuadir a la gente de esto o aquello. El propagandista diestro tiene entonces poder para moldear sus mentes en cualquier dirección que elija, y ni las personas más inteligentes e independientes pueden escapar por entero a aquella influencia si quedan por mucho tiempo aisladas de todas las demás fuentes informativas.

Si bien en los Estados totalitarios esta posición de la propaganda proporciona un poder único sobre las mentes, los peculiares efectos morales no surgen de su técnica, sino del propósito y el alcance de la propaganda totalitaria. Si pudiera confinarse a adoctrinar a la gente sobre el sistema general de valores hacia el que se dirige el esfuerzo social, la propaganda representaría, simplemente una manifestación particular de los rasgos característicos de la moral colectivista, que ya hemos considerado. Si su propósito fuera tan sólo enseñar al pueblo un código moral definido y completo, el problema sólo estaría en averiguar si este código moral es bueno o malo. Hemos visto que no es probable que nos atraiga el código moral de una sociedad totalitaria; que incluso el esfuerzo hacia la igualdad a través de una economía dirigida sólo puede conducir a una desigualdad impuesta oficialmente, a una determinación autoritaria de la posición de cada individuo en el nuevo orden jerárquico; que desaparecerían la mayor parte de los elementos humanitarios de

nuestra moral social: el respeto por la vida humana, por el débil y por el individuo en general. Por repulsivo que esto pueda ser para la mayoría de las personas, y aunque ello envuelve un cambio en los criterios morales, no es necesariamente antimoral por completo. Algunos rasgos de semejante sistema pueden incluso atraer a los más rígidos moralistas de matiz conservador y parecerles preferibles a los criterios, más blandos, de una sociedad liberal.

Las consecuencias morales de la propaganda totalitaria que debemos considerar ahora son, por consiguiente, de una clase aún más profunda. Son la destrucción de toda la moral social, porque minan uno de sus fundamentos: el sentido de la verdad y su respeto hacia ella. Por la naturaleza de su tarea, la propaganda totalitaria no puede confinarse a la gradación de los valores, a las cuestiones de interpretación y a las convicciones morales, sobre las cuales el individuo siempre se adaptará, más o menos, a los criterios dominantes en su comunidad, sino que ha de extenderse a cuestiones de hecho que operan sobre la inteligencia humana por una vía diferente. Tiene que ser así, primero, porque para inducir a la gente a aceptar los valores oficiales, éstos deben justificarse o mostrarse en conexión con los valores ya sostenidos por la gente, lo cual envolverá a menudo afirmaciones acerca de las relaciones causales entre medios y fines; y, en segundo lugar, porque la distinción entre fines y medios, entre el objetivo pretendido y las medidas tomadas para alcanzarlo, jamás es en la realidad tan tajante y definida como tiende a sugerirlo la discusión general de estos problemas; y, en consecuencia, la gente tiene que ser llevada a aceptar no sólo los fines últimos, sino también las opiniones acerca de los hechos y posibilidades sobre las que descansan las medidas particulares.

Hemos visto que en una sociedad libre no existe acuerdo sobre ese código ético completo, sobre ese sistema universal de

valores que está implícito en un plan económico, pero habría de crearse. Mas no debemos suponer que el planificador acometerá su tarea consciente de esta necesidad, o que, si es consciente de ella, le será posible crear de antemano un código tan amplio. Sólo a medida que avanza descubre los conflictos entre las diferentes necesidades, y tiene que tomar sus decisiones cuando la ocasión surge. No existe un código de valores *in abstracto* que guíe sus decisiones antes de tener que tomarlas, y tiene que irlo levantando sobre las decisiones particulares. Hemos visto que esta imposibilidad de separar los problemas de valor generales de las decisiones particulares impide que un organismo democrático, aunque incapaz de decidir los detalles técnicos de un plan, pudiera determinar los valores que le orienten.

Y como la autoridad planificadora habrá de decidir constantemente sobre méritos acerca de los cuales no existen normas morales definidas, tendrá que justificar ante la gente sus decisiones, o, al menos, tendrá que hacer algo para que la gente crea que son las decisiones justas. Aunque los responsables de una decisión pueden haberse guiado tan sólo por un prejuicio, tendrán que enunciar públicamente algún principio orientador, si la comunidad no ha de someterse en forma pasiva, sino que ha de apoyar activamente la medida. La necesidad de racionalizar las aversiones y los gustos, que, a falta de otra cosa, guiarán al planificador en muchas de sus decisiones, y la necesidad de exponer sus argumentos en forma que atraiga al mayor número posible de personas, le forzarán a construir teorías, es decir, afirmaciones sobre las conexiones entre los hechos, que pasarán a ser parte integrante de la doctrina de gobierno. Este proceso de creación de un «mito» para justificar su acción no tiene necesariamente que ser consciente. El líder totalitario puede guiarse tan sólo por una instintiva aversión hacia el estado de cosas que ha encontrado y por el deseo de crear un nuevo orden jerárquico que se ajuste mejor a su concepto del mérito; pue-

de, simplemente, saber que le molestan los judíos, que parecían tan afortunados dentro de un orden que a él no le proporcionaba un puesto satisfactorio, y que ama y admira al hombre rubio y alto, a la «aristocrática» figura de las novelas de su juventud. Así, estará dispuesto a abrazar las teorías que parecen procurarle una justificación racional de los prejuicios que comparte con muchos de sus compañeros. De esta manera, una teoría seudocientífica entra a formar parte del credo oficial que, en grado mayor o menor, dirige la actividad de todos. O también, el extendido aborrecimiento de la civilización industrial y un romántico anhelo por la vida del campo, unidos a la creencia, probablemente errónea, en el valor especial del campesino como soldado, suministran la base para otro mito: *Blut und Boden* ('sangre y tierra'), el cual no sólo expresa valores últimos, sino una multitud de creencias sobre causas y efectos, que no pueden discutirse una vez convertidas en ideales que orientan la actividad de la comunidad entera.

La necesidad de estas doctrinas oficiales, como instrumento para dirigir y aunar los esfuerzos de la gente, ha sido claramente prevista por los diversos teóricos del sistema totalitario. Las «mentiras nobles» de Platón y los «mitos» de Sorel sirven a la misma finalidad que la doctrina racial de los nazis o la teoría del Estado corporativo de Mussolini. Todos se basan necesariamente sobre opiniones particulares acerca de los hechos, que se elaboran después como teorías científicas para justificar una opinión preconcebida.

El camino más eficaz para que las gentes acepten unos valores a los que deben servir consiste en persuadirlas de que son realmente los que ellas, o al menos los mejores individuos entre ellas, han sostenido siempre, pero que hasta entonces no reconocieron o entendieron rectamente. Se fuerza a las gentes a transferir su devoción de los viejos dioses a los nuevos so pretexto de que los nuevos dioses son en reali-

dad los que su sano instinto les había revelado siempre, pero que hasta entonces sólo confusamente habían entrevisto. Y la más eficiente técnica para esta finalidad consiste en usar las viejas palabras, pero cambiar su significado. Pocos trazos de los regímenes totalitarios son a la vez tan perturbadores para el observador superficial y tan característicos de todo un clima intelectual como la perversión completa del lenguaje, el cambio de significado de las palabras con las que se expresan los ideales de los nuevos regímenes.

La que más ha sufrido a este respecto es, desde luego, la palabra libertad. Es una palabra que se usa tan desembarazadamente en los Estados totalitarios como en cualquier parte. Aun pudiera casi decirse –y ello debería servirnos como advertencia para ponernos en guardia contra todos los incitadores que nos prometen *Nuevas libertades por las viejas* [1]– que allí donde se destruyó la libertad tal como la entendemos, casi siempre se hizo en nombre de alguna nueva libertad prometida a la gente. También entre nosotros tenemos «planificadores de la libertad» que nos prometen una «libertad colectiva de grupo», cuya naturaleza puede inferirse del hecho de considerar sus defensores necesario asegurarnos que, «naturalmente, el advenimiento de la libertad planificada no significa que todas *[sic]* las formas anteriores de libertad hayan de ser abolidas». El doctor Karl Mannheim, de cuya obra [2] se toman estas frases, nos advierte, por lo menos, que «una concepción de la libertad modelada sobre la edad precedente es un obstáculo para todo entendimiento real del problema». Pero su empleo de la palabra libertad es tan engañoso como en boca de los políticos totalitarios. Como la libertad de éstos, la «libertad colectiva»

1. Éste es el título, *New Liberties for Old*, de una obra reciente del historiador norteamericano C. L. Becker.
2. *Man and Society in an Age of Reconstruction*, pág. 377.

que aquél nos ofrece no es la libertad de los miembros de la sociedad, sino la libertad ilimitada del planificador para hacer con la sociedad lo que se le antoje[3]. Es la confusión de la libertad con el poder, llevada al extremo.

En este caso particular, la perversión del sentido de la palabra ha sido, por supuesto, bien preparada por una larga línea de filósofos alemanes, y no en mínima parte por muchos de los teóricos del socialismo. Pero la libertad no es en modo alguno la única palabra cuyo significado se sustituyó por su opuesto para que sirviera como instrumento de la propaganda totalitaria. Hemos visto ya que lo mismo ha sucedido con justicia y ley, derecho e igualdad. La lista podría extenderse hasta incluir a casi todos los términos de moral y política de general uso.

Si no se ha pasado personalmente por la experiencia de este proceso, es difícil apreciar la magnitud de este cambio de significado de las palabras, la confusión que causa y las barreras que crea para toda discusión racional. Hay que haberlo visto para comprender cómo, si uno de dos hermanos abraza la nueva fe, al cabo de un breve tiempo parecen hablar lenguajes diferentes, que impiden toda comunicación real entre ellos. Y la confusión se agrava porque este cambio de significado de las palabras que expresan ideales políticos no es un hecho aislado, sino un proceso continuo, una técnica empleada consciente o inconscientemente para dirigir al pueblo. De manera gradual, a medida que avanza este proceso, todo el idioma es expoliado, y las palabras se transforman en cáscaras vacías, desprovistas de todo significado definido, tan capaces de designar una cosa como su contraria

3. Mr. Peter Drucker (*The End of Economic Man*, pág. 74) observa correctamente que «cuanto menos libertad hay, más se habla de la "nueva libertad". Pero esta nueva libertad es una simple palabra que cubre exactamente lo contrario de todo lo que Europa entendió siempre por libertad... La nueva libertad que se predica en Europa es, en realidad, el derecho de la mayoría contra el individuo».

y útiles tan sólo para las asociaciones emocionales que aún les están adheridas.

No es difícil privar de independencia de pensamiento a la gran mayoría. Pero también hay que silenciar a la minoría que conservará una inclinación a la crítica. Hemos visto ya por qué la coerción no puede limitarse a imponer el código ético sobre el que descansa el plan que dirige toda la actividad social. Como muchas partes de este código nunca se formularán explícitamente, como muchas partes de la escala de valores orientadora sólo se manifestarán implícitamente en el plan, el plan mismo en todos sus detalles, y de hecho todo acto de gobierno, tiene que hacerse sagrado y quedar exento de toda crítica. Si la gente ha de soportar sin vacilación el esfuerzo común, tiene que estar convencida de que son justos, no sólo los fines pretendidos, sino también los medios elegidos. El credo oficial, cuya adhesión se impone, abarcará todas las cuestiones concretas en las que se basa el plan. La crítica pública, y hasta las expresiones de duda, tienen que ser suprimidas porque tienden a debilitar el apoyo público. Como cuentan los Webbs, refiriéndose a la situación en todas las empresas rusas, «mientras el proyecto está en ejecución, toda pública expresión de duda, o incluso el temor de que el plan no logre éxito, es un acto de deslealtad y hasta de traición, a causa de sus posibles efectos sobre la voluntad y los esfuerzos del resto de la plantilla»[4]. Cuando la duda o el temor expresados conciernen, no al éxito de una empresa particular, sino al del plan social entero, no pueden dejar de tratarse como un sabotaje.

Hechos y teorías se convierten así en el objeto de una doctrina oficial, no menos que en criterios de valor. Todo el aparato para difundir conocimientos: las escuelas y la Prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar

4. S. y B. Webb, *Soviet Communism*, pág. 1038.

aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones. El efecto probable sobre la lealtad de la gente al sistema llega a ser el único criterio para decidir si debe publicarse o suprimirse una determinada información. En un Estado totalitario la situación es, permanentemente y en todos los campos, la misma que en los demás países domina algunos ámbitos en tiempos de guerra. Se ocultará a la gente todo lo que pueda provocar dudas acerca de la competencia del Gobierno o crear descontento. Las bases de comparación desfavorable con las condiciones de otro lugar; el conocimiento de las posibles alternativas frente a la dirección efectivamente tomada; la información que pueda sugerir el fracaso del Gobierno en el cumplimiento de sus promesas o en aprovechar las oportunidades de mejorar la situación, todo se suprimirá. Por consecuencia, no habrá campo donde no se practique una intervención sistemática de la información y no se fuerce a una uniformidad de criterios.

Lo mismo se aplica también a los ámbitos aparentemente más alejados del interés político, y especialmente a todas las ciencias, aun las más abstractas. Que en un sistema totalitario no se consienta la investigación desinteresada de la verdad y no haya otro objetivo que la defensa de los criterios oficiales, es fácil de comprender, y la experiencia lo ha confirmado de modo amplio en cuanto a las disciplinas que tratan directamente de los negocios humanos y, por consiguiente, afectan de la manera más inmediata a los criterios políticos, tales como la Historia, el Derecho o la Economía. En todos los países totalitarios estas disciplinas se han convertido realmente en las más fecundas fábricas de mitos oficiales, que los dirigentes utilizan para guiar las mentes y voluntades de sus súbditos. No es sorprendente que en estas esferas se abandone hasta la pretensión de trabajar en busca

de la verdad y que las autoridades decidan qué doctrinas deben enseñarse y publicarse.

El control totalitario de la opinión se extiende, sin embargo, a dominios que a primera vista parecen no tener significación política. A veces es difícil explicar por qué se proscriben oficialmente unas doctrinas determinadas o por qué se fomentan otras, y es curioso que estos gustos y antipatías no dejan de presentar semejanzas en los diferentes sistemas totalitarios. En particular, todos ellos parecen sentir en común una intensa antipatía por las formas más abstractas del pensamiento; antipatía que es también característica entre muchos de nuestros hombres de ciencia colectivistas. Viene a ser lo mismo que la teoría de la relatividad se presente como un «ataque semita contra los fundamentos de la Física cristiana y nórdica» o que se rechace porque está «en desacuerdo con el materialismo dialéctico y el dogma marxista». Ni tampoco es muy diferente que se ataquen ciertos teoremas de la estadística matemática porque «forman parte de la lucha de clases en el frente ideológico y son un producto del papel histórico de la Matemática como sirviente de la burguesía», o que se condene toda la materia porque «no ofrece garantías de que vaya a servir al interés del pueblo». Parece que la matemática pura no es menos víctima, y que incluso mantener determinadas opiniones acerca de la naturaleza de la continuidad puede señalarse como «prejuicios burgueses». Según los Webbs, la *Revista de Ciencias Naturales Marxistas-Leninistas* contiene los siguientes *slogans:* «Defendemos al Partido en la matemática. Defendemos la pureza de la teoría marxista-leninista en cirugía.» La situación parece ser muy semejante en Alemania. La *Revista de la Asociación Nacional-Socialista de Matemáticos* rebosa de consignas: «El Partido en la matemática». ¡Y uno de los físicos alemanes más conocidos, Lennard, premio Nobel, ha recopilado la obra de su vida bajo el título de *Física alemana en cuatro volúmenes!*

Está enteramente de acuerdo con el espíritu del totalitarismo la condenación de toda actividad humana realizada por puro placer y sin ulterior propósito. La ciencia por el placer de la ciencia, el gusto del arte por el arte, son igualmente aborrecibles para los nazis, nuestros intelectuales socialistas y los comunistas. *Toda* actividad debe extraer de un propósito social consciente su justificación. No debe existir actividad espontánea, sin guía, porque pudiera producir resultados imprevisibles sobre los cuales el plan no se ha manifestado. Podría producir algo nuevo, inimaginado por la filosofía del planificador. El principio se extiende incluso a los juegos y diversiones. Dejo al lector que adivine si fue en Alemania o en Rusia donde se exhortó oficialmente a los jugadores de ajedrez así: «Tenemos que acabar de una vez y para siempre con la neutralidad del ajedrez. Tenemos que condenar de una vez y para siempre la fórmula de "el ajedrez por el placer del ajedrez", como la fórmula de "el arte por el placer del arte"».

Por increíbles que puedan parecer algunas de estas aberraciones, tenemos, sin embargo, que guardarnos de descartarlas como meros subproductos accidentales, que nada tienen que ver con la esencia del carácter de un sistema totalitario o planificado. No es así. Son un resultado directo del mismo deseo de verlo todo dirigido por una «concepción unitaria del conjunto», de la necesidad de sostener a toda costa los criterios para cuyo servicio se solicitan constantes sacrificios de las gentes y de la general idea de ser los conocimientos y creencias de la gente un *instrumento* que ha de usarse para un propósito determinado. Si la ciencia ha de servir, no a la verdad, sino a los intereses de una clase, una comunidad o un Estado, la única misión del razonamiento y el análisis consiste en defender y difundir todavía más las creencias que regulan la vida entera de la comunidad. Como el ministro nazi de Justicia ha explicado, la pregunta que toda nueva teoría científica debe plantearse a sí misma es: «¿Sirvo al nacionalsocialismo, para el mayor beneficio de todos?».

La misma palabra verdad deja de tener su antiguo significado. No designa ya algo que ha de encontrarse, con la conciencia individual como único árbitro para determinar si en cada particular caso la prueba (o la autoridad de quienes la presentan) justifica una afirmación; se convierte en algo que ha de ser establecido por la autoridad, algo que ha de creerse en interés de la unidad del esfuerzo organizado y que puede tener que alterarse si las exigencias de este esfuerzo organizado lo requieren.

El clima general intelectual que esto produce; el espíritu de completo escepticismo respecto a la verdad, que engendra; la pérdida del sentido de lo que la verdad significa; la desaparición del espíritu de investigación independiente y de la creencia en el poder de la convicción racional, la manera de convertirse las diferencias de opinión, en todas las ramas del conocimiento, en cuestiones políticas que han de ser resueltas por la autoridad, son cosas todas que hay que experimentar personalmente, cuya extensión no puede mostrarse en una reseña breve. Quizá el hecho más alarmante sea que el desprecio por la libertad intelectual no es cosa que sólo surja una vez establecido el sistema totalitario, sino algo que puede encontrarse en todas partes entre los intelectuales que han abrazado una fe colectivista y que son aclamados como líderes intelectuales hasta en los países que aún tienen un régimen liberal. Gentes que pretenden hablar en nombre de los hombres de ciencia de los países liberales no sólo perdonan hasta la peor opresión si se ha cometido en nombre del socialismo y defienden abiertamente la creación de un sistema totalitario; pues llegan a ensalzar francamente la intolerancia. ¿No hemos visto en fecha reciente a un hombre de ciencia británico defender incluso la Inquisición, porque, en opinión suya, «beneficia a la ciencia cuando protege a una clase naciente»?[5]. Este punto de vista es, por lo demás,

5. J. G. Growther, *The Social Relations of Science*, 1941, pág. 333.

prácticamente indistinguible de las opiniones que condujeron a los nazis a la persecución de los hombres de ciencia, a la quema de los libros científicos y a la sistemática exterminación de la *intelligentsia* del pueblo sojuzgado.

El deseo de imponer a un pueblo un credo que se considera saludable para él, no es, por lo demás, cosa nueva o peculiar de nuestro tiempo. Lo nuevo es el argumento con el que muchos de nuestros intelectuales intentan justificar tales designios. No hay real libertad de pensamiento en nuestra sociedad –se dice– porque las opiniones y los gustos de las masas están modelados por la propaganda, la publicidad, el ejemplo de las clases altas y otros factores ambientales, que inevitablemente encajan el pensamiento de la gente en gastados carriles. De esto se concluye que si los ideales y los gustos de la gran mayoría están siempre conformados por circunstancias que podemos dominar, debemos usar expresamente este poder para orientar las ideas de la gente en la dirección que pensamos es deseable.

Es bastante cierto, seguramente, que la gran mayoría apenas es capaz de pensar con independencia, que en la mayor parte de las cuestiones acepta criterios que encuentra ya fabricados y que se manifestará igualmente contenta si, por nacimiento o por seducción, se halla inserta en un conjunto de creencias u otro. En cualquier sociedad, la libertad de pensamiento sólo tendrá, probablemente, significación directa para una pequeña minoría. Pero esto no supone que alguien esté calificado o deba tener poder para elegir a quiénes se les reserva esta libertad. Ello no justifica ciertamente a ningún grupo de personas para pretender el derecho de determinar lo que la gente debe pensar o creer. Procede de una completa confusión de ideas el hecho de sugerirse que, como bajo cualquier tipo de sistema la mayoría de la gente sigue la dirección de alguien, es igual que todos sigan la misma dirección. Impugnar el valor de la libertad intelectual

porque nunca significará para todos la misma posibilidad de pensamiento independiente, supone confundir por completo las razones que dan su valor a la libertad intelectual. Lo esencial para que cumpla su función como principio motor del progreso intelectual no es que todos puedan ser capaces de pensar o escribir cualquier cosa, sino que cualquier causa o idea pueda ser defendida por alguien. En tanto no se prohiba la disensión, siempre habrá alguien que tendrá por discutibles las ideas que gobiernen a sus contemporáneos y someterá nuevas ideas a la prueba de la discusión y la propaganda.

Esta interacción de los individuos que poseen diferentes conocimientos y diferentes opiniones es lo que constituye la vida del pensamiento. El desarrollo de la razón es un proceso social basado en la existencia de estas diversidades. Está en su esencia que no puedan predecirse sus resultados, que no podamos saber qué opiniones contribuirán a su desarrollo y cuáles no; en resumen, que su desarrollo no pueda ser dirigido por nuestras opiniones actuales sin restringirlo a la vez. «Planificar» u «organizar» el desarrollo espiritual o, por lo que hace al caso, el progreso en general, es una contradicción en los términos. Pensar que la mente humana debe dominar «conscientemente» su propio desenvolvimiento es confundir la razón individual, la única que puede «dominar conscientemente» algo, con el proceso interpersonal al que se debe su desarrollo. Cuando intentamos controlar este proceso no hacemos sino poner barreras a su desarrollo y, más temprano o más tarde, provocar una parálisis del pensamiento y una decadencia de la razón.

La tragedia del pensamiento colectivista es que, aun partiendo de considerar suprema a la razón, acaba destruyéndola por desconocer el proceso del que depende su desarrollo. Puede en verdad decirse que ésta es la paradoja de toda doctrina colectivista, y que es su demanda de un control «consciente» o una planificación «consciente» lo que por

fuerza la lleva a pedir para una mente individual la dirección suprema; cuando sólo el enfoque individualista de los fenómenos sociales nos permite reconocer las fuerzas supraindividuales que guían el desarrollo de la razón. El individualismo es, pues, una actitud de humildad ante este proceso social y de tolerancia hacia las opiniones ajenas, y es exactamente lo opuesto de esa presunción intelectual que está en la raíz de la demanda de una dirección completa del proceso social.

12. Las raíces socialistas del nazismo

Todas las fuerzas antiliberales se están combinando contra todo lo que es liberal.

A. MOELLER VAN DEN BRUCK

Es un error general considerar el nacionalsocialismo como una simple revuelta contra la razón, como un movimiento irracional sin trasfondo intelectual alguno. Si fuera así, el movimiento sería mucho menos peligroso que lo que es. Pero nada más lejos de la verdad ni más engañoso. Las doctrinas del nacionalsocialismo son la cima de una larga evolución ideológica, de un proceso en el que han participado pensadores que ejercieron una gran influencia mucho más allá de las fronteras de Alemania. Se piense lo que se quiera sobre sus premisas de partida, lo cierto es que los hombres que engendraron las nuevas doctrinas, escritores vigorosos, han dejado la impronta de sus ideas sobre el pensamiento europeo entero. Desarrollaron su sistema con rigurosa consecuencia, y una vez que se aceptan las premisas iniciales no es posible escapar a su lógica. Es, simplemente, el colectivismo, libre de todas las huellas de una tradición individualista que pudiera embarazar su realización.

Aunque en este desarrollo llevaron la dirección los pensadores alemanes, no estuvieron en modo alguno solos. Thomas Carlyle y Houston Stewart Chamberlain, Auguste Comte y Georges Sorel han participado en esta expansión continua

tanto como cualesquier alemanes. El desarrollo de esta dirección intelectual dentro de Alemania lo ha trazado con acierto, recientemente, Mr. R. D. Butler en su estudio sobre *Las raíces del nacionalsocialismo.* Pero aunque tiene algo de aterrador su permanencia a través de ciento cincuenta años, en una forma casi inalterada y siempre recurrente, como lo ha puesto de manifiesto dicho estudio, es fácil exagerar la importancia que estas ideas ejercieron en Alemania antes de 1914. No pasaron de ser una corriente intelectual en un pueblo que era entonces más diverso, quizá, en sus opiniones que cualquier otro. Y en su conjunto estuvieron representadas por una pequeña minoría y tenidas en gran desprecio por la mayoría de los alemanes, como ocurrió en otros países.

Entonces, ¿cómo es que estas opiniones, sostenidas por una minoría reaccionaria, acabaron por ganar la asistencia de la gran mayoría de los alemanes y, prácticamente, de toda su juventud? No fue sólo la derrota, el sufrimiento y la ola de nacionalismo lo que trajo su triunfo. Todavía menos fue su origen, como muchas gentes desean creer, una reacción capitalista contra el avance del socialismo. Por el contrario, la ayuda que dio el predominio a estas ideas vino precisamente del campo socialista. En realidad, no fue la burguesía, sino más bien la ausencia de una fuerte burguesía, lo que contribuyó a elevarlas al poder.

Las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquél: su internacionalismo y a su democracia. Y a medida que se hizo más claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la realización del socialismo, los socialistas de la izquierda se aproximaron más y más a los de la derecha. Fue la unión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania a todo lo que era liberal.

En Alemania, la conexión entre socialismo y nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo –Fichte, Rodbertus y Lassalle– fueron al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo. Mientras el socialismo teórico, en su forma marxista, dirigía el movimiento obrero alemán, el elemento autoritario y nacionalista retrocedía temporalmente a segundo plano. Pero no por mucho tiempo[1]. A partir de 1914 surgen de las filas del socialismo marxista un predicador tras otro que conducen al redil del nacionalsocialismo, no a los conservadores y reaccionarios, sino a los trabajadores manuales y a la juventud idealista. Sólo más tarde alcanzó la marea del socialismo nacionalista considerable importancia y se transformó rápidamente en la doctrina hitleriana. La histeria bélica de 1914, que, precisamente por causa de la derrota alemana, no se curó jamás por completo, es el comienzo del moderno desenvolvimiento que produjo el nacionalsocialismo, el cual surgió durante este período gracias en buena parte a la asistencia de viejos socialistas.

Quizá el primer representante de esta orientación, y en muchos aspectos el más característico, fue el difunto profesor Werner Sombart, cuya conocida obra *Händler und Helden* ('Mercaderes y héroes') apareció en 1915. Sombart había comenzado como socialista marxista, y todavía en 1909 afirmaba con orgullo que había dedicado la mayor parte de su vida a luchar por las ideas de Karl Marx. Tanto como cualquier otro hombre, Sombart ha contribuido a difundir por toda Alemania las ideas socialistas y el resentimiento anticapitalista de diversos matices; y si en el pensamiento alemán

1. Y sólo parcialmente. En 1892, uno de los jefes del Partido Socialdemócrata, August Bebel, fue capaz de decir a Bismarck: «El Canciller del Reich puede estar tranquilo; la socialdemocracia alemana es una especie de escuela preparatoria del militarismo».

penetraron elementos marxistas en una proporción no superada por ningún otro país hasta la revolución rusa, ello se debió en gran medida a Sombart. Durante un tiempo, fue considerado como el representante más distinguido de la perseguida intelectualidad socialista, incapacitada, por sus opiniones radicales, para obtener una cátedra universitaria. Y aun después de la anterior guerra, la influencia, dentro y fuera de Alemania, de su obra de historiador, que enfocó como marxista después de dejar de serlo en política, alcanzó extraordinaria difusión, la cual se advierte particularmente en las obras de muchos de los planificadores ingleses y americanos.

En su libro de guerra, este viejo socialista saludó la «guerra alemana» como el conflicto inevitable entre la civilización comercial de Inglaterra y la cultura heroica de Alemania. Su desprecio hacia los criterios «comerciales» del pueblo inglés, que había perdido todos sus instintos guerreros, no tiene límite. Nada es más despreciable a sus ojos que el general afán por la felicidad individual. Y lo que él presenta como la máxima orientadora de la moral inglesa, a saber: sé justo, «para que puedas alcanzar el bienestar y prolongar tus días sobre la tierra», es, para él, «la más infame sentencia que haya salido jamás de una mente comercial». La «idea alemana del Estado», como la formularon Fichte, Lassalle y Rodbertus, es que el Estado, ni lo fundan individuos, ni se forma de individuos, ni es un agregado de individuos, ni su finalidad es la de servir cualesquier intereses individuales. Es una *Volksgemeinschaft*, en la que el individuo no tiene derechos, sino tan sólo deberes. Las reclamaciones del individuo son siempre una consecuencia del espíritu comercial. «Las ideas de 1789» -Libertad, Igualdad, Fraternidad- son ideales típicamente comerciales, sin otro fin posible que el de asegurar ciertas ventajas a los individuos.

Antes de 1914, todos los verdaderos ideales alemanes de vida heroica estuvieron en mortal peligro ante el continuo

avance de los ideales comerciales ingleses, el *confort* inglés y el *sport* inglés. El pueblo inglés, no sólo se ha corrompido por completo a sí mismo, pues todos los miembros de los sindicatos se están hundiendo en la «ciénaga del *confort*», sino que ha comenzado a infectar a los demás pueblos. Sólo la guerra ha ayudado a los alemanes a recordar que eran realmente un pueblo de soldados, un pueblo cuyas actividades todas, y particularmente las económicas, estaban subordinadas a los fines militares. Sombart sabía que otros pueblos desprecian a los alemanes porque éstos consideran la guerra como sagrada, pero él les glorifica por eso. Considerar la guerra como inhumana y sin sentido es un producto de los criterios comerciales. Hay una vida superior a la vida individual, la vida del pueblo y la vida del Estado, y el cometido del individuo consiste en sacrificarse por esta vida superior. La guerra es, para Sombart, la consumación del sentido heroico de la vida, y la guerra contra Inglaterra es la guerra contra el ideal opuesto, el ideal comercial de la libertad del individuo y del *confort* inglés, que a sus ojos encuentra su más despreciable expresión en... las máquinas de afeitar halladas en las trincheras inglesas.

Si el exabrupto de Sombart fue en aquel tiempo excesivo, incluso para la mayoría de los alemanes, otro profesor alemán llegaba, en lo esencial, a las mismas ideas en una forma más moderada y más universitaria, pero por esta razón aún más eficaz. El profesor Johann Plenge era una autoridad sobre Marx tan grande como Sombart. Su libro *Marx und Hegel* marca el comienzo del moderno renacimiento hegeliano entre los universitarios marxistas; y no puede haber duda acerca de la naturaleza genuinamente socialista de las convicciones de que partió. Entre sus numerosas publicaciones de guerra, la más importante es un libro, breve, pero muy discutido en su tiempo, que lleva este significativo título: *1789 y 1914. Años simbólicos en la historia del pensamiento político.*

Está dedicado al conflicto entre las «Ideas de 1789», el ideal de libertad, y las «Ideas de 1914», el ideal de organización. La organización es para él, como para todos los socialistas que extraen su socialismo de una tosca aplicación de los ideales científicos a los problemas de la sociedad, la esencia del socialismo. Ella fue, como justamente destaca, la raíz del movimiento socialista al engendrarse en Francia en los comienzos del siglo XIX. Marx y el marxismo han traicionado esta idea fundamental del socialismo con su fanática, pero utópica, adhesión a la idea abstracta de libertad. Ahora es cuando la idea de organización vuelve a su lugar, en todas partes, como lo muestra la obra de Mr. H. G. Wells (cuyo *Future in America* influyó profundamente en el profesor Plenge, y a quien éste señala como una de las figuras sobresalientes del socialismo moderno), pero particularmente en Alemania, donde ha sido mejor entendida y más plenamente realizada. La guerra entre Inglaterra y Alemania es, pues, realmente un conflicto entre dos principios opuestos. La «guerra mundial económica» es la tercera gran etapa de la lucha espiritual en la historia moderna. Es de igual importancia que la Reforma y la revolución burguesa por la libertad. Es la lucha por la victoria de las nuevas fuerzas nacidas de la avanzada vida económica del siglo XIX: socialismo y organización.

Porque, en la esfera de las ideas, Alemania fue el más convencido exponente de todos los sueños socialistas y, en la esfera de la realidad, el más poderoso arquitecto del sistema económico más altamente organizado. –En nosotros está el siglo XX. Cualquiera que sea el final de la guerra, somos el pueblo ejemplar. Nuestras ideas determinarán los objetivos de la vida de la Humanidad–. La Historia mundial vive al presente el colosal espectáculo de un nuevo gran ideal de vida que con nosotros gana su victoria final, mientras, a la vez, en Inglaterra se desploma definitivamente uno de los principios históricos mundiales.

mos formaron luego la espina dorsal de la administración del Plan Quinquenal de Goering. Muy semejantes fueron también las enseñanzas de otro antiguo marxista, Friedrich Naumann, cuya *Mitteleuropa* alcanzó probablemente en Alemania más circulación que ningún otro libro de guerra[2]. Pero correspondió a un activo político socialista, miembro del ala izquierda del Partido Socialdemócrata en el Reichstag, el desarrollo más completo de estas ideas y su extensa difusión. Paul Lensch había definido ya en sus primeros libros la guerra como la «vio de escape de la burguesía inglesa ante el avance del socialismo», y explicado cuán diferentes eran el ideal socialista de libertad y la concepción inglesa. Sin embargo, sólo en su tercer libro de guerra, el de mayor éxito, en su *Tres años de revolución mundial*[3], lograron sus ideas características, bajo la influencia de Plenge, su pleno desarrollo. Lensch basa su argumentación en un interesante y, en muchos aspectos, puntual relato histórico de cómo la adopción del proteccionismo por Bismarck permitió en Alemania una evolución hacia formas de concentración industrial y cartelización que, desde su punto de vista marxista, representaban una etapa más alta en el desarrollo industrial.

El resultado de la decisión de Bismarck en el año 1879 fue que Alemania asumió el papel de revolucionaria, es decir, de un Estado cuya posición respecto al resto del mundo es la del representante de un sistema económico más alto y avanzado. Comprendido esto, advertiremos que *en la presente revolución mundial, Alemania repre-*

2. Un buen resumen de las ideas de Naumann, tan características de la combinación germana de socialismo e imperialismo como todas las que hemos citado en el texto, se encontrará en R. D. Butler, *The Roots of National Socialism*, 1941, págs. 203-209.
3. Paul Lensch, *Drei Jahre Weltrevolution*, 1917. Una persona sagaz permitió disponer, todavía en curso la anterior guerra, de la traducción inglesa de esta obra, *Three Years of World Revolution*. Prólogo de J. E. M., Londres, 1918.

senta el lado revolucionario, y su mayor antagonista, Inglaterra, el contrarrevolucionario. Este hecho prueba cuán escasamente afecta la Constitución de un país, sea liberal y republicana o monárquica y autocrática a la cuestión de saber si, desde el punto de vista del desarrollo histórico, este país ha de considerarse o no como liberal. O, para decirlo más llanamente, nuestras concepciones del liberalismo, la democracia, etc., se derivaron de las ideas del individualismo inglés, de acuerdo con las cuales un Estado con un gobierno débil es un Estado liberal, y toda restricción impuesta a la libertad del individuo se considera producto de la autocracia y el militarismo.

En Alemania, «representante, designada por la Historia», de esta forma superior de vida económica,

la lucha en pro del socialismo se ha simplificado extraordinariamente, porque todas las condiciones que el socialismo requiere de antemano están ya establecidas. Y, por ende, para todos los partidos socialistas era forzosamente de interés vital que Alemania pudiera sostenerse triunfante contra sus enemigos y, con ello, cumplir su histórica misión de revolucionar el mundo. Por tanto, la guerra de la Entente contra Alemania recordaba la tentativa de la baja burguesía de la edad precapitalista para evitar la ruina de su propia clase.
Esta organización del capital [prosigue Lensch], que comenzó inconscientemente antes de la guerra y que durante la guerra ha continuado conscientemente, se mantendrá de modo sistemático después de la lucha. No a causa de un gusto por los sistemas de organización, ni aun porque el socialismo se haya reconocido como un principio superior de desarrollo social. Las clases que son hoy día los verdaderos introductores del socialismo son, en teoría, sus declarados adversarios o, por lo menos, lo fueron hasta hace poco tiempo. El socialismo está llegando, y de hecho ha llegado en cierto modo, porque no podemos ya vivir sin él.

Las únicas gentes que todavía se oponen a esta marcha son los liberales.

A esta clase de gente, que inconscientemente razona según patrones ingleses, pertenece toda la burguesía educada alemana. Sus

La economía de guerra creada en Alemania en 1914 es

la primera realización de una sociedad socialista, y su espíritu, la primera aparición activa, y no sólo reivindicatoria, de un espíritu socialista. Las necesidades de la guerra han establecido la idea socialista en la vida económica alemana, y así la defensa de nuestra nación ha proporcionado a la Humanidad la idea de 1914, la idea de la organización alemana, de la comunidad popular *(Volksgemeinschaft)* del socialismo nacional... Sin advertirlo nosotros realmente toda nuestra vida política en el Estado y en la economía se ha elevado a un nivel superior. Estado y vida económica forman una nueva unidad... El sentimiento de responsabilidad económica que caracteriza la labor del funcionario público domina toda la actividad privada... La nueva constitución corporativa alemana de la vida económica [que el profesor Plenge admite no estar todavía madura o completa]... es la más alta forma de vida del Estado que jamás se haya conocido sobre la tierra.

Al principio, el profesor Plenge esperaba todavía reconciliar el ideal de libertad y el ideal de organización, aunque, en gran parte, a través de la completa, pero voluntaria, sumisión del individuo al conjunto. Pero pronto desaparecen de sus escritos estos residuos de las ideas liberales. En 1918, la unión entre socialismo y política de poder inexorable se ha completado ya en su mente. Poco antes del fin de la guerra exhortó a sus compatriotas, desde la revista socialista *Die Glocke,* de la siguiente manera:

Ha llegado la hora de admitir que el socialismo debe ser una política de poder, porque tiene que ser organización. El socialismo tiene que ganar el poder, no debe jamás destruirlo ciegamente. Y la más importante y crítica cuestión para el socialismo, cuando los pueblos hacen la guerra, es necesariamente ésta: ¿cuál es el pueblo llamado entre todos al poder, porque es el conductor ejemplar en la organización de los pueblos?

Y adelanta todas las ideas que servirán después para justificar el nuevo orden de Hitler:

Precisamente desde el punto de vista del socialismo, que es organización, el derecho absoluto de autodeterminación de los pueblos, ¿no es el derecho a la anarquía económica individualista? ¿Estamos dispuestos a otorgar una completa autodeterminación al individuo en la vida económica? Un socialismo consecuente sólo puede conceder derecho de asociación política a un pueblo si ello corresponde a la distribución real de las fuerzas históricamente determinadas.

Los ideales que Plenge expresó con tanta claridad fueron especialmente populares en ciertos círculos, de donde quizá derivaron, formados por hombres de ciencia e ingenieros alemanes, los cuales clamaban, precisamente como ahora lo hacen tan ruidosamente sus trasuntos ingleses, por la organización planificada centralmente de todos los aspectos de la vida. A la cabeza de ellos estaba el famoso químico Wilhelm Ostwald, una de cuyas manifestaciones sobre este punto ha alcanzado cierta celebridad. Según se dice, manifestó públicamente que

Alemania tiene que organizar a Europa, que aún carece de organización. Explicaré a usted ahora el gran secreto de Alemania: nosotros, o quizá la raza alemana, hemos descubierto el significado de la organización. Mientras las demás naciones viven todavía bajo el régimen del individualismo, nosotros hemos ya alcanzado el de la organización.

Ideas muy semejantes a éstas fueron corrientes en las oficinas del dictador alemán de las materias primas, Walter Rathenau, quien, aunque se habría estremecido ante las consecuencias de su economía totalitaria, de haberlas experimentado, merece un lugar importante en una historia completa del desarrollo de las ideas nazis. A través de sus escritos ha determinado, probablemente más que otro hombre alguno, las opiniones económicas de la generación que creció en Alemania durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después; y algunos de sus colaboradores más ínti-

nociones políticas de «libertad» y «derechos ciudadanos», de constitucionalismo y parlamentarismo, se derivan de la concepción individualista del mundo, cuya clásica encarnación es el liberalismo inglés, adoptada por los portavoces de la burguesía alemana en las décadas sexta, séptima y octava del siglo XIX. Pero estos patrones están pasados de moda y descompuestos, de la misma manera que el liberalismo inglés, pasado de moda, ha sido destrozado por esta guerra. Lo que ha de hacerse ahora es saltar por encima de estas ideas políticas heredadas y contribuir al nacimiento de un nuevo concepto del Estado y la sociedad. También en esta esfera debe presentar el socialismo una consciente y decidida oposición al individualismo. A este respecto es un hecho sorprendente que en la supuesta «reaccionaria» Alemania las clases trabajadoras hayan ganado para sí una posición mucho más sólida y poderosa en la vida del Estado que lo logrado en Inglaterra o Francia.

Lensch continúa con unas consideraciones que, también, contienen mucha verdad y merecen ser examinadas:

Cuando los socialdemócratas, con la ayuda de este sufragio [universal], ocuparon todos los puestos que pudieron obtener en el Reichstag, en los Parlamentos de los estados, en los ayuntamientos, en los tribunales laborales, en las Cajas de subsidio de enfermedad, etcétera, penetraron muy profundamente en el organismo estatal; pero el precio que pagaron por ello fue que el Estado, a su vez, ejerció una profunda influencia sobre las clases trabajadoras. No hay duda que, como resultado de los duros esfuerzos socialistas durante cincuenta años, el Estado no es ya el del año 1867, cuando se adoptó el sufragio universal, pero la socialdemocracia, a su vez, no es ya la que era entonces. *El Estado ha experimentado un proceso de socialización, y la socialdemocracia ha experimentado un proceso de nacionalización.*

A su vez, Plenge y Lensch han suministrado las ideas directoras a los maestros inmediatos del nacionalsocialismo, particularmente Oswald Spengler y A. Moeller van den Bruck,

por mencionar sólo los dos nombres más conocidos [4]. Cabe discutir hasta qué punto puede considerarse socialista al primero. Pero es ahora evidente que en su alegato sobre *Prusianismo y Socialismo*, aparecido en 1920, no hace sino dar expresión a ideas ampliamente sostenidas por los socialistas alemanes. Bastarán unas cuantas muestras de su argumentación. «El viejo espíritu prusiano y el credo socialista, que hoy se odian entre sí con odio de hermanos, son uno y el mismo.» Los representantes de la civilización occidental en Alemania, los liberales alemanes, forman «el invisible ejército inglés que, después de la batalla de Jena, dejó tras sí Napoleón sobre el suelo alemán». Para Spengler, hombres como Hardenberg y Humboldt y todos los demás reformadores liberales eran «ingleses». Pero este espíritu «inglés» será expulsado por la revolución alemana que comenzó en 1914.

Las tres últimas naciones de Occidente han aspirado a tres formas de existencia que están representadas por las famosas consignas: Libertad, Igualdad, Comunidad. Toman cuerpo en las formas políticas del parlamentarismo liberal, la democracia social y el socialismo autoritario... [5]. El instinto alemán, o, más correctamente, prusiano, dice: el poder pertenece al conjunto... Cada uno recibe su puesto. Se manda o se obedece. Esto es, desde el siglo XVIII, socialismo autoritario, esencialmente antiliberal y antidemocrático, frente

4. Lo mismo vale para otros muchos de los dirigentes intelectuales de la generación que ha producido el nazismo, tales como Othmar Spann, Hans Freyer, Carl Schmitt y Ernst Jünger. Respecto a éstos, véase el interesante estudio de Aurel Kolnai, *The War against the West*, 1938, que padece, sin embargo, el defecto de pasar por alto a sus creadores socialistas por limitarse al período de la posguerra, cuando de estos ideales se habían apoderado ya los nacionalsocialistas.

5. La fórmula spengleriana encuentra su eco en una frase, a menudo citada, de Carl Schmitt, la primera autoridad nazi en Derecho constitucional, según la cual la evolución del Estado se realiza «en tres etapas dialécticas: del Estado *absoluto* de los siglos XVII y XVIII, a través del Estado *neutral* del liberal siglo XIX, al Estado *totalitario*, en el que Estado y sociedad son idénticos». (C. Schmitt, *Der Hüter der Verfassung*. Tübingen, 1931, pág. 79.)

a lo que significan el liberalismo inglés y la democracia francesa... Hay en Alemania muchos contrastes aborrecidos y mal vistos, pero despreciable sobre el suelo alemán, sólo lo es el liberalismo.

La estructura de la nación inglesa se basa sobre la distinción entre rico y pobre; la de la prusiana, sobre la que hay entre mando y obediencia. El significado de la distinción de clases es, con arreglo a esto, fundamentalmente diferente en los dos países.

Después de señalar la esencial diferencia entre el sistema inglés de libre competencia y el sistema prusiano de «administración económica», y después de mostrar (siguiendo expresamente a Lensch) cómo, desde Bismarck, la deliberada organización de la actividad económica ha asumido nuevas formas, cada vez más socialistas, Spengler continúa:

En Prusia existía un verdadero Estado, en el más ambicioso significado de la palabra. No podían existir, estrictamente hablando, personas privadas. Todo el que vivía dentro de un sistema que trabajaba con la precisión de un aparato de relojería era en algún modo uno de sus eslabones. La conducción de los negocios públicos no podía, por consiguiente, estar en manos de los particulares, como supone el parlamentarismo. Era un *Amt*, y el político responsable era un funcionario público, un servidor de la comunidad.

La «idea prusiana» exige que todo el mundo sea funcionario público, que el Estado fije todos los salarios y sueldos. La administración de toda la propiedad, especialmente, se convierte en una función asalariada. El Estado del futuro será un *Beamtenstaat*. Pero

la cuestión decisiva, no sólo para Alemania, sino para el mundo, que tiene que ser resuelta *por* Alemania *para* el mundo, es: en el futuro, ¿gobernará el comercio al Estado, o el Estado gobernará al comercio? Frente a esta cuestión, el prusianismo y el socialismo son iguales... Prusianismo y socialismo combaten a Inglaterra en nuestro mismo seno.

De aquí sólo faltaba un paso para que el santo patrono del nacionalsocialismo, Moeller van den Bruck, proclamase que la guerra mundial era la guerra entre liberalismo y socialismo: «Hemos perdido la guerra contra el Occidente. El socialismo la ha perdido contra el liberalismo[6]. Como para Spengler, el liberalismo es, pues, el enemigo a muerte. Moeller van den Bruck celebra el hecho de que

no hay juventud liberal en Alemania hoy día. Hay jóvenes revolucionarios; hay jóvenes conservadores. Pero ¿quién querría ser liberal?... El liberalismo es una filosofía de la vida a la que ahora la juventud alemana vuelve la espalda con asco, con ira, con especial desprecio, porque no hay nada más extranjero, más repugnante, más opuesto a su filosofía. La juventud alemana de hoy reconoce en el liberal a su *archienemigo*.

El Tercer Reich de Moeller van den Bruck pretendía dar a los alemanes un socialismo adaptado a su naturaleza y no contaminado por las ideas liberales del Occidente. Y así lo hizo.

Estos escritores no representan, en modo alguno, un fenómeno aislado. Ya en 1922, un observador independiente pudo hablar de un «fenómeno peculiar y, a primera vista, sorprendente» que era dable observar entonces en Alemania:

La lucha contra el orden económico capitalista, según este criterio, es una continuación de la guerra contra la Entente con las armas del espíritu y la organización económica, el camino que conduce al socialismo práctico, un retorno del pueblo alemán a sus mejores y más nobles tradiciones[7].

6. Moeller van den Bruck, *Sozialismus und Aussenpolitik*, 1933, págs. 87, 90 y 100. Los artículos allí reimpresos, particularmente el relativo a «Lenin y Keynes», que debate más detalladamente el tema discutido en el texto, se publicaron primero entre 1919 y 1923.
7. K. Pribram, «Deutscher Nationalismus und deutscher Sozialismus», en el *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 49, 1922, págs.

La lucha contra el liberalismo en todas sus formas, el liberalismo que había derrotado a Alemania, fue la idea común que unió a socialistas y conservadores en un frente único. Primero, fue principalmente en el Movimiento Juvenil Alemán, casi por entero socialista en inspiración y propósitos, donde estas ideas se aceptaron más fácilmente y donde se completó la fusión del socialismo y el nacionalismo. Desde finales de la década de los 20 y hasta la llegada de Hitler al poder, un círculo de jóvenes congregados en torno a la revista *Die Tat* y dirigidos por Ferdinand Fried fue, en la esfera intelectual, el principal exponente de esta tradición. El libro de Fried, *Ende des Kapitalismus*, es quizá el producto más característico de este grupo de *Edelnazis*, como se les llamaba en Alemania, y es particularmente inquietante su semejanza con tanta parte de la literatura que vemos en la Inglaterra de hoy, donde podemos observar el mismo movimiento de aproximación entre la derecha y los socialistas de la izquierda, y casi el mismo desprecio por todo lo que es liberal en el viejo sentido. El «socialismo conservador» (y, en otros círculos, el «socialismo religioso») fue el eslogan con el que un gran número de escritores prepararon la atmósfera donde triunfó el «nacionalsocialismo». El «socialismo conservador» es la tendencia que domina ahora en Inglaterra. La guerra contra las potencias occidentales «con las armas del espíritu y de la organización económica», ¿no había casi triunfado antes de que la verdadera guerra comenzara?

298-299. El autor menciona como otros ejemplos de la misma vía de argumentación al filósofo Max Scheler, predicador de «la misión mundial socialista de Alemania», y al marxista K. Korsch, que escribía conforme al espíritu de la nueva *Volksgemeinschaft*.

13. Los totalitarios en nuestro seno

> Cuando la autoridad se presenta con la apariencia de organización, muestra un encanto tan fascinador que puede convertir las comunidades de gentes libres en Estados totalitarios.
>
> *The Times*

Probablemente es cierto que la misma magnitud de las atrocidades cometidas por los gobiernos totalitarios, en lugar de aumentar el temor a que un sistema semejante pueda surgir un día en Inglaterra, ha reforzado más bien la seguridad de que tal cosa no puede acontecer en este país. Cuando miramos a la Alemania nazi, el abismo que la separa de nosotros parece tan inmenso que nada de lo que allí sucediere puede tener trascendencia para una posible evolución en Inglaterra. Y el hecho de haber crecido constantemente la distancia parece refutar toda sugestión de estarnos moviendo en una dirección semejante. Pero no olvidemos que, hace quince años, la posibilidad de que en Alemania sucediese lo que ha acontecido habríanla juzgado fantástica igualmente, no sólo nueve de cada diez de los mismos alemanes, sino también los observadores extranjeros más hostiles (aunque quieran ellos pretender ahora haberlo previsto).

Sin embargo, como se ha sugerido ya en estas páginas, no es con la Alemania actual, sino con la de hace veinte o treinta años, con la que muestran un parecido cada vez mayor las condiciones británicas. Hay muchos rasgos que fueron entonces considerados como «típicamente alemanes» y que

son ahora igualmente familiares en Inglaterra, y muchos síntomas que apuntan a un futuro desarrollo en la misma dirección. Hemos mencionado ya el más significativo: la creciente semejanza entre los criterios económicos de derechas e izquierdas y su común oposición al liberalismo, que era la base común a la mayoría de los políticos ingleses. Contamos con la autorizada afirmación de Mr. Harold Nicholson, quien nos dice que durante el último gobierno conservador, en los escaños de este partido los hombres «mejor dotados... eran todos socialistas de corazón» [1]; y apenas puede dudarse que, como en los días de los fabianos, muchos socialistas sienten más simpatías por los conservadores que por los liberales. Hay otros muchos rasgos estrechamente relacionados con éste. La creciente veneración del Estado, la admiración del poder y de lo grande por ser grande, el entusiasmo por la «organización» de todo (ahora lo llamamos planificación) y aquella «incapacidad para dejar algo al simple poder del crecimiento orgánico», que hasta H. v. Treitschke deploraba ya en los alemanes de hace sesenta años, apenas se acusan menos ahora en Inglaterra que entonces en Alemania.

Hasta qué punto Inglaterra ha caminado, en los últimos veinte años, por la senda alemana, se advierte con extraordinaria claridad si leemos ahora algunas de las más serias discusiones habidas en Inglaterra, durante la guerra anterior, acerca de las diferencias entre los criterios británico y alemán sobre problemas políticos y morales. Probablemente puede decirse con verdad que el público inglés tuvo entonces, en general, una apreciación más exacta de estas diferencias que la que ha demostrado ahora; porque mientras el pueblo británico se mostró en aquel tiempo orgulloso de su tradición distintiva, pocos son los criterios políticos entonces considerados como característicamente ingleses de los cuales la mayoría del pueblo británico no parezca ahora me-

1. *The Spectator*, 12 de abril de 1940, pág. 523.

dio avergonzado, si no los repudia positivamente. Apenas habrá exageración en decir que cuanto más típicamente inglés pareció al mundo un escritor de problemas políticos o sociales, más olvidado está hoy día en su propio país. Hombres como lord Morley o Henry Sidgwick, lord Acton o A. V. Dicey, que fueron entonces admirados en el mundo entero como ejemplos notables de la sabiduría política de la Inglaterra liberal, son para la generación presente victorianos completamente anticuados. Quizá nada muestre con más claridad este cambio que el hecho de no faltar una consideración simpática de Bismarck en la literatura inglesa contemporánea, en tanto que la generación más joven rara vez menciona el nombre de Gladstone sin una burla para su moralidad victoriana y su utopismo candoroso.

Hubiera deseado trasladar adecuadamente en unos párrafos la impresión alarmante sacada de la lectura de unas cuantas obras inglesas relativas a las ideas que dominaban en la Alemania de la guerra anterior, pues casi todas sus palabras podrían aplicarse a las opiniones más destacadas en la literatura inglesa actual. Me limitaré a citar un breve pasaje de lord Keynes, de 1915, exposición del «delirio» que ve manifestarse en una obra alemana típica de aquel período. Refiere cómo, según un autor alemán,

> la vida industrial debe continuar movilizada incluso en la paz. Esto es lo que quiere decir cuando habla de la «militarización de nuestra vida económica» [el título de la obra reseñada]. El individualismo ha de terminar por completo. Tiene que establecerse un sistema de regulaciones cuyo objetivo no es la mayor felicidad del individuo (el profesor Jaffé no se avergüenza de decir esto con todas sus letras), sino el reforzamiento de la unidad organizada del Estado con el fin de alcanzar el máximo grado de eficiencia *(Leistungsfähigkeit)*, que sólo indirectamente influye sobre el provecho individual. Esta monstruosa doctrina está encerrada en el relicario de una especie de idealismo. La nación se desarrollará en una «unidad cerrada» y llegará a ser efectivamente lo que Platón declaró que debería ser: «Der Mensch in Grossen». En particular, la paz venidera traerá

consigo un reforzamiento de la idea de la intervención del Estado en la industria... Las inversiones exteriores, la emigración, la política industrial de los últimos años, basada en considerar el mundo entero como un mercado, son demasiado peligrosas. El antiguo orden económico, que hoy muere, se basaba en el beneficio; y en la nueva Alemania del siglo XX, el poder sin consideración del beneficio acabará con aquel sistema capitalista que surgió de Inglaterra hace cien años[2].

Excepción hecha de no haber osado aún ningún autor inglés, que yo sepa, a menospreciar abiertamente la felicidad individual, ¿hay alguna frase de este pasaje que no encuentre su igual en mucha literatura inglesa contemporánea?

Y, sin duda, no sólo las ideas que en Alemania y en otras partes prepararon el totalitarismo, sino también muchos de los principios del totalitarismo mismo están ejerciendo una fascinación creciente en otros muchos países. Aunque pocas personas, si es que hay alguna, estarían probablemente dispuestas en Inglaterra a tragarse el totalitarismo entero, pocos son sus rasgos singulares que unos u otros no nos han aconsejado imitar. Aún más, apenas hay una hoja del libro de Hitler que una u otra persona, en Inglaterra, no nos haya recomendado emplear para nuestros propios fines. Esto se aplica especialmente a muchas gentes que son, sin duda, enemigos mortales de Hitler por un especial rasgo de su sistema. No debemos olvidar nunca que el antisemitismo de Hitler ha expulsado de su país o convertido en sus enemigos a muchas gentes que, por todos estilos, son comprobados totalitarios del tipo alemán[3].

2. *Economic Journal*, 1915, pág. 450.
3. Especialmente cuando consideramos la proporción de antiguos socialistas que se han hecho nazis, es importante recordar que el verdadero significado de esta proporción sólo se ve si la referimos, no al número total de los antiguos socialistas, sino al número de aquellos cuya conversión no se hubiera hecho imposible, en todo caso, por su ascendencia. En efecto, uno de los rasgos sorprendentes de la emigración políti-

Ninguna descripción en términos generales puede dar una idea adecuada de la semejanza entre gran parte de la literatura política inglesa actual y las obras que en Alemania destruyeron la creencia en la civilización occidental y crearon el estado de ánimo en el que pudo alcanzar éxito el nazismo. La semejanza está aún más en el espíritu para enfocar los problemas que en los argumentos específicos usados; es la misma facilidad para romper todos los lazos culturales con el pasado y para arriesgarlo todo al éxito de una particular tentativa. Como ocurrió también en Alemania, la mayoría de las obras que están preparando el camino para una orientación totalitaria en Inglaterra son el producto de idealistas sinceros y, con frecuencia, de hombres de considerable altura intelectual. Así, aunque sea desagradable individualizar a título de ejemplo, cuando son centenares de personas las que defienden opiniones semejantes, no veo otra manera de demostrar eficazmente cuánto ha avanzado en realidad esta evolución en Inglaterra. Elegiré deliberadamente para ilustración a autores cuya sinceridad y desinterés está por encima de toda sospecha. Pero aunque espero mostrar por esta vía cuán rápidamente están extendiéndose aquí las opiniones de donde brota el totalitarismo, tengo pocas probabilidades de demostrar con éxito la semejanza, igualmente importante, en la atmósfera emocional. Sería necesaria una amplia investigación acerca de todos los sutiles cambios en el pensamiento y el lenguaje para hacer explícito lo que es fácil reconocer como síntomas de una familiar evolución. El

ca procedente de Alemania es el número relativamente pequeño de refugiados de izquierdas que no son «judíos», en el sentido alemán de esta palabra. Con demasiada frecuencia hemos oído elogios del sistema alemán prefaciados por alguna afirmación como la que iniciaba en una reciente conferencia la enumeración de las «características de la técnica totalitaria de movilización económica, sobre las que sería bueno meditar», y que decía así: «Herr Hitler no es mi ideal; lejos está de serlo. Hay razones personales muy importantes por las que Herr Hitler no sería mi ideal; pero...».

contacto con las personas que hablan de la necesidad de oponer ideas «grandes» a las «pequeñas» y de reemplazar el viejo pensamiento «estático» o «parcial» por la nueva dirección «dinámica» o «global», permite comprender que lo que al principio parece un puro sin sentido es signo de aquella actitud intelectual que sólo por sus manifestaciones podemos aquí analizar.

Mis primeros ejemplos son dos obras de un inteligente erudito que en estos últimos años ha despertado mucho interés. Hay, quizá, muy pocos ejemplos en la literatura inglesa contemporánea donde la influencia de las ideas específicamente alemanas de que aquí nos ocupamos esté tan marcada como en los libros del profesor E. H. Carr, *Twenty Years' Crisis* y *Conditions of Peace.*

En el primero de estos dos libros, el profesor Carr francamente se confiesa adicto a «la "escuela histórica" de los realistas [que] tuvo su hogar en Alemania y [cuyo] desarrollo puede trazarse a través de los grandes nombres de Hegel y Marx». Un realista, explica, es el «que hace de la moralidad una función de la política» y «no puede lógicamente aceptar ningún patrón de valor, excepto el de los hechos». Este «realismo» se contrapone, según la moda verdaderamente alemana, al pensamiento «utópico» que data del siglo XVIII, «el cual fue esencialmente individualista, pues hizo de la conciencia humana el tribunal de apelación último». Pero la vieja moral, con sus «principios generales abstractos», tiene que desaparecer, porque «el empírico trata el caso concreto según sus circunstancias particulares». En otras palabras, nada hay sino cuestiones de oportunidad, y hasta se nos asegura que «la norma *pacta sunt servanda* no es un principio moral». Que sin principios generales abstractos el mérito es tan sólo una arbitraria cuestión opinable y que los tratados internacionales carecen de significado si no obligan moralmente, no parece inquietar al profesor Carr.

Según él, evidentemente, aunque no lo diga de modo explícito, resulta que Inglaterra luchó en la última guerra del lado falso. Todo el que lea ahora de nuevo las declaraciones de hace veinticinco años acerca de los fines de guerra ingleses y las compare con las opiniones actuales del profesor Carr verá fácilmente que las que entonces se tuvieron por opiniones alemanas son ahora las de él, quien argüiría probablemente que los criterios profesados entonces por Inglaterra eran tan sólo un producto de la hipocresía británica. Que apenas ve diferencia entre los ideales sostenidos por Inglaterra y los practicados por la Alemania actual, lo ilustra inmejorablemente al asegurar que,

sin duda, cuando un nacionalsocialista preeminente afirma que «todo lo que beneficia al pueblo alemán es justo y todo lo que le daña es injusto», propugna simplemente la misma identificación del interés nacional con el derecho universal que ya fue establecida para los países de habla inglesa por [el presidente] Wilson, el profesor Toynbee, lord Cecil y otros muchos.

Como los libros del profesor Carr tratan de problemas internacionales, es en este campo donde más se destaca su tendencia característica. Pero por las fugaces visiones que podemos obtener sobre la futura sociedad que él contempla, resulta que corresponde también por completo al modelo totalitario. A veces llega uno a preguntarse si esta semejanza es accidental o deliberada. Cuando el profesor Carr afirma, por ejemplo, que «no podemos ya encontrar mucho sentido a la distinción, familiar al pensamiento del siglo XIX, entre "sociedad" y "Estado"», ¿sabe que es ésta precisamente la doctrina del profesor Carl Schmitt, el más destacado teórico nazi del totalitarismo, y, de hecho, la esencia de la definición del totalitarismo dada por este autor, que es quien ha introducido este término? Y cuando estima que «la producción de opiniones en masa es el corolario de la producción de bienes en masa», de donde resulta que «el prejuicio que la pala-

bra propaganda ejerce todavía hoy sobre muchas mentes es completamente paralelo al prejuicio contra el control de la industria y el comercio», ¿no hace realmente la apología de una regimentación de la opinión pública al estilo de la practicada por los nazis?

En su más reciente libro, *Conditions of Peace*, el profesor Carr responde con una enérgica afirmativa a la pregunta con la que cerrábamos el capítulo anterior:

> Los triunfadores perdieron la paz, y la Rusia soviética y Alemania la ganaron, porque los primeros continuaron predicando, y en parte aplicando, los en otro tiempo válidos pero hoy destructivos ideales de los derechos de las naciones y el capitalismo de *laissez faire*, mientras las últimas, consciente o inconscientemente impulsadas por la corriente del siglo XX, se esforzaban por reconstruir el mundo en forma de unidades mayores sometidas a la planificación e intervención centralizadas.

El profesor Carr hace completamente suyo el grito de guerra alemán de la revolución socialista del Este contra el Occidente liberal dirigida por Alemania:

> la revolución que comenzó en la última guerra, que ha sido la fuerza impulsora de todo movimiento político importante en los últimos veinte años..., una revolución contra las ideas predominantes en el siglo XIX: democracia liberal autodeterminación nacional y *laissez faire* económico.

Como él mismo dice, con acierto, «fue casi inevitable que este desafío a las creencias del siglo XIX encontrase en Alemania, que jamás las compartió realmente, uno de sus más fuertes protagonistas». Con toda la fe fatalista de cualquier pseudo historiador desde Hegel y Marx, esta evolución se presenta como inevitable: «conocemos la dirección en que el mundo se mueve, y, o cedemos a ella, o perecemos».

La convicción de la inevitabilidad de esta tendencia se basa, característicamente, en familiares falacias económi-

cas: la presunta necesidad de una expansión general de los monopolios como consecuencia del desarrollo técnico, la pretendida «plétora potencial» y todos los demás tópicos que aparecen en las obras de este tipo. El profesor Carr no es un economista, y su argumentación económica no soporta, generalmente, un serio examen. Pero ni esto, ni lo que de ello es característico, a saber: su creencia en el rápido decrecimiento de la importancia del factor económico en la vida social, le impiden basar sobre argumentos económicos todos sus pronósticos sobre las inevitables tendencias, o presentar como principal demanda para el futuro «la reinterpretación, en términos predominantemente económicos, de los ideales democráticos de "igualdad" y "libertad"».

El desprecio del profesor Carr por todas las ideas de los economistas liberales (que insiste en llamar ideas del siglo XIX aunque sabe que Alemania «jamás las compartió realmente» y que ya practicaba en aquel siglo la mayoría de los principios que él propugna ahora) es tan profundo como el de cualquiera de los escritores alemanes citados en el capítulo anterior. Incluso se apropia la tesis alemana, engendrada por Friedrich List, según la cual el librecambio es una política dictada tan sólo por los especiales intereses de Inglaterra en el siglo XIX y sólo para ellos adecuada. Ahora, sin embargo, «la obtención artificial de un cierto grado de autarquía es condición necesaria de una existencia social ordenada». Lograr el «retorno a un comercio mundial más disperso y generalizado... por una "remoción de las barreras comerciales" o resucitando los principios del *laissez faire* del siglo XIX», es «inimaginable». ¡El futuro pertenece al *Grossraumwirtschaft* del tipo alemán: «el resultado que deseamos sólo puede lograrse por una deliberada reorganización de la vida europea tal como Hitler la ha emprendido»!

Después de todo esto es difícil sorprenderse por encontrar una característica sección, titulada «Las funciones morales de la guerra», donde el profesor Carr condesciende a

compadecerse de «las personas ingenuas (especialmente en los países de habla inglesa) que, impregnadas de la tradición del siglo XIX, persisten en considerar la guerra como algo sin sentido y desprovisto de finalidad», y se goza en el «sentimiento de significación y finalidad» que la guerra, «el más poderoso instrumento de solidaridad social», crea. Todo esto es muy familiar; pero no es en las obras de los universitarios ingleses donde uno esperaba encontrar estas opiniones.

Quizás no hayamos prestado bastante atención a un rasgo de la evolución intelectual de Alemania durante los últimos cien años, que ahora, en una forma casi idéntica, hace su aparición en Inglaterra: la agitación de los hombres de ciencia en favor de una organización «científica» de la sociedad. El ideal de una sociedad organizada «de cabo a rabo» desde arriba fue fomentado considerablemente en Alemania por la singular influencia que a sus especialistas científicos y técnicos se les permitió ejercer en la formación de las opiniones sociales y políticas. Pocas personas recuerdan que en la historia moderna de Alemania los profesores políticos han desempeñado un papel comparable al de los abogados políticos en Francia [4]. La influencia de estos hombres de ciencia políticos no se inclinó a menudo, en los últimos años, hacia el lado de la libertad. La «intolerancia de la razón», tan visible con frecuencia en el especialista científico, la intransigencia con los métodos del hombre ordinario, tan característica del técnico, y el desprecio hacia todo lo que no ha sido organizado conscientemente de acuerdo con un modelo científico, por unas inteligencias superiores, fueron fenómenos familiares durante generaciones en la vida pública alemana, antes de adquirir importancia en Inglaterra. Y quizá

4. Cf. Franz Schnabel, *Deutsche Geschichte in neunzehnten Jahrhundert*, vol. II, 1933, pág. 204.

ningún otro país proporcione mejor que Alemania, entre 1840 y 1940, una ilustración de los efectos que sobre una nación ocasiona el desplazamiento general y completo de la mayor parte de su sistema educativo desde las «humanidades» a las «realidades»[5].

La facilidad con que, en definitiva, con escasas excepciones, los universitarios y hombres de ciencia alemanes se colocaron al servicio de los nuevos gobernantes es uno de los espectáculos más deprimentes y bochornosos de la historia entera del ascenso del nacionalsocialismo[6]. Es bien sabido que precisamente los hombres de ciencia y los ingenieros, que habían pretendido tan ruidosamente ser los dirigentes en la marcha hacia un mundo nuevo y mejor, se sometieron más fácilmente que casi ninguna otra clase a la nueva tiranía[7].

5. Creo que fue el autor de *Leviatán* quien primero sugirió la supresión de la enseñanza de los clásicos, ¡porque inculcaba un peligroso espíritu de libertad!

6. El servilismo de los hombres de ciencia hacia los poderes apareció primero en Alemania, a la par del gran desarrollo de la organización oficial de la ciencia, que hoy es objeto de tanto elogio en Inglaterra. Uno de los hombres de ciencia alemanes más famosos, el fisiólogo Emil du Bois-Reymond, no se avergonzó de proclamar, en un discurso pronunciado en 1870 en su doble condición de rector de la Universidad de Berlín y presidente de la Academia Prusiana de Ciencias, que: «Nosotros, la Universidad de Berlín, situada frente al Palacio Real, somos, por los títulos de nuestra fundación, la guardia intelectual de la Casa de Hohenzollern». (*A Speech on the German War*, Londres, 1870, pág. 31. –Es curioso que Du Bois-Reymond considerase conveniente publicar una edición inglesa de su discurso.)

7. Bastará citar un testimonio extranjero: Mr. R. A. Brady, en su estudio sobre *The Spirit and Structure of German Fascism* concluye su detallada referencia de la evolución del mundo académico alemán afirmando que «en la sociedad moderna, el hombre de ciencia, *per se*, es quizá el más fácilmente utilizado y "coordinado" de todas las gentes con formación especializada. Los nazis, para decir verdad, destituyeron a muchos profesores universitarios y expulsaron de los laboratorios de investigación a muchos hombres de ciencia. Pero fue principalmente entre los profesores de ciencias sociales donde hubo una desconfianza más general y una crítica más persistente de los programas nazis, y no entre los

El papel que han desempeñado los intelectuales en la transformación totalitaria de la sociedad lo anticipó proféticamente en otro país Julien Benda, cuya *Trahison des clercs* cobra nueva significación cuando se relee ahora, quince años después de escrita. Hay especialmente un pasaje en esta obra que merece ser muy meditado y recordado cuando venimos a considerar ciertos casos de excursión de los científicos británicos al campo de la política. Es el pasaje en que M. Benda habla de

la superstición de considerar a la ciencia competente en todos los dominios, incluso el de la moral, superstición que, repito, es un producto del siglo XIX. Queda por averiguar si quienes enarbolan esta doctrina creen en ella, o si desean simplemente otorgar el prestigio de una apariencia científica a las pasiones del corazón, que ellos saben perfectamente que no son sino pasiones. Es de notar que el dogma según el cual la Historia obedece a leyes científicas lo predican, sobre todo, los partidarios de la autoridad arbitraria. Es muy natural, porque elimina las dos realidades que más odian ellos, a saber: la libertad humana y la actuación histórica del individuo[8].

Ya hemos tenido ocasión de mencionar un producto inglés de esta especie, una obra en donde, sobre un fondo marxista, se combina la idiosincrasia característica del intelectual totalitario y el odio a casi todo lo que distingue a la civilización europea desde el Renacimiento con el aplauso a los métodos de la Inquisición. No deseamos considerar aquí un caso tan extremo, y tomaremos una obra que es más re-

de las ciencias de la Naturaleza, cuyo pensamiento se supone ser más riguroso. Los destituidos de este último campo fueron primordialmente judíos o excepciones a la generalización anterior, debidas a una aceptación igualmente sin crítica de las creencias opuestas a las nazis. Por consecuencia, los nazis pudieron "coordinar" a universitarios y científicos con relativa facilidad, y con ello introducir en su esmerada propaganda el aparente peso y el apoyo de la mayor parte de la opinión docta alemana».

8. Julien Benda, *La trahison des clercs*, París, 1927, págs. 286-287.

presentativa y ha alcanzado extensa publicidad. El librito del Dr. C. H. Waddington, bajo el característico título de *La actitud científica*, es muy buen ejemplo de un tipo de literatura que patrocina activamente el influyente semanario *Nature*, y que combina las demandas de un mayor poder político para los hombres de ciencia con una defensa ardiente de la «planificación» en gran escala. Aunque no tan franco en su desprecio por la libertad como Mr. Crowther, difícilmente es más tranquilizador el doctor Waddington. Difiere de la mayoría de los escritores del mismo tipo en que ve claramente e incluso destaca que las tendencias que describe y defiende conducen inevitablemente a un sistema totalitario. Y, sin embargo, le resulta al parecer preferible a la, según él, «feroz jaula de monos que es la civilización presente».

La pretensión del Dr. Waddington, según la cual el hombre de ciencia está calificado para dirigir una sociedad totalitaria, se basa principalmente en su tesis de que «la ciencia puede formular juicios éticos sobre la conducta humana»: pretensión que, en la elaboración del Dr. Waddington, ha recibido de *Nature* considerable publicidad. Por lo demás, es una tesis familiar desde hace mucho tiempo a los científicos políticos alemanes, que ha sido justamente destacada por J. Benda. Para ilustración de lo que significa, no necesitamos salirnos del libro del Dr. Waddington. La libertad, explica, «es un concepto cuya discusión resulta muy dificultosa para el hombre de ciencia, en parte porque no está convencido de que, en último análisis, exista tal cosa». Nos dice, sin embargo, que la «ciencia reconoce» esta y aquella libertad, pero que «la libertad de ser singular y distinto de su vecino no es... un valor científico». ¡Al parecer, las «prostituidas humanidades», acerca de las cuales el doctor Waddington tiene muchas cosas desfavorables que decir, nos han engañado gravemente enseñándonos la tolerancia!

Conforme a lo que es costumbre encontrar en esta clase de literatura, cuando este libro sobre la «actitud científica»

llega a las cuestiones económicas y sociales es cualquier cosa menos científico. Encontramos de nuevo todos los familiares *clichés y* generalizaciones sin base acerca de la «plétora potencial» y de la inevitable tendencia hacia el monopolio; pero cuando se examinan las «mejores autoridades», citadas en apoyo de estas afirmaciones, resultan ser, en su mayor parte, folletos políticos de dudosa reputación científica, mientras que los estudios serios sobre los mismos problemas son característicamente despreciados.

Como en casi todas las obras de este tipo, las convicciones del Dr. Waddington están determinadas principalmente por su aceptación de las «tendencias históricas inevitables» que se supone ha descubierto la ciencia y que él deriva de «la filosofía profundamente científica» del marxismo, cuyas nociones básicas son «casi, si no completamente, idénticas a las que constituyen el fundamento de la visión científica de la naturaleza» y cuya «aptitud para enjuiciar» supera, nos dice el Dr. Waddington, a todo lo precedente. Y aunque el Dr. Waddington encuentra «difícil negar que en Inglaterra se vive ahora peor» que en 1913, prevé un sistema económico que «será centralizado y totalitario, en el sentido de que todos los aspectos del desarrollo económico, dentro de grandes regiones, serán conscientemente planificados como un conjunto integral». Pero en apoyo de su fácil optimismo sobre la posibilidad de mantener la libertad de pensamiento en este sistema totalitario, su «actitud científica» no encuentra mejor recurso que la convicción de que «tiene que haber testimonios muy valiosos en el campo de ciertas cuestiones que se comprenden sin necesidad de ser un especialista», tales como, por ejemplo, la de si es posible «combinar el totalitarismo con la libertad de pensamiento».

Un examen más completo de las diversas tendencias totalitarias en Inglaterra debería prestar considerable atención a los varios intentos de crear alguna especie de socialismo de la

clase media, que presentan un alarmante parecido, desconocido sin duda para sus autores con las tendencias semejantes en la Alemania prehitleriana[9]. Si nos ocupáramos aquí expresamente de los movimientos políticos, tendríamos que considerar las nuevas organizaciones como el movimiento de la *Forward March o Common Wealth*, de sir Richard Acland, el autor de *Unser Kampf*, o las actividades del «Comité de 1941», de Mr. J. B. Priestley, que en un tiempo estuvo asociado con el primero. Pero aunque sería imprudencia despreciar el significado sintomático de fenómenos como éstos, difícilmente pueden ser contados entre las fuerzas políticas importantes. Aparte de las influencias intelectuales que hemos ilustrado con dos ejemplos, el impulso del movimiento hacia el totalitarismo proviene principalmente de los dos grandes grupos de intereses: el capital organizado y el trabajo organizado. Probablemente, la mayor amenaza de todas está en el hecho de apuntar en la misma dirección la política de estos dos grupos, los más poderosos.

Lo hacen a través de su común y a menudo concertado apoyo a la organización monopolista de la industria, y esta tendencia es el mayor peligro inmediato. Si bien es cierto que no hay razón para creer que este movimiento sea inevitable, apenas puede dudarse que, si continuamos por el camino que hemos venido pisando, acabaremos en el totalitarismo.

9. Otro elemento que después de esta guerra reforzará probablemente las tendencias en esta dirección lo constituirán algunos de los hombres que durante la guerra han saboreado el poder de la intervención coercitiva y encontrarán difícil volver a los humildes papeles que habían desempeñado hasta entonces. Aunque después de la anterior guerra los hombres de esta clase no fueron tan numerosos como lo serán probablemente en el futuro, ejercieron, sin embargo, entonces una influencia no despreciable sobre la política económica de Inglaterra. En la compañía de algunos de estos hombres, hace ya diez o doce años, experimenté por vez primera en este país la entonces inusitada sensación de ser transportado repentinamente a lo que estaba acostumbrado a considerar como una atmósfera intelectual completamente «alemana».

Este movimiento, por lo demás, está deliberadamente planeado, sobre todo por los organizadores capitalistas de monopolios, que son, por ello, una de las principales fuentes de este peligro. Su responsabilidad no se reduce por el hecho de no ser su objetivo un sistema totalitario, sino más bien una especie de sociedad corporativa, donde las industrias organizadas aparecerían como «estamentos» semiindependientes y autónomos. Pero son tan cortos de vista como lo fueron sus colegas alemanes al suponer que se les permitiría, no sólo crear este sistema, sino también dirigirlo durante algún tiempo. Las decisiones que los directores de una industria así organizada tendrían que tomar constantemente son de las que ninguna colectividad dejaría mucho tiempo en manos de particulares. Un Estado que consienta el desarrollo de tan enormes agregaciones de poder no puede soportar que este poder quede enteramente bajo el dominio privado. No es menos ilusorio creer que en estas condiciones se consienta a los empresarios gozar largo tiempo de la posición de favor que en una sociedad en régimen de competencia está justificada por el hecho de ser sólo unos cuantos los que alcanzan el éxito, en cuya persecución son muchos los que corren los riesgos. No es para sorprender que los empresarios quisieran disfrutar los altos ingresos que en una sociedad en régimen de competencia ganan los que, de entre ellos, tienen éxito, y a la vez gozar la seguridad del funcionario público. En tanto exista un amplio sector de industria privada junto a otro dirigido por el Estado, es probable que un gran talento industrial consiga sueldos altos, incluso en posiciones muy seguras. Pero si los empresarios pueden ver confirmadas sus aspiraciones durante un período de transición, no transcurrirá mucho tiempo antes de que se encuentren, como les sucedió a sus colegas alemanes, con que ya no son los dueños, sino que tienen que contentarse, en todos los aspectos, con el poder y los emolumentos que el gobierno quiera concederles.

A menos que la argumentación de este libro haya sido muy mal interpretada, el autor no se hará sospechoso de ternura hacia los capitalistas si subraya aquí que, con todo, sería un error inculpar del moderno movimiento hacia el monopolio exclusiva o principalmente a aquella clase. Su tendencia en esta dirección, ni es nueva, ni por sí podría llegar a ser, probablemente, un poder formidable. La fatalidad fue que lograron asegurarse la ayuda de otros grupos en número cada vez mayor, y con su apoyo obtuvieron la protección del Estado.

En cierta medida, los monopolistas han ganado esta protección, o permitiendo a otros grupos participar en sus ganancias, o, quizás más frecuentemente, persuadiéndolos de que la formación de monopolios convenía al interés público. Pero el cambio en la opinión pública, que, por su influjo sobre la legislación y la jurisprudencia [10], ha sido el factor más importante en esta evolución, es sobre todo el resultado de la propaganda que contra la libre competencia han realizado las izquierdas. Con mucha frecuencia, incluso las medidas dirigidas contra los monopolistas no han servido, de hecho, más que para reforzar el poder del monopolio. Toda participación en las ganancias del monopolio, sea en favor de grupos particulares o del Estado mismo, tiende a crear nuevos interesados, que contribuirán a reforzar el monopolio. Un sistema en el que amplios grupos privilegiados se beneficien de las ganancias del monopolio puede ser políticamente mucho más peligroso, y allí el monopolio es ciertamente más poderoso que otro sistema donde los beneficios vayan a unos cuantos. Pero aunque debía ser evidente que, por ejemplo, los altos salarios que puede pagar el monopolista son tanto el resultado de la explotación como una ventaja para él mismo, y sin duda empobrecerán, no sólo a todos los consu-

10. Cf. sobre este punto el instructivo y reciente artículo de W. Arthur Lewis titulado «Monopoly und the Law», en *The Modern Law Review*, vol. VI, núm. 3, abril de 1943.

midores, sino aún más a los restantes asalariados, lo cierto es que, no ya los beneficiados de ello, sino el público, acepta ahora generalmente la capacidad para pagar altos salarios como un argumento legítimo en favor del monopolio [11].

Hay serias razones para dudar si, aun en los casos en que el monopolio es inevitable, el mejor camino para dominarlo consiste en ponerlo en manos del Estado. Si sólo fuera cuestión de una industria, podría ser así. Pero cuando se trata de numerosas industrias monopolistas diversas, mucho puede decirse en favor de dejarlas en diferentes manos particulares antes que combinarlas bajo el control único del Estado. Aunque los transportes por ferrocarril, carretera y aire, o el suministro de gas y electricidad fueran todos monopolios inevitables, el consumidor está indiscutiblemente en una posición mucho más fuerte si permanecen como monopolios separados que si son «coordinados» bajo un control central. El monopolio privado casi nunca es completo y aún más raramente de larga duración o capaz de despreciar la competencia potencial. Pero un monopolio de Estado es siempre un monopolio protegido por el Estado, protegido a la vez contra la competencia potencial y contra la crítica eficaz. En la mayor parte de los casos significa que se ha dado a un monopolio temporal el poder para asegurar su posición indefinidamente; un poder que, sin duda, será utilizado. Cuando el poder que debe frenar y controlar el monopolio llega a interesarse en el amparo y defensa de sus administra-

11. Aún más sorprendente, quizá, es la notable ternura que muchos socialistas están dispuestos a mostrar hacia el rentista, el tenedor de obligaciones, a quien la organización monopolista de la industria garantiza frecuentemente una renta segura. Uno de los más extraordinarios síntomas de la perversión de valores que se ha producido durante la última generación es que la ciega enemistad hacia los beneficios lleve a la gente a representarse una renta fija obtenida sin esfuerzo como más deseable social o moralmente que aquéllos, y a aceptar incluso el monopolio para asegurar una renta así garantizada a los tenedores, por ejemplo, de obligaciones ferroviarias.

dores, cuando el remedio por el gobierno de un abuso significa admitir su responsabilidad en ello, y cuando la crítica de las actividades del monopolio significa una crítica del gobierno, poca esperanza puede ponerse en que el monopolio esté al servicio de la comunidad. Un Estado que se enredase por completo en la dirección de empresas monopolistas poseería un poder aplastante sobre el individuo, pero, sin embargo, sería un Estado débil en cuanto a su libertad para formular una política. El mecanismo del monopolio se identifica con el mecanismo del Estado, y el propio Estado se identifica más y más con los intereses de quienes manejan las cosas y menos con los del pueblo en general.

Lo probable es que, allí donde el monopolio sea realmente inevitable, un fuerte control del Estado sobre los monopolios privados, método que solían preferir los americanos, ofrezca más probabilidades de resultados satisfactorios, si es mantenido con continuidad, que la gestión directa por el Estado. Al menos parece ser así si el Estado impone una rigurosa intervención del precio, que no consienta espacio para beneficios extraordinarios de los que puedan participar quienes no sean los monopolistas. Incluso si esto tuviera por efecto (como ha sucedido a veces con los servicios públicos americanos) que los servicios de las industrias monopolistas fuesen menos satisfactorios de lo que podrían resultar, sería un precio barato por un freno eficaz de los poderes del monopolio. Personalmente, yo preferiría con mucho tener que soportar alguna ineficiencia de esta clase que ver intervenidos todos los caminos de mi vida por el monopolio organizado. Este método de tratar el monopolio, que rápidamente podría hacer de la posición del monopolista la menos elegible entre todas las posiciones de empresario, podría contribuir tanto como cualquier otra cosa a reducir el monopolio a las esferas en donde es inevitable y a estimular la invención de sustitutivos que pudieran hacerle la competencia. ¡Bastaría convertir otra vez la posición del monopolista

en cabeza de turco de la política económica para que sorprendiese la rapidez con que la mayoría de los empresarios capaces redescubriera su gusto por el aire saludable de la competencia!

El problema del monopolio no sería tan difícil como es si sólo tuviéramos que combatir al monopolio del capitalista. Pero, como se ha dicho antes, el monopolio ha llegado a ser el peligro que es, no por los esfuerzos de unos cuantos capitalistas interesados, sino por el apoyo que éstos han obtenido de quienes recibieron participación en sus ganancias y de aquellos otros, mucho más numerosos, a quienes persuadieron de que ayudando al monopolio contribuían a la creación de una sociedad más justa y ordenada. El fatal punto crítico en la evolución moderna se produjo cuando el gran movimiento que sólo podía servir a sus fines originarios luchando contra todo privilegio, el movimiento obrero, cayó bajo la influencia de las doctrinas contrarias a la libre competencia y se vio él mismo mezclado en las pugnas por los privilegios. El crecimiento reciente del monopolio es en gran parte el resultado de una deliberada colaboración del capital organizado y el trabajo organizado, gracias a la cual los grupos obreros privilegiados participan de los beneficios del monopolio a expensas de la comunidad y particularmente a expensas de los más pobres: los empleados en las industrias peor organizadas y los trabajadores en paro.

Uno de los más tristes espectáculos de nuestro tiempo es ver a un gran movimiento democrático favoreciendo una política que tiene que conducir a la destrucción de la democracia y que, mientras tanto, sólo puede beneficiar a una minoría de las masas que le secundan. Y, sin embargo, es esta ayuda de las izquierdas a las tendencias en pro del monopolio lo que hace tan irresistible a éste y tan oscuras las perspectivas del futuro. En tanto los partidos obreros continúen ayudando a la destrucción del único orden bajo el cual se

aseguró, por lo menos, a cada trabajador un cierto grado de independencia y libertad, poca esperanza puede quedar para el futuro. Los dirigentes obreros, que ahora anuncian con tanto ruido haber «acabado de una vez y para siempre con el absurdo sistema de la libre competencia»[12], están proclamando el ocaso de la libertad del individuo. No hay más opciones que el orden gobernado por la disciplina impersonal del mercado o el dirigido por la voluntad de unos cuantos individuos; y los que se entregan a la destrucción del primero ayudan, lo quieran o no, a crear el segundo. Aunque algunos trabajadores quizá estarían mejor alimentados en aquel nuevo orden, y todos estarían, sin duda, más uniformemente vestidos, cabe dudar que la mayoría de los trabajadores ingleses diera al cabo las gracias a sus dirigentes intelectuales por el regalo de una doctrina socialista que compromete su libertad personal.

Para todo el que esté familiarizado con la historia de los grandes países continentales en los últimos veinticinco años, el estudio del reciente programa del *Labour Party*, empeñado en la creación de una «sociedad planificada», es la más desalentadora experiencia. A «todo intento de restaurar la Gran Bretaña tradicional» se opone un plan que, no sólo en sus líneas generales, sino en los detalles, e incluso en el lenguaje, es indistinguible de los sueños socialistas que dominaron las discusiones alemanas de hace veinticinco años. Se han tomado materialmente de la ideología alemana, no sólo peticiones como la contenida en la resolución, adoptada por iniciativa del profesor Laski, de exigir el mantenimiento en tiempo de paz de las «medidas de control oficial

12. El profesor H. J. Laski, en su discurso en la 41 Asamblea anual del Partido Laborista, Londres, 26 de mayo de 1942 (*Report*, pág. 111). Merece la pena señalar que para el profesor Laski es «este absurdo sistema de la libre competencia el que extiende la pobreza por todos los pueblos, y la guerra como consecuencia de esta pobreza»: curiosa interpretación de la historia de los últimos ciento cincuenta años.

requeridas para la movilización de los recursos nacionales en la guerra», sino todos los característicos tópicos, tales como el de la «economía equilibrada», que el profesor Laski pide ahora para Gran Bretaña, o el «consumo comunitario», hacia el cual debe dirigirse centralizadamente la producción. Hace veinticinco años había quizá alguna excusa para mantener la cándida creencia en «que una sociedad planificada puede ser una sociedad mucho más libre que con el sistema de competencia basado en el *laissez faire,* al que viene a reemplazar» [13]. Pero verla sostenida otra vez, después de veinticinco años de experiencia y de la revisión de las viejas creencias provocada por esta experiencia misma, en el momento en que estamos luchando contra los resultados de aquellas mismas doctrinas, es más trágico de lo que puede expresarse con palabras. El decisivo cambio acaecido en nuestro tiempo y la fuente de mortal peligro para todo lo que un liberal tiene por valioso está en que el gran partido que en el Parlamento y en la opinión pública ha sustituido en gran medida a los partidos progresistas del pasado se haya alineado con lo que, a la luz de toda la evolución anterior, tiene que considerarse como un movimiento reaccionario. Que los avances del pasado se vean amenazados por las fuerzas tradicionalistas de la derecha es un fenómeno de todos los tiempos que no debe alarmarnos. Pero si el puesto de la oposición, tanto en la discusión pública como en el Parlamento, terminase por ser el monopolio de un segundo partido reaccionario, no se podría conservar ninguna esperanza.

13. *The Old World and the New Society,* an Interim Report of the National Executive of the British Labour Party on the Problems of Reconstruction; págs. 12 y 16.

14. Condiciones materiales y fines ideales

> ¿Es justo o razonable que la mayoría de las voces, oponiéndose a la principal razón de ser del Estado, deban esclavizar a la minoría que quiera ser libre? Más justo es, sin duda, que, si resultase forzoso, los menos obliguen a los más a permanecer libres, lo cual no puede traerles daño, y no que los más, para satisfacción de su vileza, fuercen perniciosamente a los menos a ser sus compañeros de esclavitud. Los que no pretenden sino su propia y justa libertad tienen siempre el derecho a ganarla, cuando quiera que tengan poder, por numerosas que sean las voces que se les opongan.
>
> JOHN MILTON

Agrada a nuestra generación imaginarse que concede menos peso que sus padres o sus abuelos a las consideraciones económicas. El «Final del Hombre Económico» promete ser uno de los mitos directores de nuestra época.

Antes de aceptar esta pretensión o considerar estimable el cambio, tenemos que investigar un poco más lo que haya de verdad en ello. Cuando consideramos las demandas de reconstrucción social que más apremiantemente se solicitan, resulta que son casi todas de carácter económico. Hemos visto ya que la «reinterpretación en términos económicos» de los ideales políticos del pasado, a saber, la libertad, la igualdad y la seguridad, es una de las principales demandas planteadas por quienes, a la vez, proclaman el final del hombre económico. Tampoco puede dudarse mucho que en sus creencias y aspiraciones los hombres se gobiernan hoy más

que nunca por doctrinas económicas, por la idea, cuidadosamente fomentada, de la irracionalidad de nuestro sistema económico, por las falsas afirmaciones acerca de la «plétora potencial», por pseudoteorías acerca de la inevitable tendencia hacia el monopolio y por las impresiones nacidas de algunos acontecimientos muy difundidos, tales como la destrucción de las existencias de materias primas o la supresión temporal de inventos, condenando a la libre competencia como causante de todo ello, aunque son precisamente estas cosas las que *no pueden* suceder bajo la libre competencia y sólo son posibles en el monopolio y, generalmente, en el monopolio favorecido por el Estado[1].

En un sentido diferente, empero, es cierto sin duda que nuestra generación está menos dispuesta a obedecer a consideraciones económicas que lo estuvieron sus predecesoras. Se muestra decididamente más reacia a sacrificar a lo que se llaman argumentos económicos cualquiera de sus demandas, se impacienta y opone ante cualquier restricción de sus ambiciones inmediatas y no está dispuesta a doblegarse ante las necesidades económicas. Lo que distingue a nuestra generación no es en modo alguno el desprecio del bienestar material o ni siquiera un menor deseo de él, sino, por el contrario, la negativa a reconocer cualquier obstáculo, cualquier conflicto con otros fines que pudiera impedir el logro de sus propios deseos. «Economofobia» sería una expresión

1. El uso frecuente que, como argumento contra la libre competencia, se hace de la ocasional destrucción de trigo, café y otras materias primas es un buen ejemplo de la deshonestidad intelectual contenida en mucha parte de este argumento, pues un poco de reflexión mostraría que en un mercado en régimen de libre competencia nadie que poseyese tales *stocks* ganaría con su destrucción. El caso de la supuesta exclusión de patentes útiles es más complicado y no puede discutirse adecuadamente en una nota, pero las condiciones en que sería ventajoso congelar una patente *que el interés social aconsejaría utilizar inmediatamente* son tan excepcionales, que surgen muchas dudas acerca de su realidad en algún caso importante.

más correcta para describir esta actitud que el doblemente equívoco «final del hombre económico», el cual sugiere un cambio a partir de una situación que jamás ha existido y en una dirección en la que no nos movemos. El hombre ha llegado a odiar las fuerzas impersonales a las que en el pasado se sometió y a rebelarse contra ellas porque a menudo han frustrado sus esfuerzos individuales.

Esta rebeldía es ejemplo de un fenómeno mucho más general, de una nueva repugnancia a someterse a cualquier norma o necesidad cuya razón de ser el hombre no comprenda. Se hace sentir en muchos ámbitos de la vida, especialmente en el de la moral, y es con frecuencia una actitud elogiable. Pero hay ámbitos en los que no puede satisfacerse plenamente esta apetencia de lo inteligible y donde, a la vez, la negativa a someterse a algo que no podemos comprender tiene que conducir a la ruina de nuestra civilización. Aunque es natural que, conforme el mundo en torno se nos hace más complejo, crezca nuestra resistencia contra las fuerzas incomprensibles para nosotros que interfieren constantemente con nuestras esperanzas y planes individuales, es precisamente en estas circunstancias cuando decrece para todos la posibilidad de un pleno conocimiento de tales fuerzas. Una civilización compleja como la nuestra se basa necesariamente sobre la acomodación del individuo mismo a cambios cuya causa y naturaleza no puede comprender. Por qué poseerá más o menos, por qué tendrá que cambiar de ocupación, por qué le será más difícil obtener algunas cosas que desea que otras; todo ello estará siempre ligado a tal multitud de circunstancias, que ninguna mente aislada será capaz de comprenderlo. O, todavía peor, los afectados dirigirán todos sus reproches hacia una obvia causa inmediata y evitable, mientras que las interrelaciones más complejas que determinan el cambio quedarán ineludiblemente ocultas para ellos. El mismo jefe de una sociedad completamente planificada, si desease dar una adecuada explicación a alguien acerca de

por qué tiene que ser desplazado a otro empleo, o por qué tiene que variarse su remuneración, no podría hacerlo del todo sin explicar y defender su plan entero; lo que significa, por lo demás, que no podría explicarlo sino a unos pocos.

Fue la sumisión de los hombres a las fuerzas impersonales del mercado lo que en el pasado hizo posible el desarrollo de una civilización que de otra forma no se habría alcanzado. Sometiéndonos así, hemos contribuido día tras día a construir algo que es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede comprender plenamente. No importa que en el pasado lo que hicieron los hombres fue someterse a creencias que algunos consideran hoy como supersticiones: a un religioso espíritu de humildad o a un exagerado respeto por las toscas enseñanzas de los primeros economistas. Lo decisivo está en que es infinitamente más difícil comprender racionalmente la necesidad de someterse a fuerzas cuya acción no podemos seguir en su detalle, que acatarlas por el humilde temor que la religión, o incluso el respeto hacia las doctrinas de la economía, inspiren. Aun simplemente para mantener nuestra compleja civilización presente, sería necesario que todos los seres humanos estuviesen dotados de una inteligencia infinitamente superior a la que ahora poseen, si nadie hubiese de hacer cosas cuya necesidad no se le alcanzase. La negativa a someternos a fuerzas que ni entendemos ni podemos reconocer como decisiones conscientes de un ser inteligente es el producto de un incompleto y, por tanto, erróneo racionalismo. Es incompleto porque no acierta a comprender que la coordinación de los variados esfuerzos individuales en una sociedad compleja tiene que tener en cuenta hechos que ningún individuo puede dominar totalmente. Y no acierta a ver que, si no ha de ser destruida esta compleja sociedad, la única alternativa al sometimiento a las fuerzas impersonales y aparentemente irracionales del mercado es la sumisión a un poder igualmente irrefrenable y, por consiguiente, arbitrario, de otros hombres. En su ansie-

dad por escapar a las enojosas restricciones que siente ahora, el hombre no advierte que las nuevas prohibiciones autoritarias que habrían de imponerse deliberadamente en lugar de aquéllas serían aún más penosas.

Quienes arguyen que hemos aprendido a dominar hasta un grado asombroso las fuerzas de la Naturaleza, pero que estamos lastimosamente atrasados en el uso eficaz de las posibilidades de colaboración social, tienen toda la razón en cuanto a lo que esta afirmación dice. Pero se equivocan cuando llevan la comparación más allá y argumentan que debemos aprender a dominar las fuerzas de la sociedad de la misma manera que lo hemos hecho con las fuerzas de la Naturaleza. Eso no es sólo el camino del totalitarismo, sino el de la ruina de nuestra civilización y una vía cierta para impedir todo progreso futuro. Quienes esto demandan muestran, por sus propias demandas, que todavía no han comprendido hasta qué punto la mera conservación de todo lo que hemos logrado depende de la coordinación de los esfuerzos individuales mediante fuerzas impersonales.

Tenemos que volver nuevamente al punto crucial: que la libertad individual no se puede conciliar con la supremacía de un solo objetivo al cual debe subordinarse completa y permanentemente la sociedad entera. La única excepción a la regla de que una sociedad libre no puede someterse a un solo objetivo la constituyen la guerra y otros desastres temporales, circunstancias en las que la subordinación de casi todo a la necesidad inmediata y apremiante es el precio por el cual se preserva a la larga nuestra libertad. Esto explica también por qué son tan equívocas tantas de las frases de moda respecto a la aplicación con fines de paz de lo que hemos aprendido a hacer con fines de guerra: es razonable sacrificar temporalmente la libertad para hacerla más segura en el futuro; pero no puede decirse lo mismo de un sistema propuesto como organización permanente.

A ningún propósito singular debe atribuirse en la paz una preferencia absoluta sobre los demás, y esto vale incluso para aquel objetivo que por el común consenso ocupa ahora el primer lugar: la supresión del paro. Sin duda, éste tiene que ser el objetivo de nuestros mayores esfuerzos; pero aun así, ello no significa que se deba permitir a esta finalidad que nos domine hasta excluir toda otra cosa; que, según el dicho irreflexivo, deba lograrse «a cualquier precio». Es, en efecto, en este campo donde la fascinación de vagas pero populares frases, como la «plena ocupación», puede muy bien conducir a medidas extremadamente miopes, y donde el categórico e irresponsable «tiene que hacerse a toda costa» de los idealistas ingenuos, es probable que ocasione el mayor daño.

Es de la máxima importancia que nos acerquemos con los ojos abiertos a la tarea que en este campo habrá de afrontarse después de la guerra, y que nos hagamos cargo lúcidamente de qué es lo que cabe lograr. Uno de los rasgos dominantes de la situación al término de la guerra lo constituirán los cientos de miles de hombres y mujeres que por las especiales necesidades del conflicto habrán sido atraídos a tareas especializadas en las que, durante la guerra, han conseguido ganar salarios relativamente altos. En muchos casos no habrá posibilidad de mantener empleado al mismo número de personas en estas particulares industrias. Será de una necesidad urgente transferir gran número de personas a otros oficios y muchas de ellas encontrarán que el trabajo que pueden realizar no está tan bien remunerado como su empleo durante la guerra. Ni siquiera la readaptación, que sin duda deberá suministrarse en una liberal escala, puede enteramente dominar este problema. Quedará todavía mucha gente que, si hubiera de ser pagada de acuerdo con lo que sus servicios valgan entonces para la sociedad, bajo cualquier sistema tendrá que contentarse con una reducción de su posición material comparada con la de otros.

Si entonces los sindicatos obreros se oponen con éxito a toda reducción de los salarios de los grupos particulares en cuestión, sólo quedarán abiertas dos alternativas: o habrá de usarse la coerción, es decir, tendrá que seleccionarse a ciertas personas para su transferencia obligatoria a otras posiciones relativamente peor pagadas, o habrá que consentirse que quienes no pueden ser empleados por más tiempo con los salarios comparativamente altos que han ganado durante la guerra queden sin empleo hasta que estén dispuestos a aceptar una ocupación con un salario relativamente más bajo. Este problema surgiría en una sociedad socialista no menos que en cualquier otra, y la gran mayoría de los trabajadores no se mostraría, probablemente, más inclinada a garantizar a perpetuidad los salarios presentes a quienes fueron llevados a empleos extraordinariamente bien pagados por las especiales necesidades de la guerra. Una sociedad socialista usaría sin duda la coerción en este caso. Lo que aquí nos interesa es que, si estamos determinados, cualquiera que sea el precio, a no permitir el paro y no estamos dispuestos a utilizar la coerción, nos veremos llevados a toda clase de desesperados expedientes, ninguno de los cuales puede traer una ayuda decisiva, pero todos ellos contribuirán a estorbar gravemente el uso más productivo de nuestros recursos. Debe en especial señalarse que la política monetaria no puede suministrar una cura real para esta dificultad, si se exceptúa una general y considerable inflación suficiente para elevar todos los demás salarios y precios con respecto a aquellos que no pueden bajarse; inflación que, por lo demás, traería el resultado deseado, no de otro modo que efectuando encubiertamente aquella reducción de los salarios reales que no se pudo llevar a cabo de manera directa. Pero elevar los demás salarios y rentas en una magnitud suficiente para ajustar la posición del grupo considerado envolvería una expansión inflacionista de tal escala que las perturbaciones, dificultades e injusticias causadas serían mucho mayores que las que se pretende curar.

Este problema, que surgirá en forma particularmente aguda después de la guerra, es de los que siempre nos acompañarán en tanto que el sistema económico tenga que adaptarse por sí a cambios continuos. Siempre será posible alcanzar por medio de una expansión monetaria una máxima ocupación a corto plazo dando empleo a todas las gentes allí donde se encuentren. Mas no es sólo que para mantener este máximo sea indispensable una progresiva expansión inflacionista, con el efecto de detener aquellas redistribuciones de trabajadores entre las industrias exigidas por la alteración de las circunstancias; redistribuciones que, en tanto los trabajadores tengan libertad para elegir ocupación, se efectuarán con algún retraso y, por consiguiente, causarán algún paro. Es que la política encaminada constantemente a lograr el máximo de ocupación alcanzable por medios monetarios lleva a la postre a la destrucción segura de sus mismos propósitos. Tiende a bajar la productividad del trabajo y, por consiguiente, incrementa constantemente la proporción de la población trabajadora que sólo por fines artificiales puede mantenerse ocupada a los salarios corrientes.

Apenas puede dudarse que después de la guerra el acierto en la conducción de nuestros asuntos económicos será aún más trascendental que antes y que la suerte de nuestra civilización dependerá finalmente de cómo resolvamos los problemas económicos que tengamos que afrontar. Al principio seremos pobres, verdaderamente pobres, y el problema de recuperar y mejorar nuestros niveles anteriores puede de hecho resultar más difícil para Gran Bretaña que para otros muchos países. Si actuamos con prudencia, es casi seguro que mediante un duro trabajo y dedicando una considerable parte de nuestros esfuerzos a revisar y renovar nuestro equipo y organización industrial, en el curso de unos cuantos años estaremos en condiciones de recuperar y hasta de rebasar el nivel que habíamos alcanzado. Pero esto exige que nos

contentemos con no consumir entre tanto más de lo que es posible sin perjudicar a la tarea de la reconstrucción, que unas esperanzas exageradas no creen mayores e irresistibles pretensiones y que consideremos más importante usar nuestros recursos de la mejor manera y para los fines que mejor puedan contribuir a nuestro bienestar que utilizarlos todos, pero de cualquier manera[2]. Quizá no sea menos importante evitar que los intentos precipitados de remediar la pobreza por una redistribución, en lugar de hacerlo por un incremento de nuestro ingreso, empobrezcan a amplias capas sociales hasta convertirlas en enemigos decididos del orden político existente. No se debe olvidar nunca que un factor decisivo en el desarrollo del totalitarismo en el continente europeo, que hasta ahora no ha aparecido en Inglaterra, fue la existencia de una extensa clase media recientemente desposeída.

Nuestras esperanzas de evitar el destino que nos amenaza tienen ciertamente que descansar en gran parte sobre la idea de que podemos reanudar un rápido progreso económico, el cual, por bajo que pueda ser nuestro punto de partida, continuará elevándonos. Y la principal condición para este progreso es que todos debemos estar dispuestos a adaptarnos rápidamente a un mundo muy cambiado, que no debe permitirse que el respeto al nivel habitual de grupos particulares obstruya esta adaptación, y que debemos aprender a di-

2. Quizá sea éste el lugar para subrayar que, por grande que pueda ser nuestro deseo de un rápido retorno a una economía libre, esto no puede llevarnos a suprimir de un plumazo la mayoría de las restricciones de guerra. Nada desacreditaría más al sistema de libre empresa que la aguda, aunque probablemente breve, dislocación e inestabilidad que semejante intento provocaría. El problema está en saber hacia qué tipo de sistema debemos apuntar durante el proceso de desmovilización, y no en si debe transformarse el sistema de guerra en una organización más permanente mediante una política cuidadosamente pensada de gradual aflojamiento de los controles, que puede tener que extenderse a varios años.

rigir otra vez todos nuestros recursos a donde mejor contribuyan a que todos seamos más ricos. Los ajustes que necesitaremos para recobrar y sobrepasar nuestros antiguos niveles de vida serán mayores que cualesquiera otros realizados en el pasado, y sólo si cada uno de nosotros está dispuesto individualmente a obedecer a las necesidades de este reajuste, seremos capaces de atravesar un período difícil como hombres libres que puedan elegir su propia forma de vida. Asegúrese por cualquier medio un mínimo uniforme a todos; pero a la vez admitamos que con esta seguridad de un mínimo básico tienen que cesar todas las pretensiones de una seguridad privilegiada para particulares grupos y desaparecer todas las excusas que permitan a cualquier grupo excluir de la participación en su relativa prosperidad a los recién llegados, a fin de mantener para sí mismo un nivel especial.

Puede parecer magnífico que se diga: «¡Al diablo la economía, y rehagamos un mundo decoroso!» Pero esto, de hecho, es pura irresponsabilidad. Con nuestro mundo tal como está, convencidos todos de que las condiciones materiales deben ser mejoradas en todas partes, nuestra sola posibilidad de construir un mundo decoroso está en poder continuar mejorando el nivel general de la riqueza. Lo único que la democracia moderna no soportará sin deshacerse es una reducción sustancial de los niveles de vida en la paz o, ni siquiera, un estancamiento prolongado de la situación económica.

Los que admiten que las actuales tendencias políticas constituyen una seria amenaza para nuestro porvenir económico y, a través de sus efectos económicos, ponen en peligro valores mucho más altos, están, sin embargo, dispuestos a engañarse a sí mismos y creer que estamos realizando sacrificios materiales para alcanzar objetivos espirituales. Es, sin embargo, más que dudoso que los cincuenta años de movi-

miento hacia el colectivismo hayan elevado nuestras normas morales o incluso que el cambio no nos haya llevado en la dirección opuesta. Aunque tenemos el hábito de enorgullecernos del aumento de sensibilidad de nuestra conciencia social, no está en modo alguno claro que ello se justifique por la práctica de nuestra conducta individual. En el aspecto crítico, en su indignación por las iniquidades del orden social existente, nuestra generación sobrepasa, probablemente, a la mayoría de sus predecesoras. Pero es cosa muy diferente el efecto de esta actitud sobre nuestras normas positivas en el campo propio de la moral, es decir, en la conducta individual, y sobre la firmeza de nuestra defensa de los principios morales contra las conveniencias y exigencias del mecanismo social.

En este campo, las cuestiones se han vuelto tan confusas que es necesario retroceder a los fundamentos. Lo que nuestra generación corre el peligro de olvidar no es sólo que la moral es necesariamente un fenómeno de la conducta individual, sino, además, que sólo puede existir en la esfera en que el individuo es libre para decidir por sí y para sacrificar sus ventajas personales ante la observancia de la regla moral. Fuera de la esfera de la responsabilidad individual no hay ni bondad ni maldad ni oportunidad para el mérito moral, ni lugar para probar las convicciones propias sacrificando a lo que uno considera justo los deseos personales. Sólo cuando somos responsables de nuestros propios intereses y libres para sacrificarlos tiene valor moral nuestra decisión. Ni tenemos derecho a ser altruistas a costa de otros, ni tiene mérito alguno ser altruista si no se puede optar. Los miembros de una sociedad a quienes, en todos los aspectos, se les *hace* hacer el bien no tienen motivo para alabarse. Como dijo Milton: «Si cada acción, buena o mala, de un hombre maduro estuviese sujeta a límite, prescripción o violencia, ¿qué sería la virtud sino un nombre? ¿Qué alabanza merecerían las buenas obras? ¿Cómo premiar al sobrio, al justo o al puro?».

La única atmósfera en la que el sentido moral se desarrolla y los valores morales se renuevan a diario en la libre decisión del individuo es la de libertad para ordenar nuestra propia conducta en aquella esfera en la que las circunstancias materiales nos fuerzan a elegir y de responsabilidad para la disposición de nuestra vida de acuerdo con nuestra propia conciencia. La responsabilidad, no frente a un superior, sino frente a la conciencia propia, el reconocimiento de un deber no exigido por coacción, la necesidad de decidir cuáles, entre las cosas que uno valora, han de sacrificarse a otras y el aceptar las consecuencias de la decisión propia son la verdadera esencia de toda moral que merezca ese nombre.

Es inevitable, e innegable a la vez, que en esta esfera de la conducta individual el colectivismo ejerza un efecto casi enteramente destructivo. Un movimiento cuya principal promesa consiste en relevar de responsabilidad [3] no puede ser sino antimoral en sus efectos, por elevados que sean los ideales a los que deba su nacimiento. ¿Puede dudarse que el sentimiento de la personal obligación en el remedio de las desigualdades, hasta donde nuestro poder individual lo permita, ha sido debilitado más que forzado? ¿Que tanto la voluntad para sostener la responsabilidad como la conciencia

3. Esto aparece tanto más claramente cuanto más se aproxima el socialismo al totalitarismo, y en Inglaterra se afirma más explícitamente que en ningún otro lugar en el programa de la última y más totalitaria forma del socialismo inglés: el movimiento de la *Common Wealth* de sir Richard Acland. El principal rasgo del nuevo orden que promete es que, en él, la comunidad «dirá al individuo: "no *te* preocupes de la manera de ganarte *tu propia* vida"». En consecuencia, como es lógico, «tiene que ser la comunidad en cuanto tal quien decida si un hombre será empleado o no, con nuestros recursos, y cómo, cuándo y de qué manera trabajará», y la comunidad tendrá que «establecer campos para vagos, en condiciones muy tolerables». ¿Es para sorprender que el autor descubra que Hitler «se ha encontrado por casualidad (o por fuerza) con algo, o quizá, se diría, con un aspecto particular de lo que, en última instancia, necesita la Humanidad»? (Sir Richard Acland, Bt. *The Forward March,* 1941, págs. 32, 126, 127 y 132.)

de que es nuestro deber individual saber elegir han sido perceptiblemente dañadas? Hay la mayor diferencia entre solicitar que las autoridades establezcan una situación deseable, o incluso someterse voluntariamente con tal que todos estén conformes en hacer lo mismo, y estar dispuesto a hacer lo que uno mismo piensa que es justo, sacrificando sus propios deseos y quizá frente a una opinión pública hostil. Mucho es lo que sugiere que nos hemos hecho realmente más tolerantes hacia los abusos particulares y mucho más indiferentes a las desigualdades en los casos individuales desde que hemos puesto la mirada en un sistema enteramente diferente, en el que el Estado lo enmendará todo. Hasta puede ocurrir, como se ha sugerido, que la pasión por la acción colectiva sea una manera de entregarnos todos, ahora sin remordimiento, a aquel egoísmo que, como individuos, habíamos aprendido a refrenar un poco.

Lo cierto es que las virtudes menos estimadas y practicadas ahora –independencia, autoconfianza y voluntad para soportar riesgos, ánimo para mantener las convicciones propias frente a una mayoría y disposición para cooperar voluntariamente con el prójimo– son esencialmente aquellas sobre las que descansa el funcionamiento de una sociedad individualista. El colectivismo no tiene nada que poner en su lugar, y en la medida en que ya las ha destruido ha dejado un vacío que no llena sino con la petición de obediencia y la coacción del individuo para que realice lo que colectivamente se ha decidido tener por bueno. La elección periódica de representantes, a la cual tiende a reducirse cada vez más la opción moral del individuo, no es una oportunidad para contrastar sus normas morales, o para reafirmar y probar constantemente su ordenación de los valores y atestiguar la sinceridad de su profesión de fe mediante el sacrificio de los valores que coloca por debajo en favor de los que sitúa más altos.

Como las reglas de conducta desarrolladas por los individuos son la fuente de donde la acción política colectiva ob-

tiene sus normas morales, sería para sorprender que el relajamiento de las reglas de la conducta individual fuera acompañado por una elevación de los niveles de la acción social. Es evidente que se han producido grandes cambios. Cada generación, por supuesto, pone más altos que sus predecesoras algunos valores y más bajos otros. ¿Cuáles son los fines que ocupan ahora un lugar más bajo?, ¿cuáles son los valores que estamos ahora dispuestos a abandonar si entran en conflicto con otros? ¿Qué especies de valores figuran ahora, en la imagen del futuro ofrecida por los escritores y oradores populares, con menos relieve que lo fueron en los sueños y esperanzas de nuestros padres? Cierto que no es el bienestar material, cierto que no es una elevación de nuestro nivel de vida o la seguridad de una determinada situación en la sociedad lo que figura más bajo. ¿Hay algún escritor u orador popular que se atreva a sugerir a las masas un sacrificio en sus aspiraciones materiales para favorecer una finalidad espiritual? ¿No se sigue enteramente el camino opuesto? ¿No son valores morales todas las cosas que cada vez con más frecuencia enseñamos a considerar como «ilusiones del siglo XIX»: libertad e independencia, sinceridad y honestidad intelectual, paz y democracia y respeto por el individuo *qua* hombre en lugar de verlo solamente como miembro de un grupo organizado? ¿Cuáles son los polos fijos que ahora se miran como sacrosantos, que ningún reformador osaría tocar, pues son considerados como las fronteras inmutables que han de respetarse en todo plan para el futuro? No son ya las libertades del individuo, su libertad de movimiento y, raramente, la de expresión. Son los niveles de vida protegidos de este o aquel grupo, su «derecho» a excluir a otros de la facultad de proveer al prójimo con lo que éste necesita. La discriminación entre miembros y no miembros de los grupos cerrados, para no hablar de los nacionales de diferentes países, se acepta cada vez más como cosa natural. Las injusticias infligidas a los individuos por la acción del Estado, en

interés de un grupo, son despreciadas con una indiferencia difícilmente distinguible de la insensibilidad, y las mayores violaciones de los derechos más elementales del individuo, como las contenidas en los traslados forzosos de poblaciones, son excusadas cada vez más a menudo incluso por gentes que se suponen liberales. Todo esto indica con seguridad que nuestro sentido moral se ha embotado más que agudizado. Cuando se nos recuerda, como sucede cada vez con más frecuencia, que no se pueden hacer tortillas sin romper huevos, lo cierto es que los huevos que se rompen son casi todos de aquella clase que hace una o dos generaciones se consideraban como la base esencial de la vida civilizada. ¿Y qué atrocidades cometidas por las potencias con cuyos profesados principios simpatizan muchos de nuestros llamados «liberales» no han sido fácilmente condonadas por éstos?

Hay un aspecto en el cambio de los valores morales provocado por el avance del colectivismo que ahora ofrece especial alimento para la meditación. Y es que las virtudes que cada vez se tienen menos en estima y que, consiguientemente, se van enrareciendo son precisamente aquellas de las que más se enorgullecía, con justicia, el pueblo británico y en las que se le reconocía, generalmente, superioridad. Las virtudes que el pueblo británico poseía en un grado superior a casi todos los demás pueblos, exceptuando tan sólo algunos de los más pequeños, como el suizo y el holandés, fueron independencia y confianza en sí mismo, iniciativa individual y responsabilidad local, eficaz predilección por la actividad voluntaria, consideración hacia el prójimo y tolerancia para lo diferente y lo extraño, respeto de la costumbre y la tradición y un sano recelo del poder y la autoridad. La energía, el carácter y los hechos británicos son, en una gran parte, el resultado del cultivo de lo espontáneo. Pero casi todas las tradiciones e instituciones en las que el genio moral británico ha encontrado su expresión más característica y que, a su

vez, han moldeado el carácter nacional y el clima moral entero de Inglaterra, son aquellas que el avance del colectivismo y sus inherentes tendencias centralizadoras están destruyendo progresivamente.

La perspectiva con un trasfondo extranjero es útil, a veces, para ver con más claridad a qué circunstancias se deben las peculiares excelencias de la atmósfera moral de una nación. Y, si puede decirlo una persona que, diga lo que diga la ley, será siempre un extranjero, uno de los espectáculos más desalentadores de nuestro tiempo está en ver hasta qué punto algunas de las más preciadas cosas que Inglaterra ha dado al mundo son despreciadas ahora por Inglaterra misma. Difícilmente comprende el inglés hasta qué punto difiere de la mayoría de los demás pueblos por defender él, en mayor o menor medida, cualquiera que sea su partido, las ideas que, en su forma más pronunciada, se conocen por liberalismo. Comparados con casi todos los demás pueblos, hace sólo veinte años la mayoría de los ingleses eran liberales, por muy alejados que pudieran estar del Partido Liberal. Y aún hoy día, el inglés conservador o socialista, no menos que el liberal, que salga al extranjero, aunque puede encontrar las ideas y los escritos de Carlyle o Disraeli, de los Webbs o H. G. Wells, sobremanera populares, lo será en círculos con los que tiene poco en común, entre nazis y otros totalitarios; pero si encuentra una isla intelectual donde viva la tradición de Macaulay y Gladstone, de J. S. Mill o John Morley, hallará espíritus hermanos que «hablan la misma lengua», por mucho que él pueda diferir de los ideales que aquellos hombres concretamente defendían.

En ninguna parte se manifiesta tanto esta pérdida de fe en los valores específicos de la civilización británica y en ninguna parte ha ejercido un efecto más entorpecedor para la prosecución de nuestro gran objetivo inmediato, como en la fatua ineficacia de casi toda la propaganda británica. El primer requisito para el éxito de la propaganda dirigida a

otros países es el ufano reconocimiento de los valores característicos y los rasgos distintivos por los que el país que la hace es conocido en los otros pueblos. La principal causa de la ineficacia de la propaganda británica es que quienes la dirigen parecen haber perdido su propia fe en los valores peculiares de la civilización inglesa o ignorar completamente los principales puntos en que ésta difiere de la de otras naciones. Los intelectuales de izquierdas, además, han adorado tanto tiempo a los dioses extranjeros, que parecen haberse hecho casi incapaces de ver algo bueno en las instituciones y las tradiciones característicamente inglesas. Estos socialistas no admiten, por supuesto, que los valores morales de los cuales se enorgullecen la mayoría de ellos mismos sean, en gran parte, el producto de las instituciones que tratan de destruir. Mas, por desgracia, esta actitud no se confina a los socialistas declarados. Aunque tenía que esperarse que éste no fuese el caso de los ingleses cultos, menos habladores pero más numerosos, si se juzga por las ideas que encuentran expresión en la discusión política ordinaria y la propaganda, parece haberse casi desvanecido el inglés que no sólo «habla la lengua que Shakespeare habló», sino que también «sostiene la fe y la moral que Milton sostuvo»[4].

Creer, por consiguiente, que la clase de propaganda producida con esta actitud puede ejercer el efecto deseado sobre nuestros enemigos, y especialmente los alemanes, es un desatino fatal. Los alemanes conocen Inglaterra, no bien, quizá, pero lo suficiente para distinguir los valores tradiciona-

4. Aunque el tema de este capítulo ha invitado ya a más de una referencia a Milton, es difícil resistir la tentación de añadir aquí una más, una muy familiar, aunque tal, al parecer, que nadie sino un extranjero se atrevería hoy a citar: «Que no olvide Inglaterra su prioridad en enseñar a vivir a las naciones». ¡Es quizá significativo que nuestra generación ha conocido toda una hueste de detractores de Milton, americanos e ingleses, y que el primero de ellos, Mr. Ezra Pound, ha hablado durante esta guerra desde la radio de Italia!

les característicos de la vida británica y lo que ha provocado la creciente separación, durante las dos o tres últimas generaciones, de las mentalidades de los dos países. Si deseamos convencerlos, no sólo de nuestra sinceridad, sino también de que podemos ofrecerles una alternativa real a la vía que han seguido, no será mediante concesiones a su sistema de ideas. No debemos desilusionarlos con una añeja reproducción de las ideas de sus padres, tomadas de ellos en préstamo; sea el socialismo de Estado, la *Realpolitik*, la planificación «científica» o el corporativismo. No los persuadiremos siguiéndolos hasta la mitad del camino que conduce al totalitarismo. Si los mismos ingleses abandonan el ideal supremo de la libertad y la felicidad del individuo; si implícitamente admiten que no vale la pena conservar su civilización y no se les ocurre nada mejor que seguir la senda por la que han marchado los alemanes, nada tienen que ofrecer. Para los alemanes, todo esto es simplemente un tardío reconocimiento de que los ingleses han equivocado por completo el camino y que son ellos, los alemanes, quienes marchan hacia un mundo nuevo y mejor, por espantoso que pueda ser el período de transición. Los alemanes saben que sus propios ideales actuales y lo que ellos consideran todavía como la tradición británica son criterios de vida fundamentalmente opuestos e irreconciliables. Puede convencérseles de que el camino que eligieron era equivocado; pero jamás les convencerá nadie de que los ingleses serán mejores guías para la senda alemana.

Menos que a nadie atraerá este tipo de propaganda a aquellos alemanes con cuya ayuda debemos contar en última instancia para reconstruir Europa, por ser sus valores los más próximos a los nuestros. Porque la experiencia los ha hecho más prudentes y pesimistas; han aprendido que ni las buenas intenciones ni la organización eficiente pueden mantener el honor en un sistema donde se han destruido la libertad y la responsabilidad individuales. Lo que el alemán

y el italiano que han aprendido la lección necesitan ante todo es protección contra el Estado monstruo, no grandiosos proyectos de organización en una escala colosal, sino oportunidad pacífica y libre para construir una vez más su propio mundo en torno. Si podemos esperar el apoyo de algunos ciudadanos de los países enemigos, no es porque ellos crean que ser mandados por los británicos es preferible a ser mandados por los prusianos, sino porque creen que en un mundo donde los ideales británicos han triunfado serán menos mandados y se les dejará más en paz para conseguir sus propios designios.

Si hemos de alcanzar la victoria en la guerra de ideologías y atraernos los elementos honrados de los países enemigos, tenemos ante todo que recobrar la fe en los valores tradicionales que Inglaterra defendió en el pasado y el coraje moral para defender vigorosamente los ideales que nuestros enemigos atacan. No ganaremos confianza y apoyo con tímidas apologías y con seguridades de que nos estamos rápidamente reformando, ni con manifestaciones de estar buscando un compromiso entre los valores tradicionales ingleses y las nuevas ideas totalitarias. Lo que cuenta no son las últimas mejoras efectuadas en nuestras instituciones sociales, que significan poco comparadas con las básicas diferencias de los dos opuestos criterios de vida, sino nuestra resuelta fe en aquellas tradiciones que han hecho de Inglaterra un país de gentes libres y rectas, tolerantes e independientes.

15. Las perspectivas de un orden internacional

De todos los frenos a la democracia, la federación ha sido el más eficaz y el más adecuado... El sistema federal limita y restringe el poder soberano, dividiéndolo y asignando al Estado solamente ciertos derechos definidos. Es el único método para doblegar, no sólo el poder de la mayoría, sino el del pueblo entero.

LORD ACTON

En ningún otro campo ha pagado el mundo tan caro el abandono del liberalismo del siglo XIX como en aquel donde comenzó la retirada: en las relaciones internacionales. Sin embargo, sólo hemos aprendido una pequeña parte de la lección que la experiencia debió enseñarnos. Más todavía en ésta que en ninguna otra cuestión, las opiniones comunes acerca de lo deseable y practicable son quizá de las que pueden muy bien producir lo contrario de lo que prometen.

La parte de la lección del pasado reciente que va siendo lenta y gradualmente estimada es que muchos tipos de planificación económica, si se conducen independientemente a escala nacional, provocan de manera inevitable un efecto global pernicioso, incluso desde un punto de vista puramente económico, y, además, serias fricciones internacionales. No es ya menester subrayar cuán pocas esperanzas quedan de armonía internacional o paz estable si cada país es libre para emplear cualquier medida que considere adecuada a su interés inmediato, por dañosa que pueda ser para los demás. En realidad, muchas formas de planificación económica sólo son practicables si la autoridad planificadora puede eficazmente cerrar la entrada a todas las influencias extrañas; así, el resultado de

esta planificación es inevitablemente la acumulación de restricciones a los movimientos de personas y bienes.

Menos obvios, pero no menos reales, son los peligros que para la paz surgen de la solidaridad económica artificialmente reforzada entre todos los habitantes de un país cualquiera, y de los nuevos bloques de intereses opuestos creados por la planificación a escala nacional. No es ni necesario ni deseable que las fronteras nacionales marquen agudas diferencias en el nivel de vida, o que los miembros de una colectividad nacional se consideren con derecho a una participación muy diferente en la tarta que la que les ha correspondido a los miembros de otras colectividades. Si los recursos de cada nación son considerados como propiedad exclusiva del conjunto de ésta; si las relaciones económicas internacionales, de ser relaciones entre individuos pasan cada vez más a ser relaciones entre naciones enteras, organizadas como cuerpos comerciales, inevitablemente darán lugar a fricciones y envidias entre los países. Una de las más fatales ilusiones es la de creer que con sustituir la lucha por los mercados o la adquisición de materias primas por negociaciones entre Estados o grupos organizados se reduciría la fricción internacional. Pero esto no haría sino sustituir por un conflicto de fuerza lo que sólo metafóricamente puede llamarse la «lucha» de competencia, y transferiría a Estados poderosos y armados, no sujetos a una ley superior, las rivalidades que entre individuos tienen que decidirse sin recurrir a la fuerza. Las transacciones económicas entre organismos nacionales, que son a la vez los jueces supremos de su propia conducta, que no se someten a una ley superior y cuyos representantes no pueden verse atados por otras consideraciones que el interés inmediato de sus respectivos países, han de terminar en conflictos de fuerza[1].

1. Sobre todos éstos y los puntos siguientes, que aquí sólo podemos tocar de manera sucinta, véase el libro del profesor Lionel Robbins, *Economic Planning and International Order*, 1937, *passim*.

Si no hiciéramos de la victoria otro uso mejor que el impulso de las tendencias existentes en este campo, demasiado visibles antes de 1939, pudiéramos encontrarnos con que habíamos derrotado al nacionalsocialismo tan sólo para crear un mundo de múltiples socialismos nacionales, diferentes en el detalle, pero todos igualmente totalitarios, nacionalistas y en recurrente conflicto entre sí. Los alemanes habrían resultado, como ya lo piensan algunos [2], los perturbadores de la paz, sólo porque fueron los primeros en tomar el camino que todos los demás acabaron por seguir.

Los que, por lo menos en parte, se hacen cargo de estos peligros, llegan de ordinario como consecuencia a la necesidad de plantear la planificación económica «internacionalmente», es decir, a cargo de alguna institución supranacional. Pero aunque esto evitaría algunos de los peligros evidentes que surgen de la planificación a escala nacional, parece que quienes defienden tan ambiciosos proyectos se dan poca idea de los todavía mayores peligros y dificultades que contienen sus proposiciones. Los problemas que plantea la dirección consciente a escala nacional de los asuntos económicos adquieren inevitablemente aún mayores dimensiones cuando aquélla se intenta internacionalmente. El conflicto entre la planificación y la libertad no puede menos de hacerse más grave a medida que disminuye la semejanza de normas y valores entre los sometidos al plan unitario. Pocas dificultades debe haber para planificar la vida económica de una familia, y relativamente pocas para una pequeña comunidad. Pero cuando la escala crece, el nivel de acuerdo sobre la gradación de los fines disminuye y la necesidad de recurrir a la fuerza y la coacción aumenta. En

2. Véase en particular el significativo libro de James Burnham, *The Managerial Revolution*, 1941.

una pequeña comunidad existirá unidad de criterio sobre la relativa importancia de las principales tareas y coincidencia en las normas de valor, en la mayoría de las cuestiones. Pero el número de éstas decrecerá más y más cuanto mayor sea la red que arrojemos, y como hay menos comunidad de criterios, aumenta la necesidad de recurrir a la fuerza y la coerción.

Se puede persuadir fácilmente a la gente de cualquier país para que haga un sacrificio a fin de ayudar a lo que considera como «su» industria siderúrgica o «su» agricultura, o para que en el país nadie caiga por debajo de un cierto nivel de vida. Cuando se trata de ayudar a personas cuyos hábitos de vida y formas de pensar nos son familiares, o de corregir la distribución de las rentas o las condiciones de trabajo de gentes que nos podemos imaginar bien y cuyos criterios sobre su situación adecuada son, en lo fundamental, semejantes a los nuestros, estamos generalmente dispuestos a hacer algún sacrificio. Pero basta parar mientes en los problemas que surgirían de la planificación económica aun en un área tan limitada como Europa occidental, para ver que faltan por completo las bases morales de una empresa semejante. ¿Quién se imagina que existan algunos ideales comunes de justicia distributiva gracias a los cuales el pescador noruego consentiría en aplazar sus proyectos de mejora económica para ayudar a sus compañeros portugueses, o el trabajador holandés en comprar más cara su bicicleta para ayudar a la industria mecánica de Coventry, o el campesino francés en pagar más impuestos para ayudar a la industrialización de Italia?

Si la mayoría de las gentes no están dispuestas a ver la dificultad, ello se debe sobre todo a que, consciente o inconscientemente, suponen que serán ellas quienes arreglen para todos estas cuestiones, y a que están convencidas de su propia capacidad para hacerlo de un modo justo y equitativo. El pueblo inglés, quizá aún más que otros, comienza a com-

prender lo que significan estos proyectos cuando se le advierte que puede no ser más que una minoría en el organismo planificador y que las líneas fundamentales del futuro desarrollo económico de Gran Bretaña pueden ser determinadas por una mayoría no británica. ¿Cuántos ingleses estarían dispuestos a someterse a la decisión de un organismo internacional, por democráticamente constituido que estuviese, el cual tuviera poder para decretar que el desarrollo de la industria siderúrgica española tendría preferencia respecto a la del sur de Gales, que la industria óptica debería concentrarse en Alemania y excluirse de Gran Bretaña, o que Gran Bretaña sólo podría importar gasolina refinada, reservándose para los países productores todas las industrias relativas al refino?

Imaginarse que la vida económica de una vasta área que abarque muchos pueblos diferentes puede dirigirse o planificarse por procedimientos democráticos, revela una completa incomprensión de los problemas que surgirían. La planificación a escala internacional, aún más de lo que es cierto en una escala nacional, no puede ser otra cosa que el puro imperio de la fuerza; un pequeño grupo imponiendo al resto los niveles de vida y ocupaciones que los planificadores consideran deseables para los demás. Si hay algo cierto, es que el *Grossraumwirtschaft* de la especie que han pretendido los alemanes sólo puede realizarlo con éxito una raza de amos, un *Herrenvolk*, imponiendo brutalmente a los demás sus fines y sus ideas. Es un error considerar la brutalidad y el desprecio de todos los deseos e ideales de los pueblos pequeños, mostrados por los alemanes, simplemente como un signo de su especial perversidad; es la naturaleza de la tarea que se atribuyeron lo que hacía inevitable estas cosas. Emprender la dirección de la vida económica de gentes con ideales y criterios muy dispares es atribuirse responsabilidades que obligan al uso de la fuerza; es asumir una posición en la que las mejores intenciones no pueden evitar que se actúe forzosa-

mente de una manera que a algunos de los afectados parecerá altamente inmoral[3].

Esto es cierto, aunque supongamos que el poder dominante es todo lo idealista y altruista que quepa imaginar. ¡Pero cuán escasas probabilidades hay de que sea altruista y a cuántas tentaciones estará expuesto! Creo que el nivel de honestidad y justicia, particularmente respecto a los asuntos internacionales, es tan alto en Inglaterra como en cualquier otro país, si no lo es más. Y, sin embargo, podemos ya oír que la victoria debe utilizarse para crear condiciones en las que la industria británica sea capaz de utilizar plenamente las instalaciones especiales que ha levantado durante la guerra; que la reconstrucción de Europa tiene que dirigirse de manera que se ajuste a las especiales exigencias de las industrias británicas y a la finalidad de asegurar a cada cual en Inglaterra la clase de ocupación para la que se considere a sí mismo más adecuado. Lo alarmante en estas sugerencias no es que se hayan hecho, sino que las hayan hecho con toda inocencia y considerado como cosa natural personas honestas que ignoraban por completo la enormidad moral implícita en el empleo de la fuerza para estos fines[4].

3. La experiencia en la esfera colonial, de Inglaterra tanto como de cualquier otro país, ha mostrado muy ampliamente que incluso las formas moderadas de planificación que denominamos desarrollo colonial envuelven, lo queramos o no, la imposición de ciertos criterios a aquellos a quienes tratamos de ayudar. Es justamente esta experiencia lo que ha hecho a los técnicos coloniales, aun los de mentalidad más internacional tan escépticos acerca de la posibilidad de una administración «internacional» de las colonias.

4. Si todavía hay alguien que no ve las dificultades o abriga la creencia de que con algo de buena voluntad podrían dominarse todas, le convendrá tratar de representarse las consecuencias de una dirección centralizada de la actividad económica aplicada a escala mundial. ¿Es muy dudoso que ello significaría un esfuerzo más o menos consciente para asegurar el dominio del hombre blanco, y que así sería considerado rectamente por todas las demás razas? Mientras yo no encuentre una persona normal que crea seriamente en la sumisión voluntaria de las

Quizá el más poderoso agente causal de la creencia en que es posible la dirección centralizada única de la vida económica de muchos pueblos diferentes, por medios democráticos, sea la fatal ilusión de creer que si las decisiones se entregaran al «pueblo», la comunidad de intereses de las clases trabajadoras superaría fácilmente las diferencias que existen entre las clases dirigentes. Hay sobrados motivos para esperar que, con una planificación mundial, la pugna de intereses que suscita ahora la política económica de cualquier nación adoptaría de hecho la forma de una lucha de intereses aún más violenta entre pueblos enteros, que sólo podría decidirse por la fuerza. Sobre las cuestiones en que tendría que decidir una autoridad planificadora internacional, habría, inevitablemente, tanto conflicto entre los intereses y opiniones de las clases trabajadoras de los diferentes países como entre las diferentes clases sociales de un país cualquiera, y aun habría entre aquéllas menos base de común acuerdo para un arreglo equitativo. Para el trabajador de un país pobre, la demanda de protección contra la competencia del salario bajo formulada por su colega de un país más afortunado, mediante una legislación de salario mínimo, protección que se afirma corresponder al interés del pobre, no es, frecuentemente, más que un medio de privar a éste de la única posibilidad de mejorar sus condiciones, superando las desventajas naturales con jornales inferiores a los de sus compañeros de otros países. Y para él, el hecho de tener que dar el producto de diez horas de su trabajo por el producto de cinco horas del hombre de otra parte que está mejor equipado con maquinaria es tanta «explotación» como la practicada por cualquier capitalista.

razas europeas para que su nivel de vida y su grado de progreso fuesen determinados por un Parlamento mundial, seguiré considerando absurdos esos planes. Pero esto no impide, desgraciadamente, que se propaguen en serio medidas particulares que sólo podrían justificarse si el principio de la dirección mundial fuese un ideal asequible.

Es bastante seguro que en un sistema internacional planificado las naciones más ricas y, por ello, más poderosas serían, en un grado mucho mayor que en una economía libre, objeto del odio y la envidia de las más pobres; y éstas, acertada o equivocadamente, estarían convencidas de que su posición podría mejorarse mucho más rápidamente tan sólo con ser libres para hacer lo que quisieran. Si llegara a considerarse como deber de un organismo internacional la realización de la justicia distributiva entre los diferentes pueblos, la transformación de la lucha de clases en una pugna entre las clases trabajadoras de los diferentes países sería, sin duda, según la doctrina socialista, una evolución consecuente e inevitable.

Muchas tonterías se dicen ahora sobre la «planificación para igualar los niveles de vida». Es instructivo considerar con algún mayor detalle una de estas proposiciones para ver con precisión lo que encierra. El área por la que ahora muestran mayor afición en sus proyectos nuestros planificadores es la cuenca del Danubio y Europa sudoriental. No puede ponerse en duda la urgente necesidad de mejorar las condiciones económicas de esta región, por consideraciones humanitarias y económicas tanto como en interés de la futura paz de Europa, ni que ello sólo puede lograrse dentro de una estructura política diferente de la del pasado. Pero esto no es lo mismo que el deseo de ver la vida económica de esta región dirigida de acuerdo con un único plan general y de fomentar el desarrollo de las diferentes industrias conforme a un programa trazado de antemano, de tal manera que la iniciativa local sólo puede triunfar si logra la aprobación de la autoridad central y su incorporación al plan de ésta. No se puede, por ejemplo, crear una especie de *Tennessee Valley Authority* para la cuenca danubiana sin determinar previamente con ello, para muchos años, el grado de progreso relativo de las diferentes razas que habitan esta región y sin subordinar todas sus aspiraciones y deseos individuales a esta tarea.

La planificación de esta clase tiene necesariamente que comenzar por fijar un orden de preferencia para los diferentes objetivos. Planificar para la deliberada igualación de los niveles de vida significa que han de ordenarse las diferentes pretensiones con arreglo a sus méritos, que unos tienen que dar preferencia a otros y que aquéllos deben aguardar su turno, aunque quienes se ven así preteridos pueden estar convencidos, no sólo de su mejor derecho, sino también de su capacidad para alcanzar antes su objetivo sólo con que se les concediera libertad para actuar con arreglo a sus propios proyectos. No existe base que nos consienta decidir si las pretensiones del campesino rumano pobre son más o menos urgentes que las del todavía más pobre albanés, o si las necesidades del pastor de las montañas eslovacas son mayores que las de su compañero esloveno. Pero si la elevación de sus niveles de vida ha de efectuarse de acuerdo con un plan unitario, alguien tiene que contrapesar deliberadamente los merecimientos de todas estas pretensiones y decidir entre ellas. Una vez en ejecución este plan, todos los recursos del área planificada tienen que estar al servicio de aquél; y no puede haber excepción para quienes sienten que podrían hacerlo mejor por sí mismos. Si sus pretensiones han recibido un puesto inferior, tendrán que trabajar ellos para satisfacer con anterioridad las necesidades de quienes lograron preferencia. En semejante situación, *todos* se sentirían, justamente, peor que si se hubiera adoptado algún otro plan y, por la decisión y el poder de las potencias dominantes, condenados a un puesto menos favorable que el que pensaron que se les debía. Intentar tal cosa en una región poblada de pequeñas naciones, cada una de las cuales cree en su propia superioridad con igual fervor que las otras, es emprender una tarea que sólo puede realizarse mediante el uso de la fuerza. Lo que sucedería en la práctica es que las decisiones británicas y el poder británico tendrían que resolver si el nivel de vida de los campesinos macedonios o el de los búlga-

ros debería elevarse más rápidamente, o si el de los mineros checos o el de los húngaros debería aproximarse más deprisa a los niveles occidentales. No se necesita mucho conocimiento de la naturaleza humana y sólo, ciertamente, una ligera información sobre los pueblos de Europa central para comprender que, cualquiera que fuese la decisión impuesta, serían muchos, probablemente mayoría, los que considerasen como una suprema injusticia el orden particular elegido, y su común odio pronto se volvería contra la potencia que, por desinteresadamente que fuese, estaba determinando su suerte.

Aunque, sin duda, hay muchas personas que creen honradamente que si se les permitiera encargarse de la tarea serían capaces de resolver todos estos problemas de un modo justo e imparcial, y que se sorprenderían de verdad al descubrir sospechas y odios volviéndose contra ellas, éstas serían, probablemente, las primeras en aplicar la fuerza cuando aquellos a quienes se proponían beneficiar mostrasen resistencia, y las que actuarían con la mayor dureza para obligar a la gente a hacer lo que se presuponía era su propio interés. Lo que estos peligrosos idealistas no ven es que cuando asumir una responsabilidad moral supone recurrir a la fuerza para hacer que los propios criterios morales prevalezcan sobre los dominantes en otros países, al aceptar esta responsabilidad pueden colocarse en una situación que les impida una actuación moral. Imponer semejante imposible tarea moral a las naciones victoriosas es un seguro camino para corromperlas moralmente y desacreditarlas.

Asistamos por todos los medios posibles a los pueblos más pobres, en sus propios esfuerzos para rehacer sus vidas y elevar su nivel. Un organismo internacional puede ser muy recto y contribuir enormemente a la prosperidad económica si se limita a mantener el orden y a crear las condiciones en que la gente pueda desarrollar su propia vida; pero es imposible que sea recto o consienta a la gente vivir su propia

vida si este organismo distribuye las materias primas y asigna mercados, si todo esfuerzo espontáneo ha de ser «aprobado» y nada puede hacerse sin la sanción de la autoridad central.

Después de lo dicho en los primeros capítulos, apenas es necesario insistir en que estas dificultades no pueden vencerse confiriendo a las diversas autoridades internacionales «solamente» poderes económicos específicos. La creencia en que ésta sería una solución práctica descansa sobre la falacia de suponer que la planificación económica es solamente una tarea técnica, que pueden desempeñarla de una manera estrictamente objetiva los técnicos, y que las cosas realmente vitales podrían quedar en manos de las autoridades políticas. Cualquier institución económica internacional no sujeta a un poder político superior, aunque quedase estrictamente confinada a un campo particular, podría fácilmente ejercer el más tiránico e irresponsable poder imaginable. El control con carácter exclusivo de una mercancía o servicio esencial (como, por ejemplo, el transporte aéreo) es, en efecto, uno de los más amplios poderes que pueden conferirse a cualquier organismo. Pues como apenas hay algo que no se pueda justificar por «necesidades técnicas», que nadie ajeno a la materia puede eficazmente discutir –o incluso por argumentos humanitarios, y posiblemente del todo sinceros, acerca de las necesidades de algún grupo especialmente mal situado que no podría recibir ayuda de otra manera–, apenas hay posibilidad de dominar aquel poder. La organización de los recursos del mundo en forma de instituciones más o menos autónomas, que ahora encuentra apoyo en los lugares más sorprendentes, un sistema de monopolios reconocidos por todos los gobiernos nacionales, pero no sometidos a ninguno, se convertiría, inevitablemente, en el peor de todos los bandidajes concebibles; y ello aunque todos los encargados de su administración demostrasen ser los más fie-

les guardianes de los intereses particulares colocados bajo su cuidado.

Basta considerar seriamente todas las consecuencias de unos proyectos al parecer tan inocentes como el control y distribución de la oferta de las materias primas esenciales, muy aceptados como base fundamental del futuro orden económico, para ver qué aterradoras dificultades políticas y peligros morales crearían. El interventor de la oferta de una materia prima tal como el petróleo o la madera, el caucho o el estaño, sería el dueño de la suerte de industrias y países enteros. Al decidir el consentimiento de un aumento de la oferta y una reducción del precio y de la renta de los productores, decidiría si permitir el nacimiento de alguna nueva industria en algún país o impedirlo. Dedicado a «proteger» los niveles de vida de aquellos a quienes considera como especialmente encomendados a su cuidado, privaría de su mejor y quizá única posibilidad de prosperar a muchos que están en una posición más desfavorable. Si todas las materias primas esenciales fueran así controladas, no habría, ciertamente, nueva industria ni nueva aventura en la que pudieran embarcarse las gentes de un país sin el permiso de los controladores, ni plan de desarrollo o mejora que no pudiera ser frustrado por su veto. Lo mismo es cierto de todo acuerdo internacional para la «distribución» de los mercados y aún más del control de las inversiones y de la explotación de los recursos naturales.

Es curioso observar que todos aquellos que presumen de ser los más firmes realistas y que no pierden oportunidad para verter el ridículo sobre el «utopismo» de quienes creen en la posibilidad de un orden político internacional, consideran, sin embargo, más practicable la interferencia, mucho más íntima e irresponsable en las vidas de los diferentes pueblos, a que obliga la planificación económica. Y creen que, una vez se otorgara este inesperado poder a un gobierno internacional, al que acaban de presentar como incapaz hasta

de imponer simplemente un Estado de Derecho, este poder más amplio sería empleado de manera tan altruista y tan evidentemente recta que lograría el consenso general. Si algo es evidente, lo será que, mientras las naciones podrían aceptar normas formales previamente convenidas, nunca se someterán a la dirección que supone una planificación económica internacional; pues si bien pueden llegar a un acuerdo sobre las reglas del juego, nunca se conformarán con el orden de preferencia que una mayoría de votos fije a las necesidades de cada una ni con el ritmo en que se las consienta avanzar en su progreso. Aunque, al principio, los pueblos, ilusionados en cuanto al significado de estos proyectos, conviniesen en transferir tales poderes a un organismo internacional, pronto hallarían que lo que habían delegado no era simplemente una tarea técnica, sino el más dilatado poder sobre sus vida enteras.

Lo que hay, evidentemente, en el fondo del pensamiento de los no del todo cándidos «realistas» que defienden estos proyectos es que las grandes potencias no estarán dispuestas a someterse a una autoridad superior, pero estarán en condiciones de emplear estas instituciones «internacionales» para imponer su voluntad a las pequeñas naciones dentro del área en que ejerzan su hegemonía. Hay tanto «realismo» en ello, que, efectivamente, enmascarando así como «internacionales» a las instituciones planificadoras, pudiera ser más fácil lograr la única condición que hace practicable la planificación internacional, a saber: que la realice, en realidad, una sola potencia predominante. Este disfraz no alteraría, sin embargo, el hecho de significar para todos los Estados pequeños una sujeción mucho más completa a una potencia exterior, contra la que no sería ya posible una resistencia real, sujeción que traería consigo la renuncia a una parte claramente definible de la soberanía política.

Es significativo que los más apasionados abogados de un nuevo orden económico para Europa, centralmente dirigi-

do, muestran, como sus prototipos fabiano y alemán, el más completo desprecio por la individualidad y los derechos de las pequeñas naciones. Las opiniones del profesor Carr, que representa en esta esfera aún más que en la de la política interior la tendencia hacia el totalitarismo en Inglaterra, han llevado ya a uno de sus colegas a plantear esta tan pertinente cuestión: «Si la conducta nazi respecto a los pequeños Estados soberanos va a hacerse realmente general, ¿para qué la guerra?»[5]. Los que han observado la intranquilidad y alarma que han causado entre nuestros aliados menores algunas manifestaciones recientes sobre estas cuestiones en periódicos tan diversos como *The Times* y *New Statesman*[6] no dudarán cuánto está ofendiendo esta actitud a nuestros amigos más firmes y cuán fácilmente se disiparía la reserva de buena voluntad que se ha acumulado durante la guerra si se hiciera caso a estos consejeros.

Los que están tan dispuestos a brincar sobre los derechos de los pequeños Estados tienen, por lo demás, razón en una cosa: no podemos esperar orden o paz duraderos, después de esta guerra, si los Estados, grandes o pequeños, recuperan una soberanía sin trabas en la esfera económica. Pero esto no significa que sea menester dar a un nuevo superestado poderes que no hemos sabido usar inteligentemente ni siquiera en una escala nacional; no significa que se dé poder a una institución internacional para dirigir a las diversas naciones en el uso de sus recursos. Significa solamente que

5. El profesor C. A. W. Manning, en una reseña del libro *Conditions of Peace*, del profesor Carr, en el *International Affairs Review Supplement*, junio de 1942.
6. Es significativo en más de un aspecto que, como se ha observado recientemente en un semanario, «se había ya comenzado a esperar algo del aroma de Carr lo mismo en las páginas del *New Statesman* que en las de *The Times*» («Four Winds», en *Time and Tide*, 20 de febrero de 1943).

debe existir un poder que pueda prohibir a las diferentes naciones una acción dañosa para sus vecinas; significa la existencia de un conjunto de normas que definan lo que un Estado puede hacer y una institución capaz de hacer cumplir estas normas. Los poderes que tal institución necesita son, principalmente, de carácter prohibitivo; tiene que estar, sobre todo, en condiciones de poder decir «no» a toda clase de medidas restrictivas.

Lejos de ser cierto, como ahora se cree con frecuencia, que necesitamos una organización económica internacional, pero que los Estados pueden, al mismo tiempo, conservar su ilimitada soberanía política, la verdad es casi exactamente lo opuesto. Lo que necesitamos y cabe alcanzar no es un mayor poder en manos de irresponsables instituciones económicas internacionales, sino, por el contrario, un poder político superior que pueda mantener a raya los intereses económicos y que, ante un conflicto entre ellos, pueda, verdaderamente, mantener un equilibrio, porque él mismo no está mezclado en el juego económico. Lo que se necesita es un organismo político internacional que, careciendo de poder para decidir lo que los diferentes pueblos tienen que hacer, sea capaz de impedirles toda acción que pueda perjudicar a otros. Los poderes que se deben ceder a una institución internacional no son las nuevas facultades asumidas por los Estados en los tiempos recientes, sino aquel mínimo de poder sin el cual es imposible mantener relaciones pacíficas, es decir, esencialmente los poderes del Estado de *laissez faire* ultraliberal. Y aún más que en la esfera nacional, es esencial que el Estado de Derecho circunscriba estrechamente estos poderes del organismo internacional. La necesidad de semejante institución supranacional aumenta a medida que los Estados individuales se convierten, cada vez más, en unidades de administración económica y que, por esto, se hace probable que las fricciones surjan no entre individuos, sino entre Estados.

La forma de gobierno internacional que permite transferir a un organismo internacional ciertos poderes estrictamente definidos, mientras en todo lo demás cada país conserva la responsabilidad de sus asuntos interiores, es, ciertamente, la federación. No debemos permitir que las numerosas iniciativas irreflexivas y a menudo extremadamente disparatadas que surgieron en apoyo de una organización federal del mundo entero durante el apogeo de la propaganda por la «Unión Federal» oscurezcan el hecho de ser el principio federativo la única forma de asociación de pueblos diferentes que crearía un orden internacional sin agraviarlos en su legítimo deseo de independencia[7]. El federalismo no es, por lo demás, otra cosa que la aplicación de la democracia a los asuntos internacionales, el único medio de intercambio pacífico que el hombre ha inventado hasta ahora. Pero es una democracia con poderes estrictamente limitados. Aparte del ideal, más impracticable, de fundir diferentes países en un solo Estado centralizado, cuya conveniencia está lejos de ser evidente, es el único camino por el que puede convertirse en realidad el ideal del Derecho internacional. No debemos engañarnos nosotros mismos creyendo que, cuando en el pasado llamábamos Derecho internacional a las reglas de la conducta internacional, hacíamos otra cosa que expresar un buen deseo. Cuando pretendemos evitar que las gentes se maten unas a otras, no podemos contentarnos con declarar prohibido matar, sino que debemos dar facultades a una autoridad para evitarlo. De la misma manera, no puede haber un Derecho internacional sin la existencia de un poder que

7. Es una gran lástima que la inundación de publicaciones federalistas que no hace muchos años cayó sobre nosotros haya privado de la atención que merecen a unas cuantas obras, entre ellas, importantes y sagaces. Una que en particular debe ser cuidadosamente consultada cuando llegue el tiempo de elaborar una nueva estructura política de Europa es el librito del doctor W. Ivor Jennings, *A Federation for Western Europe* 1940.

obligue a su cumplimiento. El obstáculo para la creación de este poder internacional fue, en gran parte, la idea de que necesitaba reunir todas las facultades, prácticamente ilimitadas, que posee el Estado moderno. Pero con la división de poderes en el sistema federal esto no es necesario en modo alguno.

Esta división de poderes obraría, inevitablemente, limitando a la vez el poder de todos y el de cada uno de los Estados. Además, muchos de los tipos de planificación que ahora están de moda serían, probablemente, del todo imposibles[8]. Pero en modo alguno constituiría un obstáculo para toda planificación. Precisamente una de las principales ventajas de la federación es que puede proyectarse de tal manera que dificulte la mayoría de las planificaciones dañosas, pero deje libre el camino para todas las deseables. Impide o puede hacer que se eviten la mayoría de las formas de restriccionismo. Y confina la planificación internacional a los campos en que puede alcanzarse un verdadero acuerdo, no sólo entre los «intereses» inmediatamente envueltos, sino entre todos los afectados. Las formas deseables de planificación que puedan efectuarse localmente y sin necesidad de medidas restrictivas quedan libres y en manos de los mejor calificados para emprenderlas. Puede incluso esperarse que dentro de una federación, donde ya no subsistirán las mismas razones para que los Estados individuales se hagan todo lo fuertes que les sea posible, se invierta hasta cierto punto el proceso de centralización del pasado y se registre alguna transferencia de poderes del Estado a las autoridades locales.

Conviene recordar que la idea de un mundo que, al fin, encuentra la paz mediante un proceso de absorción de los Estados separados, para formar grandes grupos federados y,

8. Véase sobre esto el artículo del autor: «Economic Conditions of Inter-State Federation», *The New Commonwealth Quarterly*, vol. V, septiembre de 1939.

por último, quizá, una sola federación, lejos de ser nueva, fue, sin duda, el ideal de casi todos los pensadores liberales del siglo XIX. Desde Tennyson, a cuya visión, tantas veces citada, de la «batalla del aire» sigue la de una federación de los pueblos que vendría tras su última gran lucha, y hasta el final del siglo, la esperanza del inmediato gran paso en el avance de la civilización se cifró, una vez tras otra, en el logro último de una organización federal. Los liberales del siglo XIX pueden no haber tenido plena conciencia de *cuán* esencial complemento de sus principios era una organización federal de los diversos Estados[9], pero fueron pocos los que no expresaron su creencia en ella como un objetivo último[10]. Sólo al aproximarse nuestro siglo XX, ante la triunfante ascensión de la *Realpolitik*, empezaron a considerarse impracticables y utópicas estas esperanzas.

No podemos reconstruir la civilización a una escala aumentada. No es un accidente que, en conjunto, se encuentre más belleza y dignidad en la vida de las naciones pequeñas y que, entre las grandes, haya más felicidad y contento en la medida en que evitaron la mortal plaga de la centralización. Difícilmente preservaremos la democracia o fomentaremos su desarrollo si todo el poder y la mayoría de las decisiones importantes corresponden a una organización demasiado grande para que el hombre común la pueda comprender o vigilar. En ninguna parte ha funcionado bien, hasta ahora, la democracia sin una gran proporción de autonomía local,

9. Véase a este respecto el libro del profesor Robbins, ya citado, págs. 240-257.

10. Ya en los años finales del siglo XIX, Henry Sidgwick pensaba que «no estaría fuera de los límites de una previsión prudente el contar con una cierta integración de los Estados de la Europa occidental; y si esto ocurre, parece probable que se seguirá el ejemplo de América y que el nuevo conjunto político se formará sobre la base de una constitución federal». (*The Development of European Polity*, publicado póstumamente en 1903, pág. 439.)

que sirve de escuela de entrenamiento político, para el pueblo entero tanto como para sus futuros dirigentes. Sólo donde la responsabilidad puede aprenderse y practicarse en asuntos que son familiares a la mayoría de las personas, donde lo que guía la acción es el íntimo conocimiento del vecino más que un saber teórico sobre las necesidades de otras gentes, puede realmente el hombre común tomar parte en los negocios públicos, porque éstos conciernen al mundo que él conoce. Cuando el objetivo de las medidas políticas llega a ser tan amplio que el conocimiento necesario lo posee casi exclusivamente la burocracia, decaen los impulsos creadores de las personas particulares. Creo que, sobre esto, la experiencia de los países pequeños, como Holanda y Suiza, tiene mucho que enseñar, incluso a los más afortunados de los grandes países, como Gran Bretaña. Todos ganaremos si somos capaces de crear un mundo adecuado para que los Estados pequeños puedan vivir en él.

Pero el pequeño sólo puede preservar su independencia, en la esfera internacional como en la nacional, dentro de un verdadero sistema legal que, a la vez, garantice el cumplimiento invariable de ciertas normas y asegure que la autoridad facultada para hacerlas cumplir no puede emplear este poder con ningún otro propósito. Mientras en su tarea de garantizar el derecho común ha de ser muy poderosa la institución supranacional, su constitución tiene que haberse proyectado de manera que impida, tanto a las autoridades internacionales como a las nacionales, convertirse en tiránicas. Nunca evitaremos el abuso del poder si no estamos dispuestos a limitarlo en una forma que, ocasionalmente, puede impedir también su empleo para fines deseables. La gran oportunidad que tendremos al final de esta guerra es que las grandes potencias victoriosas, sometiéndose ellas mismas las primeras a un sistema de normas que está en sus manos imponer, adquieran al mismo tiempo el derecho moral para imponerlas a las demás.

Una institución internacional que limite eficazmente los poderes del Estado sobre el individuo será una de las mayores garantías de la paz. El Estado de Derecho internacional tiene que llegar a ser la salvaguarda tanto contra la tiranía del Estado sobre el individuo como contra la tiranía del nuevo superestado sobre las comunidades nacionales. Nuestro objetivo no puede ser ni un superestado omnipotente, ni una floja asociación de «naciones libres», sino una comunidad de naciones de hombres libres. Hemos alegado mucho tiempo que se había hecho imposible comportarse en la forma que consideramos deseable en los asuntos internacionales, porque otros no seguían las reglas del juego. El convenio al que hay que llegar nos dará la oportunidad de demostrar que hemos sido sinceros y que estamos dispuestos a aceptar las mismas restricciones de nuestra libertad de acción que, en el interés común, pensamos necesario imponer a los demás.

Utilizado con prudencia, el principio federal de organización puede, sin duda, mostrarse como la solución mejor para algunos de los más difíciles problemas del mundo. Pero su aplicación es una tarea de extrema dificultad, y no tendremos, probablemente, éxito en ella si en un intento excesivamente ambicioso la forzamos más allá de su capacidad. Existirá, probablemente, una fuerte tendencia a que una nueva organización internacional lo abarque y absorba todo; y será, sin duda, una necesidad imperativa contar con algún organismo universal, con una nueva Sociedad de Naciones. El gran peligro está en que, si en el intento de confiar exclusivamente en esta organización mundial, se le encomiendan todas las tareas que parece deseable colocar en manos de una institución internacional, no se podrán cumplir adecuadamente. He estado siempre convencido de que esta ambición fue la raíz de la debilidad de la Sociedad de Naciones; que en el fracasado intento de abarcar el mundo entero encontró su debilidad, y que una Sociedad más pequeña y, a

la vez, más poderosa pudiera haber sido un mejor instrumento para el mantenimiento de la paz. Creo que estas consideraciones valen todavía y que podría lograrse un grado de cooperación entre, digamos, el Imperio británico, las naciones de Europa occidental y, probablemente, los Estados Unidos, que no sería posible a una escala mundial. La asociación relativamente íntima que una unión federal representa no será practicable al principio más allá, quizá, de los límites de una región tan reducida como la formada por una parte de Europa occidental, aunque podría ser posible extenderla gradualmente.

Es cierto que con la formación de estas federaciones regionales subsiste la posibilidad de una guerra entre los diferentes bloques, y que para reducir este riesgo en todo lo posible tenemos que contar con una organización más amplia y menos apretada. Mi creencia es que la necesidad de esta otra organización no constituye un obstáculo para una asociación más estrecha entre aquellos países que son más semejantes por su civilización, orientación y niveles de vida. Aunque tenemos que hacer todo lo posible para evitar futuras guerras, no debemos creer que podemos montar de un golpe una organización permanente que hiciera enteramente imposible todo conflicto en cualquier parte del mundo. No sólo no tendríamos éxito en este intento, sino que, probablemente, malograríamos con él nuestras posibilidades de alcanzar éxito en una esfera más limitada. Como es verdad respecto de otros grandes males, las medidas por las que cabría impedir las luchas en el futuro pueden ser peores que la misma guerra. Reducir los riesgos de fricción capaces de conducir a la guerra es, probablemente, todo lo que, de una manera razonable, podemos tener la esperanza de lograr.

Conclusión

No ha sido el propósito de este libro bosquejar el detallado programa de un futuro ordenamiento de la sociedad digno de ser deseado. Si al considerar las cuestiones internacionales hemos rebasado un poco la tarea esencialmente crítica, fue porque en este campo nos podemos ver pronto llamados a crear una estructura a la cual tenga que acomodarse por largo tiempo el desarrollo futuro. Mucho dependerá de cómo utilicemos la oportunidad que entonces se nos ofrecerá. Pero todo lo que podamos hacer no será sino el comienzo de un nuevo, largo y arduo proceso en el cual todos ponemos nuestras esperanzas de crear gradualmente un mundo muy distinto del que conocimos durante el último cuarto de siglo. Es dudoso, por lo menos, que fuera de mucha utilidad en este momento un modelo detallado de un ordenamiento interno deseable de la sociedad, o que alguien sea capaz de facilitarlo. Lo importante ahora es que comencemos a estar de acuerdo sobre ciertos principios y a liberarnos de algunos de los errores que nos han dominado en el pasado más cercano. Por desagradable que pueda ser admitirlo, tenemos que reconocer que habíamos llegado una vez más, cuando sobrevino esta guerra, a una situación en que era más im-

portante apartar los obstáculos que la locura humana acumuló sobre nuestro camino y liberar las energías creadoras del individuo que inventar nuevos mecanismos para «guiarle» y «dirigirle»; más importante crear las condiciones favorables al progreso que «planificar el progreso». Lo más necesario es liberarnos de la peor forma del obscurantismo moderno, el que trata de llevar a nuestro convencimiento que cuanto hemos hecho en el pasado reciente era, o acertado, o inevitable. No podremos ganar sabiduría en tanto no comprendamos que mucho de lo que hicimos fueron verdaderas locuras.

Si vamos a construir un mundo mejor, hemos de tener el valor de comenzar de nuevo, aunque esto signifique *recular pour mieux sauter.* No son los que creen en tendencias inevitables quienes dan muestras de este valor ni lo son los que predican un «Nuevo Orden» que no es sino una proyección de las tendencias de los últimos cuarenta años, ni los que no piensan en nada mejor que en imitar a Hitler. Y quienes más alto claman por el Nuevo Orden son, sin duda, los que más por entero se hallan bajo el influjo de las ideas que han engendrado esta guerra y la mayoría de los males que padecemos. Los jóvenes tienen razón para no poner su confianza en las ideas que gobiernan a gran parte de sus mayores. Pero se engañan o extravían cuando creen que éstas son aún las ideas liberales del siglo XIX, que la generación más joven apenas si conoce de verdad. Aunque ni queremos ni podemos retornar a la realidad del siglo XIX, tenemos la oportunidad de alcanzar sus ideales; y ello no sería poco. No tenemos gran derecho para considerarnos, a este respecto, superiores a nuestros abuelos, y jamás debemos olvidar que somos nosotros, los del siglo XX, no *ellos,* quienes lo hemos trastornado todo. Si ellos no llegaron a saber plenamente qué se necesitaba para crear el mundo que deseaban, la experiencia que nosotros logramos después debía habernos preparado mejor para la tarea. Si hemos fracasado en el pri-

mer intento de crear un mundo de hombres libres, tenemos que intentarlo de nuevo. El principio rector que afirma no existir otra política realmente progresiva que la fundada en la libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero como lo fue en el siglo XIX.

Nota bibliográfica

La exposición de un punto de vista que durante muchos años ha estado decididamente en desgracia sufre la dificultad de no permitir, dentro del ámbito de unos cuantos capítulos, sino la discusión de algunos de sus aspectos. Al lector cuyo criterio se ha formado por entero en las opiniones dominantes durante los últimos veinte años difícilmente le bastará con este libro para lograr la base común que cualquier discusión provechosa exige. Pero, aunque pasadas de moda, las opiniones del autor del presente libro no son tan singulares como puedan parecer a algunos lectores. Su criterio esencial coincide con el de un número sin cesar creciente de escritores de muchos países, cuyos estudios les han llevado independientemente a conclusiones semejantes. El lector que desee informarse directamente con más amplitud sobre lo que quizá considere un clima de opinión desusado, pero no inadmisible, puede encontrar utilidad en la lista siguiente, que contiene algunas de las más importantes obras de este género, incluyendo varias que al carácter esencialmente crítico del presente ensayo añaden una discusión más completa de la estructura de una sociedad futura deseable.

W. H. Chamberlin: *A False Utopia. Colectivism in Theory and Practice.* Londres, Duckworth, 1937.

F. D. GRAHAM: *Social Goals and Economic Institutions.* Princeton University Press, 1942.

E. HALÉVY: *L'Ere des Tyrannies.* París, Gallimard, 1938.

G. HALM, L. v. MISES y otros: *Collectivist Economic Planning.* Ed. de F. A. Hayek, Londres, Routledge, 1937.

W. H. HUTT: *Economists and the Public,* Londres, Cape, 1935.

W. LIPPMANN: *An Inquiry into the Principles of the Good Society.* Londres, Allen & Unwin, 1937.

L. v. MISES: *Die Gemeinwirstschaft,* Jena, Fischer, 2.ª ed. 1932. Trad. inglesa bajo el título de *Socialism,* por J. Kahane. Londres, Cape, 1936.

R. MUIR: *Liberty and Civilisation,* Londres, Cape, 1940.

M. POLANYI: *The Contempt of Freedom,* Londres, Watts, 1940.

W. RAPPARD: *The Crisis of Democracy,* University of Chicago Press, 1938.

L. C. ROBBINS: *Economic Planning and International Order.* Londres, Macmillan, 1937.

L. C. ROBBINS: *The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political Economy.* Londres, Macmillan, 1939.

L. C. ROBBINS: *The Economic Causes of War.* Londres, Cape, 1939.

W. ROEPKE: *Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart.* Zúrich, Eugen Rentsch, 1942.

L. ROUGIER: *Les mystiques économiques.* París, Librairie Medicis, 1938.

F. A. VOIGT: *Unto Caesar.* Londres, Contable, 1938.

Los siguientes, entre los «Public Policy Pamphlets» editados por la University of Chicago Press:

H. SIMONS: *A Positive Program for Laissez Faire. Some Proposals for a Liberal Economic Policy,* 1934.

H. D. GIDEONSE: *Organised Scarcity and Public Policy,* 1939.

F. A. HERMENS: *Democracy and Proportional Representation,* 1940.

W. SULZBACH: *«Capitalist Warmongers»: A Modern Superstition,* 1942.

M. A. HEILPERIN: *Economic Policy and Democracy,* 1943.

Hay también importantes obras alemanas e italianas de un carácter similar, que, en consideración a sus autores, sería imprudente mencionar ahora por sus nombres.

A esta lista he de añadir los títulos de tres obras que, más que cualquier otro libro por mí conocido, ayudan a comprender el sistema de ideas que gobierna a nuestros enemigos y las diferencias que separan su mentalidad de la nuestra:

E. B. ASHTON: *The Fascist, His State and Mind*, Londres, Putnam, 1937.
F. W. FOERSTER: *Europe and the German Question*. Londres, Sheed, 1940.
H. KANTOROWICZ: *The Spirit of English Policy and the Myth of the Encirclement of Germany*. Londres, Allen & Unwin, 1931,

y el de una notable obra reciente sobre la historia moderna de Alemania, no tan bien conocida en Gran Bretaña como se merece:

F. SCHNABEL: *Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert*, 4 vols., Freiburg i. B., 1929-1937.

Quizá se encontrarán todavía las mejores guías para ciertos de nuestros problemas contemporáneos en las obras de algunos de los grandes pensadores políticos de la era liberal, un De Tocqueville o un lord Acton, y, para retroceder aún más, en Benjamin Constant, Edmund Burke y los artículos del *Federalist* de Madison, Hamilton y Jay; generaciones para quienes la libertad era todavía un problema y un valor que defender, mientras que la nuestra la da por segura y ni advierte de dónde amenaza el peligro ni tiene valor para liberarse de las doctrinas que la comprometen.